

Cuadernos
del sureste

Edita:

Colectivo Cuadernos del Sureste

Consejo de redacción:

Dora Castillo

Joaquín Caraballo

Javier Díaz-Reixa

Luis Guirao

Fernando Gómez Aguilera

Ginés Díaz Pallarés

Natalia Jiménez Marsá

Jorge Marsá

Carlos Meca

Mario Alberto Perdomo

Ramón Pérez Niz

Gloria Valenciano

Dirección:

General Goded, 5, 2º C

35500 Arrecife de Lanzarote

www.cuadernosdelsureste.com

cuadernos@cuadernosdelsureste.com

Diseño y maquetación:

Jorge Marsá

Imprime:

Bouncopy

Depósito Legal:

M-43758-1996

Impreso en papel reciclado y ecológico
Se permite la reproducción citando el origen

INDICE

EDITORIALES	
27 de septiembre	4
Petróleo en Galicia y en Lanzarote	8
La financiación de la extrema derecha	10
IRIS BARRERA	
Algo más que un nuevo <i>Life</i>	12
MARIO ALBERTO PERDOMO	
Directrices: igualito que en Lanzarote	17
FAUSTINO GARCÍA MÁRQUEZ	
Las Directrices desde Lanzarote	22
JORGE MARSÁ	
Arrecife: el espejo insular	26
HANS MAGNUS ENZENSBERGER	
Compadezcamos a los políticos	36
<hr/>	
Carpeta:	Corrupción
CUADERNOS DEL SURESTE	
El flujo de la corrupción	48
CARLOTA GUTIÉRREZ	
El secretario: el quinto poder	70
CARLOS ESPINO ANGULO	
Ciudadanía y corrupción	78
ALEJANDRO NIETO	
La democracia corrompida	92
<hr/>	
FERNANDO GÓMEZ AGUILERA	
Creemos redes de comunicación	104
MARIO ALBERTO PERDOMO	
Salvar Lanzarote: un compromiso político	112
JORGE MARSÁ	
El enemigo exterior	132
ARUNDHATI ROY	
Nunca más	148
RAMIRO ARBELO	
Contradicciones ciudadanas	151
CARLOS MECA	
Rehenes de la desconfianza	152
RICARDO SANTANA SANTANA	
A los españoles les va regular	154
El principio de precaución	158
JORGE MARSÁ	
Esculturas con denominación de origen	162

Después del 27-S

El malestar que experimenta la conciencia social de Lanzarote se hizo patente en la manifestación del día 27 de septiembre convocada por Foro Lanzarote y apoyada de forma masiva por la población de la Isla. Si en torno a 10.000 personas salieron a la calle, dando vida a una protesta pacífica, festiva y muy plural en cuanto a las sensibilidades que la conformaron, es razonable deducir que muchos más ciudadanos de los presentes se sintieron próximos a la convocatoria y la apoyaron desde sus casas o desde sus puestos de trabajo (así se puso de manifiesto en la *Encuesta de Temas Insulares* del mes de noviembre, en la que un 77% de los encuestados mostraba su acuerdo con los motivos esgrimidos por los convocantes de la manifestación). Una inequívoca expresión popular a favor del freno al crecimiento turístico y a las agresiones ambientales y terri-

toriales que ha sufrido y está sufriendo Lanzarote, como recogía la consigna que aglutinó a los manifestantes: "En defensa de Lanzarote y su futuro". Pero también, sin duda, un grito de disgusto frente a la corrupción, la inestabilidad de las instituciones y la ineficacia exhibida por los responsables políticos a la hora de resolver los conflictos de la Isla en su gestión al frente de las administraciones, conduciéndola a un punto de no retorno en el que cualquier análisis de los indicadores estratégicos insulares muestra claramente que la situación no ha hecho sino agravarse en los últimos años.

Las responsabilidades, en este sentido, son concretas y apuntan hacia quienes han tenido encomendado el gobierno del Cabildo, a los alcaldes de los municipios turísticos –muy en particular de Yaiza y Teguiise, pero también Tías–, al Gobierno de Canarias, al sector inmobiliario –apoyado por una representativa facción del empresariado local turístico–, y al voto complaciente de un segmento significativo de ciudadanos que ha otorgado su confianza a las opciones políticas responsables de los desaguisados contra los que luego ha tenido que levantar su voz de protesta y censura. Una paradoja que, de no resolverse a través de la coherencia y la responsabilidad del voto reflexivo y consecuente, puede volver a repetirse, inexplicablemente, e incluso agravarse, en las próximas elecciones de mayo, si atendemos a los resultados de las encuestas más recientes. Porque parece inevitable reconocer que la asistencia de esos miles de personas a la concentración no provoca necesaria-

La convocatoria de la manifestación por Foro Lanzarote, el trabajo realizado y los resultados obtenidos merecen el reconocimiento de todos

El verdadero desafío para el propio Foro y para la sociedad civil comenzó al día siguiente

mente una transformación del sentido de su voto en la próxima cita electoral. De hecho, era significativo el número de manifestantes que son votantes tradicionales de los partidos políticos en buena parte responsables del desaguado por el que se protestaba.

La convocatoria de la manifestación por Foro Lanzarote, el trabajo realizado y los resultados obtenidos merecen el reconocimiento de todos. La recuperación de la calle como espacio de expresión democrática supone un paso adelante en la formalización de una gran conciencia ciudadana, un muro de contención social, que plante cara activamente y corrija la incapacidad política tanto a la hora de gestionar el crecimiento cero de las camas –ampliamente demandado por los ciudadanos– como el consumo sostenible de los recursos, sin duda el debate estratégico central no sólo de Lanzarote sino de toda Canarias. Pero el verdadero desafío para el propio Foro y para la sociedad civil comenzó al día siguiente de la manifestación.

La administración del éxito es una tarea para la que no suelen estar preparadas las asociaciones y plataformas ciudadanas, más experimentadas en la resistencia y la contestación crítica. Porque de lo que se trata, en última instancia, no es de sacar miles de personas a la calle, sino de canalizar su energía y aprovechar su legitimación social para influir en las decisiones y cambiar el rumbo de las políticas relacionadas con las reivindicaciones. Y, sin duda también, para reforzar el movimiento ciudadano, en su diversidad, de cara a contribuir, con estabilidad, solven-

cia y fortaleza, a la construcción de la democracia participativa desde las prácticas cotidianas. Una responsabilidad y una oportunidad que los convocantes de la manifestación del 27-S no deben ni eludir ni desaprovechar, en lo que les concierne.

Foro Lanzarote ha sabido acrecentar y encauzar la tradición de conciencia insular que viene forjándose en Lanzarote desde hace muchos años, a cuyo proceso de conformación han contribuido, particularmente en los últimos dos lustros, distintas asociaciones, instituciones, agentes de opinión y colectivos de la sociedad civil. Una sociedad civil relativamente participativa, comprometida, dueña de tonos, actitudes y talentos distintos, y crecientemente articulada y deliberativa –en sus contradicciones–, que ha acumulado un capital social común esperanzador, hasta el punto de constituir la oposición democrática al poder más activa y útil, en un contexto político pobre y precario, muy condicionado por la inestabilidad, el anquilosamiento y los pactos contra natura. En fin, desnaturalizado e insolvente.

De ahí que la primera consecuencia que debería haberse derivado de la manifestación del 27-S, bien pudiera haber sido la de un movimiento de apertura y generosidad por parte del Foro hacia el conjunto de la sociedad civil organizada, con el propósito de aprovechar la circunstancia para profundizar en la construcción del espacio de la ciudadanía participativa. Un movimiento de apertura y de reforzamiento que hubiera sido natural en quien es consciente de que el patrimonio del variado respaldo a

la manifestación era de pertenencia común, y en quien tiene una visión estratégica del papel que el movimiento ciudadano puede desempeñar en Lanzarote.

Lamentablemente, no ha sido así, y se ha preferido entender la manifestación como un éxito de parte que viene a escribir una especie de punto final cívico, o, por el contrario, un punto de inflexión hacia la actividad política partidaria con vocación electoral.

Sin duda, la manifestación del 27-S –a la que recientemente ha venido a sumarse la gran manifestación de Vilaflor en Tenerife, con más de 100.000 personas en la calle–, representa una oportunidad para la sociedad civil de Lanzarote y para el conjunto de Canarias. En el mejor de los casos, el Archipiélago podría estar iniciando el camino para la construcción de una gran sensibilidad ciudadana activa con capacidad de presión para influir en las decisiones políticas sobre su territorio. Estaríamos, pues, antes que al final, al comienzo de una posibilidad, por lo que sería recomendable evitar apropiaciones, abandonar la inclinación a pensar eufóricamente en clave de victoria, desterrar las exclusiones del proceso, y, lo que es más importante, superar la tentación de hacer una transferencia apresurada de las conquistas de la ciudadanía al ejercicio de la actividad política, formando una plancha electoral que concurriese a las próximas elecciones locales.

Entiéndase que este editorial se elabora sin la confirmación explícita de la decisión de participar en las elecciones por parte del sector dominante en Foro Lanzarote.

Después de las declaraciones públicas en ese sentido que tuvieron lugar el pasado verano, todo lo que nos ha llegado son manifestaciones privadas y conjeturas. Sin embargo, esas conjeturas están en la mente de muchas personas y se comentan en diferentes espacios públicos, parece que animadas por algunos sectores del Foro, aunque continúa sin producirse una declaración pública que aclare las intenciones de quienes alimentan la perspectiva de la participación electoral.

Frente a ese horizonte de riesgos, sería saludable poner en común, ampliar la voluntad de pacto social y preservar el capital ciudadano tan dilatada y colectivamente conquistado. Sobre todo, porque no se administra un patrimonio propio y exclusivo, pero también por los riesgos de desgaste y descrédito que podrían desplazarse hacia el resto del movimiento de la ciudadanía organizada. No parece legítimo dar el salto a la política asumiendo implícita y autónomamente la representatividad del conjunto de la contestación ciudadana, hegemonizando en clave electoral su aportación, construida a través de un largo proceso, cuando no se han dado ni el debate ni el acuerdo previos para una decisión de este tipo.

Hoy por hoy no se dan condiciones para una operación política surgida del movimiento ciudadano de Lanzarote. Conocer el tiempo de maduración de los proyectos es determinante para iniciar su andadura con las mínimas garantías. Que el Foro intente hoy, apresuradamente, encarar la aventura política sería un error, derivado de una lectura superficial y reactiva del

La primera consecuencia debería haber sido la de un movimiento de apertura y generosidad por parte del Foro hacia el conjunto de la sociedad civil organizada

*Hoy por hoy no
se dan
condiciones
para una
operación
política surgida
del movimiento
ciudadano de
Lanzarote*

éxito de la manifestación del 27-S, un paso precipitado que conllevaría elevadas probabilidades de fracaso y de perjuicio para el resto de asociaciones y agentes sociales. Una opción de este tipo reclama ser cuidadosamente debatida y valorada, desde su comienzo y a través de un proceso abierto, por el conjunto de la sociedad civil organizada, que es, en su pluralidad, la depositaria del capital social que se ha generado en Lanzarote.

La diversidad de sensibilidades presente en la manifestación es la variedad que debería estar representada en las conversaciones y planteamientos previos a la conformación de una alternativa de este sesgo, una opción que naturalmente está llamada a surgir con la vocación de transformar la realidad, esto es, de gobernar, y no de participar testimonialmente desde dentro de la Administración para institucionalizar la crítica. El objetivo último se cifra en reunir el poder legítimo que permita hacer la otra isla que es posible. Desde luego, el Foro o un grupo de sus miembros tienen el derecho a constituir una opción política para presentarse a las próximas elecciones, pero sería ilegítimo que se hiciera usufructuando, de forma directa o indirecta, el capital social de la ciudadanía. Porque ese capital pertenece a todos en conjunto y a nadie en particular.

Desde *Cuadernos del Sureste* no nos pronunciamos en abstracto ni a favor ni en contra de la participación electoral de sectores del espacio político alternativo. Tan sólo sostenemos que hoy por hoy y en las actuales circunstancias que caracterizan a la sociedad lan-

zaroteña, la mejor manera de seguir contribuyendo a que mejoren las decisiones sobre la organización del territorio, la gestión de los recursos y la calidad de vida de los ciudadanos de Lanzarote, radica en reforzar y cohesionar el movimiento ciudadano, y en aumentar la calidad de sus análisis y alternativas, además de su capacidad de influencia política y de penetración social. Esto es, seguir construyendo el ámbito de la ciudadanía participativa e influyente. Ponerlo en riesgo precipitadamente sería irresponsable y egoísta, además de injusto. Si alguien está tentado a hacerlo, que valore que en Lanzarote nos sobran proyectos basados en las aventuras y en las ambiciones personales –todos sabemos de sobra adónde conducen–, mientras que nos faltan recursos y oportunidades, como para desperdiciarlos cuando se atisban en el horizonte. Hay mucha esperanza en juego.

Petróleo en Galicia y en Lanzarote

El accidente del petrolero *Exxon Valdez* frente a las costas de Alaska se produjo en 1991. Las secuelas ocasionadas por el vertido de crudo fueron de tal calibre que obligaron a gastar ingentes sumas de dinero durante los siguientes diez años para tratar de eliminar las huellas del desastre. La catástrofe ecológica llevó al gobierno de los Estados Unidos a tomar medidas drásticas para evitar que se repitieran accidentes de este tipo. Las disposiciones adoptadas han sido efectivas: no se ha vuelto a producir ningún accidente que provocara nuevos vertidos en las costas de aquel país.

Un año después, en 1992, la marea negra provocada por el buque *Mar Egeo* anegó las costas gallegas. Al contrario que en aquel país, en el nuestro no se arbitraron las medidas imprescindibles para evitar catástrofes de este tipo. Es más, no se tomó medida alguna. Y diez años después las costas de Galicia vuelven a ser contaminadas por las miles de toneladas de petróleo vertidas por el petrolero *Prestige*.

Desde el momento del accidente

se presentían consecuencias dramáticas. Las presagiaba cualquier observador mínimamente informado, salvo las autoridades gallegas y españolas competentes, que durante los primeros días trataron de alejar el peligro recurriendo al infantil mecanismo de ignorarlo.

Una vez confirmada la inevitabilidad de la catástrofe, la actuación de la Xunta de Galicia y del Gobierno español ha revelado tanto su ineficacia como la carencia de medios para combatir o disminuir las consecuencias de los vertidos. En palabras de un experto: "Las autoridades, una vez más, han estado dando palos de ciego y han estado paseando el petrolero accidentado *Prestige* por el noroeste, porque no sabían qué hacer con él. Por fin decidieron remolcarlo hasta alta mar, con lo que la mancha de combustible se hizo cada vez más grande, esparciendo 10.000 toneladas de fuel por casi 300 kilómetros de costa" *.

Puede decirse, por lo tanto, que la actuación del Gobierno español ha alcanzado un nivel de incompetencia tal que no sólo no ha paliado las secuelas del accidente sino que las ha agravado notablemente. Pues bien, ese mismo gobierno ha sido el responsable –o el irresponsable– de autorizar las prospecciones petrolíferas frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura. Y es, obviamente, el mismo gobierno que garantiza que no existe riesgo de que las extracciones provoquen consecuencias medioambientales.

Es verdad que no existe *riesgo*, sino la absoluta certeza de que se producirán "consecuencias

Las consecuencias medioambientales que niegan tanto el gobierno central como el de Canarias van a producirse

*Manuel Casal Pita, "¿Hasta cuándo más catástrofes ecológicas?", *El País*, 25 de noviembre de 2002.

¿En caso de accidente, tendremos en Lanzarote los recursos humanos y los medios técnicos que no han tenido en Galicia?

ambientales". Efectivamente, la duda no está en si se ocasionará o no contaminación, sino en cuál será la gravedad de la misma.

Extraer petróleo del mar es una actividad que provoca siempre contaminación: por las explosiones de los sondeos o la propia perforación; por los ácidos utilizados para perforar o por los lodos tóxicos que se generan; por los pequeños o por los grandes vertidos; por la limpieza de la plataforma o de los petroleros que arriban para transportar el material extraído; y un etcétera que es bastante largo.

A las costas de Lanzarote llegan restos del piche que dejan los petroleros al limpiar sus tanques a muchos cientos de kilómetros de distancia. Imaginemos lo que ocurrirá cuando esos petroleros se concentren a 27 kilómetros de la costa para cargar el crudo que se extraiga de los treinta pozos petrolíferos que anuncian.

Las consecuencias medioambientales y, por lo tanto, turísticas que niegan tanto el gobierno central como el de Canarias van a producirse. Y van a ser graves. Porque la Isla vive exclusivamente del turismo, de la comercialización de su costa y el aprovechamiento del clima. Resulta sencillo prever las secuelas ocasionadas por alguna noticia publicada en periódicos alemanes, ingleses o peninsulares sobre playas contaminadas por petróleo: disminución de la afluencia turística de forma inmediata y una imagen de destino turístico contaminado que perderá en el tiempo.

Otra cuestión es si esas consecuencias pueden llegar a ser

catastróficas, en el caso de que un accidente provocara vertidos de tal magnitud que asolaran durante unos cuantos años la industria turística local. No es posible asegurar que ese accidente vaya a producirse; pero tampoco que no sucederá. La historia de la industria extractora de petróleo en el mar tiene ya cerca de un siglo, y los incidentes que han acarreado una seria contaminación del entorno constituyen un componente consustancial a esa actividad, que se ha repetido con la suficiente frecuencia como para que contemplar esa posibilidad sea más que razonable.

Y tras la reciente experiencia de lo sucedido en Galicia con los vertidos del *Prestige*, parece obligado preguntarse: ¿en caso de accidente grave, tendremos en Lanzarote o en Canarias los recursos humanos y los medios técnicos que no han tenido en Galicia?

Sólo se nos ocurre una respuesta a semejante interrogante: la necesidad de que se constituya una plataforma política y ciudadana en Lanzarote –que incluya partidos, sindicatos, empresarios y colectivos sociales– que pueda mostrar dentro y fuera de la Isla la radical oposición de la sociedad lanzaroteña a la instalación de esas plataformas petrolíferas.

La sociedad insular lleva años tratando de solucionar su gran conflicto ecológico: el desmesurado crecimiento turístico. Ahora tiene que hacer frente al otro gran problema ecológico que se anuncia antes de que se convierta en realidad. Y sólo una gran movilización unitaria en la Isla podrá evitar la amenaza inmediata que se cierne sobre Lanzarote.



La financiación de la extrema derecha

La xenofobia se ha convertido en uno de los problemas graves que acechan a la sociedad lanzaroteña. Las encuestas así lo ponen de manifiesto en los últimos años, y de manera creciente.

La responsabilidad por las actitudes xenófobas reside, claro está, en los ciudadanos que las practican o defienden. Aunque no podamos obviar la gravedad de la de los partidos políticos y medios de comunicación que han contribuido a alimentar esas actitudes. Responsabilidades que en Canarias son ciertamente significativas.

Esta extensión de la xenofobia, del racismo incluso, caracteriza a buena parte de las sociedades europeas actuales, y explica el crecimiento electoral de las opciones políticas de extrema derecha.

Progresión que se ha visto apoyada por el hecho de que gran parte de la derecha europea haya coincidido, en mayor o menor grado, en la defensa de posiciones xenófobas contra una inmigración que promueve tanto las necesidades de sus propias economías como las desigualdades globales que esas mismas economías provocan.

No obstante, y pese a lo dicho, resultaría ciertamente sorprendente que en cualquier sociedad europea la extrema derecha fuera financiada por las instituciones públicas con las contribuciones de los ciudadanos y apoyada por los partidos políticos mayoritarios.

Si entendemos que la característica más clara de esa extrema derecha es el racismo o la xenofobia –hoy transmutados en fundamentalismo cultural–, tendríamos que convenir que la extrema derecha lanzaroteña tiene nombre. El de

La xenofobia se ha convertido en uno de los problemas graves que acechan a la sociedad lanzaroteña

**¿Están
financiando CC,
PIL y PSOE
desde las
instituciones
públicas a la
extrema
derecha
lanzaroteña?**

aquellos que se caracterizan por una actividad continuada e incansable destinada a promover la extensión de la xenofobia entre los ciudadanos de la Isla: la Federación Insular de Asociaciones de Vecinos de Lanzarote, Titeroygakat.

El 23 de febrero –curiosa fecha– del pasado año, Titeroygakat celebró una entrega de premios con una cena por todo lo alto para varios centenares de personas en el Monumento al Campesino.

¿Quién pagó la cuantiosa factura del restaurante propiedad del Cabildo Insular?

De aquel acto se publicó un catálogo de 36 páginas a todo color con el nombre de *El Jolatero*, que constituía el número 0 de una revista que tuvo continuidad el pasado mes de agosto en su número 1, también monográfico, dedicado a la “Ley de la Residencia Canaria”, con el mismo color y alguna página más. ¿De dónde están saliendo los fondos para sufragar una revista de esas características que se reparte gratuitamente?

Parece lógico pensar que los responsables de la financiación de la extrema derecha lanzaroteña pudieran encontrarse entre los que enviaron su cariñoso *saluda* o entre aquellos a los que la Federación agradecía su colaboración: Román Rodríguez, Manuel Fajardo Palarea, Miguel Ángel Leal Cedrés, Juan Carlos Becerra, M^a Isabel Déniz de León, Miguel Martín Betancort, José Juan Cruz Saavedra, Jesús Machín Duque, José Francisco Reyes Rodríguez, Juan Pedro Hernández, M^a José Docal, Luis Arráez, Víctor Betancort, Ángel Ascensión,

Manolo Pérez Gopar, Celso Betancort, Sergio Machín, Mario Pérez, Juan Ferrer, Francisco Cabrera y José Torres Stinga.

Claro que podría pensarse que esa financiación no la habrían asumido estos ciudadanos a título personal, porque en la contraportada del número 0 de *El Jolatero* aparecían los escudos de todas las instituciones a las que representan esas personas –salvo la que acoge a Francisco Cabrera–: Gobierno de Canarias, Cabildo de Lanzarote, Centros de Arte, Cultura y Turismo, Ayuntamiento de Arrecife, Ayuntamiento de Haría, Ayuntamiento de San Bartolomé, Ayuntamiento de Teguiise, Ayuntamiento de Tias, Ayuntamiento de Tinajo y Ayuntamiento de Yaiza.

Así que la pregunta que nos hacemos resulta obvia, aunque se pueda formular de distintas maneras: ¿están el Gobierno de Canarias, el Cabildo y todos los ayuntamientos de Lanzarote apoyando y financiando las actividades dedicadas a extender la xenofobia en Lanzarote con el dinero de los contribuyentes? ¿Están financiando CC, PIL y PSOE desde las instituciones públicas a la extrema derecha lanzaroteña?

Algo más que un nuevo *Life*

Iris Barrera

La evolución de los indicadores ambientales no es nada halagüeña en Lanzarote. Al igual que hace cuatro años, el tema crucial de Lanzarote hoy en día sigue centrado en el desbordamiento territorial, ambiental y social originado por el crecimiento turístico. Un riesgo de desbordamiento que se cierne sobre la isla a pesar de las medidas que se han venido adoptando desde hace lustros.

Con ser grave la situación actual, podría agravarse más en el futuro. La potencialidad del crecimiento de las zonas turísticas sigue siendo excesiva. Actualmente hay censadas unas 63.000 plazas, sin contabilizar la segunda residencia. Pero, una vez transcurra el período de 10 años de la *moratoria turística insular*, las cifras anteriores podrían aumentar hasta alcanzar las 95.437 plazas turísticas y 58.000 de segunda residencia, si no se toman nuevas medidas limitativas. Estas cifras no podrían ser

asimiladas por el sistema insular.

Por todas las razones expuestas, a pesar de las dificultades surgidas en los últimos años y escuchando afortunadamente las voces más lúcidas de la sociedad insular, el presidente del Cabildo de Lanzarote ha emprendido un nuevo trayecto encaminado a profundizar en la contención del crecimiento turístico y avanzar hacia la sostenibilidad insular. Lo hace de la mano de un nuevo proyecto *Life* aprobado por la Unión Europea, denominado *Lanzarote en la Biosfera 2 (2001-2004): Exploración de nuevas líneas de actuación, financiación y fiscalidad para la Reserva de Biosfera*.

¿Puede el Plan Insular de Ordenación (PIO) afrontar esta cuestión? ¿Se puede seguir avanzando en la contención del crecimiento turístico en Lanzarote sin una participación activa del Gobierno de Canarias? No, de ahí que se señale hacia el Gobierno de Canarias y sus competencias.

En tal sentido habría que pensar en una especie de autorización o permiso administrativo de plazas turísticas, posterior incluso a la licencia municipal, sin el cual el resto de autorizaciones, permisos y licencias municipales no adquirirían ejecutividad e impediría la materialización de la obra correspondiente. Hasta que dicha reforma legal se produzca, desde la herramienta del PIO poco se puede hacer ya para evitar el crecimiento turístico después de 2010. En su momento, y con su entrada en vigor en 1991, anuló cerca de una veintena de planes urbanísticos, desclasificó más de 250.000 plazas turísticas, introdujo medidas para reducir el ritmo de creci-

La potencialidad del crecimiento de las zonas turísticas sigue siendo excesiva

***Se hace preciso
que la
legislación
habilite a los
Cabildos para
que puedan
desclasificar
plazas turísticas***

miento, protegió el conjunto del territorio insular... y desde entonces, no sólo no se han aprobado nuevos planes urbanísticos, sino que se ha profundizado en dicha línea de contención del crecimiento, hasta la reciente aprobación, en el año 2000, de la denominada *moratoria turística insular* mediante una Revisión del PIO, estableciendo una nueva programación del crecimiento turístico.

El PIO nada más puede hacer porque la mayor parte del suelo en el que se ejecutarían las nuevas plazas turísticas, casi el 90%, es suelo urbano (o sea, suelo clasificado en su día como urbanizable que hoy ya se encuentra urbanizado).

Impedir la ejecución de esas plazas implica desclasificar suelo urbano, y eso con la legislación actual en la mano no es posible sin indemnizar. Ni lo puede hacer el PIO, ni se puede hacer sin indemnizar. Por eso, se hace preciso que la legislación urbanística canaria prevea este tipo de posibilidades y habilite legalmente a los Cabildos para que, a través del planeamiento insular, puedan desclasificar plazas turísticas sabiendo de antemano cuáles serían los conceptos indemnizables a los que habría de hacerse frente.

Es imprescindible, pues, incidir en el ámbito regional para que se produzcan esos cambios aprovechando la oportunidad que ofrecen las Directrices Generales de Ordenación y del Turismo que promueve el Gobierno de Canarias.

La contradictoria sensibilidad medioambiental

Además de los problemas territoriales, la Isla sufre las consecuencias de otro tipo de problemas estrechamente vinculados con la

sostenibilidad global. Aunque no hay déficit en el abastecimiento de agua, ha aumentado el consumo unitario, lo cual genera mayores costes ambientales y aumenta la dependencia energética del exterior y de los hidrocarburos. Al ser la desalación de agua de mar el principal consumidor de energía eléctrica, ésta ha crecido en un 30%, y un poco más (40%) el consumo de productos petrolíferos y las emisiones de CO₂. La tercera parte de las emisiones de CO₂ a la atmósfera está ocasionada por la movilidad motorizada; el resto obedece a la producción de energía eléctrica y al proceso de desalación de agua de mar.

Lo mismo ha sucedido con la generación de residuos. Tales incrementos sólo se explican debido al aumento de los consumos unitarios. Es decir, los ciudadanos de Lanzarote somos cada vez más insostenibles. No es una buena noticia si se pretende justificar la contribución de la Reserva de Biosfera de Lanzarote al calentamiento global del planeta. Muy al contrario. Seguramente este tipo de cosas sustentan que el 40% de la población crea que la situación medio ambiental haya empeorado en los últimos años.

Un revelador dato lo constituye la evolución de la demanda de electricidad, que arrojó un aumento del 8% en el primer trimestre de 2002 en relación con igual período del año anterior. El citado incremento del 8% equivale a todo el consumo eléctrico de 1986, nada menos. La demanda entre enero y marzo del presente año se situó en 154.758 megawatios/hora. De seguir esta tendencia se prevé que el consumo de

energía por abonado ascienda a unos 11 megawatios/hora, cuando en 1986 era sólo de 5,16. Los consumos unitarios sobrepasan la media de la Unión Europea, aproximándose a los consumos medios de los Estados Unidos. En la Isla hay más de 57.000 abonados.

Puede afirmarse sin temor a equívoco que algunos aspectos del desarrollo insular previstos en 1997 para un período generacional de 25 años (en 2021) se han alcanzado en sólo cinco años, lo cual ofrece una idea certera del vertiginoso proceso de transformación al que está siendo sometida la Isla. Más allá de la retórica, la isla galopa desbocada hacia la insostenibilidad.

No obstante, los estudios disponibles no ofrecen lugar a la duda: la población se muestra partidaria del cuidado medioambiental, eso sí, siempre y cuando no merme las comodidades alcanzadas. No se está por hacer sacrificios personales a favor del medio ambiente que les reste un ápice del bienestar material conseguido, trasladando la responsabilidad de adoptar medidas a las Administraciones Públicas. Así, las personas se muestran claramente a favor de una aplicación estricta de las leyes urbanísticas y medioambientales, pero consideran que comprometerse personalmente no sirve de nada sin la decidida participación de las instituciones públicas.

La mayoría de los encuestados en algún estudio, por ejemplo, dice no estar dispuesta a aceptar un aumento de las tarifas eléctricas y de agua, a pagar más por un litro de gasolina o a abonar más impuestos por energías no contaminantes, aunque se muestran

partidarios de clasificar las basuras en casa o pagar más por un coche no contaminante. El parque de vehículos supera hoy las 92.000 unidades, resultando una ratio de más de 900 vehículos por cada 1.000 habitantes cuando la media estatal está en 550. Sin duda un volumen de vehículos superado por muy pocos lugares en el planeta. En los últimos seis años se han incorporado a las carreteras insulares 30.000 vehículos nuevos.

Como se indicó, la sensibilidad de los lanzaroteños hacia los temas medioambientales sigue patente. Así lo demuestra *EcoCanarias 2001* cuando sitúan la conservación del medio ambiente como el problema más importante de Canarias, la acción más urgente que hay que realizar y la más importante a ejecutar en los próximos diez años. En general, los lanzaroteños declaran estar muy preocupados con aspectos tan diversos como la destrucción de la capa de ozono, el cambio climático o la contaminación de los alimentos y si eso no se corresponde con sus estilos de vida personales, una posible explicación podría ser que no alcanzan a ver que el medio ambiente, el territorio y las actividades humanas son un todo integrado, concibiendo los temas ambientales como partes aisladas y sin relación entre sí. Ello no impide que se perciba claramente la relación directa existente entre exceso de construcción y situación medioambiental en la Isla.

Un último dato señala que el porcentaje de flora amenazada ha crecido en un 15%, tratándose en su mayor parte de flora vascular de litoral, lo cual ofrece una idea de la presión a que está siendo

Más allá de la retórica, la Isla galopa desbocada hacia la insostenibilidad

No se está por hacer sacrificios personales a favor del medio ambiente que les reste un ápice del bienestar material conseguido

sometida esta importante y valiosa franja del territorio.

¿Qué hacer con estas cuestiones? La respuesta nos remite a las soluciones propuestas en la Estrategia *Lanzarote en la Biosfera*.

Los turistas también cuentan, y mucho.

A la hora de analizar la situación de la Isla, por lo general se hace referencia a la población local, olvidando que sobre el territorio insular se encuentran de forma permanente algo más de 50.000 turistas. Equivalen, prácticamente, a la mitad de la población residente y, al igual que éstos, consumen agua y electricidad, generan residuos, visitan masivamente espacios de alta calidad ambiental y tremendamente frágiles o utilizan mayoritariamente el transporte privado para recorrer la Isla (se estima que por cada litro de gasolina se generan dos kilogramos de CO₂), con el añadido de que causan mayores impactos que los residentes.

Por lo tanto, la turística es un segmento de la población sobre el que es preciso incidir a la hora de llamar la atención sobre conductas sostenibles en la Isla y reclamar su contribución personal en tal dirección. Por ejemplo, un turista consume unos 100 litros más de agua diarios que un residente, o en torno a 4 kilowatios/hora más de energía.

Los estudios de opinión indican que más de la mitad de la población establece una relación directa entre el turismo y los problemas medioambientales. Así, consideran que el turismo tiene que ver directamente con la generación de residuos, la proliferación de edifica-

ciones, el consumo de recursos naturales, la alteración del paisaje, el daño a la flora y fauna, el aumento del tráfico y la contaminación, la generación de ruidos o el incremento de las construcciones.

El sólo hecho del transporte aéreo y las emisiones contaminantes vertidas a la atmósfera hacen del turismo una actividad insostenible desde una perspectiva global sobre la que es difícil intervenir, aunque los turistas cuentan a su favor con una mayor trayectoria de conductas sostenibles en sus países de origen: transporte público, separación selectiva de residuos... Todo esto acontece en un contexto de caída del gasto turístico por persona, por lo que se recurre a una práctica insostenible: a más cantidad de ellos para mantener los márgenes de rentabilidad.

A la vista de estos datos, la lógica sugiere el diseño de políticas de sensibilización orientadas hacia este importante segmento de la población que causa impactos sobre el territorio insular, disponiéndose de la ventaja de su, en general, mayor capacidad de respuesta puesto que están más acostumbrados a este tipo de políticas en sus países de origen.

Los ejes del cambio.

¿Qué se propone en el nuevo *Life*? Para poder seguir profundizando en el propio proceso insular, es imprescindible que el Gobierno Autónomo de Canarias cree las condiciones legales y contribuya a resolver las siguientes cuestiones:

- Impedir la construcción de nuevas plazas turísticas de las contempladas por la "moratoria

turística" insular después del año 2010, fecha límite de su vigencia.

- Reducción drástica del resto del alojamiento en las zonas turísticas, combinada con medidas para dificultar su utilización como oferta turística y para modular su ritmo de desarrollo.
- Impulsar la aplicación de los programas definidos por la Estrategia *Lanzarote en la Biosfera*.

En relación con las nuevas políticas fiscales que serán exploradas a través de los estudios puestos en marcha a través del *Life*, se proponen dos ideas:

1ª. Fondo de rescate y "ecotasa".

Se plantea el rescate de derechos edificatorios consolidados que no sea posible desclasificar por los cauces administrativos y jurídicos ordinarios. El objetivo sería recabar fondos mediante un impuesto turístico (u otras vías) con los que financiar en parte la recuperación del exceso de derechos edificatorios que no sea posible eliminar del mercado por otras vías, con el fin de impedir más crecimiento turístico después de 2010.

Tanto los estudios del Centro de Datos del Cabildo como *EcoCanarias* reflejan que la mayor parte de la población encuestada sería partidaria de una medida de este tipo, considerando que su introducción ni perjudicaría ni beneficiaría a la afluencia turística.

2ª. Ambientalización de tributos.

Debe entenderse como un mecanismo para obstaculizar/disuadir hábitos y conductas insostenibles.

Las asignaturas pendientes del nuevo *Life* siguen siendo, pues, conseguir que la Comunidad Autónoma modifique el actual marco legislativo para permitir que la Isla avance en los procesos abiertos desde hace lustros, si se dieran las condiciones políticas para ello, y, de otro lado, sacar del olvido aquel otro proyecto *Life* que se denominó Estrategia *Lanzarote en la Biosfera*, tratando de promover la aplicación de sus 28 programas. No hay fórmulas mágicas. Se necesita algo más que un nuevo *Life* y ese algo más se encuentra en el seno de la sociedad insular y, particularmente, en la política y en los segmentos más comprometidos y lúcidos.

Sacar del olvido aquel otro proyecto Life que se denominó Estrategia Lanzarote en la Biosfera

Directrices: igualito que en Lanzarote

Mario Alberto Perdomo

En ninguna otra isla iba a encontrar el Gobierno de Canarias el calor institucional que requería la aprobación provisional de las Directrices de Ordenación General y del Turismo. De ahí que fuese Lanzarote el lugar escogido para tal acontecimiento, aunque quizá no contaba el Gobierno con que tampoco en ninguna otra isla se iba a encontrar con tal alto nivel de contestación social en demanda de un *crecimiento cero*, protagonizada por Foro Lanzarote al recibir a los miembros del Gobierno a las puertas de la Casa Cabildo, con llamativo despliegue de bienvenida, permitiendo que se escuchara la voz de la Federación Ecologista Canaria Ben Magec. Entre el calor y la contestación, el Consejo de Gobierno validó un texto de Directrices que, en el momento de redactar esta crónica, acaba de ser remitido al Parlamento, iniciándose así un

incierto debate que culminará con la aprobación y entrada en vigor de lo que resulte de tal trámite.

Incertidumbre en el Parlamento.

Incierto por cuanto el Gobierno se encuentra en minoría y necesita el respaldo de su socio parlamentario, el PP (Partido Popular), para sacar adelante la iniciativa.

Aunque quiere hacerlo por unanimidad apelando a la alta responsabilidad de los representantes parlamentarios, lo cierto es que el PP comienza a escenificar electoralmente su distanciamiento del Gobierno monocolor de Coalición Canaria (CC), generando incertidumbre sobre el resultado final de un proceso al que el Partido Socialista Canario (PSC) no piensa acudir de convidado de piedra, según han manifestado sus dirigentes, como tampoco parece dispuesto a dejarse engatusar por los nacionalistas con el único fin de que éstos obtengan una ventaja negociadora sobre los *populares* y cierren, finalmente, un acuerdo descafeinado sobre las Directrices.

De una apresurada lectura inicial del acontecimiento sobresalen tres cuestiones. Una. No hace falta que lo proclame el Gobierno para reconocer que se está, sin duda, ante la Ley más importante de la legislatura y, probablemente, de cuantas legislaturas se han vivido durante los veinte años de vigencia del Estatuto de Autonomía. Una Ley que trata de definir el modelo de desarrollo general y del turismo que debe prevalecer en las Islas superando arcaicas visiones sectoriales o parciales para, esforzándose en enmarcarla en una visión de conjunto, ordenar todas las actividades humanas

sobre el territorio. Lo cual debe entenderse, desde la perspectiva del Gobierno, no tanto como la base desde la que debe iniciarse un proceso hacia la sostenibilidad del conjunto del sistema cuanto una manera de evitar que una catástrofe económica y ecológica se adueñe de las Islas.

Dos. Con su gesto de aprobar provisionalmente las Directrices en Lanzarote, reconocía el Gobierno la labor que viene desarrollando la Isla al tratar de racionalizar y zonificar el crecimiento turístico, en primer término, ralentizarlo, más tarde, y reducirlo drásticamente, en la actualidad. Una labor que, aunque con escasos resultados prácticos, incorpora antes que nadie en las Islas la cultura de los límites al aprobar el primer Plan Insular de Ordenación (PIO) de Canarias, en 1991, y revisarlo nueve años después, en 2000, acción que limita a 10.707 plazas turísticas las que podrán construirse, legalmente, en la Isla hasta el año 2010. Una denostada y contradictoria isla de Lanzarote que, a pesar de la carga crítica a la que es sometida y autocrítica a la que se somete, con razón a menudo, fue capaz de desclasificar en 1991 planes parciales que albergaban un potencial de crecimiento de 250.000 plazas, y más tarde, en 1998, fue capaz de poner sobre la mesa de debate una Estrategia de Desarrollo Sostenible (*Lanzarote en la Biosfera*), pero cuyo alto grado de incumplimiento es de sobra conocido. La capacidad de innovación sigue intacta.

La experiencia de Lanzarote.

Tres. Por último, debe subrayarse que las Directrices remitidas al Parlamento de Canarias son las del

Gobierno. O un sector del Gobierno, mejor dicho. Aunque debió sortear algunos cambios de rumbo, las Directrices nacen sin acuerdos previos por debajo de la mesa. Serán ahora los diferentes grupos parlamentarios los que expongan en la Cámara legislativa sus visiones sobre el modelo de desarrollo que debe implantarse en el Archipiélago, pero con luz y ante taquígrafos, exponiéndose a ser señalados por unos, si las recortan y, por otros, si van demasiado lejos.

Modelos básicos hay dos. El que ha dominado hasta ahora, basado en el crecimiento indefinido y cuantitativo de la oferta alojativa y en la desconsideración de los costes sociales, económicos y ambientales que ello acarrea, y, de otro lado, un nuevo modelo, tendencia mejor dicho, en el que debe primar la cultura de los límites y la contabilización y minimización de todo tipo de externalidades, aspectos que están íntimamente vinculados al escaso territorio útil, al riesgo cierto de desbordamiento demográfico de las Islas y a la propia viabilidad y competitividad del sector turístico a medio y largo plazo.

Las remitidas al Parlamento son unas buenas Directrices. Las mejores posibles dados los delicados equilibrios de poder existentes. Resumiendo mucho, podría decirse que el Gobierno se ha inspirado en la experiencia de Lanzarote para trasladar al conjunto del Archipiélago, reconociendo que cada isla es un mundo, un paquete de medidas que se fundamentan en dos pilares básicos. El primero es la necesidad objetiva de contener drásticamente el creci-

No hace falta que lo proclame el Gobierno para reconocer que se está, sin duda, ante la Ley más importante de la legislatura

No hay turistas en los países emisores tradicionales con los que llenar esos nuevos incrementos de la oferta turística

miento turístico, introduciendo estrictos límites temporales. Ritmos de crecimiento, es decir. Con ello, se contiene en buena medida la presión constructiva, los evidentes riesgos de crisis de sobre oferta y la pérdida de competitividad del sector a corto plazo, amenazado, en tal caso, por la posible caída de los precios, una merma de los ingresos y, consecuentemente, una reducción de la capacidad inversora de las empresas y de las rentas salariales en el sector y sus alrededores. Al final, eso se traduce en un estatus especial para las Islas occidentales, bajo el falso alegato de pérdida de rentas (en A, falta decir), permitiendo la aberración de que las edificaciones turísticas se desarrollen sobre suelo rústico, mientras que para las demás se introducen ritmos del 1% interanual hasta 2005, rebajables por los PIO, fecha en que será el Parlamento quien fije por Ley el crecimiento que cada una de ellas podrá admitir, revisable cada dos años.

Extinción de licencias.

El segundo pilar es la extinción de aquellos derechos edificatorios que no hayan cumplido sus deberes urbanísticos. Con esta medida, debidamente ejecutada, se estima que el Gobierno de Canarias podría proceder a la caducidad de planes parciales con un potencial edificatorio futuro de trescientas o cuatrocientas mil plazas, aproximadamente el 50% del techo teórico que podría construirse en las Islas si no se adoptan las medidas oportunas. Y ello, con escasos o nulos riesgos indemnizatorios. Problema distinto es el potencial de crecimiento restante, del que *grosso modo*, podría afirmarse

que está jurídica y urbanísticamente consolidado, por lo que su eventual desactivación requiere indemnizar a sus propietarios, con lo que la situación del Archipiélago se equipararía a la de Lanzarote y su problema de reducir drásticamente el crecimiento después del año 2010, para lo cual se estudia la posibilidad de implementar novedosas medidas fiscales que generen los ingresos extraordinarios que se precisan para afrontar tamaño desafío. Léase impuesto turístico o *ecotasa*, como se le conoce popularmente, que nutran un fondo de rescate de esos derechos de manera concertada con los propietarios de suelo.

Un problema añadido lo constituyen las denominadas *licencias vivas*. Son aquellas que adquirieron plenamente sus derechos edificatorios inmediatamente antes del inicio de los procesos abiertos por el Gobierno y las consiguientes decisiones. Unos hablan de 90.000 plazas, el Gobierno de 52.000. Con ellas, el Ejecutivo propone un proceso de concertación voluntario de entre tres y diez años para ralentizar su ejecución y entrada en el mercado. Lo que no resuelve el problema, sino que lo aplaza. Eso significa un aumento del 25% de la actual oferta alojativa, incremento que muy difícilmente podrá asumir la industria turística canaria, máxime cuando crece a pasos agigantados la competencia internacional, la situación interna en Alemania no es nada boyante y el mercado británico tiene un potencial de gasto muy reducido. En otras palabras, no hay turistas en los países emisores tradicionales con los que llenar

esos nuevos incrementos de la oferta turística.

Un potencial inasumible.

El gran problema, pues, sigue siendo el potencial de crecimiento turístico consolidado en Canarias, tanto por las *licencias vivas* o inmediatas como por los planes de futuro. Un problema que probablemente no puede ser afrontado en la actualidad dada la existente correlación de fuerzas económicas y políticas, así como la mentalidad todavía imperante en los círculos del poder, pero que acabará emergiendo como una irrenunciable necesidad a lo largo de la legislatura entrante, lo que exigirá la adopción de nuevas medidas, más drásticas, y un profundo cambio en el marco legislativo imperante. Aquí, de nuevo, será de enorme valía lo que hoy se califica como literatura sostenible sin utilidad práctica o los estudios que no sirven para nada que se vienen realizando en Lanzarote. La negativa del Gobierno a la implantación de una *ecotasa*, potestativa, indica que no se quiere asumir el problema de la descalificación de las aproximadamente 700.000 plazas potenciales que pueden construirse en Canarias.

Mientras tanto, se detectan dos grandes asignaturas pendientes. Una, los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2003 nada tienen de sostenibles, ni muestran intención alguna por adecuarse a las nuevas líneas programáticas que esbozan las Directrices, como tampoco se atisba intención alguna por *ambientalizar* el Plan Director de Infraestructuras, que tantos estragos está ocasionando en la geografía de las Islas. Dos, se desconoce el parque

alojativo que viene operando ilegalmente en el Archipiélago, sin que el Gobierno evidencie intención alguna por intentar averiguarlo y, en su caso, inspeccionarlo y proceder al cierre de esos establecimientos, lo cual eliminaría un porcentaje significativo de la oferta y de la competencia desleal.

Hasta ahora se ha descrito lo más llamativo de las Directrices. Pero hay más. Las Directrices de Ordenación General descansan sobre seis ejes: recursos naturales (que contempla biodiversidad, atmósfera, agua y recursos forestales y geológicos), energía y residuos, territorio (que se subdivide en sistema territorial, suelo rústico, densidad urbana, complejidad urbana y vivienda), transportes y comunicaciones (que recoge infraestructuras, puertos y aeropuertos, red viaria, transportes colectivos y telecomunicaciones), patrimonio cultural y paisaje y, por último, actividades económicas y territorio (que recoge el turismo, el agro, la construcción y la industria y los servicios). Prácticamente todo. Y sobre todo ello se proponen Normas Directivas (ND) y Normas de Aplicación Directa (NAD). Resumiendo mucho, se obligará por Ley a los Cabildos y a los Ayuntamientos para que desarrollen gran parte de estos temas, desde ordenanzas sobre ruidos y contaminación atmosférica a las determinaciones paisajísticas. Lo mejor que se puede hacer con ellas es leerlas.

Los Cabildos, la llave.

¿Hay capacidad para digerir, cumplir y hacer cumplir tanta complejidad normativa? ¿Hay capacidad para exigir que la Ley no se quede en papel mojado si un Cabildo o

Los Presupuestos no muestran intención alguna por adecuarse a las nuevas líneas programáticas que esbozan las Directrices

¿Hay capacidad para digerir, cumplir y hacer cumplir tanta complejidad normativa?

un Ayuntamiento no la cumple (ni la hace cumplir)? Las leyes, en sí mismas, no resuelven nada, aunque ofrecen garantías a los ciudadanos. La clave de las leyes reside en la existencia de una decidida voluntad política por cumplirlas y hacerlas cumplir, y en el claro compromiso civil de exigir su cumplimiento. Porque a este complejo entramado debe añadirse ahora las Directrices de Ordenación del Turismo, que descansan sobre tres patas: el modelo turístico, la renovación edificatoria y la rehabilitación urbana y, por último, las condiciones del crecimiento.

Es clave la puerta que se le abre al sector de la construcción, que, lejos de colapsarse como algunos agoreros vaticinan, encontraría cartera de trabajos más que suficiente para seguir actuando como motor de la economía canaria en la renovación de la planta alojativa obsoleta y en la rehabilitación de los espacios públicos de los núcleos turísticos, así como en el parque de viviendas para residentes y en la obra pública. Novedad es la asunción por el Gobierno de que la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) debe poder destinarse a tales menesteres, constituyendo un caudal financiero con una capacidad de transformación y modernización realmente impresionante (más de un billón de pesetas de ahorro empresarial que se sustenta en no pagar impuestos). De igual modo, parece que el Gobierno comienza a asumir que los Incentivos Económicos Regionales no pueden seguir aplicándose a subvencionar planta alojativa nueva.

En resumidas cuentas, el Gobierno y el Parlamento contextualizarán el

modelo sobre la base de que cada isla es un modelo, siendo los PIO los instrumentos materiales de ejecución de las nuevas políticas. Un PIO puede decidir crecer por debajo del 1% anual, o proponer un *crecimiento cero* porque los equipamientos sociales básicos se encuentran desbordados, o no crecer en una zona si está saturada porque su capacidad de carga territorial, turística o ambiental está desbordada, o no crecer si un nuevo crecimiento potencial desequilibra el sistema territorial. Los PIO son las piezas claves, una vez adaptados a la nueva legislación y desarrollados sus Planes Territoriales Especiales.

Diríamos que quien gobierne en el Cabildo de Lanzarote tendrá la llave de lo que pase o deje de pasar en la Isla. ¡Claro que no da igual quién mande en el Cabildo a partir de las elecciones de mayo de 2003! Sin duda, el gran desafío insular a partir de la entrada en vigor de la Ley consistirá en garantizar que el gobierno resultante en el Cabildo está en sintonía política y vital tanto con los contenidos de las Directrices como con el *crecimiento cero* después de 2010.



**Las Directrices
desde Lanzarote:
premonición,
contradicción,
interacción**

Faustino García Márquez

Cuando uno es ya un poco mayor, y le piden una visión de una isla como Lanzarote, la primera duda que le asalta es ¿de cuál de las Lanzarotes que creo conocer? ¿desde qué perspectiva, desde qué tiempo, desde qué dato, desde qué recuerdo?

Ustedes me perdonarán esta pequeña digresión; sólo pretendo señalar que cuando el territorio no es sólo el objeto de un trabajo profesional, sino el lugar en el que se vive y se siente, que identifica y en el que se refleja, no hay una visión, sino múltiples visiones que interactúan, que se complementan entre sí, que se distorsionan mutuamente.

Por eso, cuando uno vuelve a ver la Isla, por más que quiera endurecer y enfriar la mirada, por más que intente ser técnica y científicamente objetivo, no dejará nunca de aflorar la húmeda presencia del recuerdo y del sentimiento. Y no se puede renegar de esta forma de acercarse a las Islas, a cada Isla y a ésta en particular, porque es la forma más compleja y completa posible, con la historia individual y colectiva por delante, sintiendo el territorio como algo propio, con el sentimiento que todo lo empaña y lo aclara, que todo lo empequeñece y lo magnifica, que todo lo pone en su justo e impreciso lugar.

Pero entiendo que aquí y hoy debo situarme en la visión más reciente que he podido tener de Lanzarote desde el proyecto de Compromiso por el Desarrollo Sostenible y desde las Directrices de Ordenación: la de una Lanzarote premonitoria, que anuncia, desde su presente, el futuro del resto del archipiélago, y

*Una Lanzarote
adelantada en
la ordenación
territorial
insular*

Este texto es la versión escrita de la intervención del autor con motivo de la presentación pública del Gabinete Científico del Consejo de la Reserva de la Biosfera el día 15 de noviembre de 2002.

Una Isla con un alto nivel de conciencia ciudadana sobre su paisaje y su medio ambiente, pero con un bajo nivel de disciplina institucional e individual

la de una Lanzarote contradictoria, que anuncia también las tremendas dificultades del proceso.

Previsión, premonición, contradicción.

Es la visión desde una Lanzarote adelantada en la ordenación territorial insular, que desconcierta al ministerio de turno, ya en 1973, obligándole a aprobar como norma complementaria y subsidiaria de planeamiento un Plan Insular elaborado 14 años antes de que existieran legalmente los Planes Insulares; que aprueba en 1991 el primero de los Planes que desarrollaron la Ley 1/1987; que establece en este instrumento las primeras medidas de limitación de la capacidad de carga, desclasificación de suelo y transformación de aprovechamientos. Una Isla que asumió antes que ninguna otra el hecho de que la actividad turística era la base económica indiscutible y que una de las tareas fundamentales de la ordenación territorial era establecer un marco adecuado para la misma; pero también que era necesario comenzar a transformar el modelo de crecimiento continuado ligado al negocio inmobiliario en un desarrollo limitado y con estándares de calidad.

Pero también, la visión desde una Lanzarote contradictoria, la Isla que presenta el mayor índice de municipios sin planeamiento general, y también de corporaciones que combaten la ordenación insular desde una visión municipal profundamente miope, ilegal e insolidaria. Que aunque prohibió desde 1991 la construcción residencial en el suelo rústico, ocho años antes que la Ley de Ordenación del Territorio, ha pre-

sentado durante varios años el mayor índice de infracciones urbanísticas por habitante. Una Isla con un alto nivel de conciencia ciudadana sobre su paisaje y su medio ambiente, pero con un bajo nivel de disciplina institucional e individual. Una Isla con un territorio apreciado, pero que hace un uso terriblemente ineficiente de buena parte de ese territorio, fomentando una dispersión que se argumenta tradicional cuando ya no se destina al uso agrícola que justificó esas formas de ocupación del suelo. La primera Isla que pone en marcha una estrategia de sostenibilidad, pero también comprueba en su primera recapitulación sobre el proceso que aún no ha conseguido invertir sensiblemente la tendencia en los últimos cinco años.

Una Lanzarote premonitoria que, pese a su previsión ordenadora, ha visto explotar su crecimiento en el último quinquenio, ha visto sobrepasada su capacidad de carga territorial y ambiental, turística y demográfica, que ha visto desbordados sus servicios e infraestructuras, que ha visto romperse su tejido social, que ha enseñado a todo el Archipiélago la peor cara del crecimiento, el peor futuro imaginable. Y cabría imaginar cuál hubiera sido la situación actual si, además, no se hubiera tenido la previsión de ordenar y limitar el crecimiento.

Proceso social.

Son situaciones y contradicciones que no se superan mediante normas, sean Planes Insulares o Directrices de Ordenación; que sólo pueden superarse a través del proceso social que produzca la transformación del modelo de

desarrollo, asumiendo que se trata de un proceso contradictorio, con avances y retrocesos, en el que nadie se cae del caballo milagrosamente, sino que tiene que ser pacientemente desmontado y enseñado a caminar. Y en la enseñanza de ese camino, es esencial la participación social, mediante mecanismos como este Consejo, que provoquen el cambio de las actitudes del poder, de la forma de actuación y decisión de las Administraciones, y en el que los instrumentos de ordenación queden relegados a su auténtico e importante papel de herramientas para la transformación y, todo lo más, de ocasionales animadores e impulsores de esa transformación. En este sentido, el debate sobre las Directrices de Ordenación pretende en buena parte centrarse en cuestiones accesorias o falsas, en la autorregulación del mercado del suelo, en la libre circulación de capitales y personas, en las competencias estatales en materia de puertos y aeropuertos, en la discrecionalidad de los concursos para la adjudicación de autorizaciones limitadas o en las dificultades de modificación de la Reserva de Inversiones. Esos no son los problemas; el problema es que no tenemos derecho a seguir creciendo, porque somos una sociedad desarrollada y nuestro crecimiento cuantitativo limita la necesidad de crecimiento de los países en vías de desarrollo; el problema es que no podemos seguir creciendo porque hemos superado nuestra capacidad de carga, y no nos vale que nos comparen con la densidad de Hong Kong ni de Singapur ni de Gibraltar. La capacidad de carga de un territorio no es un

concepto absoluto, sino que depende de la función que desempeña, depende de que una hectárea de césped se utilice para jugar al fútbol, en cuyo caso la capacidad de carga no puede superar las 23 personas, o para celebrar un concierto, y entonces puede soportar a 50.000.

Pero nosotros sabemos cuál es exactamente nuestra función, la del territorio europeo con mayor biodiversidad, con el 44% de su territorio protegido y cuya principal actividad es el turismo. Por eso nuestra capacidad de carga es tan limitada, y por eso la tenemos tan superada que no nos podemos permitir el lujo de aumentar nuestro consumo de suelo ni de incrementar nuestra planta alojativa, sino de transformarla. Tenemos que transformar nuestro modelo de desarrollo territorial, cambiar las competencias, cambiar las leyes, cambiar las normas, pero conservar nuestra riqueza, hacer duradero nuestro bienestar, aumentar sólo nuestra calidad de vida, empezar a invertir en recuperación ambiental, comenzando por el rescate de los aprovechamientos urbanísticos y edificatorios que ya no soporta el territorio.

Interacción.

Debe imputarse a Lanzarote una buena parte de la responsabilidad de la puesta en marcha del proceso de ordenación del Archipiélago abierto con el Compromiso y las Directrices. No sólo con su ejemplo de actuación y ordenación, y con su singular crecimiento explosivo, sino también durante la propia redacción de las Directrices, con la presencia y la presión continuadas del Cabildo Insular, que ha servido para contrarrestar las pre-

No podemos seguir creciendo porque hemos superado nuestra capacidad de carga

siones de otras Administraciones y organizaciones sociales menos propicias a la transformación del crecimiento en desarrollo.

Desde esta Isla, las Directrices se verán, con seguridad, desde una óptica ambiental y social más crítica que desde las demás. Las Directrices sólo resuelven algunos de los problemas planteados desde Lanzarote: la consideración de las capacidades de carga insular y zonal, la limitación de la segunda residencia, la previsión de equipamientos con alta incidencia territorial, la renovación edificatoria y la rehabilitación urbana; pero faltan otros, como la posibilidad de desclasificación del suelo urbano, la previsión de nuevas clases y categorías de suelo, la tipificación de la segunda residencia, el control de los flujos de entrada a la Isla.

Pero las Directrices pueden significar, a pesar de todas sus limitaciones, un salto cualitativo en el proceso de Lanzarote, y ese salto cualitativo de la isla podrá significar un avance sustancial del proceso del archipiélago en el futuro inmediato.

En estos días, precisamente, estamos asistiendo a un hecho que denota el avance real que este proceso contradictorio ha producido en las islas, y que puede tener una profunda repercusión en el futuro que ha estado diseñando Lanzarote durante el último año. En 1998, la totalidad de las fuerzas parlamentarias canarias transformaron una Ley de iniciativa popular en la Ley 3/1998, de Veneguera, que calificó su ámbito como zona perimetral de un espacio natural y siguió permitiendo su desarrollo turístico, para no incurrir en responsabilidades patrimo-

niales e indemnizaciones. Ahora, la totalidad de las fuerzas parlamentarias acaban de acordar la tramitación de una nueva Ley para Veneguera, basada en su declaración como espacio protegido y su reclasificación como suelo rústico, asumiendo las indemnizaciones que comportará. Es un cambio sustancial que pudiera derivar, en la próxima legislatura, en nuevos planteamientos sobre las desclasificaciones de suelo, las nuevas clases y categorías que cada vez más se van perfilando como las únicas alternativas reales a la limitación del crecimiento turístico.

Recapitulación.

No es fácil la batalla, y a las propias Directrices me remito, enfrentadas a una voluntad de consenso más bien escasa, con sobrada probabilidad de que puedan terminar no siendo aprobadas en el tiempo de la legislatura, o que lo sean a costa de perder contenidos sustanciales.

Pero no nos podemos permitir el lujo de que la dificultad nos aplaste. Para mí, esta reunión es alentadora, al permitirme ver, aprender y participar de un proceso ejemplar y de un momento apasionante: cuando se comienza a reorganizar el trabajo inicial ante la nueva etapa que parece abrirse a nivel regional, cuando se empieza a enfocar el nuevo modelo territorial insular, cuando se plantean toda una serie de estrategias legales y económicas que hagan posible ese modelo. Poder estar presente, poder contribuir en la medida de mis posibilidades a esta tarea, y con compañeros de equipo de la categoría de quienes acompaño en el Gabinete, es una oportunidad que nunca les podré agradecer.

Las Directrices pueden significar, a pesar de todas sus limitaciones, un salto cualitativo en el proceso de Lanzarote



Arrecife: el espejo insular

Jorge Marsá

La demagogia populista constituye un ingrediente fundamental de la política y el debate público en la sociedad lanzaroteña. Y los planes para Arrecife no iban a carecer de esta característica. El último, el *Proyecto Mareas*, vuelve a ser un ejemplo. Una actuación que se pretendía vender como ecológica, racional e ilustrada ha terminado presentándose como todo: asadero y verbena popular. Y el argumento más repetido por sus valedores ha sido la contraposición entre el centro aristocrático y los barrios populares: “¿es que las clases populares de los barrios no tienen derecho a las ventajas de los ricos de La Plazuela?”

La huida de Arrecife

La identificación de la zona de La Plazuela como el barrio de los ricos resulta incomprensible, porque, a decir verdad, los ricos de Arrecife viven, casi todos, fuera de la ciudad. En consecuencia, si tuviéramos que elegir un lugar representativo en el que incluirles, podríamos decir que el barrio de los ricos de Arrecife es El Cable. Ahora bien, no son sólo los ricos los que viven fuera; lo mismo ocurre con la clase media alta y los profesionales, cuyo barrio preferido podría ser Tahiche mientras que la clase media baja ha elegido Playa Honda. Y los arrecifeños más pobres, que no pudieron costearse una casa en ninguna de esas zonas, se desplazaron hacia la periferia que hoy se conoce como los barrios.

No todos estos asentamientos plantean el problema urbanístico con idénticas consecuencias. Las soluciones de Playa Honda o de los

La mayoría de la sociedad de Arrecife se ha caracterizado por tratar de huir de la ciudad a la primera oportunidad

barrios, a pesar de sus notables limitaciones, conforman un urbanismo menos agresivo para el territorio que el modo en que se ha ocupado el espacio en El Cable o en Tahíche. No obstante, estos dos últimos asentamientos constituirían paradigmas válidos si los comparáramos con el modelo Mácher, y casi ejemplares si lo hiciéramos con quienes encuentran paraísos aislados fuera de los cascos urbanos de los diferentes municipios de Lanzarote.

En cualquier caso, el denominador común parece claro: la obsesión por la vivienda unifamiliar aislada –o lo más aislada posible– y la consiguiente mudanza hacia los lugares en los que ha sido posible obtenerla. Por lo tanto, cabe afirmar que la mayoría de la sociedad de Arrecife se ha caracterizado por tratar de huir de la ciudad a la primera oportunidad. Y de forma tan generalizada que a nadie ha extrañado que ni los alcaldes ni buena parte de los concejales del municipio durante las últimas décadas vivieran, como tantos otros, fuera del lugar en el que desarrollan su actividad pública.

*Será difícil que
La Medular
tenga algún día
vida ciudadana
si no puede
acoger su
componente
fundacional:
las viviendas*

La construcción de esa casa ‘ideal’ ha provocado como consecuencia un modelo urbanístico que consume una ingente cantidad de territorio, promueve un incremento de los costes de las redes de distribución de servicios –agua, electricidad, teléfono, cable–, estimula el crecimiento de la movilidad –con el consecuente uso generalizado del transporte motorizado privado– y fomenta unos entornos urbanos que facilitan el aislamiento entre los vecinos y, por consiguiente, dificultan la convivencia ciudadana. En resumen, un modelo urbanístico, de inspiración norteamericana, en el que el centro de la ciudad se convierte en un entorno administrativo y comercial del que huyen quienes pueden y en el que se quedan a vivir los más pobres, y una periferia preparada para asentar al *homo oeconomicus*. O sea, el territorio donde el individualista consumista puede aislarse del entorno que le rodea, de esa sociedad que vive más como molestia o amenaza que como complemento imprescindible para la realización personal.

Del centro de la ciudad ha huido hasta el Cabildo Insular, que, inexplicablemente, prefirió trasladarse a un descampado. No hay más que pasear por el centro, una vez que han cerrado las puertas de los comercios y oficinas, para ver la urbe transformada en un desierto despojado de actividades, encuentros, interacciones, de vida humana. Y lo que ocurre en el centro parece que se producirá inexorablemente en el entorno que conforma La Medular, donde se construyen casi en exclusiva edificios institucionales y de servicios. Será difícil que el paseo urbano que dibuja esa avenida, tras el

imprescindible retoque del diseño, tenga algún día vida ciudadana si no puede acoger su componente fundacional: las viviendas.

Parece primordial que el nuevo Plan General impida esa segmentación de la vida vecinal, evitando que ninguna zona de la ciudad sea sometida a tal especialización por los imperativos del mercado. Como ocurre en los centros de muchas ciudades europeas, debería contemplarse en los edificios una planta baja comercial y como máximo una primera que pudiera alojar oficinas, para dejar el resto obligadamente destinado a viviendas. Porque convertir un área en zona especializada en actividades comerciales o administrativas supone vaciarla del tejido ciudadano imprescindible para generar vida social.

Claro que aún resulta más asombroso lo que ocurre con El Charco, uno de los lugares más privilegiados de la ciudad. Imaginemos un domingo por la mañana en cualquier ciudad, y más en una con un clima como éste: un espacio como El Charco estaría repleto de personas que pasean, de bares con sus correspondientes terrazas abarrotadas de gente tomando sus cervecitas y pescaditos. Sin embargo, ¿qué ocurre en El Charco? Prácticamente nada.

No obstante, podría pensarse que, por ser un barrio popular, El Charco hubiera sufrido un abandono inconcebible en zonas urbanas más apreciadas. ¿Cuál es el área más valorada de Arrecife? La contestación resulta obvia: la Marina. Pues bien, allí podemos encontrar nuevas pruebas de la desidia de la sociedad con la capital de la Isla: primero, la conversión del Islote del Francés en una ruina industrial y vertedero; y segundo, el mantenimiento del Islote de la Fermina durante años como asentamiento de una construcción inconclusa. Que lugares tan privilegiados de una ciudad hayan sufrido ese abandono resultaría inexplicable en casi cualquier metrópoli. En cierto modo, estos dos enclaves, de la que se califica en ocasiones como la mejor marina urbana de Canarias, deben considerarse emblemas de la absoluta incapacidad que ha caracterizado a los diferentes gobiernos municipales que ha sufrido Arrecife durante décadas.

Una característica más, que delata el desinterés por el centro de Arrecife, la constituye el envejecimiento de la población residente. De hecho, si un conocedor detallado del espacio urbano (como Manolo Perdomo, que me descubrió este matiz) analiza lo que ha ocurrido con las viviendas del centro, llegaría a la conclusión de que en la mayoría continúan viviendo las mismas familias que hace décadas. ¿Cuestionaría esta realidad la huida de la que hemos

Que lugares tan privilegiados como el Islote del Francés o el de la Fermina hayan sufrido ese abandono resultaría inexplicable en casi cualquier ciudad

hablado? No, porque continúan habitando allí, en general, los padres; fueron los hijos los que abandonaron la ciudad. En consecuencia, el centro de la ciudad está habitado por una población notablemente envejecida, lo que en nuestra sociedad delata la existencia de un espacio escasamente valorado.

En suma, el centro de la ciudad se ha convertido en un lugar tan escasamente apreciado que hoy, en lo que el Ayuntamiento considera casco urbano, sólo viven 9.601 personas de las 48.955 que habitan en la ciudad. En una Isla en la no se hacía otra cosa que construir, el centro de Arrecife estaba plagado de solares vacíos ante la ausencia de demanda suficiente para construirlos. Y, aunque se comienza a vislumbrar un cambio, los que se han edificado en los últimos tiempos muestran unos estándares constructivos de una calidad sorprendente baja para el centro de cualquier ciudad. De hecho, el precio de la vivienda en Arrecife, pese a su incremento, y a excepción del frente litoral, ha permanecido notablemente por debajo del de otras zonas de la Isla. Hasta el punto de que en la vía más central de la capital, la calle Real, descubrimos edificios depauperados en los que encuentran acomodo algunos de los inmigrantes que arriban a Lanzarote –no desde luego los más pobres–.

El centro de la ciudad se ha convertido en un lugar tan escasamente apreciado que hoy sólo viven 9.601 personas de las 48.955 que habitan en Arrecife

La capital de la Isla ha permanecido al margen de la transformación urbanística acontecida en muchas ciudades españolas tras las primeras elecciones municipales en 1979. La mayoría de las ciudades de este país, grandes y pequeñas, han mejorado su entorno urbano de forma apreciable. En términos generales, ese cambio ha sido más pronunciado y más positivo en las ciudades gobernadas por la izquierda; pero se ha producido también en otras regidas por la derecha. Vitoria es buen ejemplo: una ciudad que en algunos aspectos se ha convertido en emblemática en el país, y cuya rehabilitación fue dirigida por un alcalde perteneciente a un partido de derechas, el PNV.

En Arrecife, gobernada durante casi 20 años por el PSOE –ya fuera en solitario o en coalición–, no se ha producido esa metamorfosis. Se han perdido las características propias del antiguo pueblo sin haber logrado conformar una ciudad. Arrecife continua ofreciendo esa típica imagen del cutrerío desarrollista que dominaba el urbanismo del franquismo en los pueblos en los que se producía un crecimiento rápido: amalgama de las viejas casas, en espera de derribo, con la arquitectura miserable que acompaña a la especulación inmobiliaria de lugares aún en desarrollo.

No hay más que echar un vistazo a la ciudad para comprobar lo que

decimos. Y para entender por qué los arquitectos platican con voz tan mortecina en esta ciudad. Claro que si hablamos de arquitectura, resulta obligado mencionar al Cabildo de esta Isla que, como decíamos, dejó el centro de Arrecife para instalarse en un horripilante edificio. Ahora bien, la *tarta* que aloja a la administración insular no es una excepción; supone, desgraciadamente, la confirmación de una regla.

Si muchas administraciones locales de este país iniciaron una carrera, a veces alocada, en pos de arquitecturas emblemáticas para sus ciudades, aquí ha sucedido lo contrario: el ayuntamiento como si no existiera, y el Cabildo de Lanzarote se ha constituido en el líder e inspirador de la implantación de la peor arquitectura: a su sede central podemos añadir el conservatorio de música, la nueva biblioteca insular, la ciudad deportiva... No deja de resultar curioso que, en una Isla donde la decoración de exteriores constituye asignatura obligatoria, una institución que tanto se preocupa por chorradas estéticas, que tanto esfuerzo dedica a adornar los bordes de las carreteras, haya naufragado de forma tan estrepitosa en la capital insular.

En realidad, no es extraño. Durante las últimas décadas la sociedad insular ha vivido volcada hacia el sector del que vivía: el turismo. Y, en consecuencia, casi todos los esfuerzos de la sociedad, de las empresas y de las instituciones públicas se han concentrado en las zonas turísticas y en la atención a quienes nos visitan. Las instituciones ha actuado a remolque de los intereses de la industria turística y se han mostrado incapaces de desarrollar políticas de intervención urbanística que contemplaran los intereses de los ciudadanos. En este sentido, conviene resaltar que en la broma más reciente del empresariado turístico, el denominado ‘turismo de calidad’, Arrecife continúa desaparecida. Si se quisiera hablar con seriedad de la necesidad de elevar la ‘calidad’ de nuestros visitantes, lo primero que tendrían que abordar esos empresarios es cuál va a ser su contribución a la imprescindible transformación del espejo insular, de la capital de la Isla, en una ciudad que cualifique el destino turístico y ofrezca la “oferta complementaria de ocio” de la que Lanzarote carece.

Por otra parte, no podemos obviar la influencia que las carencias culturales de la sociedad lanzaroteña han tenido en lo ocurrido en Arrecife –resulta imposible que los políticos que han gobernado el ayuntamiento de la capital o el Cabildo durante las últimas décadas sean completamente ajenos a la sociedad que les ha votado–. Como

El Cabildo se ha constituido en el líder e inspirador de la implantación de la peor arquitectura

Como sucede siempre, resultó más sencillo y más rápido enriquecerse económicamente que culturalmente

sucede siempre, resultó más sencillo y más rápido enriquecerse económicamente que culturalmente. Parece lógico esperar que la primera generación que accede a la riqueza se preocupe más por obtener un gran automóvil que por cualquier refinamiento cultural. Con mayor razón si esta sociedad insular se encuentra en uno de los países culturalmente más atrasados de Europa.

Resumiendo, sostengo que han sido cuatro los factores fundamentales que más han contribuido a configurar la ciudad durante los últimos veinticinco años, y por orden de importancia son: primero, la persecución de la casa individual lo más aislada posible situada en entornos lo menos urbanos posibles; segundo, el hecho de que el interés mayoritario de la sociedad haya estado centrado en los espacios turísticos, en la atención a nuestros visitantes y en la conservación del paisaje como argumento fundamental de la comercialización turística; tercero, el bajo nivel cultural de la sociedad insular; y por último, la ineptitud, la estrechez de miras y la ausencia de un proyecto mínimo para la ciudad de los políticos y los empresarios que la han gobernado.

Los indicios del cambio

Ahora bien, pese al pesimismo al que podría conducirnos la trayectoria precedente, lo cierto es que son ya numerosas, aunque aún minoritarias, las miradas que convergen en la capital. El colectivo Ciudadanos por Arrecife inició el camino, y durante el segundo lustro de los noventa se dedicó, prácticamente en solitario, a tratar de abordar con racionalidad los problemas de la ciudad. Continuó la Fundación César Manrique. Y en la actualidad la preocupación por la configuración de la ciudad ocupa ya a otros colectivos. También de las instituciones públicas comienzan a brotar los primeros detalles, aún escasos y muchas veces contradictorios, que delatan una cierta intención de tratar la urbe como lo que es: una ciudad. Tendremos que esperar a la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana para sopesar el compromiso de la clase política con un nuevo proyecto de ciudad y la calidad del mismo.

El sustrato fundamental de este cambio parece obvio: el fracaso de las políticas de sostenibilidad y de contención del crecimiento turístico han convertido a Lanzarote en un destino turístico claramente masificado. Se desmorona el mito lanzaroteño del desarrollo sostenible y se intuye la necesidad de contrarrestar el excesivo peso social de la industria turística. Lanzarote se hace adulta, desaparece la visión idílica, y falsa, que se tenía del desarrollo insular y aflora la realidad: una sociedad desarrollada y conflictiva, que tiene

que afrontar los problemas propios de la sociedad y dejar de estar exclusivamente centrada en las necesidades del negocio turístico.

Para ilustrar el fracaso lanzaroteño en la contención del crecimiento turístico bastan unos pocos datos –aunque sean los escasamente fiables del ISTAC–. En 1991 se aprobó el PIOT, y desde entonces se repite que Lanzarote es la única Isla del Archipiélago que ha abordado la cuestión de la contención del crecimiento. Aún más énfasis pusieron algunos en este asunto tras el establecimiento de la ‘moratoria’ en 1998. Pues bien, desde 1992 hasta el año 2000, las entradas de turistas en el conjunto del Archipiélago crecieron un 65%. En el paraíso sostenible lanzaroteño lo hicieron un 75%. Lanzarote creció un 20% más que el ‘desastre’ canarión y un 15% más que los chicharreros. Ciertamente que el incremento en Fuerteventura fue del 106%; pero también que la catástrofe permanente que desde hace años se vaticina para esa Isla continúa sin ser de la envergadura de la de aquí. Lanzarote recibe aún un 34% más de turistas que Fuerteventura y tiene un 38% más de plazas turísticas, a pesar de que su territorio es casi la mitad del mayorero. Los datos desmienten por sí solos el mito de la dedicación lanzaroteña al desarrollo sostenible y a la limitación del crecimiento turístico.

Y sólo la capital de la Isla puede constituirse en el contrapeso imprescindible de ese sobredimensionado sector turístico, que trata de continuar imponiendo sus intereses a la sociedad insular. Desde este punto de vista, el gran crecimiento demográfico de la ciudad al que estamos asistiendo constituirá en el futuro mucho más una oportunidad que un conflicto en el proceso de cimentar la preeminencia de Arrecife, de la población residente, en el futuro de la sociedad lanzaroteña. Porque para que la convivencia ciudadana sea fecunda y para que aflore la riqueza cultural característica de las ciudades, resulta imprescindible la existencia de una cierta masa crítica ciudadana. Como hace falta que el espacio urbano sea lo suficientemente denso como para acercar a esos ciudadanos. Razones por las cuales la incipiente densificación del centro que comienza a producirse supone una buena noticia. En suma, es necesaria una política urbanística opuesta a la que se ha promovido en Arrecife en las dos últimas décadas: barrios marginales poco compactos y un desvalorizado centro urbano escasamente habitado.

De hecho, en algunas zonas, entre las que podemos destacar El Reducto, el espacio público, tradicionalmente abandonado por buena parte de los arrecifeños, está siendo revitalizado por los nuevos inmigrantes. Dos motivos contribuyen a explicar este fenómeno.

En algunas zonas el espacio público está siendo revitalizado por los nuevos inmigrantes

no: la mayor cercanía a modos de vida comunitaria de muchos de los inmigrantes y, sobre todo, las malas condiciones en las que viven aquí. Es decir, las limitaciones de espacio en sus viviendas y la ausencia del arsenal de instrumentos para el entretenimiento del calibre del que caracteriza nuestros hogares les incitan a la conquista de ese espacio público, a convertirlo en el ‘cuarto de estar’ colectivo que siempre debió ser. Por supuesto, este asunto se convierte, como cualquiera que se ponga a tiro, en alimento para el victimismo xenófobo que tanto se ha extendido en Lanzarote.

Cierto que las pequeñas transformaciones que comienzan a tomar cuerpo muestran líneas contradictorias: junto a las primeras actuaciones de carácter realmente urbano, aunque de escasa calidad, que se han producido en la ciudad después de la construcción de la avenida Medular, como la “peatonalización” de partes del centro o la reforma del paseo marítimo, nos encontramos con irracionalidades tan incomprensibles como entregar un espacio urbano clave de la ciudad –el parque Islas Canarias– a un consorcio de empresas para que construyan el aparcamiento que necesitan para que sea viable su negocio hotelero.

El aparcamiento del parque Islas Canarias es sólo un caso concreto de un fenómeno que, en un asunto tan central como el del tráfico rodado, marca una dirección preocupante para el futuro de la ciudad: la explosión del negocio de los aparcamientos en el centro urbano. Como suele ser habitual, la escasez de ideas de los empresarios les lleva a actuar bajo lo que algunos economistas denominan el ‘efecto manada’: todos a construir aparcamientos en el mismo lugar, preparando el futuro atasco de tráfico en esa zona. La política que se está siguiendo en este aspecto –la ausencia de política, para ser más exactos– nos conduce a una ciudad diseñada para atender las necesidades de los automóviles de los ciudadanos por encima de las de los propios ciudadanos. Que este tipo de actuaciones puedan ser apoyadas por buena parte de los votos de los propietarios de automóviles no añade ni un ápice de racionalidad a tales propuestas.

El efecto manada tiene también sus manifestaciones en el terreno del comercio: el desmesurado amor por las grandes superficies que ataca a ciertos empresarios, algunos de ellos parte fundacional de aquella fracasada aventura contra el poder empresarial que monopolizaba ASOLAN, el Círculo de Empresarios. Es decir, el círculo de los que, por lo visto, se oponían a la construcción de grandes superficies comerciales si quedaban fuera de su círculo. Esta forma

*Una ciudad
diseñada para
atender las
necesidades de
los automóviles
de los
ciudadanos por
encima de las
de los propios
ciudadanos*

de destrozar el tejido comercial disperso por la ciudad y concentrarlo en pocas áreas, tuvo su primera manifestación en el intento de construir un remedo de centro comercial hortera norteamericano en el Islote del Francés –en un terreno calificado como parque urbano; es decir, que expropiarlo debería costar no más de la vigésima parte de lo que piden los propietarios–. Después asistimos a la derrotada tentativa de Hiperdino en el barrio de Valterra. En los próximos tiempos, nos esperan un par de asaltos de cuidado –porque los promueve capital de casa, y nadie les va a colocar enfrente una ‘mesa social’ bien provista–: el de las viejas instalaciones de la conservera Garavilla, por parte de los impulsores del aparcamiento en el Parque Islas Canarias, y la tentativa de conquista de la Ciudad Deportiva por parte de los promotores del famoso puerto deportivo de Berrugo.

Conviene recordar que, a la espera del nuevo Plan General, una amenaza trascendental que pende hoy sobre la ciudad es el vaciamiento, y por consiguiente empobrecimiento, del casco urbano que se pretende llevar a cabo para intentar dotar de contenido al denominado *Proyecto Mareas*, y la derivada pretensión de concentrar allí casi todas las inversiones futuras de las que pudiera beneficiarse la ciudad.

Una muestra más de la realidad de paso adelante y paso atrás la constituye lo que está ocurriendo en la ciudad con los árboles. Durante años, unos pocos clamaron en el desierto sosteniendo que el desastre arrecifeño reclamaba una política decidida de arbolado de la ciudad. Hace poco que hemos comenzado a presenciar las primeras actuaciones del Ayuntamiento en esta dirección. Sin embargo, parece que la alergia a los árboles no se desvanece, y en lugar de auténticos árboles se dedican a colocar plantas que los evocan. Los palmitos constituyen la elección más frecuente; y la calle Triana el ejemplo más reciente de esta cursilería.

De cualquier modo, lo primordial en una ciudad son los ciudadanos. Y para que el cambio sea posible el crecimiento de Arrecife no puede ser sólo cuantitativo. Hay que impedir que la ciudad continúe desarrollando el modelo norteamericano, y que se culmine el trabajo añadiendo al centro comercial y administrativo las características propias de los guetos para los más pobres. Si Arrecife logra transformarse para bien será porque a los nuevos inmigrantes que acuden a la ciudad se les añada un cierto caudal de retorno de gentes más acomodadas. En la sociedad capitalista en la que vivimos –y en la que parece que vamos a seguir viviendo un ratito–

Resulta imposible construir una ciudad de una cierta calidad si en ella no habitan también los ricos y los más ilustrados

resulta absolutamente imposible construir una ciudad de una cierta calidad si en ella no habitan también los ricos y los más ilustrados. Porque sin la presión de quienes tienen más capacidad de influir, la ciudad no conseguirá ni la atención ni las inversiones suficientes para salir de la mediocridad que la caracteriza.

Por esta razón, resulta imprescindible que en Arrecife se produzca lo que ya ha ocurrido en tantas ciudades europeas: el regreso de parte de la burguesía y de los sectores profesionales o ilustrados a los centros urbanos. Porque su presencia, su sobrerrepresentatividad política y su poderío económico han constituido un factor indispensable para el mantenimiento y la rehabilitación del centro de las ciudades.

*La sociedad
lanzaroteña
será,
básicamente, lo
que sea Arrecife*

Para concluir, conviene insistir en que el ‘problema’ de Arrecife no es un asunto exclusivamente urbanístico. Si la sociedad lanzaroteña quiere emanciparse de la dominación de la industria turística y centrarse en las labores propias de cualquier sociedad –las necesidades de la población y su relación con otras comunidades– tiene que edificar el ágora pública de la ciudadanía, el emplazamiento desde donde irradie la cultura ciudadana. Y en Lanzarote ese lugar no puede ser más que Arrecife, el centro desde donde se debe elaborar un nuevo discurso que contemple la Isla desde una óptica global que se traduzca en políticas públicas que restablezcan el equilibrio territorial y primen los intereses de la población y del medio insular por encima del negocio turístico-inmobiliario.

Conviene que la sociedad insular comience a tener conciencia de que su futuro como sociedad está inexorablemente unido al de Arrecife como ciudad. La sociedad lanzaroteña nunca encontrará las raíces que la nutran en Puerto del Carmen, Costa Teguise o Playa Blanca, ni tampoco en las actividades tradicionales o en la recreación de pasados idílicos. La sociedad lanzaroteña será, básicamente, lo que sea Arrecife.



Compadezcamos a los políticos

Hans Magnus Enzensberger

Quizás haya llegado el momento de que dejemos de insultar a los políticos. Hace tiempo que esta práctica se ha desvinculado de su lugar de origen, el discurso de la oposición, para convertirse en tópico de la mayoría murmuradora. Y desde entonces circula como pasatiempo por todos los medios de comunicación. Como siempre cuando ya no queda nada por desvelar, el sacar algo a la luz se convierte en una rutina industrial. Produce beneficios siempre que se trate de incrementar ediciones o cuotas de audiencia. Pero incluso este beneficio es efímero; el interés da paso al hastío, la indignación se consume a sí misma, y el desprecio consensuado se conforma con encogerse de hombros.

Las investigaciones de campo de sociólogos diligentes, las pesquisas de los fiscales y las indagaciones de periodistas tenaces no dejan ninguna duda de que los reproches son ciertos. Lo que suele denominarse la clase política, expresión más curiosa que acertada, ofrece un espectáculo nada agradable. No sólo en Alemania, sino en todo el mundo se afirma, en diferente dosificación pero con deprimente unanimidad, que se caracteriza por el dominio de la mediocridad, el fracaso del discernimiento, el pensamiento a corto plazo, la ignorancia conceptual, la obsesión por el poder, la codicia, el nepotismo previsor, la corrupción y la arrogancia.

Desde el politólogo que diferencia de forma acrítica hasta el Savonarola que gorgotea en las tertulias, casi nadie negará la veracidad de este diagnóstico. Lo único molesto en este contexto es la

*Quizás haya
llegado el
momento de
que dejemos de
insultar a los
políticos*

Este artículo, de 1992, forma parte del libro de Hans Magnus Enzensberger, *Zigzag*, Editorial Anagrama, Barcelona, 1999

*Acceder a la
política es
despedirse de la
vida, es el beso
de la muerte*

cicatería con la que se controlan los dispendios de la inmensa mayoría de los cargos políticos. Las sumas objeto de crítica son tan irrisorias, por lo menos aquí en Alemania, que hablan por sí mismas. Como es sabido, las viviendas de los políticos alemanes muestran un fatal parecido con Wandlitz; son el equivalente occidental de aquel infierno pequeñoburgués que a los dirigentes de la antigua RDA les parecía la realización de sus sueños. Por lo demás, las notas de gastos ficticias y el fraude fiscal tienen en todas las sociedades occidentales la consideración de divertido deporte popular. Y, en cuanto a los emolumentos del personal político, no permiten la menor comparación con los sueldazos de los directivos de las revistas de gran tirada, quienes consideran su propio fariseísmo como legítima fuente de ingresos.

Las acusaciones, formuladas en tono gansteril, de que los políticos se llenan los bolsillos, probablemente digan más de los acusadores que de los acusados; revelan la secreta envidia al caballero de industria que vive a costa de los demás y un desconocimiento de la realidad económica. Porque mientras se discute sobre facturas ficticias de gasolina y vacaciones a costa del Estado, todo es cuestión de estilo, y en este sentido resulta difícil decidirse a favor de una u otra de las partes enfrentadas.

Kolh no es Mobutu, y la situación que reina en el Estado federado de Baden-Württemberg dista mucho de parecerse a la italiana. Mientras al “bolsillo” de los políticos vayan a parar únicamente sumas irrisorias, se trata de un campo de investigación relativamente improductivo comparado con el *potlatch* generalizado que es el despilfarro en beneficio de los grupos de presión y de los partidos. Las aportaciones para campañas electorales, las subvenciones, las cantidades destinadas a las fundaciones políticas, los fondos especiales y los avales constituyen una destrucción de capital diez mil veces mayor que la suma de todos los planes de jubilación que puedan tener nuestros políticos.

La indignación moral de nuestros días suele ocultar, en lugar de esclarecer, los verdaderos problemas. Así por ejemplo, no se comprende por qué los políticos habrían de ser más duros de mollera que las demás personas; pero una y otra vez comprobamos que incluso unos signos unívocos, como graves derrotas electorales, no bastan para que la clase política aprenda la lección. Tras la debacle del referéndum danés sobre la adhesión a la Unión Europea, todos los cuadros políticos coincidieron: “¡Ahora más que nunca!

Cerremos los ojos y ¡adelante!” Después de los excesos policiales durante la llamada cumbre económica de Munich, la brutalidad fue proclamada virtud de Estado. Los ejemplos son numerosos y no se limitan sólo a Alemania. También la administración norteamericana cierra los ojos ante los tumultos de Los Ángeles, el gobierno monocolor del Japón ante la corrupción, y los partidos italianos ante la capitulación del Estado frente al déficit, la mafia y la criminalidad gubernamental.

Por razones estadísticas resulta improbable que un sector cualquiera de la población, en este caso la clase política, se vea aquejado por unos defectos congénitos que sin embargo no afecten al resto de la población. Las características genéticas obedecen a la distribución normal de Gauss. Ello explica por qué los gigantes y los liliputianos son mucho menos frecuentes que las personas de talla normal. Y lo mismo ocurre con la inteligencia.

Las explicaciones sociológicas ya resultan más explícitas. ¿De qué forma y con qué fin llega uno a la política? Si echamos una mirada a la trayectoria del personal de Bonn, París o Madrid, nos daremos cuenta de que el político profesional es, en general, una persona sin profesión. Ya durante la adolescencia pasa horas y días enteros en una organización escolar o universitaria; porque sólo aquel que descuida sus estudios, es decir, aquel que estudia lo menos posible, podrá llegar a ser portavoz, delegado, presidente. Se trata de una carrera muy dura, que consiste básicamente en desarrollar la actividad de los codos. Pero una vez superada la ardua tarea de pasar sucesivamente por la agrupación de barrio, el comité local y el consistorio municipal, ya no será necesario buscarse el sustento.

Podríamos describir este tipo de carreras desde dos perspectivas. Visto desde fuera, se trata de un empleo a tiempo completo, que exige una atención constante. Los continuos forcejeos y las enconadas luchas de trincheras no permiten ni un respiro. Las negociaciones del grupo político, los debates sobre los estatutos y las intrigas de trastienda dejan una experiencia singular. Y aquel que finalmente consigue que su nombre figure en la papeleta electoral o que logre alcanzar la vicepresidencia de alguna organización, por regla general tendrá que conformarse con un déficit de realidad que defenderá frente a cualquier ataque.

Este mecanismo de reclutamiento ha sido descrito a menudo. Y puede estudiarse no sólo acudiendo a las biografías de los políticos. También resulta instructiva la comparación con otros modelos de carrera. Si echamos una ojeada al personal que ocupa los cargos

La necesidad permanente de hacerse publicidad es la situación más embarazosa a que pueda exponerse una persona

rectores de la banca o la industria, donde en los últimos diez años se ha producido un notable cambio generacional, encontraremos personas ambiciosas y con ansias de poder. Ahora bien, para poder permanecer en estos círculos es imprescindible ser competente en la materia, tener mundología y facultad perceptiva, ser capaz de tomar decisiones y saber pensar a largo plazo. Por lo que se oye, algunas veces también se valoran criterios morales.

El hecho de que esta gente hable del personal político con un desprecio apenas disimulado, da que pensar. Y lo hacen no sólo porque tienen a los políticos profesionales por unos ignorantes, sino porque consideran que toda su actividad es de un vacío insoportable. Jamás se contentarían con los márgenes de actuación de los partidos. La construcción de una planta de montaje, el desarrollo de un nuevo avión, e incluso el saneamiento de una agencia de transportes de tamaño medio, comportan unos periodos de preparación que un político, cuyo horizonte temporal no supera un mandato electoral, ni siquiera puede soñar.

Si bien el reclutamiento y la trayectoria permiten comprender ciertas desviaciones de la norma estadística, estos mecanismos no lo explican todo. Al fin y al cabo cualquier profesión conlleva ciertas deformaciones, pero no por ello las consecuencias –en el caso de cerrajeros, empresarios funerarios, veterinarios– resultan tan poco tranquilizadoras. Así pues, en lugar de insultar a los políticos, es hora de que nos pongamos a hablar de su miseria. Esta miseria es de naturaleza existencial. Para expresarlo con cierto patetismo: acceder a la política es despedirse de la vida, es el beso de la muerte.

El aspecto decisivo, la miseria básica de todo político: su total aislamiento social

Lo primero que salta a la vista de estos seres marcados es el increíble aburrimiento al que se exponen. La profesión de la política es el reino de lo eternamente igual, de la despiadada repetición. Todo aquel que alguna vez haya tenido la desgracia de participar en una reunión, conocerá la sensación de paralización que invade incluso al más voluntarioso cuando en tales ocasiones se ve obligado a escuchar las prolijas exposiciones, disquisiciones, debates y consideraciones, donde jamás aparece el factor sorpresa. Y, sin embargo, la principal tarea de todo político consiste precisamente en participar en reuniones y sesiones. Todo el mundo se reúne: las cámaras parlamentarias, los grupos parlamentarios, las comisiones, las subcomisiones, los consejos asesores, los patronatos, los comités centrales, los comités ejecutivos, los parlamentos regionales, los consejos municipales, las patronales, las asociaciones profesionales,

los gremios, las mesas de negociación, las rondas de discusión, las reuniones mamut. Así pues, un político profesional invierte largos años, posiblemente incluso décadas, en asistir a reuniones. No es de extrañar que ello acarree graves consecuencias.

Segundo. Basta con echar una ojeada al despacho o a la casilla del correo de un diputado para darse cuenta de en qué invierte la mayor parte del tiempo en el que no está reunido: la lectura de una riada incesante de “documentos”, expedientes, circulares, solicitudes, instancias, dictámenes, peticiones de informes, acuerdos, directrices, boletines, dossier, resoluciones, actas, resultados de encuestas, proyectos de ley... Sólo quien esté familiarizado con la prosa jurídico-administrativa en la que están redactados tales escritos, sabe lo que esto significa. Debido a la enorme cantidad de este material, queda excluido cualquier otro tipo de lectura, excepción hecha del *Bild-Zeitung*, periódico muy recomendable debido a su exiguo texto. El político es tan sensato que *manda* leer para estar por lo menos informado acerca de lo que se escribe sobre él. A este fin cuenta con un asesor personal, y en caso necesario puede acudir a la secretaria, a la oficina de prensa o bien a los servicios de recortes de prensa.

Ahora bien, este sistema de lectura indirecta agrava el problema en lugar de solucionarlo. El jefe sólo se entera de aquellas cosas que el filtro que había contratado para su protección crea conveniente pasarle. Cuanto más altos sean los cargos a los que vaya accediendo, más fieles y eficaces serán los colaboradores de que se rodeará, que le protegerán de forma cada vez más eficiente contra informaciones desagradables. Es natural que el político castigue al mensajero que le trae malas noticias, y resulta igualmente natural que éste le oculte todo lo que a aquél no le gusta oír.

Tercero. Al político no sólo se le escapa mucho, sino que tampoco le está permitido exteriorizarse. Únicamente en círculos íntimos puede manifestar lo que piensa, si es que piensa. Pero por otro lado tampoco puede guardar silencio; se le exige que hable continuamente. Bajo tales circunstancias, la trivialidad de sus palabras no constituye un defecto, sino un mérito. Ahora bien, ni siquiera el político más curtido es capaz de producir toda esa riada de palabras vacuas. Para ello existen especialistas que procuran que éstas nunca dejen de fluir. Al orador le incumbe la tarea de revisar minuciosamente el manuscrito y tachar todo aquello que podría ser interpretado como una idea personal. Si alguna vez se salta algún pasaje, el castigo es implacable. Los gritos de la opinión pública le impiden

*Cuanto más
asciende, más
radicalmente se
le cortan los
contactos
sociales*

conciliar el sueño y los compañeros de su propio partido lo tratan como a un leproso.

La disciplina necesaria para evitar este riesgo es digna de mejor causa. No es de extrañar que bajo estas circunstancias el orador permanente pierda con el tiempo la capacidad de expresarse de forma normal. La pérdida de la palabra es una de las muchas mermas que conlleva la profesión.

Cuarto. La necesidad permanente de hacerse publicidad es posiblemente la situación más embarazosa a que pueda exponerse una persona. Entre las obligaciones profesionales de un político está tocarse la cabeza con los objetos más ridículos, desde un sombrero tirolés hasta las plumas de un indio, acariciar bebés y elefantes, abrir barriles de cerveza, asistir a las reuniones carnavalescas más aburridas y participar en los más repelentes programas de televisión. No hay ninguna mujer de la limpieza y ningún mecánico que se deje rebajar hasta tal punto. La abnegación estoica, la sonrisa forzada y la simpatía afectada son tareas totalmente normales durante cualquier campaña electoral.

El político profesional no puede evitar que le humillen continuamente, incluso en sus propias filas. Cabe preguntarse qué le capacita para aguantar los rituales del orden de picoteo, el omnipresente hedor a establo, la justamente llamada disciplina de grupo parlamentario, en fin, todos estos gestos de sumisión que se le exigen.

Quinto. Otro ejercicio de penitencia impuesto al político profesional es la total pérdida de su soberanía temporal. La única percepción que se le permite en estado de vigilia es la agenda. Su calendario está minuciosamente programado y parcelado con muchos meses e incluso años de antelación. No contiene hojas en blanco. Incluso las vacaciones son mera ficción: están repletas de entrevistas, consultas, apariciones públicas. El jefe, sea pequeño o grande, está sujeto a la obligación de moverse sin cesar; al igual que una peonza, tiene que girar hasta caerse. No hay sindicato que ante una exigencia tal no respondiera de inmediato con una huelga general. Desde esta perspectiva, cualquier mendigo goza de una libertad incomparablemente mayor que la del político.

Podríamos proseguir con la relación de adversidades que aquejan a los políticos, aunque con resultados menos rentables, pues no llegaríamos a captar el aspecto decisivo, la miseria básica de todo político: su total aislamiento social. Una situación paradójica, ya que se trata de personas que no tienen permitido permanecer solas.

Independientemente de su capacidad intelectual, por lo general, es el último en comprender qué está ocurriendo en la sociedad

La sola ausencia de este derecho elemental debería conducir, por lo general, a graves trastornos psíquicos. Ahora bien, si se obliga a una persona a permanecer continuamente en medio de un gentío y, al mismo tiempo, evitar cualquier comunicación normal, se produce un dilema desesperanzador.

Existe una forma científica de tortura denominada privación sensorial. El individuo es introducido en un tanque de agua insonorizado, inodoro y sin luz, con lo cual se le priva de cualquier tipo de percepción. Incluso el sentido del tacto queda anulado debido al medio líquido. Una analogía social de este experimento sería el singular encapsulamiento al que se ve sometido el político. Cuanto más asciende, más radicalmente se le cortan los contactos sociales. Apenas se entera de lo que sucede en la calle. No tiene la menor idea de lo que vale un kilo de azúcar o una caña de cerveza, cómo se renueva un pasaporte o cómo se adquiere un billete de metro.

Las visitas oficiales constituyen un ejemplo paradigmático de este proceso forzoso de deshabitación. Tras un largo viaje en su avión particular y acompañado siempre del mismo séquito, el jefe cruza a velocidad vertiginosa las calles desiertas de una ciudad en la que sólo consigue ver el despliegue policial mientras se dirige al palacio presidencial, copia de todos los demás palacios presidenciales. Desde este momento se ve obligado a escuchar discursos, pronunciar discursos, almorzar, pronunciar discursos, escuchar discursos, cenar, escuchar discursos, pronunciar discursos. A la mañana siguiente le llevan de regreso al aeropuerto, sin haber podido obtener la más mínima impresión del lugar que acaba de visitar.

Este ejemplo relativamente inocente apenas nos proporciona una leve idea del aislamiento al que se ve sometido el político. Es precisamente este aislamiento el que provoca en él la típica pérdida de realidad y que explica por qué, independientemente de su capacidad intelectual, por lo general es el último en comprender qué está ocurriendo en la sociedad.

Incluso los privilegios de los que goza, y que le suelen reprochar incansablemente, contribuyen a aumentar su infortunio. En este contexto resulta significativo el ominoso símbolo de estatus que representa el escolta. Resulta fácil adivinar que este personaje no protege al político del mundo que le rodea, sino que protege al mundo frente al político e impide que éste logre traspasar la tenue membrana que le separa de su entorno. El agente de seguridad es, al mismo tiempo, el carcelero.

Claro que esta situación no constituye un fenómeno único. Existen

Sólo emplean un lenguaje notablemente deformado

diversas analogías. En cierto sentido la vida de un político guarda semejanza con la de su enemigo más peligroso, pues también los terroristas, condicionados por la conspiración, se marginan de la realidad social y sólo emplean un lenguaje notablemente deformado. (La pérdida del lenguaje y del sentido de la realidad no son sino dos caras de una misma moneda).

Ahora bien, esta comparación nos lleva incluso a un medio menos exótico: el de las “instituciones totales”, como por ejemplo asilos, hospitales, clínicas psiquiátricas y cárceles. En tales instituciones reencontramos numerosos rasgos que también determinan la vida del político profesional: los internos no pueden disponer de su propio tiempo; la rutina diaria está preestablecida; no existe esfera privada; los internos siempre están aislados, pero no solos; las vejaciones están a la orden del día; la pérdida de realidad condicionada por el sistema aumenta con el tiempo de internamiento.

Tras largos años de internamiento aparecen daños que clínicamente se denominan “hospitalismo”, y cuyos principales síntomas son las dificultades para relacionarse, apatía, tendencia al llanto, inquietud y agresividad, trastornos mentales, problemas de lenguaje e impotencia, ocasionalmente incluso alucinaciones. Casi siempre los pacientes sufren estados de ansiedad, aunque por lo general el miedo nace de unas causas muy reales.

*En el entramado
de intereses
partidistas,
grupos de
presión,
asociaciones y
burocracias
apenas puede
moverse unos
milímetros*

Al igual que el interno, también el político se ve sometido a una vigilancia permanente, aunque en este caso la clásica mirilla de la penitenciaría es sustituida por el objetivo de las cámaras, y el carcelero por los periodistas y fiscales. Y puesto que incluso el político más íntegro está obligado a moverse entre las tinieblas de la financiación de los partidos, entre la maleza de las subvenciones y de las exportaciones de armas, así como entre el lodazal de los servicios de inteligencia, constantemente se ve dominado por el miedo.

El principal síntoma del “hospitalismo”, sin embargo, es la depresión. Suele desarrollarse de forma larvada, puesto que a los políticos profesionales no se les permite manifestarla públicamente. Sólo pueden dar rienda suelta al reverso de la moneda, es decir, a las manías: el afán de notoriedad manifestado en actos públicos que, posiblemente por su insulsez, son anunciados como actos cumbre; la megalomanía casi infantil de todo el personal político; la ingenua vanidad; la tendencia al derroche. Anda equivocado quien piense que todo ello crea placer o incluso felicidad. Nada más lejos de la realidad. Este torpe circo ambulante que montan los políticos no es

más que un fenómeno de compensación. La literatura médica describe el paso de la fase depresiva a la fase maníaca como sigue:

“El estado de ánimo morbosos tiñe todas las vivencias y el comportamiento de los pacientes hasta el extremo de que creen encontrarse en su mejor estado mental. La falta de discernimiento y una capacidad exagerada para la actividad llevan a un estado explosivo, en el que el paciente se muestra inquieto, impertinente y pesado, y ante cualquier resistencia reacciona con una irritabilidad agresiva. Tanto los pensamientos como los actos son cada vez más amplios y pueden desarrollar una clara megalomanía. Así por ejemplo, los pacientes pueden estar convencidos de su propio poder y genialidad, y temporalmente incluso llegan a adoptar una identidad fastuosa. Los maníacos se ocupan de forma impulsiva e inagotable de diversos actos, sin percatarse de los peligros que éstos implican. En casos extremos desarrollan una actividad tan febril que pierden toda relación entre estado de ánimo y comportamiento”.

Un paciente que intentara superar su desesperado estado anímico por esta vía, ¿cómo habría de comprender que los demás le echen incluso en cara su actuación desesperada?

Aquel que recomiende colocarse –aunque sólo fuera a modo de prueba– en el lugar de un político profesional, se enfrentará a dos objeciones tan lógicas que merece la pena desarrollarlas.

Por un lado se me objetará que el disfrute del poder recompensa al político profesional por todas las contrariedades que sufre. Hay quien afirma que el poder constituye un afrodisíaco irresistible para el político. Puede que ello fuera cierto en sentido histórico. Los monarcas absolutos y los gobernantes totalitarios siempre se han acercado a ese sueño de lactante consistente en que el mundo ya no opone resistencia alguna a la voluntad individual. Sin embargo, resulta difícilmente comprensible que un político instalado en Washington, Bonn o Tokio pudiera sucumbir a una ambición de poder de este tipo. Porque cada uno de estos jefes semeja un Gulliver atado con miles de hilos. En el entramado de intereses partidistas, grupos de presión, asociaciones y burocracias apenas puede moverse unos milímetros. Quien ostente el orgulloso título de jefe supremo de las fuerzas armadas se expone a una denuncia ante el Tribunal Constitucional por haber enviado a algún sitio un avión espía sin armas. El debate sobre si un paciente debe contribuir al gasto sanitario con el cinco o el veinte por ciento del precio de un medicamento, o si bien si se debe modificar la pensión de

La carrera política funciona como una nasa. Resulta fácil entrar, pero casi imposible salir de ella sin sufrir graves daños

viudedad, desencadena durante meses gigantescos debates en los aparatos de todos los partidos. La supresión de determinados beneficios fiscales sólo se consigue empleando tretas diabólicas y a espaldas de los afectados.

A la vista de este bloqueo a la actuación, toda persona realmente consciente de su poder emprendería la huida. Como apoderado general de un comercio al por mayor de aceros probablemente tuviera mayor poder de decisión. He aquí otra forma con la que la realidad perdida se venga de los políticos.

Como último argumento de la acusación podríamos objetar que los políticos son los únicos culpables de su situación. Al fin y al cabo han elegido voluntariamente esta profesión, que al mismo tiempo constituye la negación de una profesión.

Ahora bien, ¿no sería taimado insistir en ello? Porque esta afirmación maliciosa no tiene en cuenta que la carrera política funciona como una nasa. Resulta fácil entrar, pero casi imposible salir de ella sin sufrir graves daños. Todo aquel que se ha metido en ella tiene la errónea impresión de que no le queda más que una salida: el camino hacia arriba. En el supuesto de que logre recorrerlo, poniendo en ello su mayor empeño, un buen día comprobará que había sido víctima de una ilusión, puesto que el ascenso no le ha librado de su situación, sino que la ha empeorado. Una constatación que sin embargo sólo puede hacerse cuando ya es demasiado tarde.

Peor suerte corre posiblemente el político apartado del aparato de un partido. En el mejor de los casos terminará como parado muy bien remunerado en un décimo piso de Bruselas. O bien se le nombra, sin haber demostrado nunca el menor interés por las roturas de tuberías, inspector jefe de la compañía municipal de aguas. ¿A quién se le ocurriría contratar a una persona que no ha estudiado nada concreto? De este modo, la perspectiva de una pensión de jubilación suficiente constituye el único aliciente para quienes fracasan en el abordaje al puente de mando de la sociedad.

A buen seguro la mayoría de nosotros pensamos que sería un lujo exagerado compadecer a unos conciudadanos que, sin la menor vergüenza, se califican de políticos de primer rango. Pero al igual que cualquier otro grupo marginal, al igual que los alcohólicos, los ludópatas o los *skinheads*, son merecedores de esa compasión analítica necesaria para comprender su miseria.

Al igual que cualquier otro grupo marginal son merecedores de esa compasión analítica necesaria para comprender su miseria



CORRUPCIÓN

En este país, en este archipiélago o en esta isla, dedicar a la corrupción espacio en una revista no puede provocar ninguna sorpresa. Desgraciadamente, la corrupción constituye un fenómeno con una innegable presencia en nuestra sociedad. Descolla en el ámbito de la política y de los negocios (y en su interrelación) de manera especialmente llamativa, pero los efectos contaminantes y sus consecuencias se extienden al conjunto del tejido social.

Se abre esta Carpeta con el artículo colectivo del consejo de redacción de *Cuadernos del Sureste* sobre esta cuestión. Hemos intentando analizar el asunto con la mayor amplitud de miras posible, para contribuir tanto a aclararnos nosotros como a los lectores sobre las consecuencias de los comportamientos corruptos en nuestra sociedad.

La corrupción no es, obviamente, una característica propiamente lanzaroteña, pero en un artículo elabo-

rado para una revista de aquí, la presencia y los ejemplos de lo ocurrido en Lanzarote ocupan un espacio notable.

La Carpeta continúa con un artículo de Carlota Gutiérrez dedicado a una figura con una especial significación en este campo durante las últimas décadas en esta Isla: Felipe Fernández Camero, secretario del Ayuntamiento de Arrecife y tenaz defensor de los ayuntamientos y los propietarios de suelo que tratan de evitar que se pongan límites a la irracional extensión de la industria turística en Lanzarote. El artículo pretende arrojar luz sobre las trascendentales actividades de un personaje que en el espacio público suele permanecer en la sombra.

Encontramos después un texto sobre la relación de la ciudadanía con a corrupción. Agradecemos la colaboración de Carlos Espino, que pone de manifiesto que también es responsabilidad del conjunto de los ciudadanos evitar la extensión de la corrupción en la sociedad, negándose a aceptar y a soportar los comportamientos rechazables en el ámbito de la política.

El último artículo de esta entrega es, en realidad, el capítulo final del libro de Alejandro Nieto *Corrupción en la España democrática*, el más interesante de los que hemos manejado sobre la corrupción en este país. El texto describe bien cómo la perniciosa influencia de la corrupción contamina el sistema democrático en España.



El flujo de la corrupción

Cuadernos del Sureste

Si nos atenemos a los mensajes de los medios de comunicación, la corrupción se ha convertido en un fenómeno característico de la España democrática. Los nombres de Sintel, Tindaya, Jinámar, ICFEM y otros más sitúan a Canarias bajo la misma tela de araña. Si escuchamos a la mayoría de nuestros conciudadanos, la corrupción constituye un aspecto ineludible para entender el ámbito político lanzaroteño. Si leemos hoy las secciones económicas de los periódicos de todo el mundo, comprobaremos que la corrupción es un aspecto central en las grandes corporaciones empresariales. No obstante, el fenómeno se analiza sin demasiada profundidad, y los casos que salen a la luz pública más parecen destinados a cumplir el papel de armas arrojadizas entre los diferentes sectores políticos o empresariales en litigio. ¿Qué es la corrupción? ¿Cómo opera? ¿Cómo influye en el conjunto de la sociedad? ¿Cómo puede evitarse? No tenemos respuestas inequívocas y definitivas a estas preguntas; hemos tratado simplemente de plasmar en este artículo el resultado de nuestra discusión sobre esta materia.

Caracterización

Abuso de poder, apropiación de bienes privados o públicos, enriquecimiento ilícito, extorsión, prevaricación, favoritismo, nepotismo, persecución de ventajas indebidas, tráfico de influencias, soborno, clientelismo político, malas prácticas electorales, manejo

La corrupción constituye un aspecto ineludible para entender el ámbito político lanzaroteño

En esta Isla no se considera corrupción que la empresa de la familia de la consejera de Hacienda del Cabildo se esté enriqueciendo con los pedidos de la institución

ilegítimo de bienes o de fondos públicos o privados, utilización de información privilegiada o el ocultamiento de la información, incompatibilidades, blanqueo de dinero, recalificaciones urbanísticas irregulares, coacción y persecución, control y utilización de los medios de comunicación... Son algunas de las formas a través de las que reconocemos hoy día el fenómeno que englobamos bajo el término corrupción.

Simplificando la cuestión en exceso, podríamos decir que la corrupción consiste en obtener ventajas indebidas por parte de aquellos que ocupan una posición de poder en la sociedad. Hay que recordar que la corrupción es un intercambio entre varios actores, es decir, que existe oferta y demanda. Pero estos intercambios incluyen un elevado factor de incertidumbre sobre el resultado de la transacción, puesto que debido a su ilegalidad o alegalidad no puede exigirse siempre el cumplimiento de lo acordado. Además, para que estos cambalaches tengan lugar debe existir una discrecionalidad por parte de quien facilita la compensación que se pretende conseguir. Resulta obvio que el secretismo y la falta de transparencia en las actuaciones de quienes ejercen el poder constituyen un caldo de cultivo para los comportamientos corruptos.

Las consecuencias de la corrupción pueden apreciarse hoy en segmentos muy diversos de la sociedad, desde jefes de gobierno a presidentes de asociaciones de vecinos. Como es lógico, la extensión del fenómeno ha acabado generando sus propias redes organizadas, que en ocasiones se convierten en tramas estables que perduran más allá de determinadas operaciones concretas y que actúan sobre todo en las áreas de poder o de gestión en las que la discrecionalidad es una característica: contratación de personal en instituciones públicas como las lanzaroteñas, concesión de licencias de diferentes tipos, concursos para la adjudicación de obras o servicios públicos... En suma, son muchas las actuaciones que delatan una aplicación tan particular de la normativa que sólo pueden explicarse por la existencia de corrupción.

No son pocos los que tratan de equiparar la corrupción al incumplimiento de la legalidad. O sea, que si no existe condena judicial no hay corrupción. De la misma forma, en esta Isla no se considera corrupción que la empresa de la familia de la consejera de Hacienda del Cabildo se esté enriqueciendo con los pedidos de la institución, porque, tal como se ha hecho, no es ilegal. Sin embargo, la corrupción existe. No podemos limitar la corrupción al incumplimiento de la legalidad, puesto que sólo ciertos comporta-

mientos corruptos están tipificados como delitos en las leyes actuales. Muchas de las prácticas que todos consideramos intolerables porque no resisten el contraste con la ética más laxa que pueda imaginarse no están penalizadas por nuestro marco jurídico.

Suele suceder así con la mayoría de los casos de nepotismo, una de las conductas corruptas más habituales. En Lanzarote, colocar a parientes y amigos en la Administración pública se ha convertido en una práctica que se asume como normal. La cuestión aquí no radica en saber si se ha cumplido o no la normativa, sino en denunciar el hecho cuando constituya una actuación corrupta, por muy legal que pueda ser. Lo mismo ocurre con el muy diferente trato que reciben los ciudadanos por parte de algunas administraciones en función del lugar que ocupan en la escala del poder: unos al despacho, otros a la ventanilla. Esta diferencia puede comprobarse incluso en los momentos más críticos, cuando un ciudadano de a pie espera a ser atendido en la sala de urgencia del Hospital General mientras contempla cómo determinados políticos o sus familiares acceden por otra puerta: la del despacho del director.

Algo parecido ocurre con la corrupción cotidiana de algunos funcionarios de escaso rango, que de tan habitual llega a considerarse parte del paisaje. El silencio habitual de la mayoría de los funcionarios sobre las pequeñas y las grandes prácticas corruptas es, desde luego, uno de los factores que facilita la expansión de la corrupción. De igual manera, deben considerarse como un caldo de cultivo propicio dos cuestiones: la primera, el abuso de la burocracia o el ‘papeleo’, que incrementa las posibilidades de prácticas corruptas, porque a más ‘papeleo’ mayor necesidad de ‘atajos’; y la segunda, la debilidad del aparato de control de la gestión de la Administración.

En fin, es sabido que una de las características de la corrupción es que se alimenta a sí misma. El problema de la corrupción es que cuanta más hay, mayor probabilidad existe de que se produzca aún más. Porque termina afectando a los encargados de velar por la buena salud del sistema y acaba haciendo pensar a los no corruptos que, por el hecho de no serlo, pertenecen al género de los tontos.

Geografía e Historia

La corrupción es un fenómeno que ha existido desde que el mundo es mundo. Sin embargo, la percepción de su generalización en las dos últimas décadas parece acompañar a determinados cambios sociales acaecidos en ese período. En España, por ejemplo, se ha discutido con profusión sobre si la transformación democrática

Todas las obras públicas en este país, en este archipiélago o en esta isla se adjudican por una cantidad y terminan costando cifras increíblemente más altas

había conllevado un incremento de la corrupción existente en la dictadura. El debate no nos parece muy relevante. Más importante es establecer las consecuencias sobre el sistema de ordenamiento de la convivencia. Parece indiscutible que cuando se apela a un ordenamiento social basado en el respeto a la voluntad de la mayoría y al Estado de derecho las consecuencias de la corrupción sobre la convivencia social son de mayor calado. En cualquier caso, uno de los factores que provocan esa sensación de incremento de la corrupción es la existencia de una prensa con mayor libertad que en épocas pasadas y más dedicada a la promoción de escándalos políticos que arrojar contra el adversario político. Los medios se alimentan en este terreno, la mayoría de las ocasiones, de la información proporcionada por los partidos, que tratan de imponerse en la competencia electoral desprestigiando a otros contendientes. Para sufragar esta competencia, tras la llegada de la democracia ha surgido una nueva corrupción: la organizada por los partidos políticos, una corrupción que no sustituye a la tradicional sino que se suma a ella, incrementando la extorsión en la esfera pública.

*La recién
desdoblada
carretera de
Arrecife a Costa
Tegui se muestra
que los fondos
públicos
pueden
destinarse a
actuaciones
innecesarias*

No puede sostenerse que la corrupción constituya un componente propio del capitalismo, porque nos encontramos ante una cuestión que ha afectado a todos los sistemas de producción que en el mundo han sido. Sin embargo, sí parece plausible defender que determinados proyectos de sociedad son más proclives que otros a sufrir esa contaminación. De hecho, la sensación de que la corrupción se ha generalizado coincide con el tránsito de un capitalismo más regulado a otro que podemos denominar neoliberal. Es decir, coincide con el triunfo de la revolución conservadora encabezada por Reagan y Thatcher a principios de los años ochenta, que terminó contaminando también el territorio de la socialdemocracia.

Parece lógico pensar que un sistema en el que prima el éxito material a toda costa y en el que la sociedad es reducida a la suma de los intereses egoístas de cada ciudadano es más proclive al incremento de la corrupción (Thatcher llegaba al extremo de afirmar que la sociedad no existe, que lo que existe son los individuos). En efecto, no tenemos más que acudir a los índices de corrupción que nos ofrece Transparency International para comprobarlo. Según esta organización independiente, los diez países más 'limpios' son: Finlandia, Dinamarca, Nueva Zelanda, Islandia, Singapur, Suecia, Canadá, Holanda, Luxemburgo y Noruega, naciones caracterizadas por un capitalismo más regulado y por disfrutar de un Estado de bienestar de mayor envergadura. Así que resulta razonable creer

que la generalización de la corrupción en muchos países –que en el ámbito de la política eclosiona durante la década de los ochenta y en el campo empresarial sale a la luz en los noventa y se convierte en epidemia con el comienzo de siglo– está relacionada con la expansión del fundamentalismo liberal por la mayoría de las sociedades del planeta.

Ese triunfo del neoliberalismo ha sesgado decisivamente el proceso de globalización económica en el mundo, agravando la corrupción provocada por las grandes compañías multinacionales en su expansión por el planeta. Los gobiernos del Tercer Mundo –en muchos casos ya corruptos de por sí– han visto cómo las multinacionales campaban a sus anchas en sus países añadiendo la nueva corrupción que venía de fuera a la ya existente. En el Occidente rico hemos asistido también a corrupciones de envergadura provocadas sobre todo por los grandes contratos públicos. Desde esta perspectiva globalizadora, no podemos obviar el hecho de que no existen instituciones que puedan poner coto a esta corrupción ‘internacional’, porque las empresas que en los países ricos se pueden ver presionadas por el poder político o por la opinión pública, no tienen ninguna cortapisa real en la mayoría de las naciones menos desarrolladas, donde la aún mayor debilidad de las democracias o la existencia de dictaduras facilita las oportunidades para la utilización de prácticas corruptas en la consecución de los objetivos empresariales.

Es cierto también que los datos de Transparency International ponen fin al mito de que la corrupción es una característica propia del Sur del planeta, de los países pobres o de los menos ricos entre los opulentos. Pero, aunque en todos sitios cuecen habas, no es verdad que en todos ocurra lo mismo: la corrupción existente en España resultaría intolerable en Dinamarca.

El espacio económico

No cabe duda de que la corrupción disminuye la eficiencia del sistema económico por la vía de incrementar los costes. La eficiencia decrece también porque la corrupción incentiva el ámbito más especulativo frente al sector productivo de la economía, y desvirtúa la competencia del mercado al primar al empresario más corrupto en lugar de al más eficaz. En términos bastante generales, podría sostenerse que los países menos corruptos deberían ser los más eficientes desde el punto de vista de la economía. Y los resultados así lo indican: las naciones de mejores resultados económicos a largo del siglo pasado han sido los llamados países nórdicos, que se

En lugares como Lanzarote parece continuar existiendo la compra del voto, o directamente la adquisición del concejal

Aún estamos a la espera de que la justicia actúe en la denuncia que presentó AETUR sobre el llamado caso FORELAN

encuentran todos ellos entre los diez países del mundo con menos corrupción en la lista antes citada.

Ese encarecimiento que provoca la corrupción se manifiesta con especial gravedad en las infraestructuras y servicios públicos, puesto que los pagos monetarios acaban siempre incluidos en los presupuestos públicos, normalmente por la vía de modificaciones presupuestarias posteriores a la adjudicación de la obra o servicio. En definitiva, las comisiones las terminan pagando los contribuyentes. Quizá esta conducta permite explicar por qué todas las obras públicas en este país, en este archipiélago o en esta isla se adjudican por una cantidad y terminan siempre costando cifras increíblemente más altas. Los empresarios implicados presentan las ofertas más bajas para garantizarse la adjudicación; luego, los políticos involucrados se encargan de los reformados presupuestarios. Pero el incremento de los costos provocado por la corrupción en las inversiones públicas puede ocasionar males aún mayores: acometer obras públicas escasamente prioritarias o incluso innecesarias con el fin de alimentar las necesidades de financiación corrupta. En países como Italia o España no faltan ejemplos ilustrativos. Y en Lanzarote es suficiente transitar por la recién desdoblada y siempre despejada carretera de Arrecife a Costa Teguise para comprobar que los fondos públicos pueden destinarse a actuaciones absolutamente innecesarias. Ahora bien, el encarecimiento de los costos afecta también al sector privado. El ejemplo de la increíble financiación proporcionada a los partidos de este país por la banca privada, y consignada en tantas ocasiones como créditos incobrables, revela que la corrupción también disminuye la eficiencia de las empresas privadas.

Tras las obras públicas, si existe un sector económico proclive a la especulación y a los comportamientos corruptos es el inmobiliario, el sector dominante en la economía lanzaroteña en las últimas décadas, en el que se desenvuelve la generalizada corrupción existente entre los políticos y los empresarios que actúan en esta sociedad. Hecho que demuestra que la corrupción no es un fenómeno privativo del ámbito político y que los empresarios son parte fundacional del acto corrupto.

Claro que si el éxito a toda costa se ha convertido en un valor exaltado socialmente, es en el terreno empresarial donde alcanza sus máximas cotas. La actual ola de escándalos de corrupción empresarial, que en nuestro país han encabezado los dos grandes bancos (BBVA y BSCH) y en el centro del capitalismo mundial muchas

grandes empresas (Enron, Worldcom, AOL-TimeWarner...), pone de manifiesto también el hecho de que la corrupción puede aumentar en empresas que debido a su excesivo tamaño carecen de dueño, al estar dirigidas por gestores que tienden a poner sus propios intereses por encima de los de la empresa. Esta situación se ha visto agravada por la tendencia a situar la especulación con las cotizaciones en bolsa por delante de los resultados económicos reales de las empresas. Hasta el punto de provocar una caída de los valores bursátiles que en EE. UU. ya sobrepasa a la del *crack* del 29. Con la diferencia, eso sí, de haberse producido a lo largo de dos años. AOL-TimeWarner, la celebrada gran fusión que alumbraba el principal gigante de la comunicación en el mundo, ha perdido en estos dos años el 70% del valor de sus acciones.

Pero también en este ámbito sólo trascienden a los medios de comunicación los conflictos más espectaculares, la parte visible de un problema de mayor magnitud, porque son un cúmulo de empresas las que utilizan los mismos mecanismos y prácticas corruptas. De hecho, en el espacio de la empresa privada se consideran usuales y aceptables comportamientos caracterizados como corruptos en la esfera pública: comisiones, regalos, intercambio de favores, utilización de información privilegiada, etc. Por otra parte, la continua transferencia de cargos entre los ámbitos político y empresarial dificulta la distinción entre las responsabilidades de uno u otro sector.

El espacio político

En la España del siglo XIX encontramos el antecedente más claro de las prácticas corruptas de los políticos de la actualidad: el sistema caciquil. Los caciques comerciaban con una mercancía muy particular y entonces novedosa: el poder político electivo. La política era un negocio, y el caciquismo un modo seguro de consumarlo. Se aseguraba la vida de amigos y familiares a través de la ocupación de cargos públicos, y se aseguraba el enriquecimiento propio mediante la adjudicación de obras, servicios y suministros públicos.

Aunque en lugares como Lanzarote parece continuar existiendo la compra del voto, o directamente la adquisición del concejal, el sistema ha variado un poco en la actualidad: el candidato pertenece a un partido, quien le incluye en la lista que le permite resultar elegido, de tal manera que el militante sabe que no va a ser elegido por su valía o sus ideas, sino por el hecho de ir en esa lista electoral. El partido, en definitiva, coloca a sus hombres en el poder y allí los

Resulta difícil creer que veamos un día como se viene al piso el Apartotel Fariones o cualquier gran inversión inmobiliaria

controla con la amenaza de retirarles la confianza. Por consiguiente, los gobernantes, aunque tienen lógicamente que trabajar para la Administración, atenderán con mayor atención los intereses del partido, porque si los descuidan se quedan sin cargo. Puede decirse, por tanto, que el sistema de listas cerradas en el proceso electoral constituye un elemento más que favorece la corrupción. Aunque no pueda afirmarse que las listas abiertas garanticen prácticas honestas por sí mismas, como demuestra el caso italiano.

Las elevadas necesidades financieras de los partidos, especialmente para afrontar costosísimas campañas electorales, se han convertido en fuente de corrupción, y contribuyen al descrédito del ámbito de la política. Esas necesidades de los partidos políticos mayoritarios revelan su dependencia de las fuentes externas de financiación, que tarde o temprano pasarán su factura de contrapartida. Aunque los partidos recurren también a las fuentes públicas: cuantiosas subvenciones, explícitas unas y encubiertas otras. En este sentido, el funcionamiento escasamente democrático y participativo de los partidos y la conquista del poder como objetivo exclusivo han favorecido la generalización de prácticas corruptas. Porque ningún partido puede financiar su campaña electoral con las cuotas de sus afiliados, pero tampoco renunciará al poder por el hecho de no poder costearse una campaña 'adecuada'. Los partidos van acumulando durante cuatro años los ingresos necesarios para afrontar los gastos de la campaña, gastos que en muchos casos serán enmascarados bien con dinero 'negro' o bien mediante la emisión de facturas por conceptos que nada tendrán que ver con los reales.

En La Graciosa se detuvieron multitud de pequeñas obras mientras las destinadas al negocio de los mejor relacionados proseguían sin problemas

En consecuencia, la campaña electoral, proceso esencial de la democracia, se ha convertido en una incitación a la corrupción en esta sociedad. Sin duda, el control real de los gastos electorales y su drástica disminución parecen medidas tan obvias como imprescindibles para atenuarla. Como además la posibilidad de la corrupción política aumenta en proporción directa al tiempo en que el político permanece en el poder, parece conveniente también acometer la limitación de los mandatos en todos los ámbitos de la representación política. Las ventajas derivadas de esta medida se verán notablemente incrementadas si añadimos la imprescindible rotación de los altos funcionarios, que controlan también desde sus puestos los múltiples actos de discrecionalidad que le son permitidos a la Administración.

En España, en Canarias o en Lanzarote los grandes escándalos que nos asaltan desde los medios de comunicación son minucias frente

al conjunto que fluye en el ámbito donde la corrupción es más generalizada: el municipal. Y en esa esfera, el urbanismo y las licencias de construcción forman la madre de todas las corrupciones. Canarias en general, y Lanzarote en particular, han experimentado un crecimiento vertiginoso en las últimas tres décadas, durante las cuales las licencias de construcción y la usual corrupción que llevan aparejadas han aumentado sin cesar. Ese es el escenario idóneo para la extensión de la corrupción. Hasta el punto de que la memoria de la Fiscalía del TSJC no ha tenido empacho en señalar a los ayuntamientos canarios como los principales violadores de la normativa urbanística y los grandes ‘delincuentes medioambientales’ del Archipiélago.

La corrupción ha contribuido notablemente a lo que algunos denominan crisis de legitimidad de la democracia, pues es uno de los factores que intervienen en la desmoralización de amplios sectores de la sociedad y les lleva a volver la espalda a la política. La consecuencia más obvia de este comportamiento es que deja las manos libres a los políticos a los que se rechaza (en Lanzarote el asunto ha alcanzado tal gravedad que cerca del 50% de la población adulta no vota). Ese abandono masivo de la política por parte de los ciudadanos facilita también el éxito de iluminados y demagogos políticos de todo tipo. En el caldo de cultivo de la antipolítica cabe todo: cuando se empieza a trazar la raya que divide el Bien (nosotros) del Mal (ellos, los políticos) y a decidir con autoridad integrista quién está en este lado y quién en el otro, o quién tiene “las manos manchadas” y quién no, la democracia se vacía de contenido.

En Canarias, las encuestas (el *sociobarómetro*) indican el nivel de hastío de la sociedad respecto de la corrupción, al situar este problema como uno de los que más preocupa a la población, por encima de otros más habituales como la vivienda, la sanidad, etc. Y si en el resto de Canarias están así, qué decir de Lanzarote, la Isla que encabeza las críticas al ámbito político. No creemos que sea conveniente contribuir aún más al descrédito de la política en nuestra sociedad, pero la realidad impone el reconocimiento de que los principales responsables de ese descrédito no son voceros externos sino la conducta de la propia clase política.

El espacio social

A la par que la corrupción aparece en el *sociobarómetro* como una de las principales causas de preocupación de los canarios, las victorias electorales de políticos que han sido incluso condenados por diferentes delitos ponen en tela de juicio el presunto escándalo que

En Lanzarote puede afirmarse que la extorsión de buena parte de los medios a los políticos es un hecho cierto

*El término
'desarrollo
sostenible' está
siempre en boca
de los
principales
responsables de
la insostenibili-
dad del modelo
lanzaroteño de
desarrollo*

la corrupción parece causar a la sociedad. Más bien se tiene la sensación de que existe una cierta indiferencia social ante el fenómeno, que puede ser debida a la acumulación de escándalos, a la aceptación de la corrupción como parte consustancial y tradicional del poder o a la eterna duda personal de muchos ciudadanos: “¿qué harías tú en su lugar?”. Puede hablarse de sociedades más corruptas que otras, pero resulta intolerable que quienes se han corrompido o han permitido la extorsión desde posiciones de poder acusen al conjunto de la sociedad de haber consentido sus desmanes, o diluyan sus responsabilidades insertándolas en una sociedad donde la corrupción pudiera ser la norma. Además, debe destacarse que el miedo a significarse en una sociedad como la lanzaroteña, en la que los políticos y grandes empresarios controlan de cerca parcelas fundamentales de la vida de los ciudadanos, es un factor a tener en cuenta. No resulta fácil mantener la honestidad personal en ambientes donde impera la corrupción.

Una vía fundamental por la que la corrupción se extiende desde la Administración, ciertos partidos y algunos empresarios hacia la sociedad civil son las subvenciones. En este aspecto destaca la dependencia de los sindicatos de este país de las ayudas para los cursos de formación. En Lanzarote, aún estamos a la espera de que la justicia actúe en la denuncia que presentó AETUR sobre el llamado ‘caso Forelan’, donde los empresarios habituales se encuentran curiosamente mezclados con los dos grandes sindicatos, CC OO y UGT. Pero la dependencia o la búsqueda de esas subvenciones afectan a muchos otros colectivos de esta isla, cuyas voluntades permanecen a veces prisioneras del interés de quien puede proporcionarles los fondos que buscan o a los que ya se han acostumbrado. Bien es cierto que en ocasiones la dirección de la relación es la inversa: colectivos sociales que, especialmente en períodos pre-electorales, extorsionan a los políticos intercambiando subvenciones por apoyo social o, peor, a cambio de evitarles campañas de acoso que tendrían su reflejo mediático.

La democracia, al plantear la igualdad, provoca una extensión de los campos y las personas susceptibles de corromperse. Pero como sistema de garantías igualitarias pactadas, la corrupción contribuye a devaluar esas garantías y genera, en consecuencia, un deterioro del corazón del sistema y del entramado ético que debe sostenerlo. Por tanto, la corrupción termina por cuestionar el pacto de ciudadanía que sustenta la democracia. Pacto que debería primar o resaltar los comportamientos honestos, en lugar de, como ha sucedido

en España, andar aplaudiendo a personajes como Conde, De la Rosa o el general Galindo.

El espacio judicial

A lo ya dicho en el primer apartado de este artículo, conviene añadir que la justicia, la encargada de evitar parte importante de la corrupción, no está exenta de ella. Y el comportamiento más característico de esa realidad lo contemplamos cuando somos testigos de castigos ejemplares a personas pertenecientes a los escalones menos pudientes de la sociedad, mientras que se ejerce una notable permisividad o se dictan suaves condenas ante las conductas de quienes pertenecen a la minoría más poderosa. Puede que un día la Justicia llegue a derribar alguna construcción en un paraje protegido de esta Isla, pero resulta mucho más difícil de creer que veamos cómo se viene al piso el Apartotel Los Fariones o cualquier gran inversión inmobiliaria. La independencia del poder judicial es relativa, y la separación entre los diferentes poderes notablemente menor de lo que suele decirse. Por otra parte, la lentitud y la complicación con que trabaja la justicia de este país supone otro elemento disuasorio más para que pocos se aventuren a interponer denuncias que pueden resultar tan caras como imprevisibles sus consecuencias.

La justicia no es la única institución que persigue los incumplimientos de las normas. Las Administraciones también cumplen ese papel; y las más cercanas a nosotros, las locales, lo ejercen con mayor discrecionalidad. En el terreno urbanístico encontramos ejemplos flagrantes. En La Graciosa han asistido últimamente a una situación típica: multitud de pequeñas obras de particulares detenidas –por la incapacidad del Ayuntamiento para aprobar una normativa urbanística para la Isla– mientras las obras destinadas al negocio de los mejor relacionados proseguían sin problemas. Los mecanismos de control de los que se dotan las Administraciones, la intervención, parecen no obligar a nadie. Puede ilustrarse esta opinión con la inutilidad de la Audiencia de Cuentas de Canarias en casi todos los conflictos que aborda, entre los que ha brillado últimamente el ‘caso Jinámar’. Igualmente sospechoso resulta que Administraciones como el Gobierno de Canarias o el Cabildo de Lanzarote sean incapaces, por ejemplo, de contar las camas turísticas de esta isla o de controlar la situación de ilegalidad de miles de alojamientos turísticos que no se mueven de donde están. Podemos remitirnos nuevamente a la Memoria de la Fiscalía del TSJC, que en su edición del pasado año ponía de relieve la gravedad de los

Nuestra opinión es que en la Isla la corrupción es generalizada

fallos detectados en todos los mecanismos de control ante posibles actividades corruptas en las corporaciones locales canarias.

Las continuas llamadas a la regeneración desde la esfera política parecen haberse convertido en inútil música de fondo de nuestro panorama político. Lo cierto es que la proliferación de la corrupción en nuestro país no ha venido acompañada de las medidas legales necesarias para combatirla. Los partidos han sido incapaces o no han querido arbitrar medidas que sirvieran realmente para perseguir la corrupción.

El espacio mediático

Los medios de comunicación cumplen un papel fundamental en este campo. Su actuación fue decisiva en el relevo de la presidencia del gobierno español en 1996. La multitud de casos fraudulentos difundidos en los años anteriores mostraron a la sociedad un ejecutivo desbordado por la corrupción. El PSOE acabó perdiendo las elecciones generales después de catorce años de gobierno. ¿Existe siempre una correspondencia entre el nivel de corrupción en una sociedad y el nivel de corrupción publicada? El hecho de que la corrupción fuera, efectivamente, muy importante no ha eliminado la duda de si asistimos además a una guerra en la que los medios fueron utilizados como ariete contra el gobierno socialista.

Así que los medios son básicos por su papel en la denuncia pública de los comportamientos corruptos; pero también por ser parte fundamental de muchas de las corruptelas. Extraña observar cómo los medios se vanaglorian de su papel de guardianes y nos obsequian con lecciones de moralidad desde unas plataformas que forman parte, en muchas ocasiones, de la misma trama corrupta y de los intereses más partidistas. La inversión de miles de millones de euros por parte de Telefónica en la formación y el mantenimiento de un deficitario grupo de medios al servicio del PP puede ilustrar ese partidismo. En Lanzarote hemos llegado incluso a que un partido, el PIL, adquiera un medio de comunicación y sitúe al frente de la empresa a uno de sus más conocidos dirigentes.

En esta Isla, como en tantos lugares, la independencia de los medios es una mera fantasía. En Lanzarote existe una inaudita profusión de medios de comunicación locales (alrededor de treinta) que no podrían sobrevivir sin la arbitraria financiación de las instituciones públicas. Así podemos entender esas continuas campañas de publicidad en las que se nos aconseja volar en Binter en lugar de en no se sabe qué otra compañía, o en las que Inalsa se dedica a invertir parte de sus ingresos para que no contratemos el suministro

Lanzarote es conocida en el resto del Archipiélago como la tierra de la compra-venta de voluntades políticas

tro de agua con la empresa rival, o en las que el Patronato de Turismo informa a los lanzaroteños de la existencia de lugares como los Jameos del Agua o el Jardín de Cactus.

La inmersión de los medios en este panorama que bosquejamos les lleva en no pocas ocasiones a extorsionar a los políticos o a sus partidos para conseguir esa financiación extra que les permite sobrevivir. A nadie extrañan ya los cambios repentinos de línea editorial o los ataques furibundos de algunos medios en determinados momentos, seguidos, una vez se ha cobrado, de la vuelta a la normalidad o incluso al halago desmedido. En Lanzarote puede afirmarse que la extorsión de buena parte de los medios a los políticos es un hecho cierto, hasta el punto de que los ayuntamientos pueden ser obligados a sufragar 'convenios' que garanticen la publicación de 'noticias' sobre su actuación municipal. Esta retroalimentación de la financiación irregular entre el ámbito político y el de los medios, con sus chantajes mutuos incluidos, alcanza su cenit en las campañas electorales, momento en el que la necesidad de influir en los medios se revela absolutamente crucial para los políticos, que tienen que dirigirse a la sociedad a través de ellos.

Por lo que respecta a su función de denuncia de la corrupción, conviene recordar un comportamiento habitual: los medios suelen conocer cada historia completa, pero se limitan normalmente a publicar una pequeña parte. De hecho, en muchas ocasiones podemos encontrar a responsables, y no tan responsables, de medios alardeando en privado de esos conocimientos. Es decir, que aceptan la existencia de dos clases de ciudadanos: los que están en condiciones de saber la verdad y aquellos, todavía inmaduros, a los que hay que proteger del escándalo.

En Lanzarote, nos hemos acostumbrado a que no exista periodismo de investigación, a que las informaciones sobre estos asuntos tengan una discontinuidad que depende de las relaciones entre medios, partidos y subvenciones, y a que se extienda la confusión entre la información y la publicidad. En un momento en el que la información en el mundo va concentrándose en torno a unos pocos grupos mediáticos, alimentados por unas pocas agencias de noticias 'internacionales', resulta cada vez más complicado discernir las responsabilidades, las causas y los efectos en el conglomerado transversal, opaco e indiferenciado que componen empresarios, políticos y medios de comunicación.

Pese a todo lo dicho, y a pesar de todas las limitaciones, los medios de comunicación cumplen, efectivamente, un papel importante en

Buena parte de los alcaldes de la Isla se fueron enriqueciendo de manera notoria, generalizándose el nexo entre territorio, poder municipal y corrupción

la lucha contra la corrupción. Nos gustaría, desde luego, habitar en una sociedad donde la independencia de los medios de comunicación fuera una realidad, pero no podemos olvidar que en este asunto, como en tantos, cualquier tiempo pasado fue peor.

El espacio de la palabra

Analizamos en este apartado un espacio cuya inclusión en el campo de la corrupción puede generar no pocas dudas, pero que ha ocupado buena parte de las conversaciones del consejo de redacción de esta revista al afrontar este artículo: la palabra y las ideas. Creemos que la expansión de las ideas neoliberales, la creencia de que la competencia en busca del éxito es el único motor de la sociedad, el mercado la única forma de organizarla y el *homo oeconomicus*, sólo pendiente del consumo y la defensa de sus propios intereses, el único ciudadano posible, han contribuido a generar un proceso que podríamos denominar de corrupción de las conciencias. Esta depreciación de los valores ciudadanos comunes sobre los que se asienta la ética se ha convertido en el caldo de cultivo en el que se expande la corrupción.

*Algunos
califican a los
ayuntamientos
de Yaiza y Tías
como
ayuntamientos
de ASOLAN*

El instrumento que ha posibilitado esta situación ha sido lo que podemos llamar la corrupción de la palabra. Las ideas, y las palabras que utilizamos para expresarlas, se han devaluado en el espacio público hasta vaciarse de contenido y, en ocasiones, transformarse casi en lo contrario de lo que en principio significaban. En Lanzarote, el ejemplo más significativo lo encontramos en el término ‘desarrollo sostenible’ o ‘sostenibilidad’, que está siempre en boca de los principales responsables de la insostenibilidad del modelo lanzaroteño de desarrollo. Los políticos y empresarios que continúan promoviendo el insostenible crecimiento turístico adjetivan cada uno de sus proyectos con la etiqueta del desarrollo sostenible, que en esta isla ha perdido ya casi todo su contenido.

La palabra en el espacio público, en el terreno de la política, ha perdido gran parte de su significado. Parece ser ya la mayoría de la ciudadanía la que considera que la palabra de los políticos carece de valor, que las promesas electorales se las lleva siempre el viento, que los programas de los partidos políticos no tienen ninguna influencia en la forma en la que los elegidos gestionarán la cosa pública. En suma, que cuando un político emite un mensaje hay que concederle el mismo valor que a la propaganda. Y esta falta de honestidad ha generado ese descrédito del ámbito de la política que caracteriza a nuestras sociedades. Pedro Lezcano lo expresaba así el día de su investidura como Doctor Honoris Causa por la

Universidad de Las Palmas el año anterior a su fallecimiento: “Creo que la política en general desprende suficiente pestilencia para ahuyentar a las personas sensiblemente honestas. El encumbramiento de los mediocres hasta el escaño de los dirigentes produce un inevitable hastío ciudadano”.

El espacio lanzaroteño

¿Qué ocurre en Lanzarote? Nuestra opinión es que en la Isla la corrupción es generalizada. Parece difícil que hubiera sido de otra forma. Pertenecemos a un país que en el aspecto que nos ocupa se encuentra entre los primeros de Europa. Y una sociedad económicamente depauperada, que recibe el aluvión de recursos económicos que ha concentrado Lanzarote en las últimas tres décadas, en un sector tan proclive a la corrupción como la especulación inmobiliaria que produce una industria turística con un crecimiento desmesurado, no podía escapar a esa expansión de la corrupción. Así, esa generalización de la corrupción coincide con el comienzo del crecimiento urbanístico provocado por el sector turístico, con la especulación del suelo y las recalificaciones urbanísticas como base.

Si hacemos un breve repaso a la reciente historia insular en este terreno, podríamos afirmar que el primer personaje emblemático de la corrupción surge en 1971, cuando Honorio García Bravo accede a la alcaldía de Yaiza, desde donde consolidará una de las grandes fortunas del Archipiélago. Esta aparición coincide con la compra de casi toda Playa Blanca por el grupo TRON, con prácticas que podrían calificarse de corruptas: expedientes de dominio y connivencia con el ayuntamiento y los registradores de la propiedad.

Entre finales de esa década y principios de los 80, tras el abandono del Sáhara y, en parte, del banco pesquero, llegan a la Isla ingentes cantidades de dinero público destinado a la reconversión de la flota pesquera. Buena parte de esas ayudas fueron desviadas fraudulentamente hacia la incipiente industria turística o a la mera especulación del suelo.

También a comienzos de los 80 asistimos a otro momento fundacional de la corrupción insular: la empresa Explosivos Río Tinto comienza la operación Costa Teguisse. Para apoyar esta operación se paraliza el desarrollo turístico del Sur, un territorio con mejores condiciones turísticas, hasta que se venden las parcelas de esta urbanización. Este negocio siempre contó con el apoyo del PSOE a nivel estatal, comprometido con la refluotación de ERT y su privatización. Sin embargo, y curiosamente, supone el alumbramiento político de Dimas Martín en el Ayuntamiento de Teguisse, a cuya

El poder de ASOLAN no puede separarse del poder del grupo Rosa, posiblemente el mejor representante de la corrupción entre el empresariado local

alcaldía accede en 1983 con el voto de un concejal socialista, partido que había obtenido la mayoría absoluta. Este asunto, conocido como ‘el pacto de las tuneras’ y característico de una corrupción tercermundista, aparece como el primero de una serie de escándalos políticos que se convertirán en el pan nuestro de cada día en la Isla durante las dos décadas siguientes. Hasta el punto de que Lanzarote es conocida en el resto del Archipiélago como la tierra de la compra-venta de voluntades políticas, el transfuguismo y la inestabilidad política permanente.

*Una vez
adquirido el
Gran Hotel, los
propietarios
dedicaron el
terreno anejo a
un centro
comercial, por
lo que
necesitaban
otro para el
aparcamiento*

Múltiples aristas encierra la historia del Complejo Agro Industrial de Tegui, la gran operación de Dimas Martín para dar el salto desde los límites municipales a la política insular, que le deparó una aplastante mayoría absoluta en 1991. Financiado por el Ayuntamiento, el centro apenas si ha desarrollado sus capacidades. Sociedades interpuestas en paraísos fiscales, ceremonias de entrega de ingentes cantidades de dinero en subvenciones a saber con qué fondos, intentos de lanzar producciones que culminaron en estrepitosos fracasos (quesería, productos tirados al vertedero, aquél pésimo vino denominado Marqués de Herrera, sacos de cebolla sin salida a los mercados...) y agujeros inexplicables hasta para la Audiencia de Cuentas han desembocado, momentáneamente, en la recompra de las infraestructuras embargadas por parte del Ayuntamiento. La acusación del Fiscal en este caso, que se ha convertido en judicial, revela el manejo fraudulento y descarado de muchos cientos de millones de pesetas.

Vinculado al saco sin fondo del Complejo surgió otro escándalo: el caso Flumelan, una empresa cuyo cometido era ejecutar el desarrollo urbanístico del plan parcial de Costa Tegui. Para ello recibió de Costa Tegui parcelas por valor de unos 800 millones de pesetas con las que financiar la urbanización, desde viales a tratamiento de aguas. Las parcelas fueron vendidas; pero nunca se ha sabido donde fueron a parar todos los ingresos obtenidos, puesto que Flumelan no ha llegado a cumplir la totalidad de sus compromisos con el plan parcial.

También los 80 son los años en los que se produce la llegada significativa de policías nacionales (algunos de los cuales disfrutarían de un notorio enriquecimiento) y surge una delincuencia de mayor porte, entre la que destaca el tráfico de drogas.

En esos años, Dimas Martín no es el único estandarte de las corrupciones urbanísticas. En Tías surge el caso del Apartotel Fariones, y en 1988 la dirección nacional del PSOE se ve implicada en la ope-

ración de apropiación de la playa de Los Pocillos, cuya empresa promotora, de capital vasco, estaba gestionada por Santiago Hernández, quien a su vez era teniente de alcalde del ayuntamiento de Tías. Entre los personajes más característicos de la corrupción lanzaroteña de esta época, junto a Honorio García Bravo y Dimas Martín, destacan Luis Perdomo y Juan Ramírez, alcaldes de Tinajo y Haría. Como puede comprobarse, buena parte de los alcaldes de la Isla se fueron enriqueciendo de manera notoria, generalizándose el nexo entre territorio, poder municipal y corrupción.

Esta ligazón, o supeditación del poder político al empresarial, se ha mantenido hasta la actualidad. Hasta el punto de que algunos califican a los ayuntamientos de Yaiza y Tías como ayuntamientos de ASOLAN, en lugar de adscribirse a sus respectivos partidos. De hecho, no son pocos quienes opinan que en la defenestración del anterior alcalde de Tías, Florencio Suárez, y en su sustitución por José Juan Cruz, tuvo mayor responsabilidad la organización empresarial que el propio partido. El poder de ASOLAN no puede separarse del poder del grupo empresarial Rosa, en la opinión de muchos, posiblemente el mejor representante entre el empresariado local de la corrupción durante la década pasada. Situación que se mantiene hoy, cuando a su consolidación en Tías ha añadido una posición hegemónica en Playa Blanca, se ha expandido por el resto del territorio insular y empieza a extenderse a otras islas de la mano de significados miembros de CC con destacado protagonismo en el campo de la especulación inmobiliaria. Su influencia en el ámbito político, paralela a la de la organización empresarial, se ha podido comprobar con lo ocurrido con la construcción del puerto deportivo de Berrugo. Y en una relación tan especial con el partido que dirige el Gobierno de Canarias y el ayuntamiento de Yaiza, CC, que ha llevado a que los responsables del grupo Rosa y de ASOLAN aparezcan entre los principales compradores de la nave en la que se aloja la organización de este partido en Lanzarote. No obstante, la larga mano de Juan Francisco Rosa y Rafael Lasso no acaba con los nacionalistas: los socialistas de Tías aprobaron el campo de golf que promueven en el municipio convocando un pleno a media noche, aprovechando la información privilegiada que les advertía que la ‘moratoria’ del Gobierno de Canarias estaría unas horas suspendida por los tribunales.

El Ayuntamiento de Tías ha aparecido ligado también a otro grupo empresarial, no directamente turístico, cada vez más activo: el grupo Marcial-Hormiconsa. El intercambio de locales por cantida-

La gran corrupción deja de ser una exclusiva del sector turístico, aunque se mantiene la primacía de la especulación inmobiliaria

Durante décadas la mayoría de los ayuntamientos prefirieron que sus municipios carecieran de planeamiento urbanístico

des económicas que no parecen alcanzar el valor de aquéllos en el centro comercial Biosfera Plaza de Puerto del Carmen fue denunciado por el PP; la contestación del Ayuntamiento dejó sin aclarar el asunto. Este grupo empresarial aparece implicado también en una significativa operación reciente, con la que es difícil no relacionar la financiación de algunos partidos. Nos referimos al hecho de que una vez adquirido el edificio del Gran Hotel de Arrecife, los propietarios se propusieron dedicar el terreno anejo a la construcción de un centro comercial, por lo que necesitaban otro para el aparcamiento que requería la nueva instalación hotelera. Casualmente, la operación se pudo consolidar cuando el Ayuntamiento de Arrecife les adjudicó la concesión del parque Islas Canarias –un espacio público en la emblemática marina de Arrecife– para que pudieran construir su aparcamiento. Como podemos observar, ante la saturación turística, o la posibilidad de que la detención del crecimiento de las camas sea un día una realidad, el capital insular va trasladando parte de sus inversiones y la gran corrupción deja de ser una exclusiva del sector turístico, aunque se mantiene la primacía de la especulación inmobiliaria.

Existe un hecho que delata el funcionamiento corrupto de buena parte de los ayuntamientos de la Isla: durante décadas la mayoría prefirió que sus municipios carecieran de planeamiento urbanístico. Así, los permisos de construcción se han concedido siempre en precario, siendo una potestad casi discrecional de los alcaldes, y los vecinos se han visto obligados a suplicar por ellos y a vivir siempre con la incertidumbre de que sus viviendas estuvieran amenazadas por el fantasma de la ilegalidad. Esta situación de ilegalidad se mantiene hoy en día en actuaciones como la de la Barriada Tenorio de Arrecife o la Zona Industrial de Playa Honda. En estos casos, los sometidos a esa tensión son empresarios, es decir, personas con recursos que van a encontrarse en precario y en deuda con los partidos. Claro que la corrupción también funciona en el otro sentido: incluir en la normativa, y por tanto legalizar, terrenos y actuaciones manifiestamente ilegales. La calificación como suelo urbano de Pedro Barba, en La Graciosa, supone uno de los ejemplos más exóticos y recientes de esta práctica habitual. Lo mismo ocurre cuando los ayuntamientos se hacen cargo de la urbanización de zonas donde no se podía construir o sufragar la urbanización de planes parciales que tendrían que haber corrido a cargo de sus promotores. Sobre el buen trato a los familiares de los políticos, los ejemplos podrían ser multitud. Puede hablarse de una red clientelar que se

asienta en la contratación de personal en las instituciones públicas de la Isla. Basta como ejemplo la contratación por la Administración de las hijas del político más votado de la Isla, Dimas Martín, o la frecuencia con la que la redacción de los proyectos del Plan de Infraestructuras Turísticas caen en las manos de familiares del consejero de turismo, Juan Carlos Becerra. Entre esas estructuras clientelares destaca la del Cabildo de Lanzarote, pese a la inocencia con respecto a las corruptelas de la que hace gala el político que durante más tiempo ha presidido la institución en las dos últimas décadas: Enrique Pérez Parrilla. Pero las ventajas se extienden más allá de la familia, a los amigos; en algunas ocasiones las actuaciones recuerdan a la picaresca tradicional, cuando se perdonaban a algunos las tasas por utilización de la grúa en el potrero municipal, práctica habitual mantenida por la concejal Nuria Cabrera, quien en su defensa casi llegó a afirmar que, en realidad, los ciudadanos que pagaban era porque les daba la gana, pues las tasas que les cobraban no estaban claramente avaladas por la ley.

A pesar de los enriquecimientos personales, que han sido notables, parece que la financiación de los partidos políticos en la Isla ha cumplido un papel importante en todo este entramado corrupto entre políticos y empresarios. Somos bastantes los que al pensar en el ranking de la corrupción insular vemos al PIL y a CC en los lugares de cabeza, aunque no puede obviarse la presencia casi permanente del PSOE en las principales instituciones insulares. De los cuatro grandes partidos que actúan en Lanzarote, el PP es el único que no aparece en los episodios insulares de la corrupción. Pese a que este partido ha sido el centro de numerosas corruptelas en muchos otros lugares, el alejamiento del poder insular o la mayor honestidad de sus dirigentes locales le ha mantenido al margen de los hechos aquí relatados. No sabemos si esa marginalidad en el acceso a las jugosas y corruptas fuentes de financiación para las campañas electorales explicaría la sorprendentemente escasa presencia insular de un partido que gobierna el país y que ha estado gobernando la comunidad.

Aunque parece obvio que la principal responsabilidad por las tramas de la corrupción se encuentra en el ámbito de la política y de la empresa, no puede esconderse que una parte significativa de la ciudadanía lanzaroteña asume y participa de esta manera de funcionar. Así lo demuestra que desde hace más de una década el político más votado en esta isla sea Dimas Martín, quien ha sido repetidamente condenado por la Justicia. También conviene resaltar que

Las únicas instituciones insulares a las que los ciudadanos han concedido mayorías absolutas han sido a los ayuntamientos donde se ha producido el crecimiento turístico

durante lustros las únicas instituciones insulares a las que los ciudadanos han concedido mayorías absolutas han sido a los ayuntamientos donde se ha producido el crecimiento turístico. Ahora bien, esta ausencia de tensión moral en sectores significativos de una sociedad afectada por un rápido proceso de transformación social no permite responsabilizar al conjunto de la sociedad lanzaroteña por la generalización de la corrupción. Insistimos: los máximos responsables habitan en los partidos políticos y en muchas de las empresas más significativas de la Isla.

Conclusión

Combatir la corrupción debe convertirse en un imperativo para el conjunto de la sociedad, pues su generalización diluye esa sociedad. Incluso la sociedad capitalista no podría funcionar si la corrupción se extendiese sin fin, pues resulta imprescindible que haya sectores que se nieguen a participar en la búsqueda del beneficio privado por encima de cualquier otra cosa. Para que el capitalismo sea viable requiere de jueces que no vendan sus sentencias al mejor postor, médicos que pongan el cuidado de sus enfermos por encima de sus ingresos, funcionarios que realicen su trabajo por la satisfacción del deber cumplido, personas que no piensen exclusivamente en sus intereses privados y obtengan satisfacción en el servicio a la comunidad... En resumen, gentes que encuentren sentido y realización personal fuera de las relaciones que impone el mercado. Porque son estas gentes las que cumplen el papel fundamental de dotar de cohesión social a cualquier sociedad. Por lo tanto, combatir la corrupción a todos los niveles y rechazar tanto las grandes como las pequeñas corruptelas es tarea que nos compete a todos.

Cierto que para obtener mejores resultados en esa labor, la sociedad debe transformar algunas de las reglas del juego en la Administración pública: es preciso reestructurar la relación entre la Administración y los administrados, eliminando la combinación de monopolio en la toma de decisiones, discrecionalidad, secretismo y ausencia de rendición de cuentas que caracteriza a la actual estructura administrativa. El fortalecimiento de la inspección se ha convertido en una necesidad urgente; se trataría de fomentar un cuerpo independiente de interventores que, sin entorpecer la toma de decisiones, hagan más probable que cualquier irregularidad en las decisiones públicas pueda ser descubierta y añadan al proceso una dosis de transparencia. Debe incrementarse la competencia real entre los proveedores de la Administración, respetando las bases de contratación y haciéndolas tan públicas como secretas las ofertas.

En el ranking de la corrupción insular vemos al PIL y a CC en los primeros lugares, aunque no puede obviarse la presencia casi permanente del PSOE en las principales instituciones insulares

Tenemos que evitar, siempre que sea posible, que la decisión última la tome alguien de forma aislada. El trabajo en grupo, sometido a revisión jerárquica y con auditores externos para los niveles más altos, resulta mejor que el experto aislado o el político que decide sin que nadie le controle. Parece necesario acometer tanto la limitación temporal del mandato de los políticos como la rotación de los altos funcionarios que dificulte la consolidación de tramas estables de corrupción. Debería ser posible exigir responsabilidades personales por determinados despilfarros de fondos públicos...

La transformación de los partidos políticos se revela una herramienta fundamental. Quizá el primer punto sería terminar con uno de los secretos mejor guardados de esta sociedad: las cuentas reales de los partidos. Los gastos de las campañas electorales tendrían que ser drásticamente limitados para impedir que los partidos necesiten buscar fuera los fondos precisos para correr con esos gastos desmesurados. Difícilmente podrá funcionar de forma transparente una comunidad cuando los partidos políticos se caracterizan por la ausencia de democracia interna y transparencia. La reforma democrática de estas organizaciones parece una necesidad fundamental. Debería establecerse una manera de penalizar el incumplimiento de los programas electorales en sus aspectos más importantes, implantar listas abiertas, buscar la forma de que exista la posibilidad de revocar a un político...

En el campo empresarial tendrían que penalizarse las conductas que se consideran inaceptables en el ámbito público. Y sobre todo comenzar a asumir la dificultad de considerar democrático un sistema en el que los ciudadanos pasan la mitad del día sometidos a una dictadura, que no es otro el modo en que funcionan las empresas. La democratización del área laboral se configura como una obligación democrática, y además facilitaría el control de los gastos de las empresas por parte de los trabajadores y dificultaría la compra de voluntades en las instituciones o en los partidos. Sin duda contribuiría también a limitar la corrupción en las empresas un incremento de la inspección fiscal –lo contrario de lo que está haciendo el gobierno del PP– que reduzca a su mínima expresión los caudales de dinero *negro*, las cajas opacas de las que sale el dinero para los pagos de acciones corruptas.

No se nos esconde que las propuestas contra la corrupción, siendo en muchos casos obvias, tienen una plasmación práctica difícil, porque la corrupción beneficia clara y principalmente a las élites económicas y políticas, que son quienes más beneficio extraen de

Desde hace más de una década el político más votado en esta isla, Dimas Martín, ha sido repetidamente condenado por la justicia

Con realizar el tránsito que nos lleva de Lanzarote a Dinamarca la transformación de esta sociedad resultaría tan sorprendente que hoy nos parece utópica

unas prácticas que comienzan con la información privilegiada. En consecuencia, resulta necesario abordar transformaciones institucionales en la democracia representativa que faciliten una mayor participación de otros sectores de la ciudadanía, para que contrarresten la continua imposición de los intereses de los más privilegiados como intereses del conjunto de la sociedad. Si se extiende, por ejemplo, el número de ciudadanos que conocen los secretos de los presupuestos públicos, y cómo y en qué se invierten, las prácticas corruptas se dificultan. Por lo tanto, debe promoverse la extensión del presupuesto participativo que surgió en Porto Alegre, en el que el destino de una parte de las inversiones de un ayuntamiento de más de un millón de personas es decidido en asambleas ciudadanas. No hace falta ninguna transformación social espectacular para avanzar en esa dirección, como ya lo hacen algunas ciudades españolas (Albacete, Córdoba, Cabezas de San Juan, Rubí...). Por supuesto, las medidas para reforzar los aspectos participativos y deliberativos de la democracia, en lugar de quedarse en la mera delegación del poder de decisión en unos representantes elegidos cada cuatro años, son múltiples y de calado, y constituirían tema de otro artículo. Pero debemos tenerlas presentes: se trata de que la democracia sea cosa de muchos y no sólo de unos pocos políticos profesionales y de los empresarios que pueden pagarles.

Somos conscientes de que el panorama dibujado no resulta muy esperanzador, de que normalmente tratar de combatir la corrupción parece trabajo y tiempo perdido, es decir, imposible. Sin embargo, es posible. Por supuesto, debe afrontarse desde perspectivas realistas. Y no lo sería partir de una hipotética comunidad angelical en la que la corrupción hubiera desaparecido por completo. Las flaquezas humanas forman parte de nuestra naturaleza; pero también el anhelo de cooperar con nuestros semejantes y de afrontar los retos y conflictos que se nos plantean. El problema no es la existencia de casos aislados de corrupción, inevitables en cualquier sociedad humana; la cuestión es acabar con la normalización de esa corrupción. No se requiere asaltar ningún palacio de invierno, ni poner patas abajo todo el entramado social. De hecho, en nuestro entorno existen sociedades donde la corrupción es tan inferior a la nuestra que en algunos casos nos sorprenderíamos incluso de que le llamen corrupción. Con tan sólo realizar el tránsito que nos lleva de Lanzarote a Dinamarca la transformación de esta sociedad resultaría tan sorprendente que hoy nos parece utópica.



El secretario: el quinto poder

Carlota Gutiérrez

A lo largo de 2002 y por méritos propios acumulados a lo largo de muchos lustros de ejercicio, el abogado y, a la vez, secretario del Ayuntamiento de Arrecife, ha adquirido el rango de personaje cuando menos controvertido. Considerado en ciertos círculos y desde hace años como alcalde *in pectore* de Arrecife, ha ganado fama como hombre influyente y experto litigante contra las Administraciones Públicas en defensa de los particulares que contratan sus servicios para pleitear contra las instituciones. Su ámbito es lo que se llama el Derecho Administrativo, parcela que ejerce tanto en el Ayuntamiento como en su actividad profesional privada.

Debe precisarse en primer término que un secretario es, por definición, el funcionario que ocupa la cúspide de la organización administrativa en un ayuntamiento, dejando de lado los cargos electos. Su tarea consiste en custodiar los documentos, enterarse y resolver los asuntos en trámite conforme a derecho, tomar actas y expedir certificaciones, y, por último, informar al alcalde y a la Corporación del marco legal en el que se desenvuelve la toma de decisiones políticas. Etimológicamente, es la persona a la que se hace depositaria de un secreto. En el Ayuntamiento de Arrecife, este empleado público cobra una peseta menos que la alcaldesa, lo cual ofrece una idea de la trascendencia e importancia de su función. Unos doce millones de pesetas anuales, aproximadamente.

Sus tesis como abogado privado suelen coincidir, casualmente, con las de los promotores privados de suelo

Es uno de los obstáculos para los procesos de racionalización territorial y urbanística que se vienen acometiendo en Lanzarote

Un actor político

Poseyendo el don de la ubicuidad, sus tesis como abogado privado suelen coincidir, casualmente, con las de los promotores privados de suelo. Sacarlo de la oscuridad significa, hoy en Lanzarote, un acto de responsabilidad con la finalidad de poner en liza a un actor decisivo en el devenir de la Isla y que hasta ahora ha eludido las reglas del juego político cuando, en realidad, buena parte de su que-hacer tiene una evidente dimensión política. Más complicado resulta sostener si sus tesis como secretario coinciden, o no, con las de los promotores privados que operan en la ciudad de Arrecife, donde ejerce como primer funcionario municipal. No obstante, hay varios conflictos en curso que llaman a estar alerta, como el Parque Islas Canarias, el Islote del Francés o la iniciativa de la multinacional holandesa Ahold-Pío Coronado de construir un centro comercial en Valterra, asunto éste último que se encuentra en los tribunales de justicia y donde actúa el secretario como letrado del Ayuntamiento de Arrecife. Su tesis central era, por aquel entonces, que como los promotores contaban con Licencia Comercial Específica para una gran superficie comercial, el Ayuntamiento estaba obligado a otorgarle la licencia municipal de apertura y de obras. Y luego va algún ignorante, o no tanto, detentador de cargo público, se lo cree y lo repite a los cuatro vientos. Para echarse a temblar.

Bajo el titular de *Las mil y una caras del secretario*, el semanario *Isla Informativa* sacó a la luz una situación que era objeto de comentarios (abril de 2002, número 258), pero que antes apenas había sido tratada en los medios de comunicación, con la excepción de alguna que otra larga entrevista publicada por el semanario *Lancelot* y un artículo publicado en la *Voz de Lanzarote*, en 1995, de Manuel García Déniz, titulado *Yo quiero ser un Felipe Fernández Camero*, en donde aludía a la cifra de 50 millones de pesetas que, al parecer, cobró al Ayuntamiento de Tías en concepto de minuta por la defensa jurídica del Consistorio en el pleito del Aparthotel Los Fariones Playa. Tras estos antecedentes, el secretario del Ayuntamiento de Arrecife copaba la portada de un medio informativo, a la vista de la trascendencia de sus actuaciones en el devenir de la Isla en los últimos veinte años. Una auténtica conmoción para un intocable. Para muchos, se trata de un político en la sombra a quien es muy difícil encasillar en el ejercicio de sus actividades, pero de quien se puede afirmar sin lugar a equívoco que es uno de los obstáculos con que tropiezan los más importantes procesos de racionalización territorial y urbanística que se vienen acometiendo en Lanzarote. Para otros, no es más que la expresión de

un poder personal que se desenvuelve con eficacia en los recovecos de la opacidad, siempre actuando al servicio de, o junto a, los más ricos y poderosos. Pero, ¿quién es este hombre?

En lugar de responder a la pregunta quién es, que estaría sujeta a juicios de valor, resulta mucho más gráfico y estimulante describir lo que hace: narrando lo que hace se modela, sola, la respuesta al primer interrogante.

Supuestas incompatibilidades

El secretario es secretario del Ayuntamiento de Arrecife desde hace veintidós años. Estaba sujeto a un régimen de incompatibilidades en virtud de su alto cargo funcional que le impedía, por Ley, ejercer actividades que requiriesen su presencia ante los tribunales de justicia en horario de trabajo, de 08:00 a 15:00 horas, por razones ajenas a sus competencias municipales. Es decir, por razones derivadas de su actividad profesional privada. A pesar de ello, se le conocen en el pasado comparencias ante los tribunales en esa franja horaria por razones profesionales privadas, a juicio de una Asociación de Vecinos de la ciudad. Esta circunstancia motivó que esta asociación denunciara las supuestas incompatibilidades del secretario, revelándose que sus actividades estaban siendo investigadas por el Ministerio de Administraciones Públicas, según publicaba recientemente *Isla Informativa*. Después de que el pleno de la Corporación adoptara el acuerdo, por unanimidad y tras ser declarado el asunto de urgencia, de compatibilizar su cargo público con su presencia ante los tribunales de justicia, el 9 de agosto de 2002, la Asociación citada recurrió el acuerdo. De la información citada se deduce que no es hasta el pasado verano cuando el secretario queda exento de las incompatibilidades descritas, autorizándosele a desempeñar su alto cargo con el ejercicio privado de la abogacía... ¡con efectos retroactivos al 7 de diciembre de 1988! Esto dio lugar a que la misma Asociación se dirigiese a la Dirección Insular de la Administración General del Estado para que se interesara acerca del verdadero alcance legal de los efectos retroactivos del acuerdo municipal, hecho que se puso en conocimiento, asimismo, del Colegio Insular de Abogados.

Un ejemplo. Hace unos años, un particular solicitó al Ayuntamiento de Arrecife licencia de obras para construir un edificio en el ámbito de influencia del Bien de Interés Cultural de la Iglesia de San Ginés. La respuesta fue positiva. Recuérdese que el secretario del Ayuntamiento es el funcionario encargado de velar por el adecuado trámite legal de las licencias urbanísticas, lo que corrobora con su

El pasado verano se le autorizó a compatibilizar su alto cargo con el ejercicio privado de la abogacía... ¡con efectos retroactivos al 7 de diciembre de 1988!

firma. Pues bien, cuando aquel buen señor comenzó sus obras aparece el Cabildo, institución competente en materia de Patrimonio, pidiendo la paralización cautelar de las obras, ya que el promotor carecía del informe preceptivo y vinculante de la Unidad de Patrimonio de la primera Corporación insular. Es decir, el Ayuntamiento de Arrecife y su secretario *olvidaron* pedir el informe a Patrimonio que, en esencia, permitía la edificación, pero con una planta menos de las que preveía el proyecto original.

Lejos de acatar la resolución, el promotor acude a los tribunales de justicia, contratando los servicios de un abogado que, en horas de mañana, ejercía como secretario del Ayuntamiento. La misma persona que teóricamente veló en el Ayuntamiento por el adecuado trámite del expediente actuó contra el Cabildo en el término municipal donde ejerce como secretario del Ayuntamiento. Como abogado particular en horario de tarde, debió requerir documentación al Ayuntamiento que, en su trabajo público y en horario de mañana, él mismo custodiaba en calidad de secretario municipal. Al final, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias dio la razón al Cabildo y el edificio se construyó con una planta menos, confirmando la ilegalidad del proceder del Ayuntamiento al conceder la licencia. ¿Dónde están los límites? ¿No es acaso este episodio un ejemplo de supuesta incompatibilidad?

Contra el PIO

Dice la Ley que el régimen de incompatibilidad se aplica a los funcionarios para impedirles ejercer aquellas actividades profesionales o privadas que puedan comprometer su imparcialidad o independencia, impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o perjudicar los intereses generales. Es bueno saberlo.

Ha sido el abogado de muchos de los recursos interpuestos por particulares contra el PIO de 1991

Sobre Arrecife sobrevuela otro enigma. Islote del Francés. Después de que el alcalde José María Espino, allá por el año 1989, impulsara una revisión del Plan General de Ordenación Urbana, considerando el Islote del Francés como zona verde, la propiedad planteó y ganó el pleito al Ayuntamiento sobre la calificación de la parcela, que resultó urbana, pero limitada a uso industrial. ¿Por qué no se ha ejecutado la sentencia? ¿Por qué no se ha procedido a la expropiación de un suelo financieramente accesible para las arcas municipales a precio de parcela industrial? Recuérdese que nuestro hombre formó parte de aquel imponente viaje a Miami pagado por la propiedad del Islote del Francés, al que se apuntaron políticos, empresarios y periodistas.

En desempeño de su actividad profesional privada, ha sido el abo-

gado de muchos de los recursos interpuestos por particulares contra el Plan Insular de Ordenación (PIO) de 1991. Su alegato básico residía en que el PIO no podría intervenir limitando el crecimiento turístico, porque era inconstitucional. Lo cierto es que el PIO ha resistido todos esos embates jurídicos. Cuando se negoció plan parcial a plan parcial cómo quedaría su situación, en casi todas las reuniones con los privados aparecía nuestro hombre como el asesor legal de los promotores. Se acababa la reunión con unos y salían los privados del despacho, y nuestro abogado con ellos. “*¡Que pase el siguiente!*”. Entraban nuevos promotores con su abogado, de nuevo el mismo, que repetía reunión. Y así sucesivamente.

También en su dimensión privada, es el abogado de al menos cuatro recursos privados interpuestos contra la Revisión del PIO de 2000 (los perdió los cuatro ante el Cabildo), asesora a algunos ayuntamientos en estos temas contrarios a la racionalización territorial y urbanística, como Tegui y Yaiza, Corporaciones claramente desleales y contrarias a estos procesos. También asesora legalmente a los ayuntamientos de San Bartolomé, Tías y Tinajo. Por otro lado, el ex consejero del Cabildo Miguel Ángel Remedios le reconoce como el abogado que representó al Ayuntamiento de Tegui, en 1999, por las causas abiertas contra el Complejo Agro Industrial de Tegui. Salvo en Haría y en el Cabildo, en todo lo demás tiene que ver. Y en el Cabildo hasta el año 97, pues era práctica habitual hasta esas fechas que se contratasen sus servicios para defender al Cabildo en procesos contencioso-administrativos. Hasta esos años, la defensa jurídica del PIO por parte del Cabildo padeció unos bloqueos indescriptibles. Quizá no tenga nada que ver, mas, lo cierto, es que tiene este hombre la *virtud* de alinearse con los grandes poderes económicos que se enfrentan al interés general, expresado en términos de una mayoría de la población que se pronuncia por contener drásticamente el crecimiento turístico, por ejemplo.

Con Tegui y Yaiza

En la Revisión del PIO es el abogado de muchos promotores privados que creen vulnerados sus derechos. Y los defiende. Más tarde, el Ayuntamiento de Yaiza le pide que sea su abogado. Y lo defiende. Si defiende a los promotores, con una línea argumental, y defiende al Ayuntamiento, con la misma línea argumental, ¿no están los promotores doblemente defendidos? ¿No actúa el Ayuntamiento como parapeto de esos promotores? Por lo tanto, ¿no coinciden exactamente en estos temas los intereses municipales y

Es el abogado de al menos cuatro recursos privados interpuestos contra la revisión del PIO de 2000

los particulares? Sí, el Ayuntamiento y los propietarios de parcelas turísticas venían a ser lo mismo.

Otro caso. El incumplimiento por parte de los Ayuntamientos de Teguiise y Yaiza de su obligación legal de comunicar al Cabildo las licencias urbanísticas con fines turísticos que han concedido. Esta circunstancia dio lugar a que el Cabildo interpusiese sendos pleitos contra ambos ayuntamientos, actuando como abogado defensor de los demandados nuestro hombre. Alega, para justificar que los dos ayuntamientos no cumplan con la Ley, que es inconstitucional la obligatoriedad de comunicar las licencias concedidas, porque vulnera la autonomía municipal, con lo que permite, al menos al alcalde de Yaiza, erigirse en intérprete de la Constitución sin que el Tribunal Constitucional se haya pronunciado al respecto ni se haya interpuesto un recurso ante el alto tribunal para dirimir las diferencias. Se afirma que es inconstitucional y listo. Afortunadamente, un auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha venido a dar la razón al Cabildo en primera instancia, aunque aún no ha entrado a valorar la cuestión de fondo.

Salvo en Haría y en el Cabildo, en todo lo demás tiene que ver. Y en el Cabildo hasta el año 97

A pesar de los trabajos descritos, todavía le ha sobrado tiempo al abogado privado para ejercer como apoderado de varias empresas turísticas: Las Cucharas SA, Lanzasuiza, SA, Playa Quemada SA, Tamargada SA y Hotel Fariones Playa SA, algunas de las cuales están domiciliadas en su residencia particular, en Playa del Cable. Asimismo, aparece como administrador solidario de la empresa Adelfas, 24 SL, que es la dirección de su vivienda, una sociedad cuyo objeto primero es la actividad inmobiliaria de tipo turístico. Es decir, estamos a la vez ante un promotor inmobiliario privado con fines turísticos, ante un gestor de negocios privados que, en virtud de su condición de asesor legal de los ayuntamientos turísticos de la Isla, tiene al menos la posibilidad teórica de influir en esas Corporaciones Locales en la marcha tanto de sus asuntos privados como de aquellos que representa legalmente.

El promotor privado

De estas actividades privadas podrían resaltarse dos. El Apartotel Los Fariones Playa, inmerso aún en un problema judicial que todavía colea y que, a juicio del abogado de la Asociación Ecologista El Guincho, podría culminar en la demolición del establecimiento turístico situado en la costa de Tías. Pues bien, además de ser el apoderado de la empresa que explota el apartotel, actuó como abogado defensor de la misma en el pleito judicial que se desató a mediados de la década de los ochenta cuando era, al mismo

tiempo, el asesor legal del Ayuntamiento de Tías. Arte y parte.

Otro caso. Las Cucharas S.A. Estamos ante una recalificación de terrenos rústicos que posibilitara la construcción de alojamientos turísticos, asunto que, una vez descubierto, dio lugar a que el Fiscal solicitara diez años para Dimas Martín, entonces alcalde de Teguiuse, y un ciudadano suizo por una supuesta recalificación a cambio de dinero, acto tipificado como un delito de cohecho. Pues bien, el asesor legal del Ayuntamiento es nuestro hombre, a la vez apoderado de la empresa del ciudadano suizo. Un caso éste que aún colea. Arte y parte, otra vez.

Siento que me tratan de intimidar profesionalmente, tituló el semanario *Lancelot* una entrevista realizada al secretario del Ayuntamiento de Arrecife poco antes (nº 989, de 5 de julio). En la extensa entrevista, subtitulada *El abogado del diablo*, el secretario afirmaba: “...*está claro que hay gente concertada y algunos con fines menos confesables que otros. En ese concierto hay quien insinúa, quien señala y quien dispara con la pluma*”. En la misma entrevista se reconocía que defendía a los promotores del Puerto Deportivo Marina Rubicón o que defendió a la propiedad del Apartotel Los Fariones, y también a los opositores de la instalación del Radar de Aproximación en Montaña Blanca, dejando entrever, quizás, que aceptó prestar sus servicios a los vecinos de Montaña Blanca o a los ecologistas, contrarios a la instalación, pero obviando que, en su calidad de asesor legal del Ayuntamiento de San Bartolomé, puso sus conocimientos al servicio de la autoridad política que se los requirió.

Al citar que es el abogado defensor de esta última causa, se desprende que trata de introducir en su discurso que, como letrado, ni escoge a sus clientes (sino que sus clientes lo eligen a él), ni quizá puede permitirse el lujo de escoger a sus clientes o rechazar trabajos profesionales y, la vez, que en el ejercicio privado de la abogacía no se limita sólo a situarse junto a quienes pleitean contra las normas de ordenación territorial y urbanística de rango supra municipal, sino que está dispuesto a defender posturas asociadas al interés general si se lo piden. Causas ecologistas, incluso. Sin embargo, este último episodio sobre el Radar de Aproximación de Montaña Blanca, probablemente anecdótico en su dilatada experiencia laboral, no invalida que lo habitual, y por lo que es sobradamente conocido y reconocido profesionalmente en su actividad privada, está íntimamente relacionado con la defensa de las tesis que promueven el crecimiento turístico, llámense ayuntamientos

En el caso del Apartotel Los Fariones era apoderado de la empresa, su abogado defensor y asesor del Ayuntamiento de Tías

turísticos o promotores de suelo que se niegan a aceptar que el Cabildo o el Gobierno de Canarias tienen competencias legales para contener y limitar el crecimiento, por muy legítimos que sean sus argumentos.

Después de tantos años manteniendo una estrecha relación profesional con los grandes poderes económicos y con el poder político en sus más variadas formas, lo lógico es que lleguen a establecerse incluso algunas relaciones personales entre ellos, al coincidir una mirada sobre cómo debe ser Lanzarote, hasta dónde debe llegar el ámbito competencial del Gobierno insular y a partir de qué lugar no deben ceder los ayuntamientos al reclamar la autonomía municipal. El mercado, entonces, dictaría sus leyes con valor supremo e indiscutido.

*Resulta sano
para el debate
que este
hombre
comience a ser
nombrado:
Felipe
Fernández
Camero*

Probablemente las antipatías que genera debido a su proceder en relación con el debate sobre el modelo de desarrollo insular tienen que ver con la casualidad de que aparezca con frecuencia vinculado a la defensa de intereses privados relacionados con la promoción del suelo y con el afán de algunos propietarios de suelo por convertir en cemento las potencialidades de Lanzarote. Afirmo que se limita a defender a sus clientes, con las herramientas de la Ley en la mano, pero no deja de ser sintomático que, tras un alegato de aparente neutralidad, florezca con harta frecuencia su alineamiento con ciertas causas, posiblemente debido a su reaccionaria posición ideológica; fruto de una elección personal. De ahí que resulte sano para el debate que acontece en Lanzarote desde hace años que este hombre comience a ser nombrado. No prejuzgado o juzgado, simplemente nombrado como un actor más del devenir de esta isla, aunque clara y voluntariamente alineado con la involución: Felipe Fernández Camero.



Ciudadanía y corrupción

Carlos Espino Angulo

Introducción

La corrupción pareciera ser acompañante inevitable y eterno de la política o, al menos, de los políticos. Se diría, incluso, que cada vez se extiende más o, al menos, se detectan más casos. La mediatización de la política ha llevado a que la corrupción sea, además, elemento clave en el debate electoral, pues se presta a proporcionar titulares llamativos, apropiados para los cortos espacios con que tiraniza la dinámica de los medios informativos.

No cabe la menor duda de que el fenómeno de la corrupción se presenta con tantas caras, que resulta difícil seleccionar el aspecto desde el que abordarlo. Así, se podría hablar de cómo este paso al primer plano mediático de la corrupción política no actúa de manera neutral sobre todos los actores, presentando diferente incidencia en función de las posiciones ideológicas y de las exigencias éticas de su electorado potencial.

Se podría hablar de cómo se generaliza de forma constante, tanto por la falta de rigor de los medios, como deliberadamente, puesto que los siniestros personajes que la practican tienen el máximo interés en que se les confunda, en un intento de mimetismo inverso digno de un mayor estudio.

Se podría hablar de la tendencia a ganar rapidez de actuación basándose en la creación y utilización de sociedades, que en algunos casos cabría definir más como instrumentales que como públicas o de la eliminación de controles en aras de la eficacia, que han

La sumisión a la arbitrariedad de los poderes públicos es incompatible con la condición de ciudadano

*La utilización
intensiva de
autorizaciones
verbales de
construcción
colocan al
ciudadano en
una intolerable
situación de
dependencia*

devenido ancho cauce para el desvío de fondos públicos bien hacia el enriquecimiento ilícito, bien hacia la financiación de los partidos.

Se podría hablar de campañas electorales cuyo costo estimado no soporta comparación alguna con los recursos declarados de los partidos que las desarrollan, o sedes, u otros recursos, puestos a disposición de partidos de manera cuando menos no correcta.

Se podría hablar de fortunas casi repentinas, exhibidas en algunos casos incluso de forma obscena y *ostentórea*, y vaya el uso del peculiar adjetivo en recuerdo de uno de los más palmarios ejemplos de dicho tipo de conductas, situado hoy en una pendiente que le aleja cada vez más del ejercicio efectivo del poder.

Se podría hablar, por supuesto, de políticos honrados, ignorantes de las tramas de sus hombres de confianza, confianza que suele surgir a lo largo de los años, por lo que sería obligado relacionar este fenómeno con las dilatadas permanencias en el poder que, legislatura tras legislatura, favorecen también la aparición de redes clientelares.

Se podría, en fin, enfocar la mirada sobre la corrupción desde diferentes puntos de vista y con diferentes objetivos, habiendo elegido en este caso reflexionar sobre las relaciones que se establecen entre corrupción y ciudadanía. Esta elección no es fortuita, pues se corresponde con el convencimiento de que prácticas, a menudo consideradas como banales en contraposición a los grandes escándalos, provocan efectos desastrosos en los sistemas de valores de las sociedades en que se desarrollan, poniendo incluso en tela de juicio la validez moral de los procesos electorales.

A modo de aviso previo, habrá que dejar muy claro que no es objetivo de estas líneas el realizar un exhaustivo análisis de los medios utilizados en actividades consideradas como corruptas, entre otras razones porque un conocimiento directo de los mismos y la disposición de pruebas fehacientes obligaría a acudir a las instancias judiciales. Se trata, únicamente, de utilizar aquellos elementos percibidos como ciertos de una manera generalizada por la población, como punto de partida para reflexionar sobre las relaciones establecidas por los ciudadanos con el fenómeno de la corrupción.

Esta intención limita la descripción de situaciones y mecanismos a aquellos en los que la corrupción se orienta a la compra, cultivo y conservación del voto, por lo cual no se entrará en el enriquecimiento ilícito o la búsqueda de financiación de campañas, asuntos indudablemente de mayor calado en cuanto a las cifras manejadas,

pero ciertamente de menores efectos al lado de las aparentemente menos importantes corruptelas, toda vez que éstas provocan una mayor devastación en los sistemas de valores sociales.

Gracia vs. derecho

Uno de los aspectos fundamentales que permiten establecer la calidad de una democracia es la medida en la cual las gracias de carácter discrecional han sido sustituidas por derechos reglados y objetivos, pues la sumisión a la arbitrariedad de los poderes públicos es incompatible con la condición de ciudadano, siendo más propia de la consideración de súbdito.

Se podría considerar que figuras como las pensiones no contributivas no sólo representan un instrumento solidario y de justicia social, sino que adquieren su verdadera importancia por reemplazar a una beneficencia de carácter discrecional, heredera de la visión “social” del franquismo. La situación inversa, en la cual el ciudadano percibe como gracia aquello a lo que es acreedor, provoca una degradación de la estructura democrática, que se quiebra en la medida en que los “favores” sustituyen a los derechos.

Por ello, resulta inaceptable el que en la mayor parte de los municipios canarios la ausencia de planeamiento, o la falta de adecuación del mismo, haya provocado la utilización intensiva de autorizaciones verbales de construcción que, al margen de las nefastas consecuencias de carácter urbanístico y territorial, colocan al ciudadano en una intolerable situación de dependencia con respecto a la arbitrariedad del político de turno. La intensa presión del crecimiento poblacional no previsto puede explicar este tipo de comportamientos en un momento puntual pero, si resulta injustificable su prolongación en el tiempo por razones de eficacia, legalidad y responsabilidad, más intolerable resulta la utilización sistemática de este tipo de autorizaciones con connotaciones caciquiles.

No es anecdótico, sino que más bien revela una cierta normalidad, el comprobar cómo los propios técnicos y funcionarios, tras facilitar información adversa para los fines perseguidos en cualquier gestión ante la Administración, hacen la observación de que es posible la solución política, entendiendo como tal la posibilidad de que el cargo público interfiera en el proceso reglado para forzarlo hacia una conclusión favorable a los intereses del solicitante, eso sí, tras pasar por el ritual previo de la petición de cita, la exposición del tema y la promesa comprensiva y paternalista de mirar el tema como propio.

De igual manera, tanto el procedimiento de acceso a puestos de tra-

El procedimiento de acceso a puestos de trabajo en las diferentes administraciones se percibe como discrecional y arbitrario

bajo en las diferentes Administraciones, como el de asignación de funciones al personal de las mismas, se perciben por parte de la ciudadanía como sometidos a una discrecionalidad que se convierte, incluso, en arbitrariedad evidente. La sospecha de nepotismo, clientelismo y pago de favores políticos, es consustancial a la política de personal en instituciones que han visto multiplicar exageradamente el porcentaje de su presupuesto dedicado a personal y, sin embargo, no disponen ni de las preceptivas relaciones de puestos de trabajo que sirvan de justificación ni de la disculpa de haber mejorado la calidad de los servicios prestados.

Podría entrarse a considerar las consecuencias de los comportamientos descritos desde diferentes puntos de vista. Sin embargo, a los efectos propuestos, importa por ahora destacar cómo derechos básicos del ciudadano, tales como lo son el de edificar o el de acceder como funcionario a una Administración pública, en lugar de reconocerse mediante un proceso reglado, se sustituyen por gracias arbitrarias.

Subvenciones vs. financiación programada

Las asociaciones de vecinos constituyeron un elemento clave en la práctica política del tardo franquismo y los primeros años de la democracia. Reconociendo que en la actualidad algunas pueden mantener un alto nivel de compromiso, no deja de ser cierto que, de forma casi generalizada, su actividad ha quedado reducida a la organización de las fiestas patronales.

La capacidad de decidir que organizaciones sociales reciben subvenciones provoca una dependencia malsana de éstas con respecto al poder

Por el precio de algunas cajas de refrescos y cervezas, al que se le suma el coste de los voladores y del alquiler del equipo de sonido, se obtiene una asociación de vecinos débil, dócil y sumisa con el poder. En época preelectoral, sin embargo, el coste del silencio cómplice y el precio de los aplausos por encargo se elevan, pudiendo incluir el arreglo de la cancha de bolas o el viaje de hermanamiento a caribeños destinos. No queda más que asombrarse por lo barato que ha resultado destrozar un elemento clave de participación ciudadana.

Clave en la transición política resultaron también los sindicatos. Se podría reflexionar hoy sobre su acusada institucionalización y en qué medida su moderación, en una época de máxima inestabilidad y deterioro del mercado laboral, se corresponde con un sentido de la responsabilidad o, por el contrario, con la dependencia de los fondos públicos para su funcionamiento. Se debería, también, considerar hasta qué punto el acceso a la gestión de los fondos destinados a la formación, no ha podido influir en una situación de paz

social más relacionada con la necesidad de financiar gastos corrientes, que con un panorama idílico en el mercado laboral.

La capacidad de decidir qué organizaciones sociales reciben subvenciones, y la cuantía y periodicidad de las mismas, provoca una dependencia malsana de éstas con respecto al poder, el cual es capaz de aprovechar la debilidad financiera de las mismas para crear un insostenible sometimiento que rebaja la calidad democrática. Sin embargo, una mirada atenta al fenómeno del asociacionismo, centrada en aquellas organizaciones susceptibles de prestar diferentes servicios y colaborar con las instituciones, revela las enormes oportunidades de innovar en la gestión de numerosos servicios públicos, área en la que cada vez surgirán más necesidades a cubrir. De manera que no pretende ser exhaustiva, se pueden citar a modo de ejemplo las ya mencionadas AA VV, los sindicatos, los grupos ambientalistas, y diferentes ONGs que hacen de la prestación de servicios su razón de ser.

Estas organizaciones sociales deben considerarse como actores fundamentales en un proceso de cogestión que permita avanzar en el mantenimiento y la consolidación del estado de bienestar, sin complicar ni burocratizar la prestación de servicios, ganando en capacitación, agilidad y proximidad y, por supuesto, sin tener que recurrir a la privatización con la excusa de mejorar y abaratar la gestión.

Considerado desde este punto de vista, se revela como impropio el que estas organizaciones estén sujetas, en cuanto a su estructura financiera, al criterio cambiante de la administración. Toda vez que se reconoce la importancia de los servicios que prestan, han de ser dotadas de los medios oportunos para el desarrollo de su actividad, de manera reglada y convenida.

Ha de concluirse que la utilización sistemática del mecanismo de la subvención debe ser sustituido por otro más correcto, que consistiría en formalizar convenios que permitan dotar de estabilidad financiera a aquellas organizaciones que dependen de las instituciones con capacidad presupuestaria, en evitación de que la financiación de las organizaciones sociales devenga instrumento de chantaje institucional.

“Efectividad” vs. normas

Si se le comenta a un político en su visita a un centro socio-cultural que se necesita alguna reforma, lo lógico es que la Concejalía responsable firme la oportuna orden de trabajo y el correspondiente mandamiento de pago. El problema surge al considerar que

El uso sistemático de la contraposición entre ‘eficacia’ y seguridad jurídica conduce a un juego peligroso

*La ciudadanía
es partícipe, y
por tanto
cómplice, de
prácticas
corruptas*

“tanto trámite burocrático lleva demasiado tiempo”, al margen de que quepa o no en el presupuesto del año. Si, además, la Concejalía responsable inicialmente de intervenir la lleva un socio de gobierno, e incluso un compañero en época preelectoral, es mucho más rentable políticamente mandar efectuar la reforma o reparación en cuestión a alguna de las empresas que trabajan habitualmente con el concejal visitante, para luego camuflar el importe del arreglo en alguna de las otras obras en curso. Al final, la pintura del centro socio-cultural la paga Deportes, o los carteles de la competición de lucha los paga Servicios Sociales.

De igual manera, se podría hablar de clubes deportivos que reciben chándales sin ningún tipo de mandamiento de pago y sin firmar acuse de recibo alguno, con lo cual, al menos sus directivos, saben perfectamente que su obtención comporta alguna irregularidad de fondo. También se podría comentar que, en ocasiones, los equipajes llevan propaganda de marcas comerciales que se sabe que no ganan absolutamente nada con esa supuesta publicidad, pues ha sido forzada desde el poder político a cambio de no se sabe qué favores. Se podría continuar con viajes de AA VV, u otros colectivos, para los que se retiran los billetes en la agencia indicada por el político de turno, o con los carteles que se recogen en la imprenta sin saber a ciencia cierta quien los paga. En cualquiera de los casos, el ciudadano mínimamente avisado tiene la percepción, casi se podría decir la certeza, de que se le ha pretendido favorecer al precio de eludir las normas y los controles establecidos, los cuales, al fin y a la postre, son la única garantía del uso ajustado a derecho de los fondos públicos.

El uso sistemático de la contraposición entre “eficacia” y seguridad jurídica conduce a un juego peligroso, pues recurriendo a esa falsa oposición se pretende convencer al ciudadano de que, si quiere que sus problemas se resuelvan, ha de estar dispuesto a tolerar ciertas dosis de opacidad, cuando no de franca irregularidad, en los procedimientos.

No se puede dejar de insistir en que los ciudadanos más acostumbrados a lidiar con la Administración son perfectamente conocedores en la mayor parte de los casos de los tiempos y trámites que han de seguirse en sus relaciones con la misma, así como de los requisitos precisos para acceder a lo demandado. Sin embargo, la tendencia habitual a denostar los procedimientos administrativos, considerándolos mera burocracia, sirve de justificación para actuaciones cuando menos no recomendables, generando incluso una pre-

sión añadida sobre los cargos públicos menos proclives a incurrir en este tipo de prácticas. En ese sentido, el ciudadano llega a constituirse en motor de una cierta tendencia por parte del cargo público hacia comportamientos susceptibles de ser considerados, al menos, como desviaciones y abusos de poder.

Las consecuencias

La ciudadanía es partícipe, y por tanto cómplice, de prácticas corruptas caracterizadas, tal y como se ha expuesto anteriormente, por la sustitución del derecho por la gracia, por la utilización perversa de las subvenciones y por el nulo respeto a las formalidades y garantías propias de un Estado de derecho. No sólo acepta estos comportamientos por parte de los políticos, sino que los valora positivamente al enjuiciar la trayectoria de los mismos, pues sucesivas citas electorales permiten comprobar cómo estos comportamientos obtienen un importante rédito en número de votos, en lugar de propiciar el castigo que en buena lógica debieran merecer, al menos por parte de una ciudadanía consciente y exigente de unos mínimos principios éticos.

Con ser importante el negativo efecto de la perpetuación en el poder mediante el uso de prácticas corruptas, no lo son menos los desastrosos efectos producidos por las mismas en los comportamientos y valores de la ciudadanía, siendo preciso destacar a estos efectos dos grandes grupos, caracterizados por constituir las posturas extremas con respecto al fenómeno de la corrupción.

Primeramente, un amplio sector de la población se ve aquejado de una progresiva laxitud moral que, a la larga, le incapacita para ser juez consciente de las conductas de sus representantes. Esa laxitud es responsable de que a las pillastreñas se las considere muestra de inteligencia y capacidad para burlar al “enemigo”. Ya no importa que se malverse, pues el botín se reparte con un pueblo al que nunca nadie le había dado tanto, y vuelve a aparecer la gracia, contrapuesta al derecho. Ya no importa que se dilapide, pues nunca nadie había hecho tanto por el pueblo, y vuelve a aparecer la utilización perversa del presupuesto. Ya no importa que las auditorias reflejen un absoluto descontrol y la mayor opacidad, pues nunca nadie había solucionado los problemas tan rápido, y vuelve a primera línea la falsa oposición entre eficacia y seguridad jurídica.

Este sector, además, asume que las administraciones, los servicios públicos, mantengan dos niveles de eficacia perfectamente diferenciados: uno, el habitual, de baja calidad, y otro reservado a aquellos “que conocen”. Se degrada así la capacidad del ciudadano para exi-

Un amplio sector de la población se ve aquejado de una progresiva laxitud moral que le incapacita para ser juez de las conductas de sus representantes

gir el adecuado nivel de calidad en las prestaciones que recibe, pues si no obtiene la atención adecuada es porque no conoce a la persona oportuna. Por el contrario, otro importante bloque de población siente tal repugnancia ante este tipo de comportamientos, que rechaza en su conjunto “lo político”, convirtiéndose en cómplice, por omisión, de los altos porcentajes de voto alcanzados por los diferentes partidos y personajes que han hecho del recurso a la corrupción herramienta habitual de su modo de actuar. No se puede disociar la representatividad obtenida por esos partidos y personajes del alto nivel de abstención que lo ha posibilitado, pues una participación mayoritaria reduciría el papel de determinadas fuerzas en el panorama político local.

El comentario anterior no presupone crítica a la abstención en sí misma, pues la abstención activa, la que se corresponde con una disconformidad con respecto a los programas y candidatos, merece todos los respetos, al menos en el plano teórico, ya que no en los resultados prácticos, aunque se pudiera discutir sobre la procedencia en dicho caso de votar en blanco. No obstante, se trata en este momento de evaluar las consecuencias que la abstención provoca en el panorama político, y no cabe la menor duda de que tanto la abstención como el voto en blanco tienen un importante papel en cuanto a posibilitar las actuales correlaciones de fuerza entre los diferentes partidos que operan en el ámbito insular.

No se puede disociar la representatividad obtenida por esos partidos y personajes del alto nivel de abstención que lo ha posibilitado

La generalización como complicidad

Como ya se apuntaba en la introducción, el corrupto utiliza el mimetismo inverso para minimizar los efectos negativos que pudiera provocar el conocimiento consciente de sus actividades por parte de los ciudadanos. La técnica del mimetismo busca confundir al sujeto con su entorno, a base de modificar rasgos fundamentales de su apariencia física. El mimetismo inverso busca el mismo efecto de confusión, pero con un mecanismo mucho más osado y complejo, transformando el fondo para que el sujeto no destaque.

Esta técnica de camuflaje se apoya en la tendencia innata a confundir el todo con la parte, a la simplificación mediante la cual “todos son iguales”, que permite evitar el esfuerzo de discernimiento entre los comportamientos de unos y los comportamientos de otros. Desde ese punto de vista, la tendencia a la generalización reviste un importante papel a la hora de crear las condiciones en las que la corrupción se desarrolla, por su capacidad de contribuir a la confusión y a generar el lodo en el que retozan complacidos aquellos que se benefician de la corrupción.

Para erradicar las conductas corruptas es preciso la correcta y adecuada identificación de las mismas. Actitudes que desdibujan el panorama presentándolo de modo uniforme no sólo son terriblemente injustas, sino que terminan por ocultar los principales focos a extirpar.

La perversión de la intransigencia

De forma complementaria a lo expuesto anteriormente, no cabe duda de que el rigor de la norma necesita ser templado por la discrecionalidad motivada, que nada tiene que ver con la arbitrariedad. La administración se encomendaría en exclusiva a los funcionarios, en caso de que no hubiera que flexibilizar lo dispuesto, buscando que se aproxime a lo adecuado y lo deseable. Dicho claramente, se eligen y pagan cargos públicos para que modifiquen la aplicación automática de los reglamentos con la discrecionalidad, siempre que ésta sea motivada, y es en ese margen de discrecionalidad donde cabe la crítica. Dicho de otra manera, se puede criticar el resultado al que lleva la aplicación de la discrecionalidad política, pero nunca la utilización de la misma.

Es peligrosa la tendencia a atribuir de manera sistemática intereses turbios y tendenciosos a cualquier decisión que se aleje de lo considerado racional por aquel que ejerce su derecho a la crítica. Y es peligrosa porque contribuye, tal y como ha sido comentado, a generar la confusión en la que se mueven los verdaderos corruptos, así como a la desmotivación de amplios sectores de la población.

Pero es que, además, la crítica desmedida e hipertrofiada corre el riesgo de llegar a constituir un fin en sí misma, puesto que más que constituir una exigencia de la ética, puede llegar a convertirse en una pose estética, renunciando a su propósito de transformación y adquiriendo un carácter meramente autosatisfactorio, de características casi onanísticas, al precio de provocar los efectos ya descritos.

La búsqueda de la tercera vía

Doctrinalmente se abren camino nuevos conceptos sobre la participación ciudadana que tratan de definir un lugar para la misma, al margen de los espacios tradicionalmente considerados. No obstante, esta reflexión ha de entenderse en el sentido de complementar los espacios preexistentes, no debiendo ser utilizada como un mecanismo argumental para justificar un alejamiento, que comienza a ser preocupante, de las instituciones y de los partidos. Es cierto que los partidos tradicionales están en crisis; ahora bien, reducir esa crisis a un fenómeno interno de los propios partidos y no situarla en un contexto más amplio de profundos cambios sociales, se

***La peligrosa
tendencia a
atribuir de
manera
sistemática
intereses
turbios y
tendenciosos a
cualquier
decisión***

revela como un ejercicio estéril, en tanto en cuanto no será capaz de aportar las claves reales con que superar la actual situación.

La gestión de lo común se realiza desde las instituciones. Y las instituciones las gestionan cargos públicos que acceden a ellas a través de elecciones, en las que son determinantes los partidos, al menos en aquellos ámbitos que exceden la esfera municipal. Salvo que se plantee la creación de estructuras paralelas, a modo de *udalbiltzas*, que no dejarían de constituir nuevas instituciones, no cabe pensar en gestionar lo común al margen de instituciones regladas.

Pocas cosas resultan tan degradantes para la democracia como la constitución de una “clase política”. Sin embargo, es fundamental considerar que en la conformación de la clase política, mediante la segregación de la misma con respecto al resto del cuerpo social, actúan y son necesarios dos mecanismos. Por una parte, el alejamiento de los políticos con respecto a la sociedad que pretenden representar. Por otra parte, el abandono del espacio político a manos de los profesionales, merced a la renuncia de los ciudadanos a intervenir en el mismo.

La crítica desmedida e hipertrofiada corre el riesgo de llegar a constituir un fin en sí misma, de convertirse en una pose estética

Los fenómenos de contención como agravantes

La realidad insular introduce, además, un importante factor que ha de tenerse en cuenta, y es que operar en negativo siempre tiene un coste anímico. Nunca puede ser igual gestionar proyectos con los que es fácil despertar participación, al menos en el nivel de la ilusión, que actuar a modo de freno, de conciencia crítica. Y, en ese sentido, los procesos de contención del crecimiento, que han focalizado la labor de los elementos más concienciados de la ciudadanía, tienen un componente capaz de generar un cierto pesimismo histórico. Por más que una visión realista despierte una profunda insatisfacción con respecto al grado de cumplimiento de los objetivos marcados, no deja de ser cierto que el simple hecho de que dichos objetivos se hayan asumido como tales por la mayor parte de la población local constituye un éxito en sí mismo.

Los cielos grises y encapotados, y la lluvia pertinaz parecen provocar un cierto efecto depresivo en los septentrionales. Las sistemáticas violaciones de la moratoria, la percepción de la fragilidad de los instrumentos que contienen a duras penas un crecimiento desbocado, tornan peligrosamente pesimistas con respecto a las propias capacidades de intervención en la gestión de lo común a importantes sectores de la población. Ese pesimismo provoca falta de realismo a la hora de evaluar los parciales, pero importantes, pasos dados y se une a la práctica certeza de que tras la especulación

inmobiliaria siempre anidan intereses inconfesables y amistades peligrosas, por lo que contribuye a generar un plus de percepción de la corrupción.

Oportunidades

La corrupción no se circunscribe a los políticos y a las instituciones, se difunde por todo el tejido social, al que impregna de estilos, modos y maneras incompatibles con una democracia de calidad. No puede obviarse el hecho de que el ciudadano es, a la vez, sujeto e inductor de la corrupción mediante la aceptación, e incluso la exigencia, de comportamientos perfectamente identificables como corruptos.

Ante estas aseveraciones podría pensarse que se pretende efectuar un reparto de las responsabilidades, de forma que se diluyan. Nada más erróneo, se trata de reconocer que en la solución del problema la pieza clave es el ciudadano, no sólo porque disfruta de la capacidad, y la responsabilidad, de remover con su voto a aquellos cuyos comportamientos no le merecen confianza, sino por su capacidad para alentar en el seno de la sociedad valores que provoquen el rechazo de los comportamientos corruptos.

Ante el paisaje dibujado podría pensarse que está justificado un cierto pesimismo. Nada más erróneo, pues es el alejamiento del ciudadano de la política el que abre espacios de corrupción e impunidad. La participación ciudadana de calidad priva de su sentido a las prácticas descritas y contribuye a señalar como inaceptables aquellas otras en cuya descripción no se ha entrado, pero que forman parte del bagaje de percepciones que sobre el tema en cuestión posee el ciudadano.

Precisamente para no provocar una sensación de pesimismo, y sin pretender proporcionar un recetario, resulta obligado tratar de proponer, al menos, algunas líneas básicas con relación a posibles oportunidades de intervención. Las propuestas que siguen intentan ofrecer, a grandes trazos, mecanismos que ayuden a establecer nuevas pautas en las posturas de los ciudadanos ante la corrupción.

Resulta imprescindible un redimensionamiento de la crítica y la información, sin que se entienda esta observación como una vía para generar espacios de impunidad. Aunque la corrupción fuera generalizada, que no lo es, nunca la crítica puede serlo por evidentes razones de efectividad. Una crítica generalizada proporciona apariencia de “normalidad” con respecto a las situaciones denunciadas y resta eficacia a los fines perseguidos, que nunca pueden ser la denuncia en sí misma, sino la corrección de las situaciones.

La corrupción no se circunscribe a los políticos y a las instituciones, se difunde por todo el tejido social

La crítica y la denuncia, en búsqueda de su mayor efectividad, habrán de manejarse más como un escalpelo, tratando de extirpar comportamientos intolerables, que como un mazo que golpea de forma indiscriminada y sin efectividad real alguna. Más que grandes focos que aplanen y uniformicen el espacio objeto de la mirada, se precisa de una iluminación que resalte el detalle, haciéndolo destacarse de su entorno, como manera de combatir ese mimetismo inverso anteriormente comentado.

La exigencia del máximo rigor en las denuncias resulta fundamental. Es importantísimo evitar el uso de percepciones subjetivas, válidas para una aproximación al tema, pero totalmente inapropiadas para motivar una respuesta ciudadana y mucho menos de carácter administrativo o judicial. Cada denuncia que se revela como infundada no sólo hace perder credibilidad al denunciante, sino que provoca la sensación de que los escándalos no afectan, pues el denunciado pasa a engrosar la lista de los que escapan sin consecuencias.

No todas las decisiones que no se entienden o que parecen chocar frontalmente con el conocimiento que se tiene del asunto vienen viciadas por intereses turbios. La presunción de inocencia es algo más que una mera declaración retórica, a pesar de que se utilice como primera línea de defensa por parte de aquel que se sabe culpable. Decisiones que a la larga resultan contrarias a derecho, cuando no simplemente erróneas, no han de verse siempre como producto de complicidades inconfesables, pues pueden haber sido producto de la complejidad del asunto o de la ignorancia sobre el mismo. La presunción de inocencia puede venir acompañada de la de torpeza y la ignorancia, las cuales han de ser “castigadas” por el ciudadano de manera diferente. Las hipersensibilidades devienen alergias, transformando un mecanismo defensivo en patología que perjudica al organismo que trata de proteger. Redimensionamiento, rigor y prudencia en la denuncia, constituyen tres claves fundamentales en el proceso de clarificar el fondo sobre el que se desarrollan los comportamientos susceptibles de ser considerados como corruptos.

Desde que la prensa es objeto de consumo masivo, uno de sus principios básicos consiste en considerar que lo que constituye noticia es que un hombre muerda a un perro y nunca a la inversa. Tras el atracón de corrupciones y corruptelas, sobornos y cohechos, perversiones e inmoralidades, sean reales o inventados, el hecho de generar noticia a partir de la normalidad, destacando los procesos

*La participación
ciudadana no
puede quedar
limitada a la
que surge de
los colectivos
más
sensibilizados o
con mayor
cultura
participativa*

Llevados a buen fin, se revela como un elemento imprescindible para serenar las aguas, máxime teniendo en cuenta el que a algunos les interesa que sigan bajando turbias y cenagosas.

No se propone el renacimiento de la utilización de la loa como género literario, pero de igual manera que se hace imposible analizar cualquier gestión sin recurrir a un balance que refleje la situación real, no es posible formular juicios certeros y veraces sobre la realidad de una sociedad centrándose únicamente en sus disfunciones. Negarse a proporcionar titulares, evitar declaraciones que puedan ser malinterpretadas, accidental o intencionadamente, recurrir más a comunicados claros y concisos. Éstas podrían ser líneas básicas de la comunicación a seguir por parte de los colectivos más implicados en la identificación de comportamientos reprobables.

Ya en clave positiva, objetividad, medida y claridad se revelan pues como elementos clave de la información. Debe pensarse que la visión por la cual la labor informativa es coto restringido de los *mass media* es alicorta, pues, a escala insular, en la generación y difusión de la información existe una capacidad real de intervención por parte de los ciudadanos y sus colectivos, lo cual genera una exigencia de responsabilidad de los mismos como agentes que intervienen en el proceso informativo.

Resulta de fundamental interés llevar a cabo una cierta acción pedagógica y de sensibilización con respecto a la Administración. En ese sentido adquiere especial importancia que organizaciones que perciben subvenciones encaminadas a la ejecución de programas concretos o a la prestación delegada de algún tipo de servicio coordinen la exigencia de que la financiación de dichas actividades se realice mediante la suscripción de convenios plurianuales, que eliminen la dependencia de la circunstancia, la persona y el momento concretos.

Por último, no puede dejar de mencionarse la participación ciudadana en la toma de decisiones. No obstante, si se ha de hablar de participación, ésta no puede quedar limitada a la que surge de los colectivos más sensibilizados, o con mayor cultura participativa. Dejar la participación ciudadana librada a la capacidad o al interés espontáneo del ciudadano puede provocar la aparición de una “clase opinante”, por utilizar el símil con la “clase política”.

La participación de calidad ha de ser promovida desde la Administración, no sólo en sus aspectos formales, sino con programas de dinamización y de formación orientados a los asuntos que requieren de esa participación. Las administraciones han de ser capaces

Los comportamientos corruptos no encuentran la adecuada sanción por parte de los ciudadanos en los procesos electorales

de conformar y formar grupos de ciudadanos con capacidad crítica, como elementos de equilibrio y de cogestión. Nunca como coartada o justificación.

Anticipando parte de la línea argumental de lo que podría constituir una nueva oportunidad de intervención, reflexionar sobre la participación ciudadana abre grandes interrogantes acerca de temas tales como la concepción del poder y la legitimidad para ejercerlo, o como el alcance de la representatividad. Baste, por ahora, con enunciar que se precisa de una nueva cultura del poder, capaz de permitir e incentivar la gestión en común del mismo, sin menoscabo de las propias responsabilidades.

La corrupción sólo puede ser erradicada mediante el ejercicio responsable de la ciudadanía

Coda

Reflexionar sobre la relación entre ciudadanía y corrupción pone de manifiesto que aquélla no permanece neutral ante la corrupción, pues no sólo acepta un cierto grado de corrupción como normal, sino que no pone reparos a percibir los frutos de la misma.

De igual manera, los comportamientos corruptos no encuentran la adecuada sanción por parte de los ciudadanos en los procesos electorales, debido al doble mecanismo que supone, por una parte, el conservar sistemáticamente los respaldos y, por otra, expulsar fuera del proceso electoral a la parte más crítica de la ciudadanía. Sin embargo, esos mismos ciudadanos podrían contribuir a provocar los cambios necesarios para erradicar comportamientos inaceptables y expulsar del ámbito político a aquellos personajes que retozan complacidos en el cieno.

La corrupción no es un fenómeno aislado, pues no es más que otro aspecto, tal vez de los más visibles, de la pérdida de calidad de la democracia, que queda vacía y sin sentido, reducida a la mera ritualización del ejercicio del derecho al voto cuando el ciudadano renuncia a la responsabilidad de la gestión de lo común, abandonándola en manos de políticos profesionales y permite que los partidos adopten el rol de maquinaria electoral, en lugar de jugar su papel de elementos transformadores de la sociedad.

La democracia sólo encuentra su pleno significado cuando, haciendo honor a la etimología, el pueblo es protagonista de su propio gobierno. La corrupción, como muestra que es de la baja calidad de la democracia, sólo puede ser erradicada mediante el ejercicio responsable de la ciudadanía.



La democracia corrompida

Alejandro Nieto

Hora es de despertar de viejos sueños románticos, de abandonar calificativos de género y de dejar de creer en la “feliz democracia”, el “sabio legislador”, el “justo juez” y el “benéfico Gobierno”. La realidad es otra; hay que aprender a aceptarla y volver a utilizar los adjetivos individuales: un legislador es sabio y otro ignorante, unos jueces son justos y otros perversos, hay gobiernos benéficos y gobiernos egoístas y corruptos. La democracia es feliz o desgraciada y en todo caso tiene manchas como defectos sus tres poderes. Sólo los niños pueden creer otra cosa. La España democrática ha llegado a la edad adulta y recuperado la facultad de ver la realidad como es, sin negar la evidencia ni escandalizarse por ella.

Nuestra democracia no es perfecta y es de ilusos esperar que algún día llegue a serlo, puesto que ninguna lo es. No hay que desanimarse, sin embargo, antes al contrario, es un estímulo más para participar en la vida política y para no dejarla en manos de los peores. Tampoco hay que negar ni que avergonzarse de que esté afeada por la corrupción. De lo que hay que preocuparse, y mucho, es del nivel que la corrupción ha alcanzado, hasta tal punto que se ha producido, desde este aumento cuantitativo, un salto cualitativo que importa examinar ahora con cierto cuidado.

Es frecuente oír que democracia y corrupción son términos incom-

Nuestra democracia no es perfecta y es de ilusos esperar que algún día llegue a serlo, puesto que ninguna lo es

Como se notará a lo largo de la lectura, este texto tiene ya seis años. Constituye el último capítulo del libro del mismo autor *Corrupción en la España Democrática*. Ariel, 1997.

**Quienes
pretenden
silenciar la
existencia de
prácticas
corruptas
preservan quizá
la imagen de la
democracia,
pero no su
sustancia**

patibles: *donde hay democracia (como en la España actual) no puede haber corrupción –se dice– o ha de ser mínima*. La intención apologética de esta tesis salta a la vista y esconde, además, un argumento descalificador, dado que imputa a quienes denuncian su existencia el grave pecado de estar desacreditando a la democracia e incluso de pertenecer a la derecha plutocrática (dando por supuesto que es ésta la que se beneficia de tales situaciones en perjuicio de la izquierda, libre de toda sospecha al cabo de “cien años de honradez”). Desde esta perspectiva la corrupción se convierte en una cuestión tabú, que no puede tocarse so pena de perjudicar gravemente a la democracia, la integridad de cuya imagen –al estilo calderoniano– no admite ni siquiera sombras.

Yo estoy dispuesto a aceptar la imposibilidad lógica del sintagma “democracia corrupta”, pero con todas sus consecuencias, es decir, si en la democracia “no debe haber” corrupción y es el caso que la hay, tiene que concluirse con el mismo énfasis que *donde hay corrupción no puede haber democracia*. La corrupción puede ciertamente ocultarse, pero, si no se elimina, se produce algo mucho más grave que un simple deterioro de imagen: se está destruyendo a la democracia. En definitiva, pues, quienes pretenden silenciar la existencia de prácticas corruptas públicas preservan quizá la imagen de la democracia, pero no su sustancia. Una opinión, por otra parte, absolutamente generalizada en Europa, que me permite hacer una breve y excepcional referencia a testimonios extranjeros. Según Della Porta y Mény (*Démocratie et corruption en Europe*, 1995), “la corrupción pone en peligro los valores mismo del sistema: la democracia es herida en el corazón; la corrupción sustituye el interés público por el privado, mina los fundamentos del Estado de Derecho, niega los principios de igualdad y de transparencia favoreciendo el acceso privilegiado y secreto de ciertos agentes a los medios públicos”. O en Alemania J. Roth (*Der Sumpf*, 1995): “la corrupción en todas sus variantes destruye silenciosa y eficazmente las instituciones democráticas”. Y por citar a un español muy autorizado, para López Calera (1997), “la corrupción política, más aún cuando llega a ser mera delincuencia común, está promoviendo una crisis de legitimidad en el Estado social y democrático de Derecho; de esa corrupción política provienen muchas de las críticas al Estado democrático; las gentes se quejan –y con razón– de los políticos, pero terminan quejándose del Estado a quienes esos políticos dicen representar”. Y antes, en palabras de Miralles (1992), “todo ello conforma una red que ahoga la democracia: la vacía de contenido y la reduce a un mero formalismo. Ése quizá es

el aspecto más peligroso de la corrupción en un sistema democrático. Ésa es la variable que aumenta su variedad en relación con la corrupción de las dictaduras. La dictadura no puede corromperse, pero la democracia, sí. No es un asunto de listos o chorizos, de pícaros o ladrones de guante blanco. Es la legitimación del sistema y de sus instituciones básicas lo que está en el aire, lo que el decenio socialista ha puesto en cuestión. Porque termina por ser el propio sistema el que induce a la corrupción a quien desea sobrevivir”.

Conste, por lo demás, que la cita de esas autoridades de talante democrático intachable no es una simple erudición sino una forma de salir al paso de una acusación de antidemocracia que suele imputarse insidiosamente a quienes denuncian estas prácticas, a lo que alude de forma expresa Tortosa (1995).

La proposición enunciada no significa, naturalmente, la negación de la democracia en una realidad política contaminada, ya que la existencia de prácticas corruptas esporádicas, aunque sean muy graves, es de hecho inevitable en todos los tiempos y circunstancias. La única corrupción letal es la *sistemática*, es decir, la *integrada en el sistema de tal manera que las instituciones públicas funcionan habitualmente con ella (e incluso no pueden funcionar sin ella) y, sobre todo, cuando no operan los mecanismos de auto-defensa*. Este último dato es el que mejor revela que el sistema tolera la corrupción y que la ha absorbido como parte integrante del mismo. Por esta razón puede hablarse hoy de la democracia italiana, ya que, a diferencia de lo que sucedía con anterioridad, ahora se está defendiendo. Y por lo mismo, es lícito poner en duda a la democracia española actual, afectada como está –y mientras siga estándolo– de una corrupción institucional sin mecanismos de prevención ni represión.

Más todavía: cuando la corrupción es patrimonio de un grupo identificado, cabe la posibilidad de eliminarla al sustituir electoralmente a un grupo por otro y recuperar con ello a la democracia. Ahora bien, cuando la alternativa a un gobierno corrupto es otro igualmente corrupto, ya no puede seguir hablándose de democracia al no haber esperanza de regenerar al sistema desde dentro del mismo; una posibilidad que constituye cabalmente uno de los pilares básicos de la democracia.

En segundo término opera otro argumento no menos contundente que el anterior: la democracia supone la presencia de unos mandatarios elegidos por el pueblo *para la gestión de los intereses públicos*. Para que aquélla exista no basta, por tanto, que haya mandata-

La democracia es herida en el corazón cuando la corrupción sustituye el interés público por el privado y niega los principios de igualdad

rios públicamente elegidos sino que es preciso, además, que trabajen efectivamente en beneficio del interés general. Con la consecuencia de que si actúan en beneficio particular están apartándose de una característica esencial del sistema democrático. Las autoridades corruptas no sólo están ensombreciendo la imagen de la democracia o alterando sus contenidos sino que la han abandonado. Hay reglas esenciales y no esenciales y hay trampas más o menos graves que pueden perturbar el juego, aunque éste continúe; pero si no se respetan las reglas fundamentales nos salimos del terreno propio. Si en un partido manejan los jugadores la pelota con las manos y los pies y nada hace el árbitro para impedirlo, no puede decirse que se está jugando al fútbol irregularmente sino que se está jugando a otra cosa. Siguiendo con la misma imagen, nadie puede, en cambio, dudar de la naturaleza del juego aunque ocasionalmente se quebranten algunas de las reglas, sobre todo si el árbitro tiene energía para castigar y, si es necesario, para expulsar del campo al infractor.

El régimen de Franco llegó a ser calificado en sus postrimerías como una “dictadura atemperada por la ineficacia y la corrupción”. Es posible que, en efecto, fuera dictadura a pesar de la corrupción; pero no puede ahora decirse que el régimen constitucional español actual sea “una democracia atemperada por la corrupción”, ya que aquí—como se está diciendo—no caben términos medios: cuando en una democracia la corrupción se institucionaliza no cabe seguir hablando de democracia. La democracia ha sido secuestrada por una clase política activamente corrupta y que, además, tolera con su pasividad las prácticas de este carácter que perpetra el aparato administrativo.

Cuando la alternativa a un gobierno corrupto es otro corrupto, ya no puede seguir hablándose de democracia

Hay una forma perversa de entender y de gestionar la democracia, conforme a la cual se admite que los gobiernos sucesivos abusen del poder con tal que subsista la posibilidad de ser desalojados de él por vías electorales regulares. El Gobierno, según esto, queda legitimado por el procedimiento de su nombramiento y, en consecuencia, un gobierno democráticamente elegido es ya democrático para siempre. Esto, a mi juicio, no es correcto, puesto que *no es suficiente la legitimación democrática originaria sino que tiene que confirmarse de manera permanente. Por muy puros que sean sus orígenes, un gobierno deja de ser democrático cuando no actúa de acuerdo con las reglas de este sistema (por ejemplo, corrompiéndose o tolerando una corrupción institucionalizada)*. Y, dando un paso más, un sistema deja de ser democrático cuando no ofrece

una alternativa limpia, o sea, democrática a un gobierno corrupto.

La celebración de elecciones no presta, sin más, calidad democrática a un régimen, dando que también las dictaduras –y de ello hay no pocos ejemplos históricos– pretenden fundarse en elecciones o plebiscitos en los que impone de antemano una solución determinada. Lo que separa a una democracia de una dictadura es la posibilidad de escoger libremente entre varias opciones políticas o personales diferentes. *Pero si las opciones ofrecidas son iguales, se rompen las condiciones democráticas por muchas elecciones que se celebren y por muy reñidas que parezcan. Aquí es cabalmente donde interviene la corrupción.* Porque cuando ésta llega a un punto en el que los ciudadanos llegan a la convicción de que “todos son iguales: todos hacen lo mismo”, la esencia del sistema democrático se desvanece, habida cuenta de que la de la democracia representativa es la confianza. Cuando los gobernantes no gozan de la confianza de los ciudadanos, ya no puede hablarse de representación legítima.

Perdida la confianza, el gobierno democrático –la gestión de los intereses públicos y generales a través de representantes libremente escogidos– se convierte en un mero ejercicio de poder y el gobernar, a su vez, en un oficio y no precisamente un oficio cualquiera sino una actividad singularmente peligrosa en cuanto que permite la apropiación personal de dicho poder. Repitiendo viejos juegos de palabras, el gobernante corrupto no sirve al Estado (al pueblo) sino que se sirve del Estado (del pueblo). La historia nos brinda ejemplos no raros de dictadores altruistas y también de demócratas personalmente egoístas. Los unos se apropian del poder por la fuerza o por la sangre, pero no se apropian personalmente de sus rentas o beneficios; mientras que los otros formalmente elegidos transforman el oficio en beneficio. La corrupción no ataca al Estado en general –hasta puede confirmarse que el Estado corrupto es en muchos aspectos singularmente fuerte–, pero sí al Estado democrático. El Estado corrupto no es un órgano de representación popular ni un aparato de gestión de intereses públicos y generales sino un aparato de producción de rentas. El *consumatum est* de la desaparición de la democracia tiene lugar el día en que a la citada frase de “todos hacen lo mismo”, se añade esta otra de “siempre ha habido corrupción y siempre la habrá”: porque la democracia es ilusión, no resignación.

La legitimación democrática es finalista; no es un mandato en blanco condicionado. Si su objeto, tal como se ha dicho, es la gestión

Para que exista democracia no basta que haya mandatarios públicamente elegidos, sino que es preciso que trabajen en beneficio del interés general

*La celebración
de elecciones
no presta, sin
más, calidad
democrática a
un régimen*

de los intereses generales, a los titulares del poder se les confiere únicamente un rango vicarial, o sea, el de gestores administrativos de tales intereses. Si los mandatarios incumplen, es claro que el mandato puede serles renovado en los términos electorales; pero esto no añade legitimidad alguna puesto que la no reelección no precisa justificarse. Los efectos del incumplimiento son otros: la ruptura unilateral del pacto democrático, al menos hasta las nuevas elecciones y si después de ellas se mantiene a los corruptos en el poder, el sistema, *aunque sea con la aquiescencia de ambas partes*, deja de ser democrático y se convierte en seudodemocrático. El asentimiento popular no es necesariamente democrático en sentido estricto: la monarquía absoluta de los Austrias fue jurídicamente explicada como un poder delegado del pueblo, que éste podía revocar si su gobierno no se adaptaba a las leyes divinas, puesto que con esta condición se había realizado. Para nuestra mentalidad no era, sin embargo, un régimen democrático. En el vasallaje medieval los individuos se sometían voluntariamente a un señor para que éste les protegiese: pacto que hoy nadie entiende tampoco como democrático. El poder actual manipula fácilmente la voluntad de los ciudadanos sin llegar al empleo de la violencia física.

El sistema democrático se caracteriza por la “gestión” del poder, que excluye la posibilidad de su patrimonialización incluso aunque sea alternante. Cuando el poder se va patrimonializando alternativamente por los distintos partidos o gobiernos que en él se turnan, lo que sucede es que *se ha patrimonializado por una casta: la casta política fragmentada en varios partidos pero conservando su naturaleza sustancial única*. Del “Estado soy yo” se ha pasado al “Estado es mío”.

Es una verdad amarga que el poder nacional (de la nación, del pueblo) no ha pasado casi nunca de ser una ilusión ideológica. En la Edad Media el poder era patrimonio del rey y de la nobleza (laica y eclesial) cuya estructura se conservó en la Edad Moderna, aunque con un matiz accidental: si antes guerreaban el “rey” de Castilla contra el “rey” de Aragón, posteriormente empezó a hablarse, harto impropriamente, de una guerra entre España y Francia, pongamos por caso, cuando de verdad se trataba de conflictos entre ambos reyes. En los libros de historia se relata cómo los españoles lucharon en Flandes y por Flandes, como si de un pleito español se tratase, siendo así que lo que en realidad se ventilaba era una discusión dinástica personal de los monarcas, que empeñaban sus dineros y sus súbditos para decidir cuál de sus herederos iba a ocupar el

trono discutido. Flandes nunca fue de España sino de una persona (y una dinastía) que ocupaba el trono de España y defendía aquella herencia con el dinero y la sangre de sus súbditos españoles como hubiera defendido con sangre flamenca el trono de España, si éste hubiera estado en peligro. Pues exactamente igual sucede con los Estados de ahora. Franco se apropió del Estado en 1936 y no se desprendió de él hasta su muerte. *Con el advenimiento de la democracia creyó el pueblo español que había recuperado ese Estado. Vana ilusión, puesto que el tiempo ha demostrado que el Estado ha sido patrimonializado por una casta política, que se va rotando en su explotación.*

Patrimonialización significa que los ocupantes sucesivos del Estado y del poder lo consideran como una fuente de rentas y beneficios. Digan lo que digan los ideólogos, el ejercicio del poder no es un servicio sino un beneficio, una actividad rentable y el país es un cortijo inmenso que puede ser considerado (en términos deliberadamente impropios) de propiedad particular.

En el Estado siempre ha habido enquistadas castas de dominadores y forzoso es reconocer que sigue habiéndolas; pero también ha habido cambios profundos. En el Egipto faraónico dominaba la casta de los sacerdotes que, invocando innumerables dioses, drenaba en su beneficio personal los recursos económicos del país; pero no así en la Grecia clásica. Situación que se repitió en la civilización cristiana desde Constantino hasta la desamortización de los bienes eclesiásticos y la secularización de las actividades públicas.

El pueblo no se deja engañar permanentemente y sabe de sobra quién vive a su costa; pero para expresarse necesita la voz de los poetas y de los ideólogos, que a veces, sin embargo, falsean descaradamente sus sentimientos. Más todavía: los fenómenos de dominación y de explotación se sirven indefectiblemente de cantores remunerados que todo lo justifican, ensalzan y, en último extremo, silencian o contribuyen a su silenciamiento.

La primera casta desenmascarada fue la de los terratenientes (titulares de la riqueza tradicional, a la que no hacían producir), que cayeron del mismo hachazo que decapitó a la Iglesia y a la nobleza. La casta militar, en cambio, nunca ha podido ser desterrada por completo, aunque bien es verdad que apenas si conserva hoy sus antiguos privilegios personales. El siglo XIX, después de arrinconar a los nobles y a los frailes, se las prometía muy felices, pero, ante su consternación, no consiguió que el pueblo conquistara el poder. Entonces fue cuando se descubrió que el vacío había sido

Es una verdad amarga que el poder nacional (de la nación, del pueblo) no ha pasado casi nunca de ser una ilusión ideológica

ocupado por una nueva casta –la de los burócratas–, como se denunció y combatió (inútilmente) tanto en los regímenes socialistas como en los capitalistas.

A la enorme producción bibliográfica que se dedicó un día a la opresión de la casta burocrática está sucediendo hoy (salvo en España) una bibliografía no menos amplia sobre la opresión de la casta política, a la que ya se ha empezado también a desenmascarar. El pueblo de la península Ibérica tuvo que soportar primero la invasión romana, luego la bárbara y luego la musulmana; con ellas cambiaba el idioma y la religión de los explotadores, pero la obligación de tributar –que es lo que importa– no se suprimía. Hoy ya no se paga al rey ni a los nobles ni a los frailes, pero el recaudador sigue en su sitio. ¿De qué vive la casta política actual? No es barata ciertamente a juzgar por las partidas retributivas que se auto-signan legalmente en los presupuestos; mas no hay que escandalizarse de que se eleven, y aun multipliquen, sus retribuciones dado que la ganancia la tienen asegurada en la corrupción, que es lo que de veras importa. En la desclasificación –global y sin matices– de Navarro Pérez (1996), “esta clase política es en nuestro criterio la más deleznable y corrupta que ha gobernado España desde los Reyes Católicos hasta la fecha, y en ella incluimos por méritos propios a los representantes de todos los partidos políticos, entiéndase bien: todos los que han ejercido funciones de gobierno en los ámbitos nacional, autonómico y local”. Más prudentes son, en cambio, las palabras de López Calera (1997), quien con acierto señala que “la corrupción política no es consecuencia de que los políticos son un grupo de degenerados que vienen de un planeta malvado. Hay que huir del maniqueísmo injusto, que señalaría que los malos son siempre los políticos y los buenos lo que están fuera de la política. Hay que huir, en definitiva, de lo que Meinecke llamaba la satanización de la política, esto es, de la idea de que la política es mala por definición o que es una relación que lleva casi necesariamente a lo inmoral”.

En cualquier caso, ahora ha llegado el turno a la casta política, que se defiende con los mismos subterfugios utilizados por quienes la precedieron. Las castas se proclaman defensoras de unos valores que argumentan con habilidad para demostrar que quien discute sus privilegios personales está atacando tales valores. La casta sacerdotal se escudaba en Dios y en la religión; la casta noble, en la tradición; la casta militar, en la defensa nacional; la casta burocrática, en el servicio público. Hoy invoca la casta política el interés

*Hoy invoca la
casta política el
interés
democrático y
utiliza la falacia
de que quien
discute su
dominio está
erosionando la
democracia*

democrático y utiliza sin escrúpulos la falacia de que quien discute su dominio está erosionando la democracia.

L. Ferrajoli (1996) ha formulado una idea muy aproximada con ayuda de las expresiones “empresa-partido” y “empresa-gobierno”. En el mundo moderno los partidos están dejando de ser un lugar de encuentro ideológico y de proyectos políticos para convertirse en organizaciones cuya existencia se justifica por sí misma, cuyo fin es el acceso al poder y cuya supervivencia exige –y, por ende, legítima– un aparato y unos medios de financiación absolutamente desconectados de las ilusiones políticas de las masas. Una desviación perversa indudablemente pero que parece inevitable, dado que sin esta forma empresarial de organizarse ningún partido podría ni siquiera mantenerse. Destino ineluctable, maldición bíblica o predisposición genética: es lo mismo, pero a nadie puede sorprender esta evolución, puesto que ya fue anunciada con precisión astronómica hace casi cien años por Robert Michels.

Pues si esto es así, cabe fundamentalmente dudar de que este tipo, esta degeneración de los partidos políticos tenga un lugar legítimo en un sistema democrático. Porque lo que en todo caso está fuera de dudas es que una *organización acompañada de prácticas corruptas no coyunturales sino esenciales en modo alguno es compatible con la democracia.*

Por si esto fuera poco, las contradicciones se multiplican con la emergencia de la “empresa-gobierno” porque una empresa tiene sus intereses propios y unos modos de actuación que no responden siempre a las aspiraciones de los ciudadanos. Desde hace mucho tiempo se viene utilizando la imagen del Estado-sociedad mercantil, cuyos accionistas son los electores. Imagen que ha terminado siendo mucho más realista de lo que se creía y absolutamente fiel en sus aspectos negativos en una época en la que ya nadie puede creer que el Banesto, por ejemplo, realice la voluntad de los accionistas. Los gobiernos, al igual que los consejos de administración de las grandes sociedades, se encuentran parasitados por unos consejos de administración que desplazan con sus intereses personales los intereses sociales generales; y, en último extremo, incluso los intereses del consejo de administración pueden ser desplazados por los individuales de su presidente. Incluso el lector no especializado podrá entender muy bien lo que se está diciendo con pensar en las actuaciones, hoy tan popularizadas, de Mario Conde en el Banesto.

Con la corrupción se culmina la ruptura del vínculo de fidelidad que une a gobernantes y a gobernados. En el lenguaje común se

Los partidos están dejando de ser un lugar de encuentro ideológico y de proyectos políticos para convertirse en organizaciones cuya existencia se justifica por sí misma

La corrupción democrática surge de dos fenómenos perversos: la profesionalización de la clase política y la 'empresarización' de los partidos y los gobiernos

habla de electores fieles, de clientelas devotas a un líder o a un partido; siendo así que la situación debiera ser inversa, ya que son los políticos quienes han de ser fieles a los ciudadanos.

La representación democrática se basa en la confianza. Se supone que el pueblo tiene unos ideales y unos intereses y se designa a determinadas personas para que los lleven a cabo. Se supone que los programas de los partidos conjeturan e interpretan los deseos del electorado, pero que la voluntad y la decisión corresponden a éstos. Pues bien, en el ejercicio cotidiano de la democracia se demuestra que estos puntos de partida son *ficciones ideológicas*. Una vez en el poder, el gobernante cierra su cuaderno programático y, con olvido absoluto de él, actúa como quiere o como puede, defraudando sus promesas más enfáticas.

Esto es cosa tan sabida que los electores ya han terminado asimilándolo y no parecen sorprenderse cuando, contra todo lo anunciado, se les lleva a la Alianza Atlántica o cuando se les suben los impuestos en lugar de bajarlos. La vida política se ha desideologizado y los partidos más aún. Los ciudadanos ya no sueñan con grandes empresas y lo que quieren es vivir mejor. Para ello eligen buenos *gestores de la cosa pública*. *Y es aquí donde se produce la segunda defraudación*. Porque los políticos, en su papel de gestores, no sólo administran mal sino corruptamente en cuanto que dilapidan el patrimonio público que se les ha confiado y se lo reparten entre ellos y sus amigos. La gestión estatal se desvela así como otra ficción hasta tal punto que hoy casi nadie discute ya que la gestión pública es peor que la privada. Y si recordamos, en fin, que el tercer elemento de la democracia –la responsabilidad– tampoco funciona, he aquí que se derrumba, que se ha derrumbado, todo el edificio político. ¿Qué puede quedar de un sistema si se quiebran los pilares que lo sostienen?

Quienes dicen vivir “para” la democracia, y están en realidad viviendo “de” ella, por razones fáciles de comprender, niegan la evidencia y envuelven todo en una espesa nube de propaganda ideológica, de estigmatización de críticos y de crucifixión de heterodoxos. Es la única posibilidad de que sobreviva el sistema y de que, de paso, se mantengan sus beneficios personales.

Por debajo de la publicidad –y de acuerdo con las reglas de juego de ésta– late un pragmatismo descarnado que justifica todas las infidelidades. Si los electores son tan simples que no reaccionan ante un cambio tan flagrante de los objetivos del programa que han votado y, por otro lado, si los electores toleran con indiferencia la

desviación de los poderes y el enriquecimiento personal de los gestores, no hay ninguna razón para que éstos obren de otro modo, puesto que tampoco hay resortes válidos que impulsen lo contrario.

La corrupción democrática surge, en definitiva, en la confluencia de dos fenómenos perversos que se apoyan y potencian recíprocamente: *la profesionalización de la clase política y la “empresariación” de los partidos y los gobiernos.*

La democracia, al ofrecer todos los cargos públicos a los ciudadanos, ha tenido que asumir el compromiso de retribuirles dignamente, puesto que, de no ser así, la gestión pública quedaría reservada de facto a los potentados o, al menos, a quienes no tuviesen necesidad de trabajar para poder vivir. La retribución “digna” está asegurada, desde luego, pero es el caso que por las manos de buena parte de los administradores públicos circulan fortunas inmensas o servicios que como tal valen y, a diferencia de lo que sucede con los cajeros de un banco, no tienen que cuadrar sus cuentas. Así viene la tentación propiciada por sobornadores astutos y favorecida por la impunidad. Una situación singularmente vulnerable cuando se trata de individuos que han hecho de la política su profesión vitalicia, que se desdobra en dos planos que no progresan sincronizados, ya que los ingresos de la cúspide pueden ser modestos (y legalmente lo son), mientras que hay puestos inferiores que permiten un enriquecimiento personal sin tasa, que ya nada tiene que ver con la retribución digna o congrua a todos debida.

Por otra parte, la carrera pública depende del partido, hasta tal punto que las relaciones entre él y los militantes son feudo-vasalláticas: el político tiene a su señor y éste le recompensa con un beneficio (el cargo público). Hasta aquí nada hay reprochable. Lo malo es cuando el señor hace una expedición con fines económicos y reparte el botín con quienes le han ayudado, exactamente igual que los nobles feudales saqueaban tierras de moros y tenían que entregar al rey una parte de la rapiña. El vasallo generoso entregaba quizá todo lo obtenido; la costumbre, no obstante, era el reparto.

En la actualidad, los militantes hacen excursiones en las economías privadas (que son precisamente los “moros enemigos”) usando los poderes del cargo que les ha facilitado el partido, y, aun repartiéndolo al final, todos salen ganando. Son las reglas del poder y de la fuerza. Así se obraba en la Edad Media y en términos muy similares en la Edad Moderna en las capitulaciones de conquista y en las patentes de corso. En el siglo XIX se mantiene y generaliza este estado de cosas con el caciquismo. Y ahora, detrás del oropel cons-

*La corrupción es
fruta del árbol
de la injusticia*

titucional, siguen medrando los mismos perros aunque sea con el collar democrático; pero –no lo olvidemos– si el hábito no hace al monje, el collar no amansa la voracidad del perro.

*No es lícito
llamar Estado
democrático a
un garito de
fulleros*

Tal como están las cosas ya no vale la pena discutir sobre las polvorientas cuestiones de si el Estado es un órgano del pueblo o de si es éste el que se autogobierna a través de sus representantes democráticamente elegidos. Dejemos estos temas a los ideólogos de verbena y a los profesores momificados. Porque hemos llegado a un punto en el que ya no interesa saber quién es el Estado ni a quién pertenece. Lo único que importa es quién está utilizando los poderes estatales en beneficio particular; y en este momento el que se decida a levantar el velo de las fraseologías y a prescindir del peso de las inercias se encuentra con una casta política que reparte con una casta burocrática y sindical el botín de las expoliaciones y de los negocios que realiza con una casta de empresarios privados. Grupos que en realidad son uno solo, aunque sus individuos jueguen coyunturalmente papeles distintos.

La corrupción es fruta del árbol de la injusticia. Cuando el ciudadano se percata de que las decisiones públicas no se adoptan con criterios de racionalidad ni de legalidad sino por pura arbitrariedad, no tiene otra opción que la de jugar con las únicas cartas disponibles, es decir, la de la corrupción. Podemos reconocer, entonces, que las cosas funcionan realmente así: pero no es lícito llamar Estado democrático a un garito de fulleros.



Creemos redes de comunicación y encontrémonos, eso es todo

Fernando Gómez Aguilera

Sabemos que estamos inmersos en un proceso de mundialización muy potente económicamente, pero débil política y socialmente. Una dinámica que acentúa la fractura entre los países ricos y los países pobres (Argentina –la obediente discípula del FMI– ha sido la última víctima sonada), a la vez que se polarizan las desigualdades en el interior de los propios países ricos, como ha constatado Joseph Stiglitz en su último libro *El malestar de la globalización*: “la brecha entre los pobres y los ricos ha aumentado e incluso el número de los que viven en la pobreza absoluta –con menos de un dólar por día– ha subido”. El bienestar de las sociedades, la justicia social y la democracia no se mundializan, en una era imperial dominada por la lógica de la economía, la ética de la indiferencia y la homogeneidad ideológica.

No es de extrañar, pues, que no hace mucho tiempo Umberto Eco señalara que “ningún novelista puede imaginar algo más terrible que la verdad”. Esa verdad atroz es la de 5.000 millones de excluidos –de ellos, 1.200 millones de personas viven con menos de un dólar diario y 2.800 millones, con menos de dos dólares al día–, pero también, la del modelo de nuestra realidad, en buena medida expresado, no hace muchos meses, por el expresidente de la Elf, en medio del escándalo: “el que quiera jugar a la moral, ningún problema, pero negocios y moral son incompatibles”. Una afirmación insolente y estremeecedora, cuyo alcance ominoso no se hace esperar: habida cuenta de que el mundo contemporáneo está gobernado por los negocios, es el tiempo de la inmoralidad y la injusticia generalizadas. En fin, una época, asimismo, marcada por la opacidad y desplazamiento de las grandes decisiones públicas mundiales, cuya competencia se arrogan los países más ricos localizándola en estructuras financieras y económicas no democráticas que vacían la

*La oportunidad
de estimular y
articular un
amplio
movimiento
social de
análisis, evalua-
ción crítica a los
mecanismos
económicos que
están en marcha*

soberanía, como sabíamos y ha confirmado Stiglitz: “En los problemas del FMI y las demás instituciones económicas internacionales subyace un problema de Gobierno. Quién decide qué hacen. Las instituciones están dominadas no sólo por los países industrializados más ricos sino también por los intereses comerciales y financieros de esos países, lo que naturalmente se refleja en las políticas de dichas entidades”. Y condicionada, sin duda, por la tiranía que ejercen los sistemas de información/propaganda, conformados como auténticos instrumentos de poder, dominio y ocultación, al servicio de una realidad opaca en medio de un creciente éxtasis de comunicación vacía de saber real, que disocia causas y efectos y practica continuamente la violación de las palabras y la manipulación del lenguaje, contribuyendo a reforzar el control de la opinión pública.

*Para
mundializar los
derechos
humanos, la
democracia, el
bienestar y la
justicia social y
ambiental*

Pocas dudas caben sobre la oportunidad de estimular y articular un amplio movimiento social de análisis, evaluación crítica y respuesta a los mecanismos económicos que están en marcha, para que el futuro de Europa y del mundo no sea tan desolador. Oponer al discurso unilateral de los *amos del mundo*, comandados por EE.UU, una fuerza planetaria de unidad y resistencia civil, que identifique su primer nivel de organización y acción en la escala local. Una fuerza y un discurso alternativo, como está planteando el movimiento antiglobalización, en su diversidad, contradicciones y complejidad, que aproveche las potencialidades de la tecno-ciencia y la sociedad de la comunicación para mundializar los derechos humanos, la democracia, el bienestar y la justicia social y ambiental. En fin, un rearme intelectual –de valoración adecuada y respuestas simétricas– y ciudadano; esto es, la recuperación de la política frente a la economía. Respuesta social y respuesta cultural –la formación de un *intelectual colectivo*, surgido de la cooperación entre intelectuales y movimientos sociales–, esta última a partir del reconocimiento de que la asepsia y la inhibición pública amparada en la objetividad científica son, en no pocas ocasiones, formas encubiertas de censura cívica y de soporte tácito *al statu quo*.

En el umbral de ese escenario emergente, la resistencia en la calle discurre paralela a la incipiente organización ciudadana en redes locales y a la construcción ideológica de un nuevo discurso que asume la lógica de la complejidad –porque “el futuro será de quien conciba adecuadamente lo mixto, lo complejo y lo heterogéneo” (Daniel Innerarity)– y toma como referencia última la escala planetaria, la configuración de un internacionalismo solidario de

nuevo cuño, una ética cosmopolita (Francisco Jarauta), consciente de que su proyecto es el de un mundo de redes de diferentes vinculadas en torno a la proximidad, susceptibles de integrarse en *redes mundiales de diferentes asociados*, como recordaba Vidal-Beneyto: “no la norteamericana aldea global de McLuhan, sino millones de aldeas reales y distintas, globalmente accesibles y presentes”. El giro hacia la responsabilidad colectiva, facilitado por mediaciones sociales, asociativas y culturales más estratégicas y generosas que disueltas en la ideología, está llamado a construir nuevas condiciones colectivas para el impulso de la contestación y la exploración de formas inéditas de *governance* y de redistribución solidaria de la dignidad de vivir, sin perder la referencia de que la diversidad es riqueza compartida antes que fuente de legitimación de privilegios o de exclusiones.

Si se trata de desactivar el ideal de los regímenes autoritarios y los monopolios, “creemos redes de comunicación y encontrémoslos, eso es todo”, según expresión del zapatista Marcos. La posibilidad, pues, de ese encuentro activo y de un nuevo horizonte social y político se apoyará y contribuirá a generar confianza colectiva; a tomar el ámbito local como territorio donde satisfacer las necesidades propias y colectivas, mientras que, simultáneamente, resulta imprescindible acometer acciones de cooperación supralocal para acceder a los recursos y la producción de bienes –autonomía e interdependencia simultáneas–; a poner en valor, frente a las mercancías, el capital social, a través de la participación, la deliberación abierta, la corresponsabilidad en las decisiones y el poder compartido en lo que concierne a los asuntos públicos; a asumir como fórmula de *governance* la democracia compleja –política, social, cultural y económica–, abierta y en constante construcción; a apelar a la creatividad como propósito y recurso permanente de cara a configurar la realidad socio-política que plantea nuestra época; y, en fin, a regenerar el espacio de la ética pública y privada. Sin duda, todos y cada uno de estos factores constituyen desafíos esenciales en lo que concierne a construir el pensamiento y la acción solidaria de nuestra época, y, en definitiva, a cambiar el signo de la globalización.

Somos pasajeros de un época despojada de sujeto histórico (rebeldías) para protagonizar la esperanza, colonizada por la metástasis del consumidor pasivo. No obstante, lentamente se extienden prácticas y discursos que buscan la posibilidad de otro mundo. Percibimos que permanecer sin proyecto de emancipación, sin

Permanecer sin proyecto de emancipación, sin horizonte utópico frente al proclamado fin de la historia, es un suicidio civilizatorio

horizonte utópico frente al proclamado *fin de la historia*, es un suicido civilizatorio. Consolida la unilateralidad y la injusticia en el mundo. Cuando Ignacio Ramonet escribió en diciembre de 1997 su artículo “Desarmar los mercados” –inspirador del movimiento anti-globalización– y sólo seis meses más tarde fundó la ONG ATTAC (Acción para una Tasa Tobin de Ayuda al Ciudadano), aisló dos problemas centrales: la necesidad estratégica de proponer una respuesta económica de escala global al verdadero adversario, la arquitectura financiera mundial (OMC, BM, FMI y OCDE), identificado como tal a partir de Seattle; y la localización de la contestación en el ámbito de la sociedad civil, de una conciencia ciudadana colectiva, que incluye entre sus principios básicos el ideal de movilizar las voluntades sin confundir las conciencias.

Así, el sujeto histórico emergente apunta a reconocerse en el espacio de la nueva ciudadanía –y hacia el futuro, en la formación de democracias participativas, complementarias y no sustitutivas de la democracia representativa–, ocupada en desarrollar un proyecto social y cultural que corrija y evite los desajustes y perversiones en curso. Como ha recordado Václav Havel, el elemento fundamental y más legítimo de la democracia es la sociedad civil, cuya fortaleza y pleno sentido descansa sobre tres pilares: las asociaciones privadas voluntarias, la descentralización del Estado y la delegación del poder político en entidades independientes ciudadanas –esto es, la redistribución del poder y la corresponsabilidad–.

Mientras tanto, episodios del tipo del protagonizado por los *pique-teros* en Argentina apuntan, en el marco de la crisis de los sistemas democráticos clásicos, al nacimiento de fenómenos como el que ya se conoce con el nombre de *emergencia de los invisibles*. Todo un síntoma de los mares de fondo y las reivindicaciones de pan y dignidad que la injusticia generalizada, la corrupción, la ineficiencia política y el yugo de los organismos económicos internacionales puede poner sobre la mesa incontroladamente, en una dinámica imprevisible, a la que ha de sumarse no sólo la tendencia dialéctica de los Estados occidentales a limitar las libertades civiles, tras el 11-S, sino también las acciones terroristas de alta y baja intensidad como forma de confrontación o reivindicación frente a los gobiernos. Un nuevo escenario de conflicto en el que la violencia incontrolada y arbitraria se abate sobre la sociedad civil, mientras parece generalizarse, en diversos formatos, –manifestándose como rasgo de época–, complementando la violencia tradicional de los Estados. Reacciones impulsadas, en buena parte, por los excluidos,

*Se trata de
abordar la
reconstrucción,
recuperación y
reorientación
de la
democracia en
la perspectiva
de la
democracia
ciudadana*

los miserables, los sojuzgados, que conectan con las condiciones extremas de vida, los límites de la supervivencia y la injusticia social, provocando ya miles de muertes y creando polvorines sociales aquí y allá que ponen en riesgo la seguridad y mueven a los gobiernos a militarizarse y a impulsar políticas restrictivas que amenazan las conquistas históricas de libertad, como está ocurriendo en Estados Unidos.

La reformulación de la democracia, en el nuevo contexto sociocultural de las sociedades avanzadas y la crisis del Estado del bienestar frente a la privatización, la desregulación y los criterios de eficacia –tan controvertidos– del modelo neoliberal, conduce a la revisión del papel de los ciudadanos y a reflexionar sobre las potencialidades de una nueva ciudadanía que participe directamente en la gestión y configuración de su propio entorno y recupere su capacidad de decisión, mediante fórmulas regladas, aún por diseñar. Una operación que conlleva, correlativamente, la redefinición del papel y las competencias formales de los representantes políticos, del papel de los Estados –y otros escalones de la Administración–, y de la forma de los cauces de expresión de la concurrencia pública. En fin, se trata de abordar la reconstrucción, recuperación y reorientación de la democracia en la perspectiva de la democracia ciudadana: debatir y reconfigurar los ámbitos y dinámicas, no de la escucha o la interlocución, sino del poder de decisión y, mientras tanto, de las estrategias sociales y políticas que orienten el proceso. Ciertamente, se trata de invertir la tendencia a la tecnificación y reducción de la democracia estimuladas por las prácticas de gobierno neoliberales norteamericanas desde comienzo de los setenta, como respuesta a un tiempo histórico en el que las demandas y la contestación sociales apuntaban la emergencia de sistemas sociales complejos. Fórmulas y actitudes que han profundizado en el proceso de *extrañamiento de la política*, esto es, en la sustitución del poder del Estado por el poder del mercado y de las empresas, al tiempo que se reducía el ámbito de participación de la ciudadanía. Un proceso que está objetivado. Tras las explosiones sociales de finales de los sesenta, en 1973 la Comisión Trilateral, creada por Rockefeller y otros grandes empresarios de EE.UU., Europa y Japón, encargó a tres expertos universitarios un informe sobre los problemas de gobernabilidad de los estados. Sus análisis se recogen en el estudio titulado *Crisis de la democracia. Informe sobre la gobernabilidad de las democracias*, publicado en Nueva York en 1975. En un artículo reciente, José Vidal-Beneyto, director del

Un paisaje en el que la política aparece como víctima y el mercado y las demagogias populistas o de cualquier otro tipo, como beneficiarios

Lo político en buena medida está secuestrado por la maquinaria partidaria y corporativa de la política profesional

Colegio de Altos Estudios Europeos de París, resumía cuáles fueron sus conclusiones: “Su tesis parte del hecho de que las expectativas sociales de los ciudadanos y sus demandas al Estado han aumentado considerablemente, mientras que la capacidad y los recursos de éste para satisfacerlas han disminuido, lo que genera frustración y rechazo. En una perspectiva más general, el *Informe* sostiene que la crisis política de las sociedades desarrolladas se debe a la aceleración del progreso tecnológico y a la complejización de su entramado social, condiciones a las que la gestión pública es incapaz de dar respuesta suficiente. Por ello, predicar una mayor participación de los ciudadanos en la vida política y exigir mayor responsabilidad y protagonismo al Estado, lejos de hacer más gobernables nuestras democracias, agrava sus deficiencias. De aquí que la solución consista en disminuir la participación ciudadana, en tecnificar la conducción de la sociedad y en confiarla a los actores sociales [...] y a unas pocas instituciones”. Aquellas propuestas salidas del laboratorio de ideas políticas de la Trilateral hace algo más de un cuarto de siglo son hoy ideología, dogma y práctica generalizada en el mundo desarrollado. Invertir la dirección de esta concepción, consolidando el papel de la ciudadanía, es el desafío del presente.

Hoy, el modelo dominante pugna por adelgazar la capacidad de intervención de los estados transfiriendo importantes espacios de decisión al difuso transnacional y a organismos económico-financieros internacionales de naturaleza no democrática (OMC, FMI, Banco Mundial...). Un paradigma mundial de vampirización y encriptamiento de la política que se sustenta, para imponerse, en “una construcción ideológica que justifique su existencia y legitime su ejercicio” en los términos más propicios para su hegemonía: “el declive del militanismo y la atonía ciudadana; los límites y funciones de los Estados y del poder público [...]; el rechazo del conflicto y la reivindicación del consenso como base del buen funcionamiento social; el imperativo de la modernización, siguiendo las pautas de los países occidentales, como condición del progreso; (y) la eficacia y el éxito personal como baremos únicos para evaluar las acciones individuales y colectivas” (J. Vidal-Beneyto). Todo bien lejos del histórico y eficaz ideal que encierra la “capacidad social y colectiva de hacer cosas” (Xerardo Estévez), comenzando por tomar los ámbitos locales como esfera de esa acción comunitaria.

La insuficiencia del actual sistema democrático, acentuada por la globalización económica, la pérdida de credibilidad de los propios

partidos políticos y las fracturas cada vez mayores entre partidos y ciudadanos, e incluso por el rol desempeñado en la estructura del poder por los medios de comunicación, hace crecer la desconfianza y el escepticismo de los ciudadanos en la delegación pública de la voluntad popular. Un paisaje en el que la política aparece como víctima y el mercado y las demagogias populistas o de cualquier otro tipo, como beneficiarios. Lanzarote, con una vida pública minada por la corrupción y la endogamia, constituye un buen ejemplo del alejamiento voluntario de la política, según deja leer el 48% de abstención en las elecciones de 1999. Sin duda, los partidos políticos continúan hoy siendo necesarios, aunque insuficientes para encauzar las inquietudes y la voluntad de la ciudadanía a la hora de participar en los asuntos públicos y para representar sus intereses con independencia y justicia. Pero sabemos al mismo tiempo que la cosa pública no es monopolio del sistema. Por lo tanto, la demanda de mayor participación de la ciudadanía no tiene que ver con la ruptura del Estado, sino con la petición de un Estado más social y democrático que interprete y ejecute con eficiencia el interés público y la soberanía popular y disponga los mecanismos de deliberación y gestión compartida que permitan su consecución. Significa, en última instancia, una reivindicación radical de la política.

Pero guarda también relación con la naturaleza del proceso de toma de decisiones y de configuración del gran espacio de la utilidad pública y el interés general, susceptible de ser moldeado hacia el futuro como un espacio compartido entre Estado y Tercer Sector no lucrativo (asociacionismo) o Estado y ciudadanía organizada –en todo caso, un Estado penetrado por los ciudadanos autónomamente–, bajo el impulso de la cooperación y la corresponsabilidad. En nuestros días, lo político en buena medida está secuestrado por la maquinaria partidaria y corporativa de la política profesional –y por las concepciones autoritarias de la práctica democrática formal–, impidiendo, bajo el pretexto de la representación, la participación, la recuperación de la soberanía de los ciudadanos y la producción de tejido democrático variado. Invertir el modelo liberal de legitimidad democrática, recuperando la ciudadanía activa y el derecho al ejercicio de la política desde la condición de ciudadano, o sea, la socialización de la política, es una tarea urgente. De otro modo, y desde una nueva lectura de la sociedad civil, Marcos lo ha expresado sugerentemente: el objetivo es *ciudadanizar la política*. Y ha precisado alguna dirección de interés: “El revolucionario se plantea: tomo el poder y desde arriba transformo las cosas... El rebelde social organiza a las masas y desde abajo va transformando sin

Vivimos momentos de recorte de libertades públicas y de violencias institucionales de diverso signo bajo la coartada de la persecución del terrorismo

tener que plantearse la cuestión de la toma de poder”. La fortaleza democrática descansa en la capacidad de los ciudadanos para organizarse autónoma y articuladamente para participar sustancialmente en la vida pública. Una organización y articulación que alcanzan su máxima eficacia y su razón de ser en el diálogo y la coparticipación con las administraciones, superando los hábitos reivindicativos, y en la construcción de un tejido de redes abiertas que, desde la proximidad, se asocian en un proyecto de cooperación a través de la incorporación a estructuras reticulares de ámbito supralocal.

La deriva del mundo y las implosiones y explosiones de violencias nuevas y diversas descartan complacencias. Baudrillard ha advertido que “la mundialización liberal culmina en una mundialización policial”. Somos testigos de ese sombrío panorama. Vivimos momentos de recorte de las libertades públicas y de violencias institucionales de diverso signo bajo la coartada de la persecución del terrorismo, mientras se consolida un repugnante clima de imposición ideológica apoyado en binarismos morales de legitimación maniqueos y falaces –eje del bien/eje del mal–. Un salvoconducto retórico que sirve para dar cobertura a la militarización y la regresión tanto del Estado de Derecho como de las conquistas sociales e incluso la quiebra del Derecho y los organismos políticos internacionales (ONU). Y que, sin embargo, se inhibe a la hora de discutir la doctrina de los ataques preventivos promovida por EE.UU., o de frenar el terrorismo de Estado, por ejemplo, la indignidad atroz que Israel está cometiendo con el pueblo palestino, ignorando las resoluciones de Naciones Unidas y los derechos humanos. Pero la secuencia regresiva de la mundialización no está todavía completa. Por desgracia no estamos aún en el peor de los escenarios, pues la lógica del autoritarismo democrático y la obsesión por la seguridad en los países ricos –la polarización de la democracia en el orden público–, es decir, la sublimación refinada del control social y la extorsión de la libertad, tienen su penúltimo peldaño, como apuntaba Bourdieu poco antes de morir, en la generalización del *Estado penitenciario*. ¿Un Exceso? California ya emplea más presupuesto en cárceles que en recursos destinados a gasto universitario, y Brasil gasta en seguridad el 10% de su PIB, el equivalente al PIB de Chile. El desbordamiento de la injusticia hace emerger la violencia y el autoritarismo como gestos mundializados de la barbarie posindustrial. Si hubiera esperanza, sólo desde la refundación ciudadana y solidaria –compleja– de la política sería posible girar el signo de la época.

El desbordamiento de la injusticia hace emerger la violencia y el autoritarismo como gestos mundializados de la barbarie posindustrial



Salvar Lanzarote: un compromiso político

Mario Alberto Perdomo

Lanzarote, invierno de 2002. A cinco meses de las elecciones autonómicas, insulares y locales. La Isla va fatal y las Administraciones Públicas son incapaces de resolver los problemas que tiene planteados. Entre los partidos políticos tampoco se vislumbran soluciones. ¿No habrá llegado el momento de hacer algo más? ¿Qué hacer? ¿Se puede hacer algo más? Conocemos las preguntas, pero no las respuestas. Este trabajo pretende aproximarse al lugar donde se encuentran las respuestas, un lugar seguramente por construir. Colectivamente. En cualquier caso, un lugar quizá coincidente con los interrogantes que se formula la izquierda alternativa en toda Europa.

El planteamiento que aquí se esboza no es ajeno a los procesos de acomodamiento de la socialdemocracia europea, a la fragmentación de la izquierda y a las nuevas vías que ya se exploran de redefinición de la izquierda en los últimos años, marcados por un ascenso de los partidos conservadores.

Puede adelantarse, sin embargo, el propósito que anima esta reflexión al subrayarse que es urgente dinamizar los procesos sociales que pretenden ofrecer alternativas a los problemas que padece la Isla, el crecimiento turístico, así como sus consecuencias de todo orden, un planteamiento éste que entronca con los grandes problemas del mundo actual. Crecimiento económico desigual, aumento demográfico, consumo desproporcionado de recursos no renova-

Lanzarote se encuentra en el mapa de un debate más amplio marcado por las consecuencias del crecimiento, la integración social y la sostenibilidad

El cambio que se propuso hace cuatro años con la Estrategia se salda provisionalmente con una decepción

bles, injusticia social, ruptura del diálogo Norte/Sur o corrientes inmigratorias desde el Sur hacia el Norte, insostenibilidad global o inseguridad en sentido amplio y estricto son algunos problemas parciales vinculados a cierto modelo de desarrollo que preocupan en Europa y en la Isla. Así pues, Lanzarote se encuentra en el mapa de un debate más amplio marcado por las consecuencias del crecimiento, la integración social y la sostenibilidad.

Siendo la intención de este trabajo reflexionar sobre los procesos sociales que se encaminan a contener el crecimiento turístico y avanzar hacia la sostenibilidad, trata de integrar por ello los aspectos políticos, sociales y personales.

Un escenario decepcionante

La situación actual de Lanzarote no invita al optimismo. Más bien parece que ha empeorado en numerosos aspectos. Además de la ineficiencia de las Administraciones Públicas, la razón fundamental de que se extienda la percepción de que las cosas hayan ido a peor obedece, quizá, al escasísimo nivel de aplicación de las ocho líneas de acción y 28 programas definidos por la Estrategia *Lanzarote en la Biosfera*, una propuesta que excede del ámbito competencial del Cabildo y, a fin de cuentas, la herramienta metodológica y política ofrecida por, digámoslo con claridad, el socialista Enrique Pérez Parrilla al conjunto de la sociedad para intentar reconducir los procesos negativos detectados a finales de la década pasada. Entendida como el marco que define un adecuado proyecto de isla vinculada a los retos del planeta, es indudable que en torno a la Estrategia no se concitó un acuerdo político y social lo suficientemente sólido como para aunar los esfuerzos que se precisaban para desarrollar los programas propuestos.

A la vista de los datos disponibles, no ha sido suficiente la aprobación y entrada en vigor de la Revisión del Plan Insular de Ordenación (PIO) para variar las tendencias analizadas en el *Documento Inicial* de la Estrategia, en 1997. La medida, popularizada bajo el nombre de *moratoria turística insular*, no ha podido impedir que gran parte de las 10.707 plazas turísticas programadas hasta el año 2010 prácticamente hayan sido construidas ya, en lugar de ejecutarse lentamente a lo largo del decenio. Reconociendo que tal vez llevaban razón las voces que entonces reclamaban *crecimiento cero*, el resultado es que, al tirar la construcción con destino turístico aceleradamente y en tan breve plazo de tiempo del conjunto de la economía insular, la mayoría de los indicadores sociales y ambientales ofrecen resultados peores que hace cuatro años.

Las previsiones más pesimistas se han cumplido, lamentablemente, viéndose seriamente amenazada la calidad del desarrollo insular debido a que la capacidad de carga de la isla se encuentra claramente agotada. El cambio que se propuso hace cuatro años con la Estrategia *Lanzarote en la Biosfera* se salda provisionalmente con una decepción, aunque no será hasta el año 2010 cuando se deba evaluar definitivamente el proceso. A la hora y en el momento de realizar la evaluación habrá que tener en cuenta la profunda crisis política en la que está sumida Lanzarote desde hace años: ni el PP ni el PIL ni CC ni el PSC-PSOE han estado ni están a la altura de las circunstancias, con la salvedad de los empujones realizados por Enrique Pérez Parrilla desde 1986. Enorme tarea para un hombre solo, aunque haya sido y sea el presidente del Gobierno insular.

Lanzarote necesita un cambio.

El que no hayan fructificado las medidas que la Estrategia *Lanzarote en la Biosfera* propuso en 1998, incluida la Revisión del PIO, no cuestiona la validez y vigencia de sus planteamientos. Tres razones pueden explicar la situación actual.

La primera es el bajo nivel de aplicación de la Estrategia, como lo ha corroborado el informe evaluador sobre su grado de ejecución solicitado por el Consejo de la Reserva de la Biosfera. La segunda se deriva de la eliminación, a petición de los ayuntamientos turísticos, de los dos quinquenios inicialmente incorporados en la nueva programación del crecimiento turístico establecida por la Revisión del PIO, originando que la mayor parte de las 10.707 plazas alojativas autorizadas hayan intentado construirse de inmediato, lo que ocasionó una nueva fase de relanzamiento económico. Y la tercera es que ni las Administraciones Públicas (Gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamientos) ni los partidos políticos, ni los agentes económicos y sociales, ni la propia población, acaban de asumir que el reto de la sostenibilidad es una responsabilidad de todos, sin excepción.

De lo antedicho se desprende que el cambio que precisa la Isla se concreta, de un lado, en la urgente necesidad de actualizar, volver a debatir y dinamizar la Estrategia, haciendo copartícipe de ese objetivo al conjunto de las instituciones públicas y la sociedad, y, de otro, que Lanzarote ha agotado sus posibilidades para contener el crecimiento turístico, prácticamente, con el marco jurídico y administrativo en vigor en la Comunidad Autónoma. De ahí que se haya propuesto su modificación para impedir que se construya una cama más después de 2010, una tarea que compete al Gobierno de

Superar viejos y estériles antagonismos para sellar acuerdos de mínimos desde una alianza amplia que ofrezca salidas al estancamiento socio-político insular

Canarias a través de las Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias, pero que, de momento, no parece que vaya a ser contemplado.

La clave del desafío que tiene planteado la Isla no radica en su incapacidad para diagnosticar la situación o para ofrecer respuestas a los problemas. No. En el pasado reciente la Isla en su conjunto ha dado sobradas muestras de ser capaz de reaccionar con imaginación y creatividad ante los retos del desarrollo, generalmente desde la sociedad civil, demostrando una enorme vitalidad a la hora de analizar la situación insular y proponer soluciones concretas a los problemas.

La política y los políticos se han convertido en un problema objetivo, en lugar de erigirse en una herramienta para resolver los problemas colectivos

A pesar de las dificultades que se enumerarán, no hay razón para no confiar en la capacidad de respuesta de los sectores más progresistas de la Isla a los problemas que actualmente tiene planteados, un impulso renovador que compete, cada vez más, a nuevas generaciones de lanzaroteños. Los efímeros períodos de esplendor y rápida desaparición de viejos monocultivos como la barrilla y la cochinilla en el siglo XIX, o la pesca en el XX, son experiencias todavía recientes de las que aprender para hacer del turismo una actividad duradera en el tiempo y sostenible en sus patrones.

No obstante, para que el cambio fructifique, se necesita que entren en juego otros factores, desde la necesaria articulación de los sectores sociales comprometidos con dicho cambio hasta una profunda regeneración de los partidos políticos, pasando por la plasmación de nuevos compromisos individuales y colectivos con los retos que tiene planteados la Isla, de modo que aparezcan en escena nuevas personas, en gran número, que ofrezcan nuevos impulsos a estos episodios. El objetivo no puede ser otro que superar viejos y estériles antagonismos para sellar acuerdos de mínimos desde una alianza amplia que ofrezca salidas al estancamiento socio-político insular.

Un contexto político-institucional adverso

La tarea que la Isla tiene ante sí requiere delimitar las responsabilidades públicas y privadas, colectivas e individuales, de todos cuantos, de una forma o de otra, tienen algún grado de compromiso en el progresivo deterioro de la Isla ante la imposibilidad de reconducir el desarrollo insular hacia cauces más respetuosos con el medio ambiente.

Por supuesto que, siendo el Cabildo Insular el promotor de la Estrategia y de su acción estrella, la Revisión del PIO, un mínimo sentido de la crítica hace que la primera responsabilidad recaiga

sobre esta institución. Porque, más allá de los loables esfuerzos realizados por contener el crecimiento turístico, la primera Corporación Insular no ha sido capaz de poner en marcha la mayoría de los programas definidos en la Estrategia *Lanzarote en la Biosfera* que son de su exclusiva competencia. Es justo reconocerlo, como lo es también señalar las responsabilidades que recaen en el Gobierno del Estado, el Gobierno de Canarias y los ayuntamientos, en general, cada uno en su ámbito competencial, al evidenciar un nulo interés por reorientar sus políticas hacia fórmulas de desarrollo económico y social más atentas al medio natural, quizá con la única excepción de Tinajo.

Difícilmente se pueden reconocer las razones de esta situación si no se las conecta íntimamente con la inestabilidad política e institucional que sobrevuela el Archipiélago y, particularmente, a Lanzarote en los dos últimos lustros y que se manifiesta de varias maneras. Seguramente, la primera manifestación es la propia incapacidad de las Corporaciones Locales para diagnosticar correctamente los viejos problemas, anticiparse a la aparición de otros nuevos y, consecuentemente, definir y ejecutar las oportunas políticas correctoras. La consecuencia inmediata es la creciente pérdida de crédito de las instituciones públicas ante una población y sus organizaciones civiles que, en cambio, evidencian una mayor capacidad para tomar el pulso a los desafíos contemporáneos derivados del desarrollo.

Los más claros exponentes de la creciente desconfianza de la población hacia los partidos políticos, los gobernantes y las instituciones públicas son la negativa a incorporarse a la vida pública de los sectores más informados y mejor preparados, que los sucesivos *Sociobarómetros* del Gobierno autónomo revelen que son los lanzaroteños los canarios que peor concepto tienen de la actividad pública y los partidos políticos, o los que más piden a los políticos mayor honradez y honestidad, o que los estudios anuales del Centro de Datos del Cabildo detecten que la política y los políticos se han convertido en un problema objetivo, entre los primeros de la Isla a juicio de la población, en lugar de erigirse en una herramienta para resolver los problemas colectivos. La última encuesta de Temas Insulares de diciembre de 2001 arrojaba que ninguno de los ocho políticos de las cuatro formaciones más votadas alcanzaba el aprobado. Una población por otro lado, que piensa que con la estricta aplicación de la legislación vigente se evitarían muchos de los problemas actuales. Son realidades la alta abstención, cercana al 50%,

Las Corporaciones Locales lanzaroteñas ocupan los últimos lugares del Archipiélago en inversión por habitante

y la baja participación en el espacio público.

Se observa, por último, cierta tergiversación del lenguaje relacionado con la sostenibilidad, que se ve sometido a un vacío de sus contenidos, cuando no a un uso perverso, generando confusión y desconfianza entre los destinatarios de los mensajes relacionados con la contención del crecimiento turístico y el avance hacia la sostenibilidad. Cuando no un uso claramente interesado y demagógico del mismo, un doble lenguaje que actúa a modo de máscara tras la que se intentan ocultar las auténticas intenciones de ciertos sectores políticos y económicos favorables al crecimiento turístico.

El problema de la ineficiente gestión presupuestaria

Consideradas en su conjunto, las Corporaciones Locales están en crisis. Una crisis que tiene su corolario en los informes anuales sobre el estado de salud económico-financiera de Cabildos y ayuntamientos que ofrece la Comunidad Autónoma, revelando que las Corporaciones Locales lanzaroteñas ocupan los últimos lugares del Archipiélago en inversión por habitante, mientras que se encuentran en los primeros lugares en endeudamiento por habitante o en la altísima presencia de los gastos corrientes en la estructura general del gasto. Sin capacidad de maniobra presupuestaria, maniataadas por una gestión ineficiente de sus recursos, la acción política se encuentra a la deriva. Esta realidad se ve agravada por la ausencia de proyectos políticos que sintonicen, en la práctica, con el reto de la sostenibilidad.

Este descorazonador panorama se completa con el trato discriminatorio que el Gobierno de Canarias viene otorgando a la Isla desde principios de la década de los noventa del siglo pasado. A medida que Lanzarote registraba altísimas tasas de crecimiento económico y poblacional, incrementándose espectacularmente las demandas de servicios y equipamientos sociales básicos, al menos desde 1994 viene ocupando el último lugar en la relación inversión por habitante. Este sistemático maltrato presupuestario, unido al déficit político y presupuestario de las Corporaciones Locales, ha ido generando tales estrangulamientos y desbordamientos de servicios y equipamientos básicos que puede afirmarse sin temor a equívoco que en Lanzarote se vive peor que hace diez años. Con todo, el Gobierno de Canarias sigue poniendo el acento inversor en las infraestructuras duras, frente a inversiones que incidan en la calidad de vida real de las personas. Y ello a pesar de que los indicadores económicos siguen evolucionando inmejorablemente. Así lo expresa el Producto Interior bruto por persona, que es, junto al de

El Gobierno de Canarias sigue poniendo el acento inversor en las infraestructuras duras, frente a inversiones que incidan en la calidad de vida real de las personas

Fuerteventura, el más alto de Canarias, síntoma evidente del enorme dinamismo que presenta la inversión privada. O que la tasa de paro sea inferior al 7%, aunque en los tres primeros meses del año en curso se evidencia, todavía de manera incipiente, la incapacidad del sistema para seguir creando empleo a los ritmos de los últimos años, manifestándose en ligeros y sucesivos incrementos del paro.

Si los presupuestos públicos expresan la verdadera intención política de un grupo de gobierno, los afectados a las Corporaciones Locales de Lanzarote son deficitarios por escasos y mal gestionados y porque, las partidas resultantes no se destinan a corregir las consecuencias negativas derivadas del crecimiento turístico. Siendo el fondo del problema la mala gestión de los ingresos públicos, ahora más que nunca se visualiza la necesidad de abordar la modernización y el saneamiento de las Haciendas Públicas Locales.

El sector privado, viento en popa

El crecimiento turístico registrado en los últimos cuatro años parece haber tocado techo, habiéndose iniciado un cambio de tendencia hacia la estabilización del sistema que todavía no se detecta con claridad. Una fase expansiva la registrada que se explica por la combinación de dos factores: la aplicación del ahorro empresarial acumulado en la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) y la entrada en vigor del euro. Tanto el ahorro empresarial como el afloramiento de dinero procedente de la caja B se ha concentrado sobre todo en el sector inmobiliario, recalentando la actividad económica. En este contexto, y a la vista de los datos disponibles, ha sido mínimo el impacto causado por el efecto llamada de la Revisión del PIO sobre el relanzamiento del mercado urbano-turístico, a pesar de las voces que señalan lo contrario, intentando culpabilizar a esta medida de la expansión registrada. En Fuerteventura, sin *moratoria*, el crecimiento turístico ha sido mayor que en Lanzarote, y lo mismo aconteció en la costa mediterránea, sin RIC. Esta afirmación se ve corroborada por el estudio sobre la edificación reciente en Lanzarote, cifrando en unas 2.000 plazas la consecuencia del *efecto llamada* de la *moratoria*.

Conviene señalar, por otro lado, que el conjunto del litoral español se ve inmerso en un auténtico huracán inversor en las principales zonas del turismo residencial, debido sobre todo a la presión de la segunda residencia mayoritariamente extranjera. De unos 15 millones de casas en 2001 se espera que el censo se dispare hasta los 25 millones en 2003, lo cual significa un incremento de más del 75%

El crecimiento turístico registrado en los últimos cuatro años parece haber tocado techo, habiéndose iniciado un cambio de tendencia

en el corto espacio temporal de dos años. El banco central alemán estimó hace bien poco que un millón de alemanes tienen la intención de adquirir una vivienda fuera de Alemania y que, de ellos, medio millón miran hacia España.

La bonanza económica ha dejado su rastro en las rentas familiares. Así, la media de ingresos de los hogares de la Isla ascendió en 2001 a 1.406,26 euros, rebajando la pobreza a sólo el 9,4% de la población, exactamente la mitad del conjunto del Archipiélago. Por su parte, la población activa en 2001 ascendía a 46.000 personas, concentrándose el 42,8% de ellos en Arrecife. Estos datos son bastante expresivos de la benigna situación que reflejan los principales indicadores económicos. Sin embargo, la precariedad laboral sigue siendo preocupante, así como la eventualidad en el trabajo, afectando especialmente a los jóvenes.

A pesar de todo, la economía insular presenta las mismas debilidades que hace cuatro años. La primera es la excesiva dependencia del sector turístico y de los servicios. La segunda es el bajo nivel de inversión pública y su incorrecta asignación, cuyas consecuencias negativas suelen manifestarse a medio y largo plazo. Por otro lado, el sector primario sigue su imparable regresión, perdiendo activos (en los últimos cuatro años se perdieron uno de cada dos empleos) y superficie cultivada en el campo. Afortunadamente, la construcción ha rebajado la intensidad de su actividad en el último año, como lo demuestra la sensible caída del consumo de cemento en 2001, dejando de tirar del resto de los sectores con la fortaleza de los últimos años, aunque, sumido en el rodaje que conlleva todo efecto de desaceleración, sus efectos no se visualizarán hasta dentro de unos meses. Y, por último, sobre el comercio, en manos mayoritariamente isleñas en el pasado, se cierne un oscuro futuro derivado de una legislación autonómica muy permisiva con la penetración del capital multinacional. Al hecho de que en los últimos años no se haya producido ningún cambio cualitativo en la economía insular se le suma cierto estancamiento en la afluencia de visitantes y el incremento del parque alojativo, que amenaza los precios del sector y la propia competitividad del turismo insular.

Cierto estancamiento en la afluencia de visitantes y el incremento del parque alojativo amenazan a la competitividad del turismo insular

El conjunto de la economía canaria avanza hacia un escenario de desaceleración económica. El comienzo de un período de estabilidad económica conlleva, en definitiva, el sosiego que se necesita para pensar y actuar adelantándose al futuro, que es el requisito básico previsto por la Revisión del PIO para alcanzar sus dos grandes metas: aplicar políticas sostenibles en todos los órdenes de la

vida insular y buscar la manera de rebajar drásticamente el techo establecido por el PIO, ya que después del período de vigencia de la *moratoria turística insular*, en 2010, todavía podrán construirse en la Isla otras 36.000 plazas turísticas, además de unas 56.000 residenciales.

Una isla insolidaria que avanza hacia la insostenibilidad

La percepción popular se refiere negativamente al exceso de edificación turística, a la fuerte corriente inmigratoria o al clima de inseguridad ciudadana. Forman parte de las conversaciones cotidianas. Pero tales percepciones tienen un fundamento real. El crecimiento turístico programado para diez años, hasta 2010 (10.707 plazas hoteleras) se ha ejecutado en apenas dos, dinamizando la construcción, generando paisajes desoladores y extrayendo ingentes cantidades de áridos. Entre 1996 y 2002, la edificación turística y no turística ha crecido un 70%, mientras que las extracciones de áridos se han multiplicado por dos en el corto espacio de tiempo de los seis últimos años.

Por otro lado, la densidad de la población (habitantes/kilómetro cuadrado) ha aumentado en un 30% y la densidad de vehículos (vehículos/kilómetro cuadrado) en más de un 40% en el mismo período. Lógico que estos datos corroboren la opinión negativa de la población sobre estos temas. Ya en 2000, se contabilizaron 183,5 personas por kilómetro cuadrado, cifra que se disparaba espectacularmente a 700 habitantes/kilómetro cuadrado en la capital insular y su conurbación (Costa Teguise, Arrecife, Playa Honda y Puerto del Carmen). Debe recordarse que la densidad de población en 1987 era sólo de 90 personas/kilómetro cuadrado, lo cual quiere decir que se ha duplicado en el corto espacio de 13 años.

Es la explosión demográfica, consecuencia inmediata y directa del crecimiento turístico, lo que más preocupa, convirtiéndose en el principal problema para los isleños. Entre 1996 y 2001, en sólo cinco años, la población de la Isla aumentó en casi 35.000 personas (frente a las 22.000 del período 1986-97), hasta el punto de que si en 1996 había 2,5 naturales por cada inmigrante, en 2000 eran sólo 1,2. Dicho de otro modo, en 1996, tres de cada diez residentes eran inmigrantes, en 2000 ya sumaban cuatro y en 2002 de cada diez residentes la mitad no ha nacido en la Isla.

En el último decenio (1991-2001), la población creció un 58,76%, el más alto de las Islas con la única excepción de Fuerteventura. Paradójicamente, a pesar de tan potentes incrementos demográficos, en el período analizado no se ejecutó ni una sola vivienda de

Pese al incremento demográfico no se ejecutó ni una sola vivienda de protección oficial en la última década

protección oficial, incrementándose constantemente el precio de los alquileres y de las viviendas en venta y subiendo de tal manera el precio del suelo hasta rondar el 50% del valor final de lo construido.

Otro dato es que en la Isla se produce un delito cada 35 minutos, aproximadamente, aunque el Gobierno de Canarias mantiene que la realidad es peor de la que presentan los datos del Ministerio del Interior. Vistos los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas, no es descabellado proponerse desactivar la siguiente ecuación: fortísima inmigración + inseguridad ciudadana = bomba de demagogia política. A la hora de desactivarla actuando preventivamente, es preciso subrayar que cuando se formula a los residentes la pregunta “¿qué entiende por inmigración en la Isla?”, contestan en un 80% lo siguiente: magrebíes, africanos subsaharianos y sudamericanos. Es decir, pobres de otras razas, religiones, costumbres... Asimismo, se identifica el aumento de la inseguridad ciudadana con el auge inmigratorio.

El enemigo viene de afuera, para muchos que se detienen sólo en los síntomas del problema renunciando a analizarlo en su contexto real, cual es que los inmigrantes ricos están viniendo, y vendrán más, atraídos por el clima benigno y la inserción de la Isla en el marco político y cultural europeo, mientras que los inmigrantes pobres están llegando, y seguirán haciéndolo, legítimamente en busca de nuevos y más dignos horizontes de vida, atraídos por el crecimiento económico y la generación de rentas que se registran en la Isla.

No es suficiente, pues, señalar que Lanzarote padece un proceso de sobre presión demográfica sin aludir a sus causas reales, lo cual obliga a realizar un ejercicio intelectual riguroso que conduce, inexorablemente, a considerar el crecimiento turístico y económico como el motor de tales procesos. Como tampoco se puede intentar atajar la sobre presión demográfica, siendo cierto que la capacidad de carga poblacional de la Isla es limitada, sin tratar de establecer límites al crecimiento turístico. Estas reflexiones se enmarcan en una corriente de pensamiento extendida que propone una mayor apertura de las fronteras europeas, favorecer el desarrollo del tercer y cuarto mundos y la aplicación de potentes políticas inversoras en los países y zonas receptoras, tendentes a favorecer la integración social de la creciente e inevitable diversidad cultural.

Otro aspecto a considerar es que empeora la percepción que la población tiene de algunas cuestiones sociales básicas. El transpor-

Los lanzaroteños no alcanzan a ver que el medio ambiente, el territorio y las actividades humanas son un todo integrado

te público está peor valorado hoy que hace cinco años y lo mismo sucede con la sanidad y la educación. En materia educativa, la Isla registra el mayor porcentaje de suspensos en BUP y COU de todo el Archipiélago. Pero el caso más llamativo es el sanitario. La valoración (de 1 a 10) que le otorgaba la población era de 6 en el año 97, cayendo a 5,5 un año después hasta situarse en un 4,4, nota de suspenso, el año pasado.

La sensibilidad de los lanzaroteños hacia los temas medio ambientales sigue patente, a pesar de todo. Así lo demuestra EcoCanarias 2001 cuando sitúan la conservación del medio ambiente como el problema más importante de Canarias, la acción más urgente que hay que realizar y la más importante a ejecutar en los próximos diez años. En general, los lanzaroteños declaran estar muy preocupados con aspectos tan diversos como la destrucción de la capa de ozono, el cambio climático o la contaminación de los alimentos y si eso no se corresponde con sus estilos de vida personales, una posible explicación podría ser que no alcanzan a ver que el medio ambiente, el territorio y las actividades humanas son un todo integrado, concibiendo los temas ambientales como partes aisladas y sin relación entre sí. Ello no impide que se perciba claramente la relación directa existente entre exceso de construcción y situación medio ambiental en la Isla, o que sean incuestionables los datos aportados por los indicadores socio ambientales, expresando un claro desbordamiento en materias como agua, energía o emisiones de gases contaminantes a la atmósfera.

La reiterada deslealtad de dos ayuntamientos

Por Ley, la aplicación práctica del PIO depende en gran parte de los ayuntamientos de la Isla, que han de velar por su observancia en su propio planeamiento o en la concesión de licencias de obras. Si un Plan General Municipal no es aplicado en el sentido en que ha sido aprobado e infringe el PIO, al Cabildo no le cabe más que la impugnación ante los tribunales de la jurisdicción contencioso administrativa.

Particularmente graves son las repercusiones de las licencias urbanísticas supuestamente concedidas en contra del PIO. En las licencias de obras que los ayuntamientos conceden ante una petición de construcción turística se concreta el cumplimiento del número de plazas o la categoría del establecimiento fijados por el PIO y recogidos por el planeamiento general municipal. Si un ayuntamiento contraviene esas disposiciones de cumplimiento obligado, el Cabildo no puede paralizar obras y oponerse a las mis-

El problema de Canarias reside en que una docena de ayuntamientos turísticos están generando más del 90% del crecimiento y gran parte de la insostenibilidad

mas de manera efectiva: sólo podrá hacerlo recurriendo en los tribunales esas licencias infractoras.

Esta realidad responde a una cultura urbanística de exceso de celo competencial por parte de los ayuntamientos que no será desterrada hasta que arraiguen las nuevas concepciones de la ordenación territorial. Por ello, la legislación canaria debería profundizar en la adopción de medidas que hagan efectiva la adecuación de los intereses locales al interés supralocal predominante, desde la consideración de la isla como un sistema integrado.

El problema en Canarias reside en que una docena de ayuntamientos turísticos (dos en Lanzarote) están generando más del 90% del crecimiento turístico y gran parte de la insostenibilidad de todo el Archipiélago, afectando a casi dos millones de personas. En lugar de aplicar políticas recaudatorias homologadas, estos ayuntamientos acuden al recurso fácil de la obtención de ingresos mediante la concesión de licencias urbanísticas con fines turísticos. Al financiarse mediante esta vía, provocan una perversión en el sistema, cual es, de una parte, que no cobran los impuestos que debieran a sus vecinos en busca del voto populista, y, de otra, presionan fiscalmente al inversor turístico. Ello les exige apoyar el crecimiento turístico, pues se financian con el crecimiento del parque alojativo y no mediante los recursos fiscales que la legislación les confiere.

Cada vez se plantea con más fuerza, por lo antedicho, la necesidad de reformar las Haciendas Públicas Locales. Resulta esclarecedor, dada esta situación, el camino emprendido por el Ayuntamiento de Tías, que, habiendo alcanzado el techo alojativo establecido por el PIO, tiene al día tanto su censo fiscal como la cuantía de sus tasas e impuestos. La correcta aplicación de las medidas fiscales mantiene a Tías en una situación económico-financiera inmejorable, permitiéndole acometer sus necesidades inversoras y sus políticas de gasto público con amplia solvencia, sin necesidad de demandar más crecimiento de plazas alojativas. Sin duda, un buen referente para el resto de los municipios turísticos.

La realidad es que dos municipios turísticos, Teguiise (PIL) y Yaiza (CC), vienen siendo reiteradamente desleales con el Cabildo Insular y con el PIO. Esos dos municipios albergan casi todo el potencial de crecimiento turístico (entre ambos podrían construir 36.000 plazas nuevas después de 2010), concretándose la deslealtad en lo siguiente:

- Se niegan a ofrecer información sobre las licencias urbanísticas que han otorgado con fines turísticos como es su obligación

*Teguiise (PIL) y
Yaiza (CC)
vienen siendo
reiteradamente
desleales con el
Cabildo Insular
y con el PIO*

legal, por lo que el Cabildo se ha visto obligado a exigirselo por vía judicial.

- No sólo no caducan licencias antiguas que pudieran contravenir el PIO, sino que las prorrogan, favoreciendo un crecimiento turístico del que se embolsan los ingresos a la vez que exportan a los restantes municipios no turísticos las consecuencias negativas de ese crecimiento.
- Han recurrido ante los tribunales de justicia tanto el PIO como la Revisión del PIO, dando cobertura legal a los promotores privados en contra del interés general y la capacidad de carga de la Isla.
- Supuestamente, ambos han concedido licencias urbanísticas contraviniendo la paralización de dos años en el otorgamiento a raíz de la aprobación inicial de la Revisión del PIO y, posteriormente, contraviniendo la nueva programación del crecimiento turístico, obligando al Cabildo a recurrir ante la Justicia.
- Estando a favor del crecimiento turístico, ambos son los principales responsables de la masiva importación de fuerza de trabajo, la insostenibilidad insular y de los colapsos de los equipamientos sociales básicos.

En esta situación, cobra especial interés y sentido la reciente publicación de la Memoria 2001 de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, cuya principal conclusión en materia urbanística y territorial es que son los ayuntamientos canarios los primeros y principales “delincuentes medio ambientales”.

De igual modo, no se puede pasar por alto la existencia de un grupo con fuertes intereses económicos, que, operando sobre todo en Yaiza, aspira a dominar el territorio insular, sometiéndolo a su particular visión del negocio privado muy vinculado a la promoción del suelo.

Esta situación choca frontalmente con los sectores que proponen *crecimiento cero*. Ahora bien, este planteamiento necesita ser guarecido para que prospere, ya que cualquier cambio político que pudiera producirse tras las elecciones de 2003 pudiera frenar estos procesos, generando irrecuperables períodos de involución. Cobra cada vez más sentido, por ello, la idea de un pacto de amplia base social en torno a estos temas, capaz incluso de concretarse en una mayoría política en las principales instituciones insulares.

La sostenibilidad, un reto de rabiosa actualidad

El contexto descrito en la primera parte de este trabajo, político-

Lanzarote sigue mostrando, pese a las adversidades, un gran dinamismo en su tejido social

institucional público adverso y económicamente benigno, en lugar de aceptarlo como inevitable e insuperable, exige redoblar los esfuerzos de aquellos ámbitos de los agentes sociales y las personas comprometidas con un proyecto de isla radicalmente distinto al actual. Lanzarote sigue mostrando, a pesar de las adversidades, un gran dinamismo en su tejido social y cuenta con el capital humano, la experiencia acumulada y la capacidad de innovación que se precisan para seguir intentando modificar el rumbo por el que discurre el desarrollo insular.

A tal fin, la Estrategia de Desarrollo Sostenible *Lanzarote en la Biosfera* continúa siendo un lugar de encuentro inmejorable desde el que actualizar un nuevo proyecto de Isla. Inevitablemente orientado a satisfacer las necesidades de las personas, aunque compatibilizándolas con la preservación de los recursos insulares en el escenario mayor de la preservación de la vida en el planeta.

El de la sostenibilidad es un debate asociado a las sociedades opulentas, entre las que se encuentra Lanzarote

A diferencia de otros lugares, en la Isla se ha intentado reconducir el desarrollo por sendas racionales en diferentes épocas. Está claro que no se ha hecho lo suficiente. Lograr sacar a la Isla de su secular miseria y atraso fue todo un logro, para lo cual se optó por apostar por la industria turística. Pero lo conseguido será flor de un día en un tránsito histórico marcado por la pobreza, la ausencia de expectativas de futuro y la emigración si no se reconduce la situación actual. Piénsese que aunque más de la mitad de la población considera que se vive mejor que hace diez años (atención: un significativo 30% cree que se vive peor), la mitad vaticina que dentro de diez años se vivirá peor. Parece evidente que hay argumentos para el pesimismo.

Hay que volver a intentarlo, aunque el panorama resulte desalentador en apariencia. Entre el 65 y el 90% de la población consultada por EcoCanarias considera, entre otras cuestiones, que es necesario fomentar el transporte público y restringir el privado, proteger la agricultura tradicional, controlar más las construcciones ilegales, limitar la concesión de nuevas licencias urbanísticas o limitar la inmigración.

Lanzarote: ni mejor ni peor

El de la sostenibilidad del modelo de desarrollo es un debate asociado a las sociedades opulentas, entre las que se encuentra Lanzarote tras el fuerte proceso de crecimiento económico experimentado en las últimas décadas, a raíz de la introducción y expansión del turismo de masas. La Isla forma parte del 20% de la población mundial que acapara el 80% de los recursos.

Al crecer y desarrollarse integrándose entre los países desarrollados, la sociedad insular ha emulado los estilos de vida característicos de los países ricos, que son claramente insostenibles y presumiblemente lo serán más en los decenios venideros. A la par, los lanzaroteños han comenzado a mostrar preocupaciones similares a las de otras sociedades en torno a la sostenibilidad global.

Coincidiendo con el despegue de Lanzarote, en los últimos 25 años, la población mundial se ha multiplicado por 1,5, aumentando 10 años la esperanza de vida. En Europa se han establecido 15 millones de inmigrantes en la última década. Se ha multiplicado por seis el PIB mundial y se han duplicado las emisiones de CO₂, generándose desajustes medioambientales como la pérdida de la capa de ozono, la lluvia ácida, la desaparición de hábitat o el cambio climático. Todo ello fruto de las vertiginosas transformaciones acaecidas en muy corto espacio de tiempo. Problemas con los que Lanzarote puede reconocerse con facilidad: la situación de isla no es ni mejor ni peor que en otras partes de nuestro entorno cultural. A pesar de ello, a menudo se percibe alrededor de las propuestas planteadas para encauzar el desarrollo insular un tono de pesimismo tal que parece que lo que sucede en la Isla es más grave que en otras zonas.

Cuando Lanzarote se interroga sobre sus patrones de desarrollo presentes y futuros comparte una preocupación de dimensiones planetarias y, en el fondo, al proponerse medidas de corte sostenibles que aplicar en la Isla, se está sugiriendo contribuir a hacer más viables las condiciones de vida en el planeta. Por lo tanto, los obstáculos con que tropieza la sociedad insular en su anhelo de avance hacia la sostenibilidad son los mismos que en otros lugares desarrollados del mundo. De ahí que cobre mayor actualidad que nunca la premisa que dice: piensa local y globalmente y actúa local y globalmente. No obstante, las dimensiones de la Isla siguen ofreciendo una escala adecuada para abordar y tratar de resolver los problemas detectados.

Las oportunidades del cambio

En las mismas dificultades se encuentran las oportunidades para cambiar, como sería la generalización entre la población de que la isla necesita parar ya y no puede afrontar las expectativas de crecimiento potenciales que permitirían duplicar el desarrollo de las zonas turísticas, si se contabiliza la segunda residencia. Encontrándose agotada su capacidad de carga, la Isla requiere aplicar un régimen urbanístico-turístico excepcional, principalmente en

La sociedad insular ha emulado los estilos de vida característicos de los países ricos, que son claramente insostenibles

*El primer
requisito es un
nuevo liderazgo
político en
torno a un
nuevo modelo
de desarrollo
insular*

sus zonas turísticas. De la misma situación se extrae que es la población local la que mejor conoce qué es una moratoria o sabe de ecotasas en Canarias. Y los más favorables a su aplicación.

El *Life Lanzarote (2001-2004)*, respaldado por la Unión Europea, es asimismo una oportunidad para perseverar en la corrección del rumbo por el que hoy discurre el desarrollo insular.

Son una oportunidad las elecciones autonómicas, insulares y locales previstas para la primavera de 2003, posibilitando a los aproximadamente 80.000 electores de la Isla emitir su voto de forma responsable con opciones políticas que de verdad defiendan los procesos hacia la sostenibilidad, en especial aquel porcentaje del censo electoral que no acudirá a las urnas si no se pone remedio (unas 40.000 personas), de los cuales una porción significativa aguarda proyectos y propuestas políticas ilusionantes.

Sigue siendo una oportunidad la vigente Revisión del PIO, que no permitirá que se construyan más camas de las estipuladas hasta 2010. Habiéndose construido prácticamente casi todas las plazas turísticas contempladas en la Revisión del PIO en apenas dos años, hasta el año 2010 hay tiempo suficiente para que, una vez eliminada la angustiada presión urbanística, la Isla entre en una fase de estabilidad que ofrezca a la sociedad lanzaroteña el sosiego necesario para pensar sobre su presente, definir qué futuro anhela y actuar en consecuencia cuanto antes. Ocho años equivalen a dos legislaturas.

También son una oportunidad las propias Directrices de Ordenación General y del Turismo, mediante las que el Gobierno y el Parlamento de Canarias se posicionarán sobre estos temas, evitando que Lanzarote siga encontrándose sola, como en el pasado inmediato. El principal desafío consiste en que el Gobierno y el Parlamento innoven el marco legal permitiendo a corto plazo la desclasificación de suelo potencialmente apto para nuevas edificaciones turísticas, que parece que no.

Es una oportunidad la desaceleración económica que comienza a vislumbrarse y el escenario de estabilidad que se vaticina para los próximos años.

Son oportunidades las reflexiones surgidas en el seno de las organizaciones civiles y su grado de sintonía en numerosos temas, así como los materiales generados en la Isla en el pasado inmediato y las variadas experiencias vividas.

Es una oportunidad los numerosos estudios que indican qué piensa

la población sobre todas estas cuestiones, mostrándose mayoritariamente a favor de seguir explorando nuevas medidas alrededor del desarrollo insular.

Es una oportunidad, quizá la más importante, la exploración de cauces de concurrencia electoral desde los sectores más comprometidos de la sociedad insular.

La construcción excesiva es actualmente el tercer problema más importante de la Isla, valorándose negativamente las construcciones turísticas y su crecimiento futuro. Igualmente, más de la mitad de las personas encuestadas consideran que el turismo tiene muchísimo o mucho que ver con la proliferación de la edificación. Lo peor valorado medioambientalmente por los isleños es el exceso de construcciones turísticas y su falta de control; además, la mitad cree que la situación empeorará en el futuro. Seguramente por esa razón, y en relación con el crecimiento de las plazas turísticas, los estudios arrojan que más de la mitad de la población sostiene que no se debe crecer más, mientras que tres de cada diez se inclinan por un crecimiento muy lento, aunque aumente la afluencia de turistas. Por el contrario, los que consideran que debe creerse sin restricciones suman sólo el 2,5%, y otro 9,3% se inclinan por crecer a medida y en la proporción que aumente el aumento de los visitantes.

Este liderazgo parece que sólo podría venir de la mano de un renovado PSC-PSOE, que no se vislumbra a corto plazo, o...

Los requisitos del cambio

Vistas las oportunidades del cambio, vuelve a surgir de inmediato la pregunta formulada hace unas páginas: ¿Cómo conseguir que se produzcan los cambios que se precisan en las personas, organizaciones civiles, agentes económicos, partidos políticos y administraciones públicas?

El primer requisito es un nuevo, activo y decidido liderazgo político que centre sus esfuerzos en la búsqueda de apoyos en torno a un nuevo modelo de desarrollo insular, un renovado proyecto de isla cuyos perfiles básicos se encuentran en la Estrategia *Lanzarote en la Biosfera* y en el *Life Lanzarote (2001-2004)*. Un liderazgo éste cuya característica fundamental sería el diálogo con la sociedad en su conjunto (y especialmente con los sectores más receptivos hacia la sostenibilidad, también los más desencantados), la perseverancia, la búsqueda de pactos y el cumplimiento estricto de los compromisos adquiridos. Sentarse una y otra vez a escuchar, entender y hacerse entender, aún en la discrepancia, con el compromiso de volverse a sentar debe ser un propósito irrenunciable. Este liderazgo parece sólo podría venir de la mano de un renovado PSC-

PSOE, que no se vislumbra a corto plazo, o de un nuevo proyecto político insular vinculado con lo que ya se da en llamar la tercera izquierda.

La observancia de la legalidad es una condición necesaria a este fin: cumplir y hacer cumplir las leyes, así como acometer la modernización y el saneamiento de las Haciendas Públicas Locales, tiñendo de sostenibilidad real cuantas más partidas presupuestarias mejor con arreglo a los criterios establecidos en la Estrategia.

Además, el renovado liderazgo político debe centrar sus esfuerzos con exquisitez en la generalización de convicciones y comportamientos democráticos; proponer y conseguir cauces de diálogo, participación y representación en los ámbitos públicos y privados que robustezcan la sociedad civil; valorar la cultura del proyecto como instrumento de avance colectivo; y en arremangarse y trabajar propositivamente.

La plural sociedad progresista y sensible hacia la sostenibilidad tiene ante sí un formidable desafío, superar viejos antagonismos y, bajo los mismos requisitos que atañen al liderazgo político, generosamente y atendiendo a lo que une y no a lo que separa, acordar objetivos básicos de un nuevo proyecto de isla.

*...de un nuevo
proyecto
político insular
vinculado con lo
que ya se da en
llamar la tercera
izquierda*

Es imprescindible dejar de construir en Lanzarote, de acuerdo. Ahora bien, ello no es suficiente. Además se necesita atacar los comportamientos individuales, en lugar de culpar exclusivamente a los turistas y al propio sector de los males de la Isla y, por último, situar adecuadamente el papel que ha venido desempeñando y desempeña el Cabildo. También es imprescindible, en suma, superar miradas miopes e interesadas sobre una realidad tan compleja como la insular. En este sentido, la sociedad plural progresista y sensible es corresponsable de la situación actual, evidenciándose la urgencia de superar los discursos pesimistas o negativos por otros más propositivos, reales, concretos y programáticos, así como más comprometidos con una solución real y efectiva de los problemas. A ser posible una solución político-electoral y con vocación de conformar amplias mayorías: con la ambición de gobernar.

Sin embargo, son las actitudes y los estilos de vida culturalmente arraigados los que condicionan la forma en que se gestionan los recursos y priorizan las necesidades. No habrá progreso sostenible sin cambios en las actitudes y estilos de vida personales, resituándose así el desarrollo en torno a las personas, y no al revés.

Los actores del cambio

A la vista de lo esbozado en el epígrafe anterior, y dada la enorme desconfianza existente hacia instituciones públicas, los partidos políticos y los gobernantes, tender puentes de entendimiento es trascendental, tanto entre el nuevo liderazgo político verdaderamente comprometido con los objetivos aquí expuestos con los agentes sociales como entre éstos entre sí.

En este contexto, el gobierno insular, el Cabildo, es el actor protagonista. Así como lo ha sido en el pasado reciente, con todas las deficiencias que se quieran, puede dejar de serlo en el futuro, pues que opte por un camino u otro depende de la(s) mayoría(s) gobernante(s). No es lo mismo un equipo de gobierno sensible con la sostenibilidad y decidido a establecer límites al crecimiento turístico que otro que no lo está. El Cabildo será pieza clave en los próximos ocho años, en especial cuando entren en vigor las Directrices de Ordenación General y del Turismo, que le conferirá (se espera) más competencias que las que tiene hoy en día en materia de ordenación territorial y urbanística. Ejercerlas o dejar de ejercerlas, o ejercerlas en un sentido o en otro, no da igual. Y esta situación no depende sólo de los equilibrios de poder entre los partidos políticos: la sociedad civil comprometida y la ciudadanía tienen mucho que decir. Y deben decirlo. Está en juego seguir avanzando o que se produzca un desmantelamiento de lo poco que se ha alcanzado.

El Consejo de la Reserva de Biosfera, en cuanto foro de encuentro y de participación público-privado, se erige en un actor colectivo en sí mismo, permitiendo el encuentro periódico y reglado entre gran parte de los agentes más representativos de la Isla y que, por su dimensión valiosa, es preciso cuidar y robustecer. La sola idea de reflexionar, aportar y debatir en su seno abre unas posibilidades democratizadoras enormes.

La Fundación César Manrique, El Guincho - Ecologistas en Acción, Foro Lanzarote, WWF/Adena, Ciudadanos por Arrecife, Colectivos por la Convivencia... así como otras organizaciones civiles, han dado sobradas muestras de su compromiso con la sostenibilidad global y local, mereciendo su labor el aprobado (según EcoCanarias) de la población de la Isla. Compromiso que no es suficiente. Dispersos, disgregados, diversos y con enormes dificultades para alcanzar la unidad de acción sobre temas concretos, tienen ante sí el desafío de seguir procediendo como hasta ahora, que ha sido y es importante, o dar un salto cualitativo en su capacidad de intervención en la realidad.

Con frecuencia parece que interesa más mantener las posiciones de cada cual que sumar apoyos en una dirección determinada

¿Será crear una nueva opción, por la vía de la tercera izquierda, la única exigencia de modernidad que la sociedad insular tiene pendiente?

Con frecuencia parece que interesa más mantener las posiciones de cada cual que sumar apoyos en una dirección determinada. Entre la propia sociedad civil y entre sectores de ésta y los partidos políticos o las instituciones públicas más sensibles con los retos de la sostenibilidad. El virtuosismo, la pureza ideológica, el alejamiento del sistema de partidos (que quedan en las manos que quedan), la necesidad de defender las verdades propias y negar las ajenas, los análisis sesgados, mantener alejado al otro de las tesis propias..., todo ello son síntomas de un problema que afecta al conjunto de la sociedad civil, a pesar de los avances registrados en los últimos lustros. Hay que plantear si no ha llegado la hora de arriesgar más. ¿Cuál es la responsabilidad ética de la ciudadanía y la sociedad civil? Reconociendo los méritos acumulados, ¿es posible hacer más de lo que se ha hecho y se está haciendo?

En las personas, cada una en su ámbito, en cuanto seres individuales pero verdaderos sujetos históricos, reside el verdadero potencial del cambio, pudiendo intervenir en los procesos sociales de múltiples maneras.

Finalmente, los partidos políticos verdaderamente comprometidos con la sostenibilidad y con una ética global precisan sintonizar e interiorizar las propuestas de cambio, tanto cuando gobiernan como cuando se encuentran en la oposición. Y si no, habrá que crear una nueva opción. Quizá por la vía de la tercera izquierda. ¿No será ésta la única exigencia de modernidad que la sociedad insular tiene pendiente? Las elecciones de 2003 están a la vuelta de la esquina y muy bien podrían ser el inicio de un camino para cuya exploración se dan condiciones objetivas, para sumar y sumar a los semejantes comprometidos, dar esperanza a los desencantados y ofrecer un nuevo proyecto y praxis políticas.

No intentarlo con la intención de conformar una mayoría de progreso seguramente sea leído en el tiempo como un fracaso y no superar las dificultades como una grave irresponsabilidad.



El enemigo exterior

Apuntes sobre nacionalismo político
y fundamentalismo religioso

Jorge Marsá

Se ha escrito en multitud de ocasiones que los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos instauraban una nueva situación en el mundo. Se habló de ataque a la civilización Occidental o a los sistemas democráticos, de confrontación entre civilizaciones, de la transformación de la guerra... Hemos asistido a una inflación de calificativos para analizar un atentado terrorista; más brutal y execrable que la mayoría, pero un atentado terrorista.

El gobierno de los EE. UU. acometió con prontitud las represalias por los atentados y provocó una guerra en Afganistán, que ha causado más víctimas que las producidas el 11 de septiembre, y tan inocentes como éstas. La continuación de esta política nos sitúa ahora ante lo que denominan la crisis de Irak. Pero, como se preguntaba Timothy Garton Ash, “¿trata de Irak la crisis sobre Irak? No, trata de Estados Unidos”¹.

Por lo tanto, para entender lo que está ocurriendo tenemos que analizar el comportamiento y las motivaciones de quien está provocando esta crisis: el gobierno de EE. UU. Obviamente, las fuentes del conflicto son diversas. Entre ellas destaca que Irak posea las segundas reservas de petróleo más importantes del mundo, tras Arabia Saudita. El acceso a esas reservas por parte de las grandes compañías petrolíferas estadounidenses, que constituyeron un apoyo fundamental para que el presidente Bush fuera elegido, les proporcionaría un significativo incremento de su volumen de nego-

El enemigo exterior lo encarnan siempre los otros, en tanto que pueblo o en tanto que infieles

1. *El País*, 21 de septiembre de 2002.

Nada parece más lógico que ver la atracción del nacionalismo y la del socialismo como mutuamente excluyentes

cio, a la par que facilitaría a los EE. UU. el control del precio del crudo y la disminución de la dependencia de un régimen como el saudí, en cuarentena desde los atentados de Al Queda².

No obstante, la pretensión de este artículo no es abordar el conjunto de causas que subyacen en el conflicto, sino indagar exclusivamente en una de ellas: la reconstrucción del enemigo exterior que está acometiendo el gobierno estadounidense, y realizar un somero análisis de los fundamentos sobre los que se asienta este comportamiento.

Otros pueblos, otras religiones

El enemigo exterior aparece como la justificación de la mayoría de los conflictos entre las sociedades humanas a lo largo de la historia. Hasta el punto de que “los estudiosos de la cultura más pesimistas se preguntan si las sociedades humanas pueden existir sin enemigos”³. Obviamente, la adjudicación de ese papel suele responder a criterios poco objetivos. Durante bastante tiempo, la encarnación del enemigo exterior tuvo un nombre: los *bárbaros*. Ahora bien, “es sintomático que en las historias de Europa lo que unos conocemos bajo el rótulo de la ‘invasión de los bárbaros’ sea para otros ‘la época de las grandes migraciones’”⁴.

El enemigo exterior lo encarnan siempre los otros, en tanto que pueblo o en tanto que infieles. Utilizando denominaciones más contemporáneas, podemos decir que el nacionalismo o el fundamentalismo religioso se encuentran en la base de la mayoría de los conflictos entre las comunidades humanas. O la conjunción de ambos fenómenos, porque “los vínculos entre la religión y la conciencia nacional pueden ser muy estrechos. De hecho, la relación parece hacerse más estrecha allí donde el nacionalismo se convierte en una fuerza de masas que en su fase de ideología minoritaria y movimiento de activistas”⁵.

El desconocimiento del pasado provoca en muchas personas extrañeza por el actual resurgir del fundamentalismo religioso, un comportamiento que, sin embargo, es característico de la historia de la humanidad. Parecida sorpresa debería causar el renacer del nacionalismo, a pesar de “que la concepción ‘tribal’ de la identidad siga prevaleciendo hoy en todo el mundo, y no sólo entre los fanáticos, es por desgracia la pura verdad. Pero hay muchas concepciones que han estado vigentes durante muchos siglos y que hoy ya no son aceptables”⁶. Y es que si el miedo a los otros forma parte de la historia de la humanidad, también el intento de superarlo conforma las alternativas emancipatorias que jalonan esa misma historia.

2. Un lúcido análisis de esta cuestión es el realizado por Manuel Castells en su artículo “¿Por qué Irak?”, *El País*, 2 de octubre de 2002.

3. Geer Hofstede, *Culturas y organizaciones*. Alianza Editorial, Madrid, 1999, p. 338.

4. Francisco Fernández Buey, *Ética y filosofía política*. Edicions Bellaterra, Barcelona, 2000, p. 128.

5. Eric J. Hobsbawm, *Naciones y nacionalismo desde 1780*. Editorial Crítica, Barcelona, 1991, p. 76.

6. Amin Maalouf, *Identidades asesinas*. Alianza Editorial, Madrid, 1999, p. 47.

La oposición entre nacionalismo y socialismo

El nacionalismo se configura como corriente política moderna en la segunda mitad del siglo XIX, a la par que lo hace el socialismo. “Los socialistas de la época, que raras veces usaban la palabra ‘nacionalismo’ sin añadirle la expresión ‘pequeñoburgués’ sabían de lo que hablaban [...] Fuese cual fuere la naturaleza del nacionalismo que empezó a destacar en los cincuenta años que precedieron a 1914, parece que todas sus versiones tenían algo en común: el rechazo de los nuevos movimientos socialistas proletarios, no sólo porque eran proletarios, sino también por ser consciente y militantemente *internacionalistas* o, como mínimo, no nacionalistas. Nada parece más lógico, pues, que ver la atracción del nacionalismo y la del socialismo como mutuamente excluyentes, y el avance de una de ellas como equivalente al retroceso de la otra”⁷.

Este enfrentamiento se prolongó, de forma más cruenta, en el siglo XX. Los nacionalismos totalitarios que surgen en la primera mitad del siglo —el nacional-socialismo en Alemania, el fascismo en Italia, el nacional-catolicismo en España, el salazarismo en Portugal, etc.— encontraron siempre el mismo enemigo exterior: el comunismo, la corriente que se oponía al nacionalismo y al sistema capitalista. Esta última oposición explica que los comunistas se convirtieran también en el enemigo exterior —e interior en no pocas ocasiones— de las democracias de mercado. Aunque esta oposición entre democracias liberales y democracias populares no puede comprenderse sin tener presente la deriva totalitaria de una ideología que nació como emancipadora.

La oposición entre nacionalismo y comunismo o entre capitalismo y comunismo caracterizó la política durante el siglo XX. Y contribuyó a incrementar la ‘producción de odio’, que, en el ámbito político, iniciaron los intelectuales europeos que ‘descubrieron’ sus naciones en el siglo anterior. “El imán del sentimiento político es el enemigo. Porque el enemigo existe el ciudadano se compromete, apuesta por la patria, por la ideología, por el proyecto. Del enemigo de clase al inmigrante, del sujeto étnico al colonizador, del burgués al comunista, del árabe al judío, el siglo XX ha construido permanentemente figuras del Otro frente a las que atraer la pasión política. El hundimiento del sistema comunista con el consiguiente revoloteo de campanas anunciando el triunfo definitivo del modelo liberal deja pendiente de identificación al enemigo. La pasión política se tomó vacaciones. La economía se adueñó de la escena pública. Y surgió el sujeto étnico y el sujeto fundamentalista”⁸.

El nacionalismo, por definición, excluye a todos los que no pertenecen a su propia ‘nación’, es decir, a la inmensa mayoría de la raza humana

7. Eric J. Hobsbawm, *Naciones y nacionalismo desde 1780*. Editorial Crítica, Barcelona, 1991, pp. 127 y 132.

8. Josep Ramoneda, *Después de la pasión política*. Taurus, Madrid, 1999, p. 87.

La vaguedad y la falta de contenido programático del nacionalismo le dan un apoyo potencialmente universal dentro de su propia comunidad

La evolución de la sociedad se ha alejado considerablemente de las previsiones realizadas en tiempos pasados. “Los grandes utópicos europeos no eran patriotas locales. El nuevo orden social que idearon no pretendía favorecer a un determinado país, sino a todo el género humano. Fue el internacionalismo proletario el que mejor formuló este principio. Pero también esta promesa acabó cumpliéndose de forma irónica. No la llevaron a la práctica los proletarios, sino los capitalistas y técnicos de todos los países. La idea de la sociedad mundial no la implantaron la Primera Internacional ni la Segunda o la Tercera, sino el mercado mundial anónimo”⁹.

Y aunque parecía imprevisible, “la era de la globalización es también la del resurgimiento nacionalista, expresado tanto en el desafío a los estados-nación establecidos, como en la extensa (re)construcción de la identidad atendiendo a la nacionalidad, siempre afirmada contra lo ajeno”¹⁰. Sin embargo, esta situación no resulta paradójica para algunos de los que denuncian los fines de la globalización neoliberal, porque piensan que “la herramienta psicológica más útil jamás creada para estos fines es la *política de identidad* [...] El objetivo es potenciar la fragmentación, poner de relieve las diferencias con los demás y crear guetos [...] En lugar de preguntarse qué puede *hacer*, la gente deberá centrarse, sobre todo, en quién *es*”¹¹.

El nacionalismo como exclusión

Opiniones como la anterior se sustentan también en el hecho de que “todas las matanzas que se han producido en los últimos años, así como la mayoría de los conflictos sangrientos, tienen que ver con complejos y antiquísimos ‘conflictos’ de identidad”¹². El resurgir del nacionalismo induce el de los enemigos exteriores, porque el nacionalismo pierde buena parte de su sentido sin su existencia. Y los conservadores de la pureza identitaria tienen un amplio abanico donde elegir, puesto que “el nacionalismo, por definición, excluye de su esfera a todos los que no pertenecen a su propia ‘nación’, es decir, a la inmensa mayoría de la raza humana”¹³.

Florece de nuevo el sujeto étnico como protagonista de la política. Un sujeto que prolonga la dialéctica del amigo y el enemigo y nos retrotrae al pasado pre-democrático y pre-ilustrado, antes de que se proclamara la igual dignidad de todos los hombres como fundamento de los derechos humanos. “El sujeto étnico retoma los argumentos recurrentes del orgullo y la víctima. El orgullo de la pertenencia: no soy un ciudadano cualquiera porque pertenezco a un pueblo que no es un pueblo cualquiera. La idea de pueblo se res-

9. Hans Magnus Enzensberger, *Zigzag*. Editorial Anagrama, Barcelona, 1999, p. 71.

10. Manuel Castells, *La era de la información. Vol. 2. El poder de la identidad*. Alianza Editorial, Madrid, 1998, p. 50.

11. Susan George, *El informe Lugano*.

Icaria Editorial, Barcelona, 2001, pp. 114-116.

12. Amin Maalouf, *Identidades asesinas*. Alianza Editorial, Madrid, 1999, p. 46.

13. Eric J. Hobsbawm, *op.cit.*, p. 186.

tringe a aquellos que son de una misma sangre, de un mismo territorio, de una misma cultura, de una misma creencia. Volvemos a las unidades homogéneas en las que todo está previamente escrito y determinado. La víctima: la suerte de la etnia siempre se construye frente a los demás, frente al enemigo, frente al vecino. La etnia se destruye con la mezcla que asegura el mestizaje biológico y cultural, es decir, progreso. Cuando la etnia es el fundamento de la posición, la paranoia se desarrolla automáticamente. Las desgracias de la etnia se atribuyen siempre a todos aquellos que se acercaron, porque al acercarse introdujeron el factor de división que es la diferencia. Y precisamente el discurso de la diferencia es la equívoca respuesta de cierto progresismo a los furros étnicos”¹⁴.

Esa obsesión por la diferencia suele ir acompañada de la ‘invención’ de una comunidad primigenia de la que brota la identidad cultural que sustentaría la nación. Sin embargo, la historia y la realidad indican que el nacionalismo suele ser más una opción política que una manifestación ‘natural’. “La etnicidad, la religión, la lengua, el territorio, *per se*, no son suficientes para construir naciones e inducir el nacionalismo. Sí lo es la experiencia compartida: tanto los Estados Unidos como Japón son países con una fuerte identidad nacional y la mayoría de sus ciudadanos experimentan y expresan fuertes sentimientos patrióticos. No obstante, Japón es una de las naciones más homogéneas desde el punto de vista étnico de la tierra, mientras que los Estados Unidos es una de las más heterogéneas”¹⁵. Como se ve, esa experiencia compartida puede ser tan reciente como la de los estadounidenses.

Lo que sí parece claro es que en la lengua común del nacionalismo la primera palabra es *nosotros*, la segunda es *nuestro* y la tercera, desgraciadamente, *ellos*. Un idioma fácil de entender el que se basa en la defensa de *lo nuestro*. “El nacionalismo tiene una ventaja frente al fundamentalismo. Su misma vaguedad y su falta de contenido programático le dan un apoyo potencialmente universal dentro de su propia comunidad”¹⁶. Sin embargo, esa indeterminación no diluye su enorme poder para configurar el enemigo exterior contra el que se canaliza el odio de los nuestros. Y es que, como dice Amin Maalouf, “¿acaso no es la principal virtud del nacionalismo hallar para cada problema un culpable antes que una solución?”¹⁷.

El nacionalismo en el Tercer y el Segundo Mundo

¿Es el nacionalismo una corriente política esencialmente reaccionaria? Existen nacionalistas que se consideran de izquierdas cuya respuesta a esta pregunta sería, obviamente, negativa. En la mayor

La construcción del enemigo exterior típico del nacionalismo, el enemigo étnico, ha provocado consecuencias devastadoras en África

14. Josep Ramoneda, *Después de la pasión política*. Taurus, Madrid, 1999, p. 145.

15. Manuel Castells, *La era de la información. Vol. 2. El poder de la identidad*. Alianza Editorial, Madrid, 1998, p. 52.

16. Eric J. Hobsbawm, *Naciones y nacionalismo desde 1780*. Editorial Crítica, Barcelona, 1991, p. 180.

17. Amin Maalouf, *Identidades asesinas*. Alianza Editorial, Madrid, 1999, p. 98.

parte de las ocasiones, aluden al carácter nacional de muchos de los movimientos que lucharon contra el colonialismo o el neocolonialismo en los países del Tercer Mundo. Sin embargo, la realidad confirma más que niega la apreciación que plantea la pregunta.

La lucha por la descolonización en África dio lugar al nacimiento de movimientos políticos encaminados a la liberación nacional. Pero entendiendo el criterio nacional, curiosamente, tal y como se entendía en Europa, y aplicándolo a una realidad muy alejada de la europea. Los resultados no pueden ser más decepcionantes: “las condiciones heredadas por los primeros gobiernos independientes eran más favorables que las que éstos legaron a sus sucesores, y la degradación de la situación económica y social ha llegado a ser la constante con que se ha saldado hasta hoy la gestión de las élites dirigentes en el África poscolonial”¹⁸. También la construcción del enemigo exterior más típico del nacionalismo, el enemigo étnico, ha provocado consecuencias devastadoras en el continente: las víctimas de las continuas guerras y matanzas tribales durante las últimas décadas se miden en millones de personas.

*El peligro que
suscita la
espiral de
reclamaciones
nacionalistas
contra los
vecinos alcanzó
el paroxismo en
la desintegración de
Yugoslavia*

En la primera oleada descolonizadora del continente africano, el caso más emblemático fue quizá el del Frente Nacional de Liberación de Argelia. La desastrosa situación actual de este país, provocada por la deriva antidemocrática de aquellos nacionalistas tras la llegada al poder, hace innecesaria una explicación más pormenorizada. En el más reciente flujo descolonizador, el movimiento nacionalista que más esperanzas suscitaba era el que lideraba Robert Mugabe en Zimbabue. Hoy la prensa nos acerca de vez en cuando sus delirios totalitarios y las tremendas consecuencias de su gobierno para la población de aquel país.

La situación en América Latina no resulta mucho más alentadora para los defensores del nacionalismo como corriente política liberadora. Las luchas emancipatorias en el continente tuvieron un componente mucho más internacionalista que nacionalista. Hasta el punto de que puede afirmarse que en Sudamérica el nacionalismo casi se identifica con el populismo de derechas. El caso más emblemático lo constituye el peronismo, un nacionalismo populista que durante décadas ha contribuido a desangrar un país que era notablemente más rico que el nuestro cuando Juan Domingo Perón accedió al poder. Pese al Fondo Monetario Internacional, las responsabilidades por la crisis se encuentran básicamente en el interior de la sociedad argentina.

El latrocinio de las clases gobernantes de África y Sudamérica se

18. José María Ridaio, *Contra la Historia*. Seix Barral, Barcelona, 2000, p. 204.

ha repetido en la transición de los países del Este europeo. “La revuelta nacionalista contra la Unión Soviética fue particularmente significativa porque era uno de los pocos estados modernos construido de forma explícita como un estado plurinacional [...] Esta construcción institucional no era una simple ficción”¹⁹. El carácter conservador de la explosión nacionalista en el Este europeo resulta innegable. El peligro que suscita la espiral de reclamaciones nacionalistas contra los vecinos alcanzó el paroxismo en la desintegración de Yugoslavia. Ha resultado sorprendente cómo una sociedad que ha convivido durante décadas puede convertirse en un infierno caracterizado por el genocidio provocado por los nacionalismos enfrentados, cada uno de los cuales tuvo un éxito notable en la conversión del otro en el enemigo exterior.

El nacionalismo en Europa

En Europa, el nacionalismo tiene nombres propios. Los más radicales: Le Pen, Haider, Bossi...; los moderados: Aznar, Berlusconi... Considerar progresistas a los católicos norirlandeses, a los independentistas corsos, a los nacionalistas escoceses o a quienes lideran los enfrentamientos entre la población francófona y la valona de Bélgica parecería un despropósito. Todo el nacionalismo europeo tiene un enemigo común, que viene del exterior pero que se encuentra también dentro: los inmigrantes. Y una justificación también compartida: la defensa de la identidad cultural.

“Los vínculos entre el racismo y el nacionalismo son obvios”²⁰. Pero escasamente presentables en las sociedades actuales. Así que el racismo europeo ha devenido en fundamentalismo cultural. Éste ha sido el camino descubierto por los nacionalistas para hacer digerible a sectores más amplios de la sociedad su racismo tradicional. Y a ese trayecto se han sumado también los nacionalistas más moderados, contribuyendo a que “la xenofobia, que fácilmente da paso al racismo, sea un fenómeno más general en Europa hoy incluso que en tiempos del fascismo”²¹.

Otra característica generalizada del nacionalismo europeo, radical o moderado, es su oposición a la profundización del proceso de construcción europea. Intentan mantener sociedades más homogéneas que no se diluyan en un espacio político, social y cultural más amplio. Mientras Le Pen, Haider o Bossi se oponen frontalmente a la construcción europea, Aznar o Berlusconi lideran el intento de descafeinarla entre los conservadores europeos. Como siempre, vuelven a confrontarse en el escenario político las actitudes más progresistas, que piensan que más Europa significa poner el acento

En Europa, el nacionalismo tiene nombres propios. Los más radicales: Le Pen, Haider, Bossi...; los más moderados: Aznar, Berlusconi...

19. Manuel Castells, *La era de la información. Vol. 2. El poder de la identidad*. Alianza Editorial, Madrid, 1998, p. 56.

20. Eric J. Hobsbawm, *Naciones y nacionalismo desde 1780*. Editorial Crítica, Barcelona, 1991, p. 118.

21. Eric J. Hobsbawm, *op. cit.*, p. 180.

No es casual que el nacionalismo separatista surgiera en las dos comunidades donde la influencia del tradicionalismo carlista tuvo mayor importancia

en lo que nos une, con las más reaccionarias, que prefieren remarcar las identidades culturales que nos separan.

Cierto que la construcción europea muestra déficits democráticos muy importantes, y que los espacios político y social no han avanzado a la par que el económico. Pero, pese a ello, resulta difícilmente comprensible la oposición de algunos sectores de la izquierda europea. “La oposición que muchos sostienen hacia la integración europea es retrógrada, pues la integración inevitablemente redistribuirá algunas porciones de los ingresos nacionales desde los productores nacionales más ricos hacia productores más *pobres* de otras partes de Europa. La oposición a la integración es éticamente defendible sólo desde un punto de vista chauvinista, que valora las vidas de los compatriotas más que la vida de los seres humanos. La filosofía comunitarista ha intentado justificar esta clase de chauvinismo. Sin duda, la izquierda debiera rechazar esa visión de las cosas [...] Esto me lleva a lo que creo que ha sido moralmente equivalente al talón de Aquiles en la posición de amplios sectores de la izquierda europea y estadounidense: su chauvinismo nacionalista. La desigualdad de ingresos promedio entre las naciones es mucho más grave en sus efectos sobre la autorrealización humana que la desigualdad entre el ingreso promedio y el ingreso más alto en un país avanzado”²².

La excepción española

Si en la mayoría de los países europeos el nacionalismo político era heredero de la tradición romántico-naturalista, en España sus orígenes son anteriores y se apoyan en el legado nacional-católico. No resulta casual, por lo tanto, que el nacionalismo separatista surgiera en las dos comunidades donde la influencia del tradicionalismo carlista tuvo mayor importancia. Y tampoco que el nacionalismo español haya sido caracterizado como nacional-catolicismo hasta tiempos muy recientes. En la actualidad, los vínculos entre esos nacionalismos –vasco, catalán y español– y la iglesia católica continúan siendo muy significativos.

El nacionalismo político surge primero en Cataluña. A mediados del siglo XIX, la burguesía no muestra ningún interés por las tradiciones locales, y suele considerar el catalán como el lenguaje de los campesinos o de los sirvientes. Sin embargo, “en 1855 Cataluña vive su primera huelga general. Los trabajadores exigen el derecho de asociación y la jornada laboral de diez horas. Entonces, los empresarios catalanes ven que el medio rural, lleno de gente del campo sin asociación ninguna, sin las exigencias laborales de los

22. John E. Roemer, “Estrategias igualitarias”, en *Razones para el socialismo*. Ediciones Paidós, Barcelona, 2001, pp. 104 y 105.

obreros de la ciudad, es mucho más tranquilo. De pronto, el paisaje bucólico de las cancioncillas líricas se transforma en algo más sustancioso [...] En 1859 se restauran los Juegos Florales con un tema muy expresivo: 'Patria, Fe, Amor' [...] Se observó asimismo un hecho que hubiera sido imposible hacía pocos años: se había podido hablar en catalán sin la rechifla de la audiencia [...] Así pues, desde 1855, y en diez años, se había recuperado un pueblo que unánimemente hablaba catalán, volvía a sus tradiciones y comprobaba las obras del padre Claret para ir al cielo. Un cambio sorprendente"²³.

También en el País Vasco la defensa de las tradiciones y de la lengua se esgrimieron para remarcar las diferencias entre los trabajadores industriales, inmigrantes de las regiones más pobres del país, y la burguesía y las clases medias. Con la diferencia de que el euskera era una lengua muy minoritaria, que tan sólo se hablaba en las zonas agrícolas más atrasadas. En realidad, se afrontó la invención de una lengua, tarea que fue acometida básicamente por la Iglesia católica y que no se culminó hasta los años sesenta del siglo XX. El carácter xenófobo y reaccionario del nacionalismo vasco es más evidente aún. Todavía hoy son frecuentes las afirmaciones inequívocamente racistas entre los nacionalistas vascos.

El nacionalismo en España "se proyecta, idealmente, hacia la restauración de las comunidades 'naturales' y, por lo mismo, hacia su diferenciación frente a las vecinas. Más que una tendencia hacia la diversidad se prepara la homogeneización del nuevo cuerpo nacional, pues lo contradictorio de su discurso es que entiende la diferencia como algo que empieza en la frontera (territorial, lingüística, cultural) de su nación pero difícil de tolerar dentro de ella"²⁴. De la defensa de la 'identidad cultural' se deduce el enemigo exterior: los inmigrantes. Pero con la salvedad de que se considera inmigrantes también a quienes se califica con desprecio de españoles. Con el nacionalismo español actual ocurre algo parecido: a las diatribas contra los inmigrantes, tan frecuentes en los últimos años –desde que hay inmigrantes–, se le suma otro enemigo: aquellos que pretenden separarse de la patria común, esa España que más parece leerse como una prisión que como el producto de un contrato social.

Si como decía John Roemer, el talón de aquiles de algunos sectores de la izquierda occidental es su chauvinismo nacionalista, en España ese comportamiento se exagera, hasta el punto de que no resulta descabellado hablar de 'la excepción española', porque la

De la defensa de la 'identidad cultural' se deduce el enemigo exterior: los inmigrantes

23. Juan Ramón Lodares, *Lengua y Patria*. Taurus, Madrid, 2002, pp. 105-107.

24. *Ibid.*

España de las diferencias y el enemigo exterior que encarnan los inmigrantes –españoles o de fuera– ha sido reivindicada por muchas gentes progresistas en otros terrenos. Esta posición se legitimó como reacción al autoritarismo de la dictadura franquista, que, en una mala traducción de las posiciones de los nazis, defendió la uniformidad cultural frente a la tradición del pensamiento reaccionario español que promovía el mantenimiento de herencias culturales diferenciadas, que contribuyeran a frenar la introducción de las ideas ilustradas, primero, y del internacionalismo proletario, después. Así pues, nos encontramos con la paradoja de que la defensa de ideas absolutamente reaccionarias, que en otros países europeos son patrimonio de la extrema derecha, son reivindicadas en España por gentes que se consideran de izquierda.

En España, ante la dicotomía izquierda o derecha, los nacionalistas de izquierda escogen la soberanía, que siempre les lleva a la alianza con la derecha nacionalista

Bien es cierto que la paradoja suele resolverse cuando la actuación en el ámbito político obliga a definirse. En España, ante la dicotomía izquierda o derecha, los nacionalistas de izquierda escogen la soberanía, que siempre les lleva a la alianza con la derecha nacionalista. En el País Vasco, los objetivos de Batasuna pasan invariablemente por el pacto con la derecha reaccionaria que encarnan el PNV y EA. En Cataluña, el largo reinado de Pujol ha sido posible gracias a los votos de Esquerra Republicana, que le permitieron acceder al poder en la primera legislatura autonómica (el actual pacto de Esquerra con la izquierda parece provisional, y motivado por haber sido excluidos por las repetidas mayorías absolutas de CiU o su actual alianza con el PP). En Aragón, los sectores radicales del nacionalismo también confluyeron en su momento con el nacionalismo más carca. En Canarias, la izquierda nacionalista se encuadra en CC (u orbita a su alrededor), donde la alianza con los caciques de la derecha de cada Isla constituye el pacto fundacional. Incluso cuando se produce alguna experiencia fuera de este partido, como sucedió en el Ayuntamiento de Tinajo en Lanzarote, los radicales terminaron forzando una moción de censura que les llevó al habitual pacto con la derecha nacionalista, con CC. En el resto de las comunidades del país, los nacionalistas de izquierda pueden mantener la virginidad porque la derecha está representada exclusivamente por el Partido Popular. Y ante la inexistencia de alternativas de derecha nacionalista, se puede mantener la ficción de que la preocupación por la identidad cultural podría estar atravesada por las ideas de la izquierda.

La lucha por la diferenciación cultural y el intento de construir *pueblos* en oposición a la ciudadanía ‘realmente existente’ ha conduci-

do a que los inmigrantes –y en la *periferia* los otros españoles– encarnen el enemigo exterior. Y a que en España se haya extendido de forma preocupante la xenofobia. En Canarias, el fenómeno está alcanzando tales dimensiones que la Coalición Española en Contra del Racismo realizó un seminario internacional en Gran Canaria, en el mes de noviembre pasado, “al considerar que el Archipiélago es una de las comunidades autónomas españolas más racistas”²⁵. Y Lanzarote es la isla del Archipiélago donde más se ha extendido la xenofobia.

El fundamentalismo islámico, la red Al Qaeda y Sadam Husein

El fundamentalismo, uno de los grandes inspiradores de las sociedades humanas a la hora de construir su enemigo exterior, nació con la religión, pero se extendió a otros ámbitos doctrinales. “En última instancia se podría decir que es fundamentalista toda doctrina que afirma que el conflicto no es constitutivo de la sociedad humana, sino un episodio pasajero y que al final del camino el bien triunfa sobre el mal [...] Cuando uno tiene la verdad en las manos, todo lo que no sea imponerla a los que no son capaces de verla es una lamentable manera de retrasar el final feliz. Sobre este empeño se construye en buena parte la pasión política contemporánea”²⁶.

No obstante, la primacía de la actualidad y el olvido de la historia han logrado que en las sociedades occidentales parezca no existir hoy otro fundamentalismo que el de los integristas musulmanes. Éste es el que ocupa y preocupa tanto a analistas políticos como a una buena cantidad de ciudadanos de estas sociedades. Sin embargo, en países como el nuestro, donde el fundamentalismo religioso ha perdurado hasta hace bien poco, no debería resultar tan sorprendente el resurgir del fundamentalismo islámico.

Suele convenirse en la palabra *resurgir* porque se considera un fenómeno atávico que renace, en oposición a las sociedades más laicas que imperan en los países desarrollados. Esta opinión refleja una parte de la realidad. Hay quien discrepa: “El fundamentalismo islámico no es un movimiento tradicionalista. A pesar de todos los esfuerzos de exégesis para arraigar la identidad islámica en la historia y los textos sagrados, los islamistas, por motivo de la resistencia social y la sublevación política, prosiguieron con una reconstrucción de la identidad cultural que, de hecho, es hipermoderna [...] La explosión de los movimientos islámicos parece relacionarse, tanto con la crisis de las sociedades tradicionales (incluido el debilitamiento del poder del clero tradicional) como con el fracaso del estado-nación, creado por los movimientos nacionalistas, para

Cuando uno tiene la verdad en las manos, todo lo que no sea imponerla a los que no son capaces de verla es una lamentable manera de retrasar el final feliz

25. *Canarias7*, 5 de septiembre de 2002.

26. Josep Ramoneda, *Después de la pasión política*. Taurus, Madrid, 1999, p. 178.

El fracaso de EE. UU. con Bin Laden y su necesidad de mantener la tensión bélica han provocado el retorno de Husein como el gran peligro

lograr la modernización, desarrollar la economía y distribuir los beneficios del crecimiento económico entre la población en general. Así pues, la identidad islámica es (re)construida por los islamistas en oposición al capitalismo, al socialismo y al nacionalismo, árabe o cualquier otro, que considera ideologías fracasadas del orden postcolonial”²⁷.

Al fundamentalismo islámico se le puso un rostro el pasado año: la red Al Qaeda y su líder Osama Bin Laden. Y ese rostro del enemigo exterior revela la complicidad en el interior. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos elige a Arabia Saudita como el aliado privilegiado en Oriente Medio. A partir de entonces, el fundamentalismo religioso islámico se convierte en un componente decisivo de la estrategia geopolítica norteamericana en su lucha contra el comunismo. “La convergencia de esta estrategia con los determinantes esenciales de la ideología de Osama Bin Laden –integrismo islámico y anticomunismo radical– explican su coincidencia objetiva con la política de EE. UU., que se traducirá en la frecuente participación de ambos en numerosas acciones concretas durante las dos últimas décadas. Esta consideración, más relevante que la incorporación de la familia Bin Laden, primero al Grupo Carlyle y ahora al Fremont, ambos bajo la influencia del clan Bush, es lo que hace de Osama no un agente de la CIA, como con frecuencia se pretende, sino un aliado permanente, aunque con espacios de autonomía que llegan en ocasiones a contradecir frontalmente la línea principal”²⁸.

Esta confluencia tuvo uno de sus escenarios más importantes en Afganistán, donde Bin Laden se incorporó a la *guerra santa* contra la Unión Soviética que impulsaba EE. UU. Unos 40.000 integristas islámicos de más de 40 países se sumaron a las fuerzas de los *muyahidin*, y constituyeron el sustrato sobre el que Bin Laden, de acuerdo con la CIA, creo la red Al Qaeda y la extendió por 29 países. El abandono de las tropas soviéticas hizo necesaria una solución que pusiera fin a la inestabilidad política que continuaba imperando en Afganistán. “Esta solución se llama talibanes, que son una auténtica creación de Pakistán, de su servicio secreto y de la CIA, [...] y la casi totalidad de los recursos financieros son obra de Arabia Saudí y de otros países del Golfo. Estados Unidos toma abiertamente posición a favor de la nueva opción, y Bin Laden se pasa a los talibanes, ofreciendo al mulá Omar tres millones de dólares y una de sus hijas como esposa. Pero la campaña contra la Alianza Norte se estanca. Ésta vuelve a recuperar posiciones y

27. Manuel Castells, *La era de la información. Vol. 2. El poder de la identidad*. Alianza Editorial, Madrid, 1998, pp. 36 y 387.

28. José Vidal-Beneyto, “Los porqués del 11-S”, *El País*, 26 de octubre de 2002.

Estados Unidos, que se impacienta, quiere imponer un gobierno de concentración nacional [...] Pero esto impedirá la creación de un Estado fundamentalista, por lo que Omar y Bin Laden se oponen, mientras los norteamericanos amenazan con una guerra inmediata cuyo plan queda ultimado a principios de septiembre. El ataque a las Torres Gemelas, y al Pentágono, su porqué, es la reacción de Bin Laden para perturbar ese plan al sentirse traicionado. Ahora bien, la asociación Bin Laden-EE. UU. no se había limitado a Afganistán, sino que había tenido también como escenarios Bosnia, Kosovo, Macedonia, Albania y Chechenia”²⁹.

El fracaso del gobierno estadounidense en su propósito de apresar a Bin Laden y su necesidad de mantener la tensión bélica han provocado el retorno de Sadam Husein como el gran peligro. Otro viejo aliado que se transforma en enemigo. Los actuales dirigentes norteamericanos “apoyaron firmemente a ‘la bestia de Bagdad’ cuando usó armas químicas contra Irán en los años de Reagan, y cuando usó gas contra ‘su propio pueblo’: los kurdos. Los actuales planificadores de Washington continuaron apoyando a la *bestia* después de que cometiera sus peores crímenes, proporcionándole incluso medios para desarrollar armas de destrucción masiva, nucleares y biológicas, justo hasta la invasión de Kuwait”³⁰.

Estados Unidos: nacionalismo y fundamentalismo

Los Estados Unidos constituyen un ejemplo del frecuente maridaje entre nacionalismo y fundamentalismo religioso. “La descripción que Tocqueville hace de Estados Unidos en 1831, una nación dividida entre regionalismo y movilidad, materialismo y religiosidad, privatización y nacionalismo arrogante, siempre está de actualidad”³¹. “El fundamentalismo cristiano es un rasgo perenne en la historia estadounidense. Una sociedad constantemente en la frontera del cambio social y la movilidad individual está abocada a dudar de forma periódica de los beneficios de la modernidad y la secularización, anhelando la seguridad de los valores e instituciones tradicionales basados en la verdad eterna de Dios. En efecto, el mismo término de ‘fundamentalismo’ se originó en los Estados Unidos, en referencia a una serie de diez volúmenes titulados *The Fundamentals*, publicados entre 1910 y 1915, para reunir los textos sagrados editados por los teólogos evangélicos conservadores a finales de siglo. Aunque la influencia fundamentalista ha variado en diferentes periodos históricos, nunca se ha eclipsado. Y en las décadas de los ochenta y los noventa, sin duda experimentó un vertiginoso aumento. Las ideas y la visión del mundo de los funda-

El mismo término ‘fundamentalismo’ se originó en los Estados Unidos

29. José Vidal-Beneyto, “Los porqués del 11-S”, *El País*, 26 de octubre de 2002.

30. Noam Chomsky, “EE. UU. contra Irak: una humilde propuesta”, *El País*, 9 de noviembre de 2002.

31. Norman Birnbaum, “Las raíces del nacionalismo norteamericano”, *Le Monde Diplomatique*, n.º 84, octubre de 2002.

**La principal
amenaza hoy
para la sociedad
mundial
proviene de la
conjunción de
nacionalismo
agresivo y fun-
damentalismo
religioso
del gobierno
de EE UU**

mentalistas parecen encontrar un eco considerable en los Estados Unidos del *fin-de-siècle*. Por ejemplo, según una encuesta de Gallup, uno de cada tres adultos declaraba que había tenido una experiencia de conversión religiosa; casi la mitad de ellos creían que la Biblia era infalible; y más del 80% pensaba que Jesucristo era divino. Sin duda, los Estados Unidos siempre han sido, y siguen siendo, una sociedad muy religiosa, mucho más, por ejemplo, que Europa Occidental o Japón. Pero este sentimiento religioso parece tomar un tono cada vez más restaurador, deslizándose hacia una poderosa corriente fundamentalista³².

Tanto el fundamentalismo cristiano como el nacionalismo agresivo se han agudizado hasta unos niveles preocupantes para el futuro de EE. UU. y del resto del mundo con la llegada al poder de George W. Bush, cabeza visible de esa corriente de los republicanos que bebe en las fuentes del *macartismo* de los años cincuenta. “El régimen actual se apoya en los protestantes fundamentalistas, esos fanáticos convencidos de que Estados Unidos tiene un papel central en la lucha bíblica del bien contra el mal y que se apoyan en la certeza de que este país debe dirigir el mundo”³³. Hablan de la nación como de la iglesia escogida por Dios, y esa visión se ha plasmado en un documento muy esclarecedor: *La nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos*.

La *nueva estrategia* encuentra raíces en lo que aquí denominarían la identidad cultural del país, cuya figura emblemática continúa siendo, al parecer, el vaquero: “En Estados Unidos existe la creencia de que los conflictos deben resolverse con una buena pelea: ‘Que gane el mejor’³⁴. Esa prepotencia y arrogancia impregnan el documento citado, en el que el Gobierno de los Estados Unidos se atribuye el derecho a lanzar ataques preventivos contra otras naciones y a actuar aún más al margen de las organizaciones internacionales, cuando así lo aconsejen sus propios intereses, y afirma que no volverá a permitir que otro Estado se le acerque en potencia militar. La prepotencia no se limita a la seguridad nacional, sino que se asevera que se trabajará por imponer su modelo de capitalismo al resto del planeta. Y todo esto en un documento del que el propio Bush reconocía que se habían suprimido “los pasajes demasiado arrogantes”³⁵.

No es necesario situarse en posiciones radicales para denunciar los peligros que acarrea la nueva política norteamericana. Al Gore afirmaba que “la estrategia nacional emergente no sólo celebra la fuerza norteamericana, sino que glorifica además la idea de domina-

32. Manuel Castells, *La era de la información. Vol. 2. El poder de la identidad*. Alianza Editorial, Madrid, 1998, p. 44.

33. Norman Birnbaum, *op. cit.*

34. Geer Hofstede, *Culturas y organizaciones*. Alianza Editorial, Madrid, Madrid, 1999, p. 164.

35. *El País*, 21 de septiembre de 2002.

ción”. Y concluía que “el planteamiento del actual presidente prometía una cadena de guerras”³⁶. Por lo tanto, no podría tacharse de simple ‘antiamericanismo’ sostener que la principal amenaza hoy para la sociedad mundial proviene de la conjunción de nacionalismo agresivo y fundamentalismo religioso e ideológico del gobierno estadounidense, que rige una nación cuya historia reciente no invita al optimismo: las intervenciones militares norteamericanas desde 1890 al año 2001 suman 134 en 53 lugares distintos³⁷. Un record inigualado.

Aunque se agudiza con la llegada al poder de Bush, resulta obligado insistir una vez más en “la oposición de EE. UU. a todas las iniciativas de la ONU tendentes a crear un marco jurídico-institucional mundial”³⁸. La negativa a asumir el Protocolo de Kioto y la nueva Corte Penal Internacional constituyen los más llamativos ejemplos recientes. Pero otros dos comportamientos cobran ahora una especial relevancia: la denuncia del tratado que limitaba la carrera armamentística nuclear y la negativa a suscribir la Convención de Armas Biológicas. Justo en el momento en que afirman que la paz mundial corre peligro por la posibilidad de que Irak pudiera disponer de armas de destrucción masiva, nucleares o bacteriológicas. Ese mismo doble rasero es el que se utiliza para denunciar el incumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas por parte de Irak, mientras se apoya incondicionalmente al Estado que más infringe esas resoluciones: Israel.

El desprecio por la legalidad internacional ha constituido la característica de un nacionalismo que usualmente ha buscado los enemigos en el exterior, puesto que allí los inmigrantes no han podido desempeñar el mismo papel que cumplen hoy en Europa. No obstante, como estamos viendo en Canarias, el hecho de que prácticamente todos los miembros de la sociedad encuentren sus raíces en la inmigración no evita que los recién llegados puedan encarnar al adversario. En EE. UU. constatamos “la existencia de una corriente nacionalista americana que ya en la década de 1850 había alimentado reacciones xenóforas. Los nacionalistas manifestaban abiertamente su preferencia por los inmigrantes de origen británico y de religión protestante, lo que indujo a diversas comunidades extranjeras a aislarse como defensa contra la discriminación [...] Paradójicamente, la misma sociedad que garantizó a finales del siglo XVIII la libertad de conciencia, los principios democráticos y la tolerancia, al rechazar la *asimilación estructural* de los inmigrantes puso las bases para el fracaso del *melting-pot* y el definiti-

Se reconstruye el enemigo exterior para justificar los enormes gastos militares, las políticas internacionales agresivas y modelar la opinión pública

36. *El País*, 25 de septiembre de 2002

37. Johan Galtung, *Searching for Peace*. Photo Press, London, 2002.

38. El listado ofrecido por José Vidal-Beneyto en su artículo “Antiamericanismo” es, aunque incompleto, ciertamente amplio. *El País*, 12 de octubre de 2002.

*Evitar que la
insolidaridad
nacionalista y la
irracionalidad
de los funda-
mentalismos
religiosos
impongan un
mundo en lucha
permanente
contra cada
enemigo
exterior*

vo enterramiento del concepto de ‘crisol de razas’³⁹. Pese a todo, los inmigrantes no podían constituir el gran enemigo exterior. Este papel lo cumplió el comunismo durante casi todo el siglo XX, pero la caída de la Unión Soviética había dejado libre ese espacio.

La reconstrucción de ese enemigo exterior venía haciéndose urgente para justificar los enormes gastos militares, las políticas internacionales agresivas y para contribuir a modelar la opinión pública de aquel país, que, aunque poco, vota para elegir a sus dirigentes. Por lo tanto, pese a que los motivos de la guerra prevista contra Irak son variados, no podemos olvidar la función de control interior de la población que cumple el enemigo exterior. Conviene recordar que, en los años cincuenta, cuatro de cada cinco norteamericanos apoyaron las paranoias anticomunistas del senador McCarthy destinadas a la represión de la contestación interna. De la misma manera, los atentados del 11 de septiembre, la guerra en Afganistán y la anunciada contra Irak sustentan la popularidad de quien ganó la presidencia tras perder las elecciones. Ese ambiente bélico, la excitación del patriotismo típica del nacionalismo y su conjunción con el fundamentalismo cristiano, ha contribuido decisivamente al reciente triunfo electoral de los republicanos en las elecciones legislativas. Y sólo ese caldo de cultivo puede garantizar la reelección de Bush y, en consecuencia, la permanencia en el poder de los sectores más reaccionarios de la política y la economía estadounidenses. Desgraciadamente, ese mismo ambiente y las doctrinas que lo alimentan constituyen hoy la principal amenaza para la convivencia en este planeta.

Por ello, y como siempre, vuelve a ser tarea prioritaria recuperar y ahondar en los valores universales que caracterizaron a la Ilustración y al movimiento emancipatorio que iniciaron los obreros industriales de Occidente, y alimentar la conciencia de especie que emana del pensamiento ecologista, para evitar que la insolidaridad nacionalista y la irracionalidad de los fundamentalismos religiosos logren imponer un mundo en lucha permanente contra cada enemigo exterior. En lucha permanente para imponer los valores o los dioses de unos frente a los de los otros.

39. Luis Seguí, *España ante el desafío multicultural*. Siglo XXI, Madrid, 2002, pp. 12 y 17.

Nunca más

Arundhati Roy

Recientemente, quienes han criticado las acciones del gobierno de los Estados Unidos (incluida yo misma) han sido llamados "antiamericanos". El antiamericanismo está en camino de ser consagrado como ideología. El término se utiliza por el *establishment* americano para desacreditar y, no con falsedad pero sí, digamos, con imprecisión, para definir a sus críticos. Una vez que alguien es etiquetado como antiamericano, lo más probable es que sea juzgado antes de ser oído y que el debate se pierda en la confusión por el honor nacional mancillado.

¿Que significa? ¿Que usted es antijazz? ¿O que se opone a la libertad de expresión? ¿Que no disfruta de Toni Morrison o de John Updike? ¿Que tiene un conflicto con las secuoyas gigantes? ¿Significa que no admira a los cientos de miles de ciudadanos americanos que marcharon contra las armas nucleares o los miles de resistentes a la guerra que obligaron a su gobierno a retirarse de Vietnam? ¿Significa que odia a todos los americanos?

Esta engañosa confusión de la música y la literatura americanas, la asombrosa belleza física de su tierra y los placeres ordinarios de la gente común con la crítica de la política exterior del Gobierno de los Estados Unidos es una estrategia deliberada y extremadamente efectiva. Es como un ejército en retirada que se parapeta en una

ciudad densamente poblada con la esperanza de que la perspectiva de alcanzar blancos civiles detenga el fuego enemigo.

Llamar a alguien antiamericano, ser antiamericano en realidad, no es sólo racista, es un fracaso de la imaginación. La incapacidad de ver el mundo en otros términos que los que el *establishment* ha dispuesto para usted: si no nos ama, nos odia, si no es bueno, es malo, si no está con nosotros, está con los terroristas.

El año pasado, como muchos otros, yo también cometí el error de burlarme de esta retórica *post* 11 de septiembre, despreciándola como tonta. Me he dado cuenta de que no lo es. En realidad es un astuto efecto reclutador para una guerra mal concebida y peligrosa. Cada día me sorprendo de cuánta gente cree que oponerse a la guerra en Afganistán equivale a apoyar el terrorismo.

Pesa sobre todo en el recuerdo de cada uno, especialmente en los EE. UU., el horror de lo que ha venido en conocerse como el 11 de septiembre. Casi 3.000 civiles perdieron sus vidas en aquel letal golpe terrorista. El dolor es aún profundo. La rabia aún intensa. Y una guerra mortal y extraña se extiende por el mundo. Aún así, cada persona que ha perdido un ser querido seguramente sabe que no hay guerra, ni acto de venganza que pueda mitigar su dolor o devolverle a la persona perdida. La guerra no puede vengar a los que han muerto. La guerra es sólo una brutal profanación de su memoria. Alimentar todavía otra guerra (esta vez contra Irak), manipulado el dolor de la gente, empa-

Llamar a alguien antinorteamericano, ser antiamericano, no es sólo racista, es un fracaso de la imaginación

Artículo publicado en el *GuardianWeekly* del 3 al 9 de octubre de 2002, bajo el título "Not Again" (Traducción de Ángel Díaz Méndez para la versión española del boletín electrónico de ATTAC *Grano de Arena*).

La guerra no puede vengar a los que han muerto. La guerra es sólo una brutal profanación de su memoria

quetándolo en programas especiales de televisión patrocinados por empresas que venden detergente es abaratar y devaluar el dolor, privarlo de significado. Contemplamos el saqueo de incluso los más privados de los sentimientos humanos por motivos políticos. Es algo terrible y violento que un Estado haga esto a su pueblo.

El gobierno de los EE. UU. dice que Sadam Hussein es un criminal de guerra, un cruel déspota militar que ha cometido genocidio contra su propio pueblo. Esta es una precisa y atinada descripción del hombre. En 1988 asoló cientos de aldeas en el norte de Irak y asesinó a miles de kurdos. Hoy sabemos que aquel mismo año, el gobierno de los EE. UU. le proporcionó subvenciones por valor de 500 millones de dólares para adquirir productos agrícolas norteamericanos. El año siguiente, después de haber completado con éxito su campaña genocida, el gobierno de los EE. UU. le dobló la subvención hasta 1.000 millones de dólares. También le suministró cultivos de laboratorio de alta calidad para desarrollar ántrax así como helicópteros y material de doble uso que podría ser utilizado para elaborar armas químicas y biológicas.

Resulta que mientras Sadam estaba llevando a cabo sus peores atrocidades los gobiernos británico y estadounidense eran sus aliados más próximos. ¿Qué es lo que ha cambiado, entonces?

En agosto de 1990, Sadam invadió Kuwait. Su pecado no fue tanto haber cometido un acto de guerra como haber actuado independientemente y sin órdenes de sus amos. Esta muestra de inde-

pendencia fue suficiente para alterar el equilibrio de poder en el Golfo. En consecuencia, se decidió que Saddam debía ser exterminado, como una mascota que ha aburrido a su dueño.

Y si Irak tiene un arma nuclear, ¿qué?, ¿justifica un ataque preventivo norteamericano? Los EE. UU. tienen el mayor arsenal de armas nucleares del mundo. Es el único país que las ha utilizado realmente contra poblaciones civiles. Si los EE. UU. están legitimados para lanzar un ataque preventivo contra Irak, cualquier potencia nuclear estaría legitimada para lanzar un ataque preventivo contra cualquier otra. India podría atacar a Pakistán o viceversa.

Recientemente, los EE. UU. han jugado un importante papel en obligar a India y Pakistán a retirarse del borde de la guerra. ¿Es tan difícil para ellos seguir sus propios consejos? ¿Quién es culpable de moralismo irresponsable? ¿O de predicar la paz mientras hace la guerra? Los EE. UU., a quien Bush ha llamado "la nación más pacífica de la tierra", han estado en guerra con un país u otro durante todos y cada uno de los últimos cincuenta años.

Las guerras nunca se hacen por motivos altruistas. Se suelen hacer por la hegemonía, por negocios. Y entonces, por supuesto, está el negocio de la guerra. En su libro sobre la globalización *El Lexus y el olivo*, Tom Friedman escribe: "la mano invisible del mercado nunca funcionará sin el puño invisible. McDonalds no puede extenderse sin McDonnell Douglas*. Y el puño invisible que mantiene al mundo seguro para que las tecnologías de Silicon Valley se desarro-

* Gigantesca empresa aeronáutica norteamericana (Nota del traductor).

llen se llama ejército, fuerza aérea e infantería de marina de los Estados Unidos". Quizás esto fue escrito en un momento de vulnerabilidad, pero es ciertamente la más sucinta y precisa descripción del proyecto de globalización corporativa que yo haya leído.

Después del 11 de septiembre y de la guerra contra el terror, la mano y el puño invisibles han quedado al descubierto y ahora tenemos una visión clara de la otra arma de América, el mercado libre, abatiéndose sobre el mundo en desarrollo con una sonrisa crispada. El Trabajo que Nunca Termina es la guerra norteamericana perfecta, el vehículo perfecto para la expansión sin fin del imperialismo norteamericano.

Mientras crecen las diferencias entre ricos y pobres, el puño invisible del mercado ha hecho su obra. Empresas multinacionales acechando 'gangas' que producen enormes beneficios no pueden abrirse paso en los países en desarrollo sin la connivencia efectiva de la maquinaria del Estado. Hoy, la globalización corporativa necesita una confederación de gobiernos leales, corruptos y preferiblemente autoritarios en los países más pobres para imponer reformas impopulares y aplastar las revueltas. Necesita prensa que aparente ser libre. Necesita tribunales que aparenten administrar justicia. Necesita bombas nucleares, ejércitos movilizados, leyes de inmigración más duras y patrullas costeras que aseguren que sólo el dinero, las mercancías, las patentes y los servicios se globalizan; no el libre movimiento de personas, no el respeto por los derechos humanos, no los tratados internaciona-

les sobre la discriminación racial, las armas químicas y nucleares, las emisiones de gases invernadero, el cambio climático o la justicia. Es como si un gesto de responsabilidad internacional pudiera hacer naufragar todo el negocio.

Casi un año después de que la guerra contra el terror se diese por terminada oficialmente sobre las ruinas de Afganistán, en un país tras otro las libertades se ven recortadas en nombre de la protección de la libertad, los derechos civiles son suspendidos en nombre de la protección de la democracia. Todo tipo de disidencia se define como terrorismo. El Secretario de Defensa norteamericano, Donald Rumsfeld, declaró que su misión en la guerra contra el terror era persuadir al mundo de que a los norteamericanos debería permitírseles continuar con su modo de vida. Cuando el rey enloquecido da un pisotón, los esclavos tiemblan en sus barracones. Me resulta difícil decirlo, pero el modo de vida norteamericano es simplemente insostenible. Porque no reconoce que hay un mundo más allá de los EE. UU.

Afortunadamente, el poder tiene fecha de caducidad. Cuando lleve el momento, quizá este imperio, como otros que le precedieron, se sobreextienda y destruya por implosión desde su interior. Parece como si ya hubiesen aparecido grietas estructurales.

El comunismo a la soviética fracasó no porque fuera intrínsecamente perverso sino porque era débil. Permitía a demasiada poca gente usurpar demasiado poder. El capitalismo de mercado a la norteamericana del siglo XXI fracasará por las mismas razones.

El modo de vida norteamericano es simplemente insostenible. Porque no reconoce que hay un mundo más allá de los EE. UU.

Contradicciones ciudadanas

Ramiro Arbelo

*En la isla de la
conciencia
ecológica
volvería a ganar
las elecciones
quien más
tiempo haya
pasado en los
tribunales de
justicia*

Se repite asiduamente, y desde ámbitos muy diversos, que la sociedad lanzaroteña muestra una mayor conciencia sobre los problemas ecológicos que la del resto de las Islas. Y la concreción de esa conciencia la encontraríamos en que la mayoría de los ciudadanos de Lanzarote se declara partidario de detener el crecimiento turístico desde hace ya varios años.

La última encuesta realizada por el Centro de Datos del Cabildo, en el mes de noviembre, vuelve a confirmar esa percepción: "Más del 77% de los encuestados se mostraron a favor de los motivos por los que se convocó la manifestación del 27 de septiembre" *.

Resulta bastante sorprendente, en cualquier sociedad actual, que más de tres cuartas partes de la población suscriban las consideraciones que inspiran a los sectores más radicales y, por lo tanto, minoritarios de la comunidad.

Y en esa sociedad parecería lógico esperar las inevitables consecuencias electorales de esa concienciación ciudadana. Especialmente, cuando los mayores responsables de impulsar el crecimiento turístico

co durante esta legislatura están perfectamente identificados: los ayuntamientos de Yaiza y Tegui-se, es decir, CC y el PIL.

La declaración de guerra de ambos ayuntamientos a la posibilidad de disminuir el ritmo del crecimiento turístico que suponía la pseudomoratoria del Cabildo ha sido inequívoca; explícita en el caso de Yaiza, más soterrada en el de Tegui-se. Las dos corporaciones fueron a los tribunales a por la 'Moratoria', con los mismos argumentos y de la mano del abogado habitual: el insigne Felipe Fernández Camero.

Así que, como decíamos, resulta lógico esperar tanto el fin de las mayorías absolutas de ambos partidos en esos ayuntamientos como un descenso de sus perspectivas electorales a nivel insular para el próximo mes de mayo. Sin embargo, la lógica en Lanzarote no parece caminar por los derroteros esperables, es decir, lógicos.

En esa misma encuesta, en la que el 77% de los consultados suscriben las razones del Foro Lanzarote para convocar aquella manifestación en contra de la continuidad del crecimiento turístico, la mayoría se declara dispuesta a votar a los dos partidos que impulsan ese crecimiento con mayor ahínco: CC y PIL. Si los resultados electorales confirmaran los datos de la encuesta, los dos partidos que sustentan su ideario en la defensa 'de lo nuestro' sumarían el 52,5% de los votos emitidos.

Y en la isla de la conciencia ecológica volvería a ganar las elecciones quien más tiempo haya pasado en los tribunales de justicia.

* *Lancelot*, 22-28 de noviembre de 2002.



Rehenes de la desconfianza

Carlos Meca

Desconfío de los políticos, después de tantas mentiras y miserias. Desconfío de los medios de comunicación, que sólo cuentan, si hay suerte, medias verdades. Desconfío de los empresarios, adoradores de beneficios y rentas. Desconfío del tendero cuando me pesa la carne. Desconfío de la dependienta que me dice que me queda bien. Desconfío del surtidor cuando lleno el depósito. Desconfío de las compañías de seguros y de su letra pequeña. Desconfío de los bancos y de sus intereses. Desconfío de Telefónica y sus tarifas piratas. Desconfío de Iberia (aún más privatizada). Desconfío de los contadores de Unelco y de los contables de Gescartera. Desconfío de los mecánicos y de sus repuestos repuestos. Desconfío de los taxímetros y del horario de las guaguas. Desconfío del médico y de las recetas. Desconfío del vecino y sus

compañías. Desconfío de los concursos de la tele y de los contertulios. Desconfío del poder de las multinacionales y del altruismo de las ONGs. Desconfío de los pasos de peatones, de la calle oscura y también de la iluminada, por la que nunca he pasado. Desconfío de mis compañeros de trabajo y de mi jefe. Desconfío de quien me sigue y de quien me precede. Desconfío de las esquinas y de los descampados, de la noche y del viento. Desconfío del alcohol y de los jóvenes. Desconfío de los inmigrantes. Desconfío de los toxicómanos y de las prostitutas. Desconfío de los aparcacoches y de los desahuciados. Desconfío de los niños de padres separados y de los padres separados de sus principios. Desconfío de los obstáculos y los parapetos. Desconfío de lo que nunca antes había desconfiado. Desconfío de la soledad y del asilo, de las cárceles privadas. Desconfío de la democracia y de la dictadura, de la libertad y de la esclavitud. Desconfío de Bush y de Aznar, de Sardá y de la Primera. Desconfío de las armas y de la libertad para comprarlas y venderlas. Desconfío de la droga y de los camellos. Desconfío de los iluminados y de los salvadores de la patria, de los nacionalistas y de los no nacionalistas. Desconfío de los malos y de los buenos, de los que lo enseñan todo y de los que tienen algo que esconder. Desconfío de Coca-Cola y de Pepsi, de Nike y de Reebok. Desconfío de los sindicatos y de los cursos de formación. Desconfío de la agenda y del teléfono móvil, de la memoria y del despertador. Desconfío del eje del mal, de los ejércitos y de los pacifistas, de los anarquistas y de los comunistas. Desconfío del

Desconfío de los pasos de peatones, de la calle oscura y también de la iluminada, por la que nunca he pasado

*Desconfío del
Opus y de los
ateos, desconfío
de Dios y del
diablo*

Opus y de los ateos, desconfío de Dios y del diablo. Desconfío de las puertas de seguridad y de las salidas de emergencia. Desconfío de la realidad virtual y de la realidad a secas. Desconfío del tabaco, de las talas, del amazonas y de las ballenas. Desconfío del ministro y del funcionario, de la cajera y de los cojos. Desconfío de lo que sé y de lo que no sé. Desconfío de Van Gaal y de Ronaldo. Desconfío de la verdad contada por mentirosos, del hombre del tiempo y del árbitro. Desconfío de Eurovisión y del redondeo, de la publicidad y del destino del dinero público. Desconfío de las imágenes del Tercer Mundo y de los ruidos de mi calle. Desconfío de quien me hace dudar y de quien me quiere ayudar. Desconfío de quien mi amigo desconfía. Desconfío de las listas de espera de Binter y del mantenimiento de los aviones de Spanair. Desconfío de las palabras de amor y de los poetas. Desconfío de Voltaire y de Hume, de Umbral y de Jiménez Losantos. Desconfío de las estadísticas y de los estadistas. Desconfío de los derrotistas, de las derrotas y de los nuevos derroteros. Desconfío de los famosos y de sus comentaristas. Desconfío de quien no se ríe nunca y de quien se ríe siempre. Desconfío del afligido y del radiante, del halagador y del hurrao. Desconfío de mi dentista y de mi psicólogo, que nunca me habla. Desconfío de las Naciones Unidas y de las peleadas, de la balanza comercial y de los comercios que se balancean. Desconfío del déficit cero y del endeudamiento abusivo. Desconfío de la legalidad del gasto electoral y de los métodos electorales. Desconfío de las garbanzadas y de los mítines.

Desconfío del 0,7 y de la Tasa Tobin, de los solidarios y de los revolucionarios. Desconfío de los principiantes a quien nadie conoce y de los veteranos a quien todos aborrecen. Desconfío de los muy ricos y de los que quieren parecer muy ricos, de los muy pobres y de los que quieren dejar de serlo. Desconfío de las mareas negras y de los visones, de las nucleares y de las solares, de la guerra de Kuwait y la de Irak. Desconfío de la participación ciudadana y del desarrollo sostenible, de las asociaciones de vecinos y de los partidos que financian sus banquetes. Desconfío de las juventudes y de las nuevas generaciones, de las momias y de los parásitos. Desconfío de los manifestantes y de los antidisturbios, de los globalizados y de los antiglobalización. Desconfío de los depresivos y de los antidepresivos, de los amantes y de los calmantes, de la maquinaria farmacéutica y los delincuentes cosméticos. Desconfío del integrismo capitalista y del fanatismo islámico. Desconfío de los errores del mejor y de los aciertos del peor. Desconfío con buenos y malos motivos. Desconfío por el placer de desconfiar y de decir que desconfío. Resumiendo, sólo quería decir que de quien más desconfío es de los beneficiarios de tanta desconfianza.

A los españoles les va regular

Ricardo Santana Santana

Aunque en España algunos parecen tener la impresión contraria, el bienestar de la ciudadanía no se mide por la cantidad de broncas sobre la soberanía o el tamaño de las banderas que esgrimen unos contra otros. A los ciudadanos les va bien cuando tienen empleos decentes o están a cubierto ante los imprevistos laborales, cuando la riqueza se reparte de forma equilibrada y esa redistribución se emplea para proveer de servicios públicos eficientes a la población. El club de fans del señor Aznar nos ofrece la disminución del desempleo como el principal argumento para demostrar lo bien que les va a los españoles. Cierto que el paro ha disminuido. Aunque contribuye mejor a describir la sociedad saber cuántos españoles trabajan que cuántos buscan un trabajo: cuando el PP llegó al gobierno trabajaba el 50% de la población entre los 15 y los 64 años; hoy lo hace el 58%. Es innegable tanto la mejora como lo

lejos que continuamos estando de las economías que más trabajo proporcionan a sus ciudadanos: en Islandia trabaja el 84%, en Suiza el 79%, en Noruega el 77%, en Dinamarca y Suecia el 75%...¹

Claro que, además de que la gente pueda trabajar, conviene saber cuánto y cómo lo hace. La cantidad de horas que los españoles trabajamos cada año, 1.816, no ha disminuido desde que el señor Aznar alcanzó la cima. Quiere ello decir que aquí tenemos que consagrar una cantidad de tiempo al trabajo que es un 24% superior a la que dedican los alemanes, o un 35% mayor que la de los holandeses o los noruegos, que trabajan unas 1.350 horas al año. Resulta obvio que en este país el trabajo se reparte muy mal: la mayor cantidad de horas trabajadas por la mayoría contribuye a mantener el más alto desempleo de Europa. En España hay que trabajar bastante más para obtener, además, unos salarios de los más bajos de la Unión Europea, y con unas condiciones laborales peores que las de casi todos esos países, como lo demuestra el hecho de que tripliquemos el porcentaje de trabajo temporal de la media de los países de la OCDE².

La afirmación de la derecha de que, en este aspecto, a los españoles les va bien, sólo cobra sentido si se entiende como una referencia al sexo. Porque a las españolas les resulta mucho más complicado trabajar. Si separamos las cifras por sexos, vemos que trabaja el 73% de la población masculina y tan sólo el 43% de las mujeres. Y aquí sí que la distancia con los países más desarrollados es de escándalo, puesto que en

El bienestar no se mide por la cantidad de broncas sobre la soberanía o el tamaño de las banderas que esgrimen unos contra otros

1. Todos los datos estadísticos de este texto, salvo mención contraria, corresponden a las cifras más actuales ofrecidas por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico).

2. Manuel Castells, *La era de la información. Vol. 1. La sociedad red*, Alianza Editorial, Madrid, 2000, p. 325.

Han disminuido los impuestos que pagan los más privilegiados, pero se han elevado los que pagamos todos

los países nórdicos trabaja entre el 71 y el 81% de las mujeres. Pero no sólo es que trabajen más mujeres, sino que también la diferencia entre sus sueldos es menor: en España, ellas ganan un 30% menos que ellos, mientras que esa diferencia oscila entre el 10 y el 12% en países como Bélgica, Dinamarca o Francia. Así que en España, el único país del continente que carece de derecha, porque aquí hasta los ultras son de centro, se continúa discriminando a las mujeres más que en el resto de Europa.

El reparto de la riqueza es otro aspecto fundamental que afecta al bienestar de la mayoría de la población. Conviene fijarse en cómo se obtienen los ingresos públicos y cómo se emplean para mejorar las condiciones de los más necesitados. Sobre el primer aspecto, resulta obligado afirmar que los impuestos han subido. Han disminuido los impuestos sobre la renta y los que gravan las plusvalías del capital, es decir, los impuestos que pagan los más privilegiados, pero se han elevado los que pagamos todos, los impuestos indirectos. Tanto que, pese a las promesas de los populares, la presión fiscal en este país ha aumentado considerablemente (un 2% del PIB).

No obstante, en España continúan pagándose pocos impuestos. La presión fiscal supone el 32,8% del PIB, de la riqueza generada cada año en el país, frente al 38,2 de la media de los países desarrollados, los de la OCDE. Si la comparamos con los más civilizados, con los escandinavos –donde los impuestos suponen del 50 al 60%–, la distancia es increíble. Así se expli-

ca la precariedad de los servicios públicos que presta aquí el Estado. Independientemente de los ingresos, los resultados dependerán también de las políticas aplicadas. En España se ha plasmado con claridad, en estos seis años, cómo se gobierna desde la derecha: una subida de los impuestos y una disminución de los gastos sociales del Estado, dedicando el superávit de ambas partidas a disminuir el déficit público. Asunto que les preocupa mucho más que el bienestar de la mayoría de la población.

Desde 1994 a 2001, el porcentaje de la riqueza destinado al gasto público en partidas consideradas sociales ha pasado del 24 al 20%³. Este dato es uno de los que más claramente muestra cómo un gobierno de derechas contribuye a empeorar la vida de las clases populares. Porque sus consecuencias sobre los servicios públicos que presta la Administración a los ciudadanos son funestas, más en una sociedad en la que el Estado del bienestar era ya raquítico comparado con el resto de los miembros de la Unión Europea.

La salud constituye el primer indicador para saber si a los españoles les va bien. Y el hecho de que el gasto público en sanidad haya disminuido durante el gobierno del PP ha provocado un deterioro de la calidad de vida de todos aquellos que no pueden sufragarse la sanidad privada complementaria. La sanidad pública española ha empeorado. Por ello resulta lógico que sólo dispongamos de 4,1 camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes, frente a las 18 de Suiza, las 16,5 de Japón o las 14,6 de que disfrutaban los norue-

3. Vicenç Navarro, *Bienestar insuficiente, democracia incompleta*, Anagrama, Barcelona, 2002, p. 158.

gos. Así se explican esas listas de espera que han alcanzado en este país proporciones tercermundistas. La precariedad del sistema público de salud explica también que en España mueran 4,6 niños de cada 1.000 que nacen, mientras que en Islandia sólo fallecen 3, en Japón 3,2 o en Suecia 3,4.

Con la enseñanza ocurre otro tanto. España es el segundo país de Europa con mayor fracaso escolar⁴ y los indicadores internacionales muestran la pobreza de los resultados académicos de los estudiantes españoles con respecto a los de otros países. No es posible que los jóvenes españoles puedan disfrutar de una educación digna cuando el gasto público destinado a este menester es prácticamente la mitad del que dedican países como Suecia, Noruega o Dinamarca. Máxime, además, cuando parte de ese escuálido gasto se está dirigiendo a la enseñanza privada en detrimento de la pública, la que utiliza la inmensa mayoría de la población.

El otro gran apartado que contribuye al bienestar de la ciudadanía es el que en los últimos tiempos se denomina servicios a las familias. Aquí es donde más alejados nos encontramos de los países más avanzados. La atención a la infancia es mínima: tan sólo el 5% de los niños de 0 a 3 años dispone de guarderías. Cifra ridícula si la comparamos con el 64% de los niños atendidos en Dinamarca. También la atención a la tercera edad es deplorable: apenas existen centros residenciales y la atención domiciliaria es una práctica casi desconocida en nuestro país. En Suecia, una persona mayor que se

encuentre enferma tiene derecho a cinco visitas diarias a su domicilio, en las que le hacen la comida y le atienden en lo que necesite; en España, eso parece una utopía. Los jóvenes no pueden independizarse debido a un desempleo juvenil desconocido en el resto de la Unión, a la precariedad del trabajo cuando lo encuentran, y a la ausencia de vivienda asequible, situación que se ha agravado a causa de la radical disminución de viviendas de promoción pública desde que la derecha accedió al gobierno.

El hecho de que la seguridad constituye un componente del bienestar resulta innegable, pero cuando se habla de seguridad ciudadana nos deberíamos estar refiriendo, entre otras, a las cuestiones planteadas anteriormente. Sin embargo, a veces parece que la seguridad de una persona se circunscribiera a que no le roben. Los efectos de la política del PP son claros: 6.000 policías públicos menos, 26.500 privados⁵ más y un sustancial incremento de la población reclusa, hasta alcanzar los 110 encarcelados por cada 100.000 habitantes. Mientras, las sociedades con políticas sociales más orientadas a la cohesión y al bienestar de la población parecen tener menos necesidad de encarcelar gente: en Noruega la cifra es de 47, en Finlandia 55, en Suecia 57, en Dinamarca 65...

De estos datos pueden extraerse bastantes conclusiones. Algunas podrían ser las siguientes:

La primera: *no todos son iguales*. Cierto que los innegables avances durante los gobiernos socialistas fueron claramente insuficientes,

La tarea de cualquier izquierda digna de tal nombre pasa por elevar los impuestos para sufragar la mejora del Estado del bienestar

4. Eurostat, 2002.

5. *El País*, 26 de septiembre de 2002.

Los países más 'globalizados' del mundo, los países nórdicos, son los mismos que poseen los mejores Estados del bienestar del planeta

pero no es lo mismo que gobierne la derecha que la izquierda. El *colocón* ideológico que impide percibir la diferencia entre el PP y el PSOE, a quienes se sitúan en el reino de los cielos de la izquierda, conduce a ignorar las serias consecuencias del gobierno de la derecha para las clases populares de este país.

En segundo lugar, la política española se sitúa notablemente a la derecha de la de la mayoría de los países europeos. El desmantelamiento del precario Estado del bienestar hasta el punto en que lo lleva el PP no lo ha llevado ningún otro gobierno de la derecha europea. De la misma forma, las propuestas políticas más homologables con las de la socialdemocracia europea parecen entre los socialistas españoles radicalismo de izquierdas.

Tercera. En un país donde la presión fiscal es tan escasa como los servicios públicos, la tarea de cualquier izquierda digna de tal nombre pasa por elevar los impuestos, e incrementar su progresividad, para sufragar la mejora del Estado del bienestar que nos acerque a la convergencia real con el resto de la ciudadanía europea.

Cuarta. La existencia de gobiernos en Europa que están manteniendo, e incluso expandiendo, el Estado del bienestar niega la imposibilidad de hacerlo amparándose en los límites que impone la globalización. Es falso que las políticas reaccionarias de la derecha española vengán obligadas por la necesidad de competir globalmente. Idea que parece apoyada en no pocas ocasiones por las exageraciones que se vierten desde el

movimiento 'antiglobalización'. La realidad es que los países más 'globalizados' del mundo, los países nórdicos –donde la importancia del comercio exterior es mayor para sus economías–, son los mismos que poseen los mejores Estados del bienestar del planeta. Las políticas nacionales continúan siendo la clave de una política económica al servicio del bienestar de los ciudadanos.

Por último, en los países más avanzados de Europa se produce un nivel de participación de la sociedad desconocido en España. La participación electoral suele oscilar entre 10 y 20 puntos porcentuales por encima de la nuestra. De hecho, la mayoría absoluta obtenida por el PP no se debió fundamentalmente al aumento de sus votos –que no crecieron más que un 1% del censo electoral–, sino al importante aumento de la abstención entre los votantes de izquierdas. Asimismo, entre todos los países de la OCDE, España es en el que los ciudadanos participan menos en cualquier tipo de colectivos o asociaciones.

En consecuencia, mejorar el bienestar de los españoles –tratar de evitar la prolongación de las políticas del PP– es tarea y responsabilidad que incumbe a todos los que se consideran de izquierdas, y pasa por un incremento de su participación en la sociedad, tanto electoral como ciudadana.

El principio de precaución

Frente al deterioro de los ecosistemas del planeta y de la salud de los seres humanos que está provocando la crisis ecológica global, se afianza la necesidad de extender la utilización de lo que se ha denominado 'el principio de precaución'. Éste ha sido el empeño de un grupo de investigadores de todo el mundo, catalizados por organizaciones estadounidenses como el Science an Environmental Health Network y el Lowel Center for Sustainable Production de la Universidad de Massachussets. Estos investigadores han celebrado dos congresos internacionales, el primero en Wingspread (Racien, Wisconsin), en enero de 1998, y el segundo en Lowell (Massachussets), en septiembre de 2001. Ese esfuerzo colectivo ha dado lugar a las dos declaraciones sobre el principio de precaución que reproducimos a continuación*.

Declaración de Wingspread sobre el principio de precaución

La utilización de sustancias tóxicas y su emisión, la explotación de los recursos naturales y las alteraciones físicas del medio ambiente han tenido importantes consecuencias involuntarias que afectan a la salud humana y el medio

ambiente. Algunas de estas preocupaciones son las altas tasas de dificultades de aprendizaje, el asma, el cáncer, las malformaciones fetales y las especies en extinción; junto con el cambio climático global, la disminución del ozono estratosférico y la contaminación mundial con sustancias tóxicas y materiales nucleares.

Creemos que la legislación ambiental existente y otras decisiones que se han adoptado, especialmente aquellas basadas en la evaluación de riesgos, no han logrado proteger en forma adecuada la salud humana y el medio ambiente –el sistema mayor del cual los seres humanos no son más que una parte.

Creemos que existe evidencia abrumadora de que el daño para los seres humanos y el medio ambiente a nivel mundial es de tal magnitud y gravedad que hace necesario establecer nuevos principios para encauzar las actividades humanas.

Al darnos cuenta de que las actividades humanas pueden involucrar riesgos, todos debemos proceder de una forma más cuidadosa que la que ha sido habitual en el pasado reciente. Las empresas, los organismos gubernamentales, las organizaciones privadas, las comunidades locales, los científicos y otras personas deben adoptar un enfoque precautorio frente a todas las iniciativas humanas.

Por lo tanto, es necesario poner en práctica el principio de precaución: cuando una actividad se plantea como una amenaza para la salud humana o el medio ambiente, deben tomarse medidas precautorias aun cuando algunas

La legislación ambiental existente no ha logrado proteger en forma adecuada la salud humana y el medio ambiente

* Las dos declaraciones han sido extraídas del libro *El principio de precaución*, coordinado por Jorge Riechmann y Joel Tickner, publicado recientemente por la editorial Icaria.

relaciones de causa y efecto no se hayan establecido de manera científica en su totalidad.

En este contexto, los proponentes de una actividad, y no el público, deben ser quienes asuman la carga de la prueba.

El proceso de aplicación del principio de precaución ha de ser abierto, transparente y democrático, y debe incluir a todas las partes potencialmente afectadas.

También debe involucrar un examen de toda la gama de alternativas, incluyendo la no acción.

Declaración de Lowell sobre ciencia y principio de precaución

La creciente conciencia acerca de los potenciales impactos en gran escala que la actividad humana puede tener sobre la salud planetaria ha llevado al reconocimiento de la necesidad de cambiar las formas en que se toman las decisiones de protección ambiental, y las maneras en que el conocimiento científico influye sobre dichas decisiones. Como científicos y otros profesionales comprometidos en mejorar la salud global, hacemos un llamamiento por el reconocimiento del principio de precaución como un componente clave en la toma de decisiones de política ambiental y sanitaria, particularmente cuando deban considerarse amenazas complejas y aún inciertas.

Reafirmamos la Declaración de Wingspread de 1998 sobre el Principio de Precaución y creemos que la puesta en práctica efectiva de dicho principio requiere los siguientes elementos:

- defensa del derecho básico de cada individuo (y de las futuras

generaciones) a un ambiente saludable y promotor de la vida, como se establece en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas;

- acción preventiva cuando exista una evidencia creíble de que está ocurriendo o puede ocurrir un daño, aun cuando la naturaleza exacta y la magnitud de dicho daño no sea comprendida totalmente;
- identificación, evaluación y puesta en práctica de los caminos más seguros entre los que sean viables para satisfacer las necesidades sociales;
- asignar a los promotores de las actividades potencialmente peligrosas la responsabilidad de estudiar los riesgos a fondo para minimizarlos, así como evaluar y elegir las alternativas más seguras para satisfacer una necesidad particular, bajo una revisión independiente del proceso; y
- aplicar procesos de toma de decisiones transparentes e inclusivos que aumenten la participación de todos los involucrados y sus comunidades; particularmente aquellos potencialmente afectados por una decisión sobre políticas.

Creemos que la aplicación efectiva del principio de precaución requiere una investigación científica interdisciplinaria, así como la explotación de las incertidumbres envueltas en dicha investigación y sus hallazgos. La toma de decisiones en forma precautoria es consistente con la 'buena ciencia' (*sound science*) debido a las grandes lagunas de incertidumbre e

Cuando una actividad se plantea como una amenaza para la salud humana y el medio ambiente deben tomarse medidas precautorias



incluso ignorancia que persisten en nuestra comprensión de los sistemas biológicos complejos, de la interconexión entre los organismos y del potencial de impacto interactivos y acumulativos de peligros múltiples. Debido a estas incertidumbres la ciencia será, a veces, incapaz de responder en forma clara y concreta a muchas preguntas acerca de los potenciales peligros ambientales. En estas instancias, las decisiones políticas deben tomarse a partir de una reflexión sensata, una discusión abierta, y otros valores públicos, además de toda la información científica que pueda estar disponible. Creemos que esperar a que esté disponible una evidencia científica incontrovertible del daño causado antes de emprender acciones preventivas puede aumentar el riesgo de errores costosos que causen daños serios e irreversibles a los ecosistemas, la economía y la salud y el bienestar humanos.

Algunas de las formas en que se utiliza normalmente la información científica para establecer una política pueden ser contraproducentes para la capacidad de emprender una acción precautoria, por ejemplo, tergiversando las limitaciones en el estado del conocimiento científico. Quienes toman las decisiones, antes de actuar, suelen buscar pruebas rigurosas de relación causal entre una tecnología y el riesgo de su aplicación, de modo que sus decisiones queden protegidas de acusaciones de arbitrariedad. Pero a menudo no puede obtenerse este rigor probatorio, ni es factible que se alcance en un futuro previsible. Cuando tanto los riesgos potenciales como las incertidumbres son

grandes, una forma de incentivar la aceptación de que la idea de la acción precautoria es una estrategia prudente y efectiva, por parte de los gobernantes y de la opinión pública, sería que los científicos presentaran de manera más completa y abierta las limitaciones actuales que tienen para comprender los riesgos ambientales.

Sin embargo, no sólo la comunicación entre científicos y diseñadores de políticas necesita mejora. Creemos que hay formas en que los métodos actuales de investigación científica pueden contribuir a retardar la acción precautoria. Por ejemplo, la investigación se centra frecuentemente en aspectos limitados y cuantificables de los problemas, excluyendo inadvertidamente la consideración de las potenciales interacciones entre los diferentes componentes de los complejos sistemas biológicos de los cuales el ser humano forma parte. Además, la compartimentalización del conocimiento científico dificulta la capacidad de la ciencia para detectar e investigar las advertencias tempranas y desarrollar opciones para evitar el daño cuando están implicados riesgos a largo plazo para la salud y/o el ambiente. Desafortunadamente, las limitaciones de las herramientas científicas y su incapacidad para cuantificar las relaciones causales son frecuentemente malentendidas como una evidencia de seguridad por parte de quienes toman las decisiones políticas, de los mismos científicos y de aquellos que proponen actividades peligrosas. Sin embargo, no saber si una acción puede o no resultar peligrosa no equivale a saber que es segura.

No saber si una acción puede o no resultar peligrosa no equivale a saber que es segura

Sostenemos que una puesta en práctica del principio de precaución precisa métodos científicos mejorados, y una nueva relación entre ciencia y política que enfatice la continua actualización del conocimiento, así como una mejora en la comunicación de los riesgos, las certezas y la incertidumbre. Con estos objetivos en mente, hacemos un llamamiento a la reevaluación de los programas de investigación científica, las prioridades de financiamiento, la educación sobre ciencia y las políticas científicas. Los objetivos esenciales de este esfuerzo deberían incluir:

- una articulación más efectiva entre la investigación sobre los peligros y una investigación acrecentada acerca de la prevención y restauración;
- una mayor interdisciplinariedad en las aproximaciones a la ciencia y la política, incluyendo una integración mejor entre datos cualitativos y cuantitativos;
- métodos de investigación innovadores para poder analizar los efectos acumulativos e interactivos de los variados peligros a que se hallan expuestos tanto poblaciones como ecosistemas; para examinar los impactos sobre poblaciones y sistemas; y para analizar los daños sobre segmentos de población especialmente vulnerables y comunidades afectadas sobreproporcionalmente;
- sistemas de seguimiento y vigilancia continua para evitar consecuencias no intencionales de determinadas acciones, y para producir avisos tempranos acerca de los riesgos; y
- técnicas más amplias para ana-

lizar y comunicar los potenciales peligros e incertidumbres (qué es lo que se sabe, qué no se sabe y qué puede llegar a saberse).

Sabemos que las actividades humanas no pueden estar totalmente exentas de riesgo. Sin embargo, sostenemos que la sociedad aún no ha comprendido el pleno potencial de la ciencia para prevenir daños a los ecosistemas y la salud, al mismo tiempo que asegura el camino hacia un futuro más sano y con mayor solidez económica. El objetivo de la precaución es evitar el daño, no detener el progreso. Creemos que aplicando políticas precautorias se puede estimular la innovación en la búsqueda de mejores materiales, productos más seguros y procesos de producción alternativos. Urgimos a los gobiernos a adoptar el principio de precaución en la toma de decisiones ambientales y sanitarias bajo incertidumbre cuando existen peligros potenciales, así como a realizar a tiempo acciones preventivas, o restauradoras en los casos en los que el daño ya ha tenido lugar. Los elementos de los procesos de toma de decisiones que incorporan el principio de precaución –tal y como se esbozaron antes– representan aspectos necesarios de los procesos sensatos y racionales que permitirán prevenir los impactos negativos que puedan tener las actividades humanas sobre la salud de los seres humanos y los ecosistemas. Este enfoque comparte los valores centrales y las tradiciones preventivas de la medicina y la salud pública.

Aplicando políticas precautorias se puede estimular la innovación en la búsqueda de mejores materiales, productos más seguros y procesos de producción alternativos

Esculturas con denominación de origen

Jorge Marsá

Han sido varias las peticiones de que se instalen esculturas en algunos lugares de la Isla en los últimos meses. Las sugerencias han surgido de distintos partidos políticos, unos denominados nacionalistas, otros no; pero siempre con un punto en común: que fueran obras de artistas de la Isla.

El criterio barajado se ha transformado en lugar común, hasta el punto de que a casi nadie parece extrañarle ya la obsesión por el lugar de nacimiento de los artistas. Hace algunos años me lo explicaba la entonces Directora General de Cultura del Gobierno de Canarias: "somos nacionalistas, y nuestra política cultural está destinada a promocionar a nuestros artistas". Los artistas serían así los grandes beneficiarios del esfuerzo público, mientras la ciudadanía resultaría la gran perjudicada. ¿Por qué? Pues porque a los primeros se les mima y se les paga por sus esculturas y a los segundos se les limita su posibilidad de contemplar obras de arte a las realizadas por esos artistas.

Grandes artistas hay siempre muy pocos. El genio no abunda. Acudamos a un período de la historia para aclararnos; cualquiera sirve. Si pensamos en el Siglo de Oro español encontraremos que entre la docena, más o menos, de genios de la época se encuentran algunos españoles. Si nos concentramos en el siglo XIX, sólo encontraremos uno de esa nacionalidad: Goya. El poso del tiempo aclara bastante las cosas y pone a casi todos en su lugar; pero enjuiciar nuestro momento histórico es mucho más arriesgado. ¿Cuántos genios del arte podrían estar trabajando hoy en el planeta?

¿Cuántos en España? ¿Cuántos en Canarias? ¿Cuántos en Lanzarote?

Poniéndose optimista, exagerando en realidad, podríamos aventurar que haya media docena de artistas en este país con algunas posibilidades de pasar la implacable reválida del tiempo. Es seguro que no de todos quedarán noticias. Como hay diecisiete comunidades autónomas, resulta que no tocamos ni a proyecto de genio por comunidad. Parece, es mi opinión, que ninguno de esos artistas importantes de hoy ha nacido en Canarias. Y es meridianamente claro que en Lanzarote no hay ningún artista con una mínima proyección fuera del Archipiélago. Si esto fuera así, una cosa resulta clara: con la exigencia de que las esculturas hayan sido realizadas por artistas de la Isla garantizamos la ausencia de obras de arte de relieve.

Claro que ante la escasez de artistas de auténtico genio, sería una pretensión desmesurada que aspiráramos a colocar en las rotondas de nuestras carreteras obras de relevancia universal. Es

*Grandes artistas
hay siempre
muy pocos. El
genio no
abunda*

Uno de los grandes problemas del arte en la actualidad es el exceso de atención social e inversión

más, si sólo nos pudiéramos surtir de obras procedentes de tales artistas, no sería el de Lanzarote, ni mucho menos, el único museo de arte contemporáneo que tendría que cerrar sus puertas. Es obvio que hay artistas que sin alcanzar esa genialidad son buenos intérpretes del espíritu cultural de su tiempo y que sus obras dialogan con los problemas y los sueños de muchas de las gentes del momento. Es decir, que sus obras contribuyen también a edificar la cultura de la época. Pero, desgraciada o afortunadamente, tampoco son una especie tan abundante.

Podría argumentarse también que una isleta como Lanzarote carece de recursos económicos para asumir el coste de las obras de artistas cuya cotización en el mercado es ya excesiva. Aunque cantidades que alcanzan los ochenta millones de pesetas son palabras mayores. Efectivamente, esa es la cantidad que nos vamos a gastar para engalanar una plaza pública en Puerto del Carmen. Tampoco parece que la ausencia de fondos sea el problema cuando en Arrecife las esculturas se compran en paquetes de tres y a precios muy superiores a los del mercado.

Podría, y debería, discutirse cuál es el lugar del arte entre las prioridades públicas del momento.

Algunos sostendrían que para la cultura o el arte cualquier inversión es poca. Excelsa opinión; que ennoblece a quien la emite. Pero si algo abunda son las opiniones. Yo, por ejemplo, tengo también la mía: no sólo no es cierto que se invierta poco en la adquisición del trabajo de los artistas, sino que uno de los grandes problemas del

arte en la actualidad es el exceso de atención social e inversión económica que ha transformado el mundo del arte en una feria o en un desfile de moda. Así que las inversiones culturales hay que analizarlas con lupa, como cualquier gasto público.

En cualquier caso, se invierta poco o se invierta mucho, lo que resulta obvio es el empobrecimiento cultural que acarrea siempre las políticas nacionalistas. Cuando uno está más pendiente de la denominación de origen de la firma del autor que de la calidad de la obra, los resultados tienen que ser por fuerza pobres.

Así ha ocurrido en este país. Desde que los nacionalistas españoles gobiernan las instituciones culturales públicas se ha producido una clara devaluación de la calidad de su trabajo y, en consecuencia, de su prestigio –que tampoco es que antes fuera para tirar cohetes–. El declive del IVAM y del Reina Sofía constituyen los casos más emblemáticos. Claro que el empobrecimiento cultural no tiene por qué ir ligado obligatoriamente a la reducción de las inversiones. De hecho, en España siguen brotando museos de arte contemporáneo como setas.

Si el localismo estrecha el marco cultural a un espacio en el que habitan cuarenta millones de personas, malo; si nos vemos obligados a contemplar casi exclusivamente a los artistas de una comunidad de un millón setecientos mil personas, peor; pero si el ecosistema artístico se reduce a su dimensión lanzaroteña, hemos alcanzado entonces las más altas cumbres del ridículo.

FUNDACIÓN CÉSAR MANRIQUE PATROCINADORES

BODEGAS MOZAGA

MEGACENTRO

SOCIEDAD DEMOCRACIA

Concj. Cultura AYUNTAMIENTO DE ARRECIFE

SALA DE ARTE PUNTO DE ENCUENTRO

HARINERA LANZAROTEÑA

LÍNEA

CIBE SPORT

Cuadernos del Guincho 1

EDITORIALES

**Nueva revista para Lanzarote
En defensa del Risco
Sí al puerto deportivo... en
Naos**

IGNACIO RAMONET
Informarse cuesta

CIUDADANOS POR ARRECIFE
El Arrecife que queremos

J.A. MARTÍNEZ VILLAR
La militarización del Risco

ANTONIO BARRERO
**Fórmulas añejas en los nuevos
productos turísticos**

CHRISTEL BURGHOFF
El lado negro del dinero

Carpeta:Tindaya

LUIS DÍAZ FERIA
**TALDAHI. El territorio, un bien
intergeneracional**

MARÍA ANTONIA PERERA
BETANCORT
**Tindaya: reflexiones sobre una
montaña agredida**

CARLOS NOVALES
Tindaya, territorio de sueños

RICARDO SANTANA SANTANA
**Crisis de la política y circo
conejero**

JUAN RAMÓN CAPELLA
**La problemática
medioambiental: notas para
una cultura ecosocialista**

HERMINIA FAJARDO FEO
**Sáhara Occidental:
futuro incierto**

**Ken Saro-Wiwa y el ecologismo
de los pobres de la Tierra**

NATALIA JIMÉNEZ MARSÁ
El cine que nos invade

LIBROS
Estrategia Solar

Cuadernos del Guincho 2

EDITORIALES

**Segunda entrega
El Guincho, 10 años
El PEPA: la Marina en entredicho
A vueltas con El Risco**

CARLOS NOVALES
Tindaya: el arte como pretexto

JORDI PALOU
**Industria turística en el Tercer
Mundo**

JORGE MARSÁ
El amargo sabor del éxito

Carpeta: Arrecife

JOSÉ RAMÓN BETANCORT MESA
Arrecife en *Tipos de mi tierra*

M^a DEL ROSARIO HERNÁNDEZ
Arrecife: aprender a caminar

COLECTIVO FAYNA-ZONZAMAS
Arrecife, 200 años

ENRIC TELLO
Ciudades sostenibles

CIUDADANOS POR ARRECIFE
**Una visión alternativa de la
Marina**

MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ
**Evaluación económica del
Puerto deportivo**

RICARDO SANTANA SANTANA
**Arrecife: entre la huida y la
desesperanza**

CODA
Patentar seres vivos

NATALIA JIMÉNEZ MARSÁ
Nuestro ocio

GRUPO AGRICULTORES ECOLÓGICOS
La agricultura ecológica

GRUPO DE RESIDUOS Y RECICLAJE
Boicot al PVC

LIBROS
**La economía verde
La cultura de la satisfacción**

Cuadernos del Guincho 3

EDITORIALES

**Cuatro años sin Reserva
Cabildo, una estrategia para la
esperanza
El legado de César Manrique
El hombre que hizo visible el
mundo submarino**

RICARDO SANTANA SANTANA
**Campistas, consumidores y
conejeros**

CIUDADANOS POR ARRECIFE
Arrecife, el reto de una ciudad

FERNANDO CEMBRANOS DÍAZ
**Bienestar, ecología y
participación social**

Carpeta: Reserva y desarrollo sostenible

COLECTIVO GIMARAL
**Lanzarote, Reserva de la Bios-
fera. ¿Oportunidad o camelo?**

ANA CARRASCO
**Lanzarote como Reserva de
Biosfera.**

JOSÉ MANUEL NAREDO
**Sobre el origen, uso y conte-
nido del término "sostenible"**

JORGE MARSÁ
**20 mandamientos para un
crecimiento insostenible**

LUIS DÍAZ FERIA
**El coqueto aerodinámico rocan-
rol de color caramelo de ron**

MIGUEL ÁNGEL MARTÍN ROSA
Gente, ¿cuánta gente?

REINHARD KÜHNEL
Sociedad en transformación

ARANTXA RODRÍGUEZ
Mujeres y el medio ambiente

**Veredicto del Tribunal Interna-
cional por los crímenes en Irak**

EL EXTREMISTA INDISCRETO
**El lagarto verde y la profecía
de la homologación**

LIBROS
Vivir mejor con menos

Cuadernos 4 del Guincho

EDITORIALES

**Cuadernos, un año
Estrategia, Competitividad y
Marketing**
Kioto: el clima al servicio de la
economía

RAMIRO ARBELO

¡Basta ya!

NATALIA JIMÉNEZ

Un final feliz para el Gran Hotel

LOUIS TURNER Y JOHN ASH

La horda dorada

DOMINGO CONCEPCIÓN GARCÍA

**Huelga en Medio Ambiente en
Lanzarote**

Carpeta: Identidad

JORGE MARSÁ

El pasar del tiempo

ÁNGEL FERNÁNDEZ BENÉITEZ

La identidad reclamada

ERIC J. HOBSBAWM

Identidad

JULIO SANTIAGO OBESO

Identidad lanzaroteña

JORGE MARSÁ

**El supermercado de la
identidad**

ELSA DE LA HOZ GONZÁLEZ

Otra foma de ver la identidad

MARIO ALBERTO PERDOMO

Mi identidad

ALFONSO SANZ

Los 'sin coche'

RICARDO SANTANA SANTANA

Periodismo de investigación

NATALIA JIMÉNEZ MARSÁ

**Imaginemos el Lanzarote que
nos gustaría**

LIBROS

En paz con el planeta

Cuadernos 5/6 del Guincho

EDITORIALES

Presentación

**El aparcamiento de Timanfaya
Catástrofe en Doñana**

ANTONIO VERCHER NOGUERA

**Reflexiones sobre poder y
medio ambiente**

PABLO FRUTOS BETANCORT

**El Poder Ambiental Insular
y el miedo**

CIUDADANOS POR ARRECIFE

**Un futuro para la Bahía de
Naos**

JOSÉ MANUEL NAREDO

**Configuración y crisis del mito
del trabajo**

Carpeta: La Estrategia Lanzarote en la Biosfera

**Una lectura crítica
de la *Estrategia***

Población y convivencia

Cultura y patrimonio

La economía insular

El sistema urbanístico

La ecología insular

Los sectores ambientales clave

**Sobre los fundamentos
jurídicos de una estrategia de
desarrollo sostenible**

Las conclusiones de El Guincho

ÁNGEL SÁNCHEZ

¿Qué Canarias quiero?

ÁNGEL FERNÁNDEZ BENÉITEZ

**Sobre la utilidad de enseñar y
la conveniencia de aprender**

ROSA COBO BEDIA

**La democracia moderna y la
exclusión de las mujeres**

CIUDADANOS POR ARRECIFE

Otra forma de construir ciudad

Cuadernos 7 del Guincho

EDITORIALES

**Nos conformamos con que
cumplan la Ley
Consenso político contra el
medio ambiente
El Guincho-Ecologistas en
Acción: una nueva etapa**

JORGE MARSÁ

Una obra imprescindible

EL GUINCHO-ECOLOGISTAS EN A.

**Historia de una farsa:
la Moratoria turística**

ROQUE CALERO PÉREZ

**La nuclearización de Marruecos
y Canarias**

Carpeta: Biodiversidad

JOSÉ ANTONIO PASCUAL TRILLO

**8 preguntas para una situación
desesperada**

CARLOS J. MELIÁN, JOSÉ M.
MONTAYA, MIGUEL A. RODRÍGUEZ

**El equilibrio de la naturaleza
en medios insulares**

DOMINGO CONCEPCIÓN GARCÍA

Dossier Lanzarote

VANDANA SHIVA

**El saber propio de las mujeres
y la biodiversidad**

EZEQUIEL NAVÍO

**El comercio de vida silvestre:
un mercado de alto riesgo**

ÁNGEL FERNÁNDEZ BENÉITEZ

La otra contaminación

JOAQUÍN SEMPERE

**Necesidades y política
ecosocialista**

FORO LANZAROTE

**Manifiesto por la detención
del crecimiento turístico**

JORGE MARSÁ

**El nuevo aeropuerto:
¿sueño o pesadilla?**

LIBROS

Cuadernos Worldwatch

EL GUINCHO
**La misma insostenibilidad
El litoral de Arrecife**

NATALIA JIMÉNEZ MARSÁ
**Carta de una ballena canaria a
Joaquín Araújo**

ENRIC TELLO
Novedades en Baleares

BELÉN BALANYÁ
Más allá de Seattle

ANTONIO ESTEVAN
Nuevo desarrollismo ecológico

ÁNGEL FERNÁNDEZ BENÉITEZ
Paraísos naturales y artificiales

Carpeta: Nucleares

GREENPEACE
¿Energía nuclear? No, gracias

JOSÉ NARANJO
**Energía nuclear en Marruecos:
Tan Tan es sólo el comienzo**

COLECTIVO SURESTE
**Pateras, tomates, pescados
y nucleares**

JORGE MARSÁ
**Construcción y medio
ambiente**

FÉLIX HORMIGA
**Mito y realidad del Puerto
del Arrecife**

FERNANDO GÓMEZ AGUILERA
La Marina de Arrecife

CIUDADANOS POR ARRECIFE
**Arrecife: algunos criterios
para construir la ciudad**

JOSEP MARÍA MONTANER
**El modelo Curitiba:
movilidad y espacios verdes**

JORGE MARSÁ
**Una alternativa irracional:
el automóvil**

MARIO ALBERTO PERDOMO
La 'ecotasa' que ha de llegar

EDITORIALES
**Nueva etapa en Cuadernos
Con la vista puesta en Berrugo**

JORGE MARSÁ
**Tindaya:
el síndrome de Van Gogh**

RAMIRO ARBELO
El trabajo en España

GINÉS DÍAZ PALLARÉS
Y JORGE MARSÁ
**Crecimiento turístico
y contestación social**

FRANCISCO FERNÁNDEZ BUEY
**Las mujeres desaparecidas
y la cuestión de género**

Carpeta: Inmigración

I. La sociedad migratoria

**II. Biología y cultura:
del racismo al
fundamentalismo cultural**

**III. El crecimiento de la
desigualdad**

IV. El desafío de la convivencia

V. Otras voces de aquí

JOSÉ ANTONIO PASCUAL TRILLO
El valor de la vida

FERNANDO SABATÉ BEL
**Yendo pa' la mar
a por lapas y burgaos**

EZEQUIEL NAVÍO
Identidad

CIUDADANOS POR ARRECIFE
**Litoral de Arrecife:
una propuesta de gestión**

CIUDADANOS POR ARRECIFE
**Bu Litoral: propuesta de
creación de un tranvía**

JORGE MARSÁ
**De la competencia a la
economía planificada**

RICARDO SANTANA SANTANA
La demolición del viejo Arrecife

WWW.QUENECESITAARRECIFE.ORG
**Arrecife, una ciudad sin
proyecto**

CARLOS MECA
El turista de calidad

CARLOS NOVALES
Ataque a la civilización

JORGE MARSÁ
La cultura de la queja

JORGE RIECHMANN
Comer Carne

¿Turismo de calidad?

CUADERNOS DEL SURESTE
Sobre el turismo de calidad

EL GUINCHO - WWF-ADENA
**Maciot Sport: las razones de
una oposición**

ACHITACANDE
**Turismo de calidad y
sostenibilidad**

CUADERNOS DEL SURESTE
**Directrices para un crecimiento
insostenible**

FERNANDO GÓMEZ AGUILERA
Paisaje de las visitadas

FEDERICO AGUILERA KLINK
**Cambios sociales e
institucionales para la gestión
ambiental**

DANIEL RAVENTÓS
La Renta Básica

ÁNGEL FERNÁNDEZ BENÉITEZ
**Los conflictos de la proximidad
y la excusa del racismo**

SUSAN GEORGE
Un Contrato Planetario

BRÍGIDA MARTÍN
Lanzarote comienza en 2003

RAMIRO ARBELO
Adicción a la ideología